



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



América Latina, la región que se niega a ser

Bernardo Gortaire Morejón

América Latina, la región que se niega a ser

Bernardo Gortaire Morejón

Primera edición electrónica: julio, 2024

ISBN: 978-9942-652-03-4

Revisión científica:

Mgtr. Maritza Gabriela Arteaga Gordón - Ejército ecuatoriano

Mgtr. Diego José Sánchez Altamirano - Academia de Guerra del Ejército

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

CrnI. C.S.M. Víctor Villavicencio A., Ph. D.

Rector

Publicación autorizada por:

Comisión Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

Tcn. Edison Eduardo Haro, Ph.D.- Vicerrector de Investigación (Encargado)

Presidente

Corrección de estilo y diseño

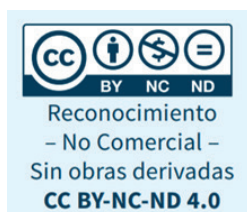
Mtr. Xavier Chinga

Imagen de cubierta: Archivo del autor

Derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de esta obra por cualquier medio impreso, reprográfico o electrónico. El contenido, uso de fotografía, gráficos, cuadros, tablas, y referencias es de exclusiva responsabilidad de los autores.

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
Av. General Rumiñahui s/n, Sangolquí, Ecuador
www.espe.edu.ec

Los derechos de esta edición electrónica son de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, para consulta de profesores y estudiantes de la universidad e investigadores en www.repositorio.espe.edu.ec.



América Latina, la región que se niega a ser

Bernardo Gortaire Morejón

EDITORIAL



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

*A mi Luna y a su mamá, que me dieron la fuerza
para ver el futuro que realmente nos merecemos*

Bernardo Gortaire M.

bgortairemorejon@gmail.com

M.Sc. en Política Pública y Desarrollo Humano con Especialización en Integración Regional y Gobernanza Multinivel por la Universidad de Maastricht y la Universidad de Naciones Unidas-MERIT. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones. Es autor del libro *“El camino a la integración desde la identidad: Una aproximación suramericana”*, junto al excanciller Mauricio Montalvo. Coautor del libro *“Inteligencia estratégica del futuro: Pensamiento crítico e interconectado en un mundo global”*, publicado en un ejercicio conjunto entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Coordinador y coautor del libro *“Implicaciones geopolíticas y desafíos del Ecuador al 2025. Una mirada regional”*, publicación de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Recientemente publicó los libros: *“Dragón Ascendente, Águila Desafiante: Desentrañando la competencia hegemónica entre China y Estados Unidos”* y *“La guerra nunca se fue: cómo el conflicto ruso-ucraniano revivió la historia”* en el marco de su trabajo con el Centro de Estudios y Pensamiento Estratégico de la ESPE.

También ha escrito varios artículos en torno a la integración regional, desarrollo social y política, en varios medios y revistas indexadas.

Asesor de alto nivel de gobierno, consultor y activista por un mundo más justo.

Índice

Prefacio.....	9
Introducción.....	11
Capítulo I - La región más desigual del mundo.....	15
Capítulo II - Inconformidad sistémica y sus consecuencias políticas.....	52
Capítulo III - Los actores criminales como ejemplo de transnacionalidad.....	116
Capítulo IV - La región que no es ¿Hacia dónde vamos y qué podemos hacer?.....	152
Referencias.....	166

Índice de tablas

Tabla 1 <i>Porcentaje de población de ALC por debajo de la línea de pobreza.....</i>	21
Tabla 2 <i>Dependencia de las exportaciones de productos básicos.....</i>	36
Tabla 3 <i>Coyuntura económica de los países de América Latina y El Caribe.....</i>	37
Tabla 4 <i>Contribución de remesas en relación con el PIB de países de América Latina.....</i>	40
Tabla 5 <i>Porcentaje de ingresos fiscales sobre la recaudación total.....</i>	46
Tabla 6 <i>Tamaño de la base de ingresos.....</i>	46
Tabla 7 <i>Saldo de víctimas en masacres carcelarias en Ecuador.....</i>	70
Tabla 8 <i>Caracterización de Grupos del CTO y Grupos Armados.....</i>	125

Índice de figuras

Figura 1 Representación comparativa de la extrema pobreza global.....	17
Figura 2 Representación de la pobreza global.....	18
Figura 3 Representación de la distribución de la riqueza global.....	19
Figura 4 Porcentaje de la riqueza nacional concentrado en el 80% más pobre.....	20
Figura 5 Niveles y dinámicas de la desigualdad por ingresos/ consumo en el mundo 1990-2020.....	32
Figura 6 Distribución de la riqueza por región en 2021.....	34
Figura 7 Proyecciones de crecimiento del PIB de ALC (2022-2025).....	50
Figura 8 Evolución de la pobreza y de la indigencia en América Latina, 1980-2014.....	57
Figura 9 Evolución del PIB per cápita de ALC.....	61
Figura 10 Homicidios intencionales en Ecuador 2010-2023.....	73
Figura 11 Mapa de intervencionismo estadounidense en América.....	83
Figura 12 Crecimiento de la población hispana en Estados Unidos.....	90
Figura 13 Mapa de recomendaciones de viaje de Estados Unidos sobre ALC.....	115
Figura 14 Mapa del índice de criminalidad por país 2023.....	116
Figura 15 El “pulpo” del Crimen Transnacional Organizado.....	118
Figura 16 Ciclo de la violencia criminal.....	144

Prefacio

¿Cómo se debería entender al continente americano? Analizar América Latina no es sencillo. Al comenzar la investigación para redactar este libro se estableció contacto con colegas de distintas áreas y países. El objetivo era reforzar las reflexiones vertidas en este texto con argumentos y opiniones nutridas de diversidad. También implicaba un soporte metodológico para validar hipótesis. No obstante, lejos de arrojar luces sobre lo que se buscaba analizar, la diversidad de perspectivas revelaba la necesidad de reflexionar profundamente sobre lo que implica analizar América Latina como región. En estudios previos, esto ya ha sido abordado, si algo caracteriza a la región es su diversidad y heterogeneidad.

Parte del aporte de este texto es romper con imaginarios que romantizan o caricaturizan a la región. Hablar de América Latina y El Caribe demanda entrever un entorno problemático, donde no todo está tan mal, pero que definitivamente tiene elementos que requieren reformas profundas. Hay excepciones, “outliers” estadísticos, pero incluso los países que sobresalen o son el ejemplo de lo que no se debe hacer pueden encontrar reflejos en el resto de los países de la región. Es más, desde el exterior, muchas veces la región es vista como un todo único. Si bien hay subdivisiones que atienden a las subregiones, el entender de los países de la región suele ser aglutinante. Esto difícilmente cambiará en el corto y mediano plazo. En consecuencia, la región es, aunque no quiera serlo.

Precisamente en este libro se encuentran algunas reflexiones que operan más en el deber ser que en el ser. En su mayoría, las propuestas aquí planteadas no son medidas a corto plazo. Y aquí se debe confirmar un sesgo como autor, pues no se considera que las salidas para la región están en medidas cortoplacistas. Al contrario, lo único que parece haberse probado como eficiente ha sido la implementación de procesos integrales, que se traducen en cambios en los modelos educativos y van acompañados de inversión en infraestructura y modernización del Estado, e incluso estos ciclos pueden resultar contraproducentes cuando el populismo, la falta de sostenibilidad o interferencia externa se hacen presentes.

Escribir este texto ha sido particularmente complejo. La cercanía con el objeto de estudio ha provocado que el deseo de ver a la región mejor se interponga, incluso llegando a provocar largas pausas de reflexión sobre qué se puede

hacer realmente para corregir el rumbo. Si bien, el texto no pierde el rumbo académico y los datos y variables cuentan con su debido respaldo, se debe admitir que este libro mira a la región con la lupa de su autor. ¿Esto hace el esfuerzo menos válido? Se espera que no. A pesar de que es solo una perspectiva dentro de un amplio espectro se trata de una mirada que procura contemplar los principales elementos de discusión en los ámbitos de la economía, política y la seguridad regional.

El objetivo de este texto no es sino el de complementar las visiones de sus lectores con datos, casos de estudio y claridad teórica. Se espera que este texto pueda generar debate, incluso oposición; pero siempre con el objetivo de que dicho debate esté acompañado de reflexión, investigación y evidencia que respalde los argumentos. Esto es algo que falta mucho en la región y que, si los lectores de estas páginas rescatan, ya será una victoria. Sin embargo, la victoria más grande y esperada está en que ese debate se traduzca en resultados. La gente de la región enfrenta más problemas de los que le competen, y en términos de justicia, la región ha lidiado con más abates de los que se merece.

Si en algo se puede aportar a no solo depender de la resiliencia del pueblo de América Latina y del Caribe, sino que se mitiguen los males que lo agobian, entonces los objetivos de este libro estarán satisfechos.

Introducción

¿Cómo se debería entender al continente americano? ¿Es una región o es una suma de regiones? Dependiendo a quien se realice la pregunta se tendrá una variedad de respuestas. Para algunos, la división se tiene que hacer entre las potencias anglosajonas, Estados Unidos y Canadá, frente al resto del continente en desarrollo, dejando a América Latina y El Caribe (LAC) como la contraparte. Para otros sectores, la división es incluso más meticulosa, y El Caribe debería entenderse desde su propia realidad, tanto en términos geográficos, como históricos, políticos y económicos. En otros espacios se prioriza la cuestión idiomática, América Latina hace referencia justamente al uso de lenguas latinas incluyendo al español, portugués y francés. Esta aproximación deja de lado a varias islas del Caribe, así como a Guyana y Surinam (e incluso Belice). Para otros, Latinoamérica atomizarse una vez más y se debe distinguir a Hispanoamérica del resto de países, como lo plantea el periodista y escritor argentino Martín Caparrós (2021) “Ñamérica” es un continente en sí mismo.

Retomando la cuestión geográfica, también existe la aproximación subregional, por ejemplo, muchos procesos y proyectos separan Centroamérica de Suramérica. Es más, dentro de Suramérica se suele dividir a la región andina del llamado Cono Sur. De esta forma al hablar de América se habla de un continente de regiones, realidades que entrelazan y dividen. Y aunque, en la perspectiva más sencilla lo ideal sería realizar reflexiones particularizadas, lo cierto es que resulta casi imposible ignorar las semejanzas que provocan generalizaciones. La realidad del continente es heterogénea, pero al mismo tiempo sus retos son comunes. La lucha por alcanzar el desarrollo no es esquivada en ningún país, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, y la historia que los conecta, a lo que se suman los esfuerzos por no distanciarse demasiado, ameritan un análisis colectivo.

En este sentido, este libro apunta a presentar un análisis general sobre las condiciones socioeconómicas, políticas y de seguridad sobre el entorno que corresponde a ALC. A través de la compilación de los datos más relevantes sobre la coyuntura de la segunda década del siglo XXI se busca contribuir con el análisis para la toma de decisiones estratégica. Entendiendo que la realidad del Ecuador depende en gran parte de aquello que ocurre en su entorno más cercano, resulta fundamental tratar de reducir la incertidumbre a través del análisis de factores como la pobreza y la desigualdad en la región, el crecimiento

y fortalecimiento de tendencias políticas con alcance regional, la pérdida de la confianza en la democracia como modelo de gobierno, así como el incremento de la inseguridad a nivel interno de gran parte de los países de ALC.

Comprender las tendencias analizadas en este texto no solo ayuda a entender mejor la región desde la perspectiva de los por qué y los cómo de varias de las tendencias en los ámbitos sociales, económicos, políticos y de seguridad, sino que también ayudará a nutrir la capacidad de encontrar mejores soluciones a las problemáticas y conflictos que la aquejan. De la misma manera, contemplar los distintos elementos que se abordan en este estudio debe servir como una bandera roja para evitar caer en un ciclo de conformismo, y aceptar que los éxitos de las últimas décadas no son suficientes como para renunciar a la búsqueda de mejores prácticas y herramientas de parte del Estado.

Si bien la sociedad es una suma de distintas individualidades y no se debería permitir un escenario en el que el individuo se vea invisibilizado dentro de una masa sin rostros y distinciones, resulta fundamental comprender que el éxito de la humanidad y de las civilizaciones radica en la cooperación y la suma de esfuerzos colectivos. La complementariedad del esfuerzo de las sociedades permite a los individuos más brillantes o capacitados alcanzar el éxito, incluso en entornos de adversidad los méritos individuales terminan siendo útiles para la mayoría cuando los grandes descubrimientos, experimentos o buenas prácticas se distribuyen. De no existir divulgación, no existe mérito en el descubrimiento, y de no existir una comunidad que se beneficie de lo nuevo, simplemente se mantendría lo antiguo.

En este sentido, ALC enfrentan el gran reto de que su colectividad alcance los mismos beneficios de forma amplia, en lugar de que se concentre de forma ineficiente en sectores que posteriormente son incapaces de llevar vidas tranquilas o plenamente satisfactorias. Como se verá en este libro, este no es solo un problema de índole filosófico o moral, sino que incide de manera directa en la productividad, en la estabilidad de sus sistemas políticos, en la seguridad de sus ciudadanos e incluso en el rol que cumplen los países de ALC en el mundo. De esta manera, se invita al lector de este texto a aceptar la incómoda realidad y a apropiarse del interés de encontrar soluciones para esta situación, incluso más allá de las planteadas en la sección de conclusiones de este texto.

Las fracturas internas de la región, las malas administraciones políticas, la incidencia extrarregional y la cada vez más fuerte influencia de los actores no estatales, sobre todo de aquellos que operan por fuera de la ley, son variables

que se analizan a lo largo de este texto. El gran reto está en pensar extraterritorialmente, comenzar a tomar acciones comunes que permitan a la ciudadanía entenderse como parte de un todo más extenso, con mayores recursos y capacidades para responder a los retos del siglo XXI. Esta es una tarea que corresponde a la razón y al sentido común, pero que implica desafiar modelos mentales enraizados en una identidad mal constituida, que beneficia a muy pocos y orilla a la mayoría a enfrentar más retos de lo necesario.

Este texto está dividido en tres secciones que abordan las tendencias socioeconómicas, sociopolíticas y de seguridad de ALC, así como una sección final que sirve como un segmento de conclusiones y recomendaciones. El primer capítulo evalúa la coyuntura económica de ALC, enfocándose en las condiciones de pobreza y de desigualdad. En el análisis se ha encontrado una condición general que es capaz de explicar gran parte de las tendencias que atraviesa ALC. La pobreza es un reto común para la humanidad en el siglo XXI, pero cuando se combina con factores de desigualdad este problema se agrava y se vuelve un campo de cultivo para otra serie de desafíos. Bajo este marco, el primer capítulo de este libro aborda a la pobreza y a la desigualdad económica como núcleos de los problemas de ALC. Como una de las conclusiones se plantea que ambos problemas tienen que entenderse como una diada inseparable, de no hacerlo, la región estará condenada a un rol secundario por el resto de la historia, en tanto se mantenga el orden internacional vigente.

Teniendo el mal de origen, el segundo capítulo destaca cómo la coyuntura de pobreza y desigualdad se traduce en un sistema sociopolítico anclado a la insatisfacción. Este capítulo reflexiona acerca de distintos elementos del orden político, desde los niveles de confianza en la democracia, a la penetración de tendencias políticas antiestatales, la situación actual de las fuerzas de izquierda, el rol y coyuntura de la integración regional, y el contexto de las minorías sociales. De forma general se plantea que existe un sentimiento extendido de inconformidad sistémica evidenciado en las tendencias políticas, tanto a nivel local como regional. Esta inconformidad es problemática no solo porque genera fracturas sociales, sino porque abre las puertas a actores cuyos intereses no solo que están por fuera de la ley, sino que directamente carecen de interés en el bien común.

Dando seguimiento a esta coyuntura, el tercer capítulo señala a la inseguridad como una consecuencia con efectos insidiosos en las problemáticas que le dieron origen. El crecimiento del Crimen Transnacional Organizado (CTO)

es entendido como una respuesta a la pobreza, a la desigualdad y, en general, a la inconformidad sistémica. Atado también a tendencias globales como el mundo pospandemia y la fractura cada vez más amplia del orden internacional liberal basado en reglas, la inseguridad es una amenaza latente para ALC que potencialmente puede resquebrajar el mismo rol del Estado. En esta sección se evalúan tendencias y, al igual que en los capítulos previos, se destacan algunos casos de particular relevancia que ejemplifican la coyuntura vigente al momento de escribir este libro. De esta forma, se estudian algunos factores importantes de uno de los casos de aparente éxito en la lucha contra la inseguridad: El Salvador, encontrando algunos elementos de alerta que desaconsejan tomar al caso salvadoreño como uno ejemplar y de éxito.

Finalmente, la última sección responde a una serie de reflexiones generales sobre retos adicionales que enfrenta la región en otros frentes, desde lo ambiental a los severos cambios que está enfrentando el sistema multilateral. Como conclusión presente a lo largo de este texto, se rescata la necesidad de mantener la agenda de integración regional como una prioridad activa, aunque se reconoce también que la coyuntura actual no se presta para un proceso de articulación que supere a los múltiples intentos previos de establecer una agenda común. ALC parecería sumida en una eterna condena de unidad en la desunión, esto podría cambiar en función del cambio de mentalidad de su población, o al menos un cambio en la forma de ver el mundo de sus élites políticas. En este sentido, este libro es apenas una nueva invitación a encontrar en la evidencia compilada un motor para que la región deje atrás un rol de dependencia y subdesarrollo.

Capítulo I: La región más desigual del mundo

El mundo enfrenta un entorno complejo. El siglo XXI no ha dejado de ser un período en el que el ser humano deba enfrentar a la muerte por escasez en el día a día. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la disputa sobre el sistema que lideraría a la humanidad hacia la prosperidad se llevó entre el capitalismo de Occidente y la propuesta comunista (que nunca logró concretarse) liderada por la Unión Soviética. La competencia entre ambos modelos dinamizó los esfuerzos para demostrar qué modelo era el más conveniente para la especie. Tras el colapso de la Unión Soviética, a pesar de la consolidación del capitalismo como sistema económico global, y de que sus promotores y defensores más acérrimos sostienen que es el único modelo de éxito y prosperidad, la pobreza sigue siendo un mal que afecta a prácticamente todas las sociedades del mundo.

Para alguno de los lectores el debate entre capitalismo y comunismo puede resultar innecesario. Sin embargo, al hablarse de ALC es importante destacar que las fuerzas del capitalismo global y local hicieron todo el esfuerzo necesario para impedir la consolidación de cualquier modelo alternativo. Y aunque los movimientos socialistas han participado ocasionalmente del poder en la región, sobre todo las primeras décadas del siglo XXI, se debe destacar que la pobreza vigente corresponde en gran parte a los sectores capitalistas, aunque varios de los avances en la lucha contra este problema también podrían serles atribuidos. Paralelamente, se puede argumentar que la dialéctica entre ambas fuerzas ideológicas/sistémicas ha contribuido a la constitución de los aparatos actuales y, más allá de la responsabilidad, se puede entrever un desafío común para cualquiera de las dos aproximaciones, o un potencial tercer sistema.

En este sentido, es importante reconocer que la tasa mundial de pobreza extrema pasó del 37,8% al 8,4%, entre 1990 y 2019, y tiene una proyección de bajar al 6.8% para 2030 (Yoshida y Wu, 2022). Este es un mérito significativo y suele ser obviado dentro de la coyuntura de permanente visibilización de los agravios humanos. No obstante, también se debe señalar la velocidad de reducción de la pobreza ha bajado en los últimos años (World Bank, 2022) y que la reducción de esta pobreza no ha sido distribuida de forma equitativa en todas las regiones del mundo (Caparrós, 2014). Además, la cifra vigente está por debajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas del Banco Mundial, y este es un problema que se vuelve más visible cuando se entiende

que ese “pequeño” porcentaje de personas luchando por su supervivencia representa entre 648 y 685 millones de personas.

Para entender la magnitud de esta cifra, se puede decir que, si se toman los 685 millones de personas, esto equivale a poco más del doble de la población de todos los Estados Unidos, así como tres veces la población de Brasil, prácticamente cinco veces y media la población de México, más de trece veces la población de Colombia, más de 38 veces la población de Ecuador, y casi 200 veces la población de Uruguay. La magnitud de esta relación es visible en la Figura 1. Es importante recordar que a la pobreza extrema se la entiende como “la situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación” (Naciones Unidas, 2010, p. 25). Con menos de un dólar al día, millones de personas, de los cuales una parte significativa son menores de edad, luchan día a día para no morir de inanición.

También se debe tener en cuenta que la pobreza extrema se manifiesta en su impacto en el largo plazo en la vida de los individuos, sobre todo en términos de calidad y desempeño. Las personas en extrema pobreza tienden a enfrentar índices de mortalidad más altos, mayor riesgo de padecer enfermedades mentales, enfermedades crónicas y en general, vidas más cortas (Singh y Siahpush, 2006; Braveman et al., 2010; Mode, Evans, y Zonderman, 2016; Gordon y Sommers, 2016). Al mismo tiempo, un amplio porcentaje de las personas que viven en pobreza y extrema pobreza son menores de edad. Los menores de edad que crecen en pobreza empiezan su vida con grandes retos, de los cuales probablemente el más importante sea un elevado índice de mortalidad causado por la desigualdad (Burnstein et al., 2019), pues “por lo general, la mortalidad infantil alcanza puntos de máxima en las zonas más pobres, donde suelen concentrarse las minorías étnicas, determinados grupos religiosos, poblaciones indígenas y otras comunidades marginadas” (Bachelet, 2019).

Si superan esta etapa, y rompen con la etapa inicial del círculo de la pobreza, se debe señalar que los efectos de crecer en la pobreza son insidiosos. Esto genera individuos y comunidades más inestables y más inseguras, como producto de la reducción en la capacidad de aprendizaje, atado a retrasos en el desarrollo de capacidades mentales por la desnutrición crónica infantil (un problema que se agravó como consecuencia de la pandemia), la improductividad, asociada a la falta de oportunidades y educación de calidad, los efectos en la salud mental, afectada por las condiciones de violencia intrafamiliar y co-

munitaria, y en general, la falta de esperanza y mecanismos para romper con el círculo de la pobreza (Banerjee y Duflo, 2011; Caparrós, 2014; Evans, 2016; OACAS, S.f.; LAPOP, 2021; Troller-Renfree et al., 2022).

Figura 1

Representación comparativa de la extrema pobreza global



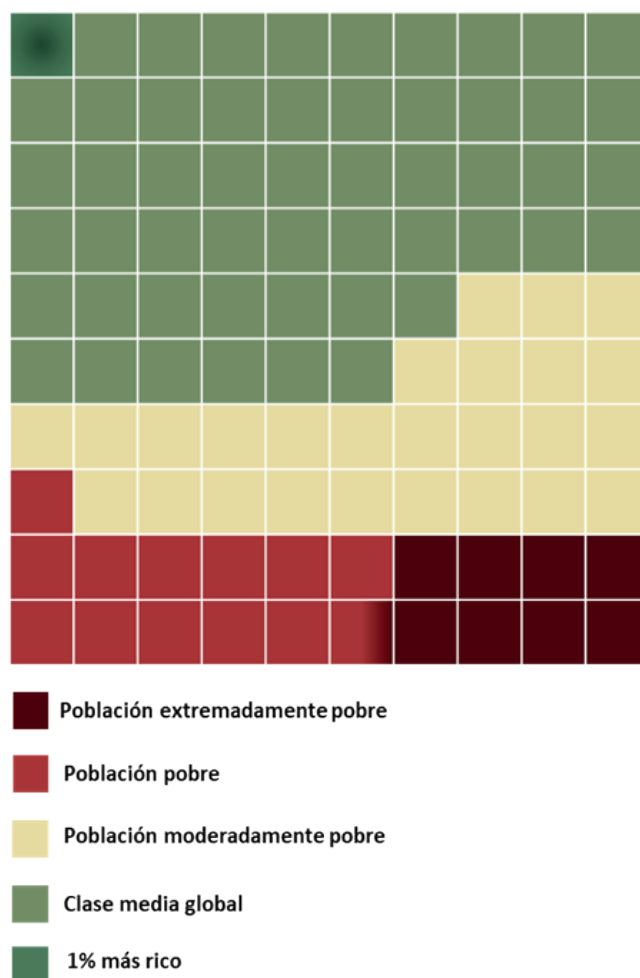
Parte de lo crítico de la cuestión se hace más evidente cuando se entiende que la pobreza se expande aún más cuando comprendemos que estas cifras solo hacen referencia a personas que viven como menos de USD 2.15 al día, que desde 2022 reemplaza a la línea de USD 1.90 al día que estaba vigente desde 2011 (World Bank, 2022). Este salto es fundamental, pues está adaptado a la media de la línea de la pobreza de los 28 países más pobres del mundo, lo que genera una perspectiva mucho más sincera del ingreso mínimo, incluso en las peores condiciones para la supervivencia. Sin embargo, se debe reconocer que esta condición habla apenas de un rubro mínimo para cubrir costos de alimentación, pasando por alto otros elementos básicos de la vida digna.

Por eso, las líneas de 3.65 dólares al día para países de ingreso medio-bajo y de 6.85 dólares al día para países de ingreso medio-alto tienen que ser tomadas en cuenta para entender la verdadera magnitud del problema (World Bank, 2022). Frente a esta realidad la cifra de pobreza pasa a un 23.6% de la población global, tomando como referencia el monto de 3.65 dólares al día, lo que representa 1831 millones de personas en situación de pobreza. Esta cifra aumenta drásticamente cuando se utiliza como referencia un ingreso de 6.85 dólares al día, dejando como resultado un 46.9% de la población global, equivalente a 3634 millones de personas (Tetteh Baah et al., 2023). Frente a estas cifras, el 6.8% presentado inicialmente empieza a parecer una cifra maquiada de la realidad.

Con estos antecedentes, la Figura 2 es una representación gráfica de la realidad global en términos de la distribución de la riqueza. Si a cada a cada cuadro se le atribuye la representación de un punto porcentual de la humanidad, es posible observar que, ventajosamente, la mayoría de la cuadrícula ha logrado superar la pobreza extrema. La mayoría de la humanidad no está expuesta a condiciones de inanición y eso debe ser valorado como un esfuerzo colectivo. Este es un logro significativo para la especie humana y demuestra que los esfuerzos planteados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no han sido en vano. No obstante, también es posible ver que un segmento considerable de la humanidad aún enfrenta el problema de la pobreza como una realidad propia. Es importante señalar que la imagen podría ser engañosa en términos de distribución de la riqueza, por eso se ha señalado la primera cuadrícula que representa al 1% más rico del mundo.

Figura 2

Representación de la pobreza global

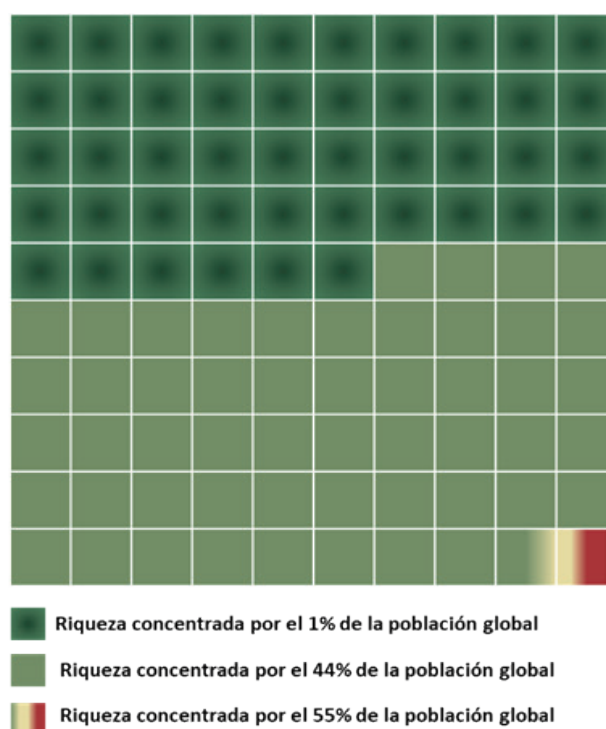


Nota: Datos tomados de Yoshida y Wu, 2022; Tetteh Baah et al., 2023

Precisamente por ello, y como complemento a la Figura 2, la Figura 3 ejemplifica la dramática brecha de distribución de la riqueza global. Casi la mitad de la riqueza del mundo está concentrada en el 1% más rico de la población. De esta manera, 45.8% de la riqueza global pertenece al grupo de la humanidad de alrededor de 51 millones de personas que tienen riquezas acumuladas superiores al millón de dólares (Deshmukh, 2021; World Inequality Lab, 2022). Por otro lado, se ve que 52.8% de la riqueza global está distribuida entre el 43.9% de la población; en esta categoría se dividen entre aquellos que ostentan riquezas entre 100 mil y un millón de dólares (39.1% de la riqueza global y 11.1% de la población) y de entre 10 mil y 100 mil dólares (13.7% de la riqueza global y 32,8% de la población). Esto deja al 55% de la humanidad, es decir 4400 millones de personas, con apenas el 1,3% de la toda la riqueza (Deshmukh, 2021). “De media, la mitad más pobre de la población posee 2.900 euros PPA por adulto, es decir, 4.100 dólares, y el 10% más rico posee 550.900 euros (o 771.300 dólares) de media” (World Inequality Lab, 2022). El contraste es drástico y sirve de factor explicativo para muchos de los retos y motivos de conflicto del siglo XXI.

Figura 3

Representación de la distribución de la riqueza global

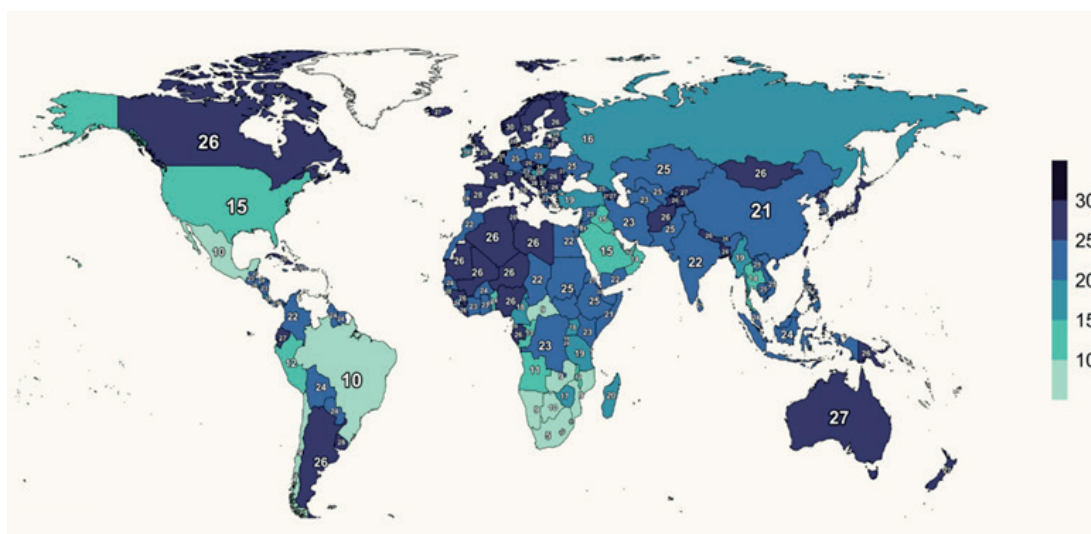


Nota: Datos tomados de Deshmukh, 2021.

Como complemento, la Figura 4 representa un mapa global en el que se señala el porcentaje de la riqueza nacional que concentra el 80% menos rico de la población. Salvo contadas excepciones en Europa, como Países Bajos, Bélgica, Noruega y Eslovenia, no existen países que superen la concentración de un 30% de su riqueza nacional en el 80% de su población. Tal vez algunas personas encuentren argumentos para justificar esta distribución desde la perspectiva del esfuerzo y variación en la productividad. No obstante, este tipo de coyunturas contribuyen negativamente al pleno desarrollo de la ciudadanía y genera una brecha, muchas veces insalvable, entre segmentos que son incapaces de reconocer las necesidades y realidades ajenas. El problema se agrava cuando las élites son incapaces de reconocerse como tales o, peor aún, cuando a consciencia de su posición por encima del resto de la población tratan de perpetuar este modelo, incluso a través de la violencia.

Figura 4

Porcentaje de la riqueza nacional concentrado en el 80% más pobre



Nota: Adaptado de Mathisen, 2023.

Específicamente para el caso de ALC se encuentra que alrededor de 201 millones de personas, que representan al 32.1% de la población total de la región, viven en situación de pobreza, y que de esta cifra, al menos 82 millones (13.1% de la población regional) se encuentran en pobreza extrema (CEPAL, 2022a). También se ha encontrado que el 10% más rico de la región tiene ingresos 22 veces más grandes que el 10% de la población (Busso y Messina, 2022), y que ALC es la tercera región que percibe menos ingresos en promedio y concentra

menos riqueza en promedio del mundo (World Inequality Lab, 2022). Y ante esto se debe señalar que la pandemia de COVID-19 contribuyó negativamente a la lucha contra estas condiciones, por lo que podría haber un efecto no solo de desaceleración en la lucha, sino también de incremento de la pobreza en el corto plazo (World Inequality Lab, 2022). Al respecto, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs ha planteado que “la cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe” (CEPAL, 2022b).

La falta de información confiable es otro de los problemas que enfrenta la región en esta materia, sobre todo para establecer una hoja de ruta que permita aplicar estrategias comunes a problemas semejantes. Una de las cifras que permite contrastar la brecha entre países y sus concepciones de pobreza es la línea de pobreza nacional. Como lo muestra la Tabla 1, a pesar de que el nivel de pobreza extrema de 2.15 dólares al día ha sido casi superada en la mayoría de países de la región, las instituciones de estadística siguen reflejando valores que, salvo excepciones puntuales, superan las dos cifras porcentuales. La variación de lo que cada país establece como línea de pobreza también afecta la forma en la que se entiende el problema, pues esto suele estar alineado con la canasta básica, cuestión que varía de país a país. Finalmente, los casos en los que ni siquiera se dispone de información clara son problemáticos, tanto desde lo técnico como desde lo ético, debido a que malos gobiernos pueden usar la ausencia de información para engañar a la población y a organismos internacionales. En este sentido, una de las tareas pendientes de la región es contar con medios claros de compilación de estadística y definir valores comunes que permitan enfrentar a los desafíos de forma articulada.

Tabla 1

Porcentaje de población de ALC por debajo de la línea de pobreza

País	% Debajo de la línea de pobreza nacional	% Debajo de \$2.15 USD diarios
Argentina	42	1
Bolivia	36,4	2
Brasil*	28,4	5,8
Chile*	8	n/d
Colombia	39,3	6,6

Costa Rica	30	1,2
Cuba	n/d	n/d
Ecuador	33	3,6
El Salvador	26,2	3,6
Guatemala	59,3	9,5
Guyana	n/d	n/d
Haití	58,5	29,2
Honduras	48	12,7
Jamaica	19,9	n/d
México	43,9	3,1
Nicaragua	24,9	3,9
Panamá*	25	n/d
Paraguay	26,9	0,7
Perú	30,1	2,9
República Dominicana	21	0,9
Surinam	n/d	n/d
Trinidad y Tobago	n/d	n/d
Uruguay*	6,7	n/d
Venezuela	n/d	n/d

* Información no reportada por el PNUD

Nota: Elaborado con base a datos tomados de: United Nations Development Programme and Oxford Poverty y Human Development Initiative, 2023; Macrotrends 2023a; 2023b; 2023c; Iniciativa Panamá sin Pobreza, 2023.

La pobreza en ALC es distinta, en parte por la riqueza de su tierra y climas, naturalmente El Caribe y su insularidad representan un limitante, pero la mayoría del resto de países tienden a tener una importante capacidad productiva en términos agrícolas, pesqueros o ganaderos. Por ejemplo, Uruguay cuenta con un 80.4% de tierra agrícola, México un 50%, Colombia un 38.5%, Brasil un 28.6% y Venezuela un 24.4% (Banco Mundial, 2023a)¹. Por supuesto que la potencial prosperidad productiva no ha logrado traducirse en plena distribución para todos. Coloquialmente se suele hablar de que sólo hace falta botar una semilla en el suelo para que crezca un árbol frutal, o que basta con estirar la mano para alcanzar una fruta. Sin embargo, las cifras reflejan que la situación es más compleja. Frente a esto también se tiende a señalar que la vida comparativamente más sencilla en la región ha hecho a su población menos precavida e incluso más perezosa que otras comunidades humanas que habi-

¹ Se debe señalar que este potencial no se traduce directamente en tierra cultivada, ni en una apropiada distribución ni uso de la tierra. Para destacar este hecho se tiene como ejemplo Haití, que tiene un 65.1% de tierras agrícolas, y a pesar de ello no ha logrado traducir esto en una solución para sus altos niveles de pobreza y hambre.

tan en latitudes menos privilegiadas. Con esto se han mantenido las ideas de Montesquieu sobre cómo la vida en el trópico hace a la gente menos diligente y con una ética de trabajo inferior a la de aquellos que viven en climas más complejos.

La “pereza” en la región es caricaturizada y permanente reflejada en la cultura popular en distintas facetas. La idea de que los “pobres son pobres porque quieren” está internalizada para muchos. Incluso que los programas de asistencia social, defendidos desde el desarrollismo y con amplia evidencia de éxito (DFID, 2005; Lindert, Skoufias y Shapiro, 2006; Barrientos y Scott, 2008; Hagen-Zanker et al., 2016; Papadopoulos y Velázquez Leyer, 2016; Abramo, Cecchini y Morales, 2019), son entendidos y enfrentados como un problema porque “generan vagancia”, con gente que “solo vive del Estado y de sus bonos”; algo que por poner un ejemplo, en la cultura argentina se conoce como los “planeros”. Con esto se considera que se generan redes clientelares entre políticos y electores, que entregan el dinero público de forma irresponsable e insostenible, para a su vez capturar fondos del Estado en beneficio propio. Sin embargo, el imaginario de la pereza también ataca al Estado, desde la perspectiva popular, se piensa que los políticos (y los burócratas) no sólo se aprovechan del poder, sino que también son “vagos” y “no hacen nada”. Una ley de mínimo esfuerzo se aplicaría tanto desde gobernantes como gobernados, lo que explicaría, en parte, la falta de posicionamiento de los intereses de la región en la agenda global, frente al norte global.

¿Pero, es realmente la coyuntura climática la que ha provocado este modelo de subdesarrollo? Al respecto se han levantado algunos estudios que parecieran validar los imaginarios. Por ejemplo, Piergallini (2016) plantea que la postura de Montesquieu se ve reforzada en la evidencia levantada entre 1980 y 2013, encontrando que los países ubicados en el trópico ven su desarrollo económico impactado por su posición geográfica. Ahora bien, el mismo estudio plantea que las instituciones, como la democracia, el imperio de la ley y la protección de los derechos de propiedad contribuyen a luchar contra la pobreza y la falta de desarrollo, aunque de forma limitada. El reto es complejo, pues no solo basta con intervenir adecuadamente, sino que existen factores estructurales que pujan en contra de las acciones para mejorar la coyuntura económica, política y social de la gente.

Por otro lado, Oumer, Maseland y Garretsen (2020) encuentran que, aunque los climas fríos tienden a generar culturas de trabajo más dedicadas, esto no

se traduce necesariamente a un mejor nivel de desarrollo económico. Lo interesante de ALC es que, al tener una diversidad de pisos climáticos tan amplia, muchos podrán entrever —desde lo anecdótico a lo evidente— que incluso en países con climas más fríos o más cálidos las tendencias culturales varían y que, aunque el clima puede contribuir efectivamente a afectar la cultura laboral, esto no implica ipso facto que dichas zonas del país son las más prósperas. En los países andinos incluso suele existir una competencia regionalista entre las personas que habitan en las zonas montañosas frente a aquellas que viven en las costas o en las regiones amazónicas, en las que se habla que aquellos que viven en las zonas frías suelen ser más “parcos”, “aletargados” y menos “vivos” que sus compatriotas de zonas más cálidas.

Es decir, es cierto que la misma biología humana responde de forma diferente a trabajar en un clima extremo, ya sea en el calor o en el frío, a hacerlo en condiciones templadas y óptimas, pero esta no puede ser la única variable para tomar en cuenta. Aceptar estos argumentos como un todo englobante exponen a una sobresimplificación del problema, justificando la falta de desarrollo económico a una cuestión netamente climática y lavando la cara a las potencias globales que durante siglos han mantenido relaciones de poder asimétricas con el mundo en desarrollo, extrayendo recursos y bloqueando las oportunidades de liderar sus propios procesos políticos y sociales. Por otro lado, también es importante destacar que los cambios tecnológicos han mutado la forma en la que se trabajaba en la época de Montesquieu frente a la realidad moderna. En consecuencia, no se puede anclar a la región a concepciones que van variando conforme la humanidad va evolucionando.

Precisamente por ello, las cadenas del “en vías de desarrollo” deben entenderse solo en el marco histórico del proceso de explotación y expoliación al que fue sometida la región, tanto en el marco de su colonización, como su posterior relación frente a los países desarrollados. ALC no solo es tropicalidad, como se rescataba previamente, la región está compuesta por una amplia gama de pisos climáticos y realidades ambientales. Desde la selva amazónica a los páramos andinos, así como las estepas de la Patagonia y el cruel desierto de Atacama o el de Sonora. El territorio de ALC permite cultivos diversos y es origen de varios de los alimentos más consumidos a nivel mundial como la papa, el tomate, el maíz, el cacao, y el aguacate. Debido a su fertilidad también se ha transformado a la región en una importante fuente de otros productos que originalmente pertenecían al “viejo mundo”, como la soya, el trigo, el café, la caña de azúcar, así como de varias frutas entre las que destaca el banano.

ALC también cuenta con algunos de los exportadores más importantes de carne de vaca y cerdo, así como el cultivo de camarón y la pesca de atún y otras especies marinas que completan las alacenas y supermercados del resto del mundo.

Y, a pesar de ello, ALC sigue siendo vista por encima del hombro por muchos, ignorando su importancia, no solo en el modelo de consumo y calidad de vida modernas, sino también en el rol nuclear que el continente ha tenido en el crecimiento del norte global y que actualmente está teniendo en el despunte de la competencia hegemónica entre Estados Unidos y China. Su población parece distante a este rol, aunque en su momento Galeano, que luego se arrepentiría, se animó a escribir:

La pobreza masiva, clave del éxito de una economía volcada al exterior, impide el crecimiento del mercado interno de consumo en la medida necesaria para sustentar un desarrollo económico armonioso. Nuestros países se vuelven ecos y van perdiendo la propia voz. Dependen de otros, existen en tanto dan respuesta a las necesidades de otros. (Galeano, 2004, p. 353)

En cualquier caso, es importante destacar que no todo es negativo. Definitivamente la especie humana ha logrado mejorar las condiciones mínimas de subsistencia, alejando a la muerte como una realidad latente. En ocasiones la narrativa de pobreza en ALC, bastante inconformista con su realidad local, ignora el hecho de que 5 de cada 6 personas pobres habitan en África Subsahariana y Asia del Sur (United Nations Development Programme and Oxford Poverty y Human Development Initiative, 2023). Lejos de ser una excusa para olvidar la pobreza local, este dato debería servir como punto de partida para repensar la narrativa y para que los tomadores de decisión orienten los esfuerzos más allá de las posturas demagógicas. Es fundamental empezar a diseñar modelos de lucha contra la pobreza que se enfoquen en su problema de origen, aprovechando las capacidades estructurales ya asentadas (recursos naturales, capital social, posición geoestratégica privilegiada).

Uno de los puntos de partida está en enfrentar el 3% de la pobreza multidimensional del mundo, lo que equivale a 33 millones de personas, que habitan en ALC (United Nations Development Programme y Oxford Poverty y Human Development Initiative, 2023). Esto es algo que es posible gestionar a través de inversiones inteligentes y concretas en los apartados de educación, salud y estándares de vida. Algunos casos de éxito global en la reducción de

la pobreza multidimensional se encuentran en ALC, por ejemplo: República Dominicana, Guyana, Honduras y Nicaragua han logrado reducir a la mitad este índice durante el siglo XXI; Perú y Surinam, de hecho, lo lograron dos veces en dos ciclos de tiempo distinto (United Nations Development Programme and Oxford Poverty y Human Development Initiative, 2023). Esto no significa que la pobreza haya sido derrotada por completo, solo significa que el problema se va reduciendo paulatinamente y existen algunos países en la región a los que hay que tomar en cuenta para valorar qué han estado haciendo bien.

La imagen general de la pobreza en la región ha ido variando, aunque todavía es visible la lastimera realidad de comunidades sin alimentos, donde las mujeres y los neonatos ven a la muerte en abundancia cada año debido a la ausencia de centros médicos, o incluso debido a la falta de nutrición suficiente para cubrir las necesidades básicas de los primeros meses de vida, esta es una imagen que poco a poco va quedando atrás. Esa misma imagen de comunidades de ropa harapienta y ausencia de zapatos, casas sin techo y refugios hechos de materiales reciclables son contrastadas con antenas parabólicas, teléfonos celulares, e incluso transmisiones en vivo. La modernidad ha transformado la pobreza hacia nuevas realidades, algo que, en algunos casos, impide a la sociedad a reconocer los avances alcanzados y, en otros, a normalizar las nuevas coyunturas de lo que ser pobre representa.

La forma de vivir de la población de ALC también es distinta. Ya desde 2012 “América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Dos tercios de la población latinoamericana vive en ciudades de 20.000 habitantes o más y casi un 80% en zonas urbanas” (CEPAL, 2012). Esto implica un estilo de vida que incluye ciertas comodidades de la modernidad, aunque muchas veces limitadas por la falta de servicios públicos de calidad. El argumento de los administradores públicos tiende a girar en torno a la informalidad con la que los más pobres suelen apropiarse de las zonas marginales de las ciudades latinoamericanas. Las llamadas “invasiones” son la forma común a través de la cual el campo entrega a la ciudad a sus pobladores y productores, y así también es como la ciudad recibe nuevas bocas que alimentar y sus alcaldes nuevos votantes. El sueño de vivir mejor muchas veces ignora los beneficios de la vida más cercana a la naturaleza y prefiere la posibilidad de consumir de forma programada de forma más parecida a las figuras que aparecen en la televisión.

La pobreza en ALC se maquilla, y esto ocurre gracias a la gente que vive en la pobreza, pero se viste y actúa como si esta no fuese su realidad, así como

desde el poder que prefiere pintar las casas que no cumplen los estándares mínimos de construcción, haciéndolas ver menos feas, mientras se cruzan los dedos para evitar algún desastre natural que los ponga en evidencia. La pobreza también se esconde detrás de algún parque o cancha de fútbol rodeado de casas de bloque expuesto y frecuentadas por perros y gatos desnutridos y de propiedad comunal. La pobreza duele, pero también genera prosperidad para sanadores, curanderos, pastores y sacerdotes de toda índole. Por otro lado, los pobres también demandan, lejos de aceptar su condición como algo normal, las voces de la pobreza en ALC reclaman dignidad, estabilidad y retribución por su esfuerzo.

Aún así, los recicladores, gente que hace su vida alrededor de la búsqueda entre la basura de aquellos que tienen más de lo que necesitan y dejan suficientes sobras para que otras personas puedan subsistir con ello, no son un concepto extraño en la región. Cabe destacar que este reciclaje no nace de una abundante conciencia medioambiental, sino de las profundas necesidades económicas. Esta labor puede ser uno de los proxies más significativos del desarrollo de la región. Aunque este tipo de labores también es visible en otras sociedades con economías mucho más estables y prósperas, su intensidad es más propia de los países en vías de desarrollo, donde el subempleo y desempleo son más elevados, y donde los sistemas seguridad social son limitados. Los desperdicios del consumo requieren un tratamiento apropiado para evitar contaminar aún más el planeta, pero en los Estados de bienestar este es un proceso que se hace fuera de la vista de todos y muchas veces es automatizado, en ALC es casi siempre un evento de alcance popular.

Ahora bien, la cifra de pobreza multidimensional, presentada previamente, contrasta con la estimación de la CEPAL de pobreza, lo cual puede generar confusiones. En este sentido, vale la pena aclarar que la pobreza multidimensional es un concepto que trata de ampliar la comprensión de pobreza, evaluando aspectos como el estado de nutrición, la mortalidad infantil, los años de escolarización, las horas de estudio, el combustible con el que se cocinan los alimentos, el acceso a electricidad, agua potable, inodoros, y la posesión de un hogar propio o de activos. Con esta imagen se puede comprender un poco mejor por qué se llega a interpretar que las poblaciones de una región sumamente productiva, con climas relativamente templados, alejados de las mayores sequías e inundaciones, y apartados también de la guerra, no entrarían en el esquema de una pobreza multidimensional.

Por otro lado, esta variación en la concepción de la pobreza también debe ser una invitación para replantearse a lo que se entiende como pobre en el siglo XXI. Si es que se mantienen los estándares de pobreza de siglos pasados, sin entender que la riqueza ha mutado de manera drástica, es fácil aceptar la idea de que, con no ver el cliché de niños sin camiseta y estómagos protuberantes en calles sin asfalto, la pobreza ha sido superada. Lo cierto es que la pobreza no solo debe entenderse desde la subsistencia, sino también desde lo aspiracional. Mientras la nueva riqueza apunta a los viajes al espacio y la compra de su propio espacio en Marte, a los hogares inteligentes, a la preservación de la juventud a través de las células madre o al éxito de la criogenia, no se le puede demandar a los segmentos menos favorecidos que se alegren por no morir de hambre.

Como lo ha reflexionado Amartya Sen desde hace ya varias décadas, las personas (incluso en la pobreza) tienen aspiraciones sobre el tipo de vida que quieren tener (Sen, 1979). En lo que Sen (1979) denomina como igualdad de capacidades básicas, entendida como el escenario donde se deja atrás una aproximación donde solo importan los recursos o el ingreso, sino que también importan las capacidades reales para libremente poder alcanzar las expectativas individuales, se encuentra el núcleo de lo que debería ser uno de los grandes retos del siglo XXI en términos de comprensión de la pobreza. Repensar la forma en la que se entiende la pobreza está pendiente en la agenda política de muchos segmentos de la política de ALC.

Es cierto que las izquierdas tradicionales y los nuevos segmentos progresistas han tomado esa agenda como parte prioritaria. Sin embargo, con el crecimiento de las clases medias, los discursos tradicionales de lucha de clases empiezan a ser insuficientes. Lo mismo ocurre con los cambios en los modelos productivos, de un sistema de industrialización por sustitución de importaciones promovido por la CEPAL, y que nunca ha terminado de cuajar en toda la región, se ha pasado a un modelo de digitalización y pérdida del esquema tradicional entre empresa y obrero, en el que las luchas de los siglos pasados parecen quedar obsoletas frente a los nuevos desafíos tecnológicos. Los nuevos ciclos de innovación tecnológica generan amplias brechas entre aquellos que pueden beneficiarse de los avances del siglo XXI, frente aquellos que apenas están alcanzando los mínimos del siglo XX. En este sentido, incluso los pobres de la región se quedan sin un paraguas político que los cobije. Esto explica parcialmente el surgimiento de los populismos de derecha (aparte de la eficiencia que tiene el populismo en captar el poder en los últimos años) cuando tradicionalmente esta era una tendencia más propia de la izquierda.

La falta de comprensión de la pobreza, o más bien de los pobres como seres humanos con las mismas ambiciones que las que podría tener una persona de clase media o rica ha sido una traba importante en alcanzar un desarrollo más pleno. Y esto no es algo exclusivo de ALC, sino que es un mal del siglo XXI. Como lo plantean Banerjee y Duflo:

Lo más importante es que un poco de esperanza, tranquilidad y consuelo pueden ser un poderoso incentivo. Es fácil para los que tenemos suficiente, que vivimos una vida segura, estructurada por objetivos a los que podemos aspirar con razonable confianza (ese sofá nuevo, la pantalla plana de 50 pulgadas, ese segundo coche) e instituciones diseñadas para ayudarnos a conseguirlos (cuentas de ahorro, programas de pensiones, préstamos para la compra de vivienda) asumir, como los victorianos, que la motivación y la disciplina son intrínsecas. Como resultado, siempre existe la preocupación de ser demasiado indulgentes con los pobres perezosos. Nuestra opinión es que, en su mayor parte, el problema es el contrario: Es demasiado difícil mantener la motivación cuando todo lo que se desea parece imposiblemente lejano. Mover los postes de la meta más cerca puede ser justo lo que los pobres necesitan para empezar a correr hacia ellos. (Banerjee y Duflo, 2011)

En este sentido, resulta importante valorar el esquema a través del cual se ha perpetuado la pobreza en la región. Se debe destacar que, desde los procesos independentistas (e incluso antes), cada Estado ha ido adaptando su propio esquema productivo, y posteriormente su propio modelo de desarrollo. Han existido varios intentos, a través de la integración, de retomar la interconexión y llevar procesos conjuntos y cooperativos de luchas comunes. No obstante, los factores estructurales como la geografía, la población, la disponibilidad y variación de recursos naturales, el rol geoestratégico de cada Estado, y a su vez los factores culturales y políticos, han llevado a cada país a tener su propia realidad, con algunos países más avanzados que otros.

El intento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), fundada en 1960, no pudo concretarse, en gran parte debido a las asimetrías existentes entre los diferentes países que buscaron sumarse a la iniciativa. En consecuencia, para 1980 se trató de reemplazar por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que, a pesar de seguir vigente, en términos prácticos no ha logrado establecer un rol que sea perceptible para las sociedades de sus países miembros. Estos dos ejemplos de integración fallida, o al menos

insuficiente, hablan también de la coyuntura de fragmentación de atomización de la región. Sin embargo, esta coyuntura no fue propia del siglo XX, y más bien fue una herencia de más de un siglo. Frente a esto, y especialmente desde la izquierda, se suele encontrar a dos culpables para que los procesos de unidad de América Latina no sean concretados. El primero es Estados Unidos, al que se le atribuye un rol de fragmentador e interventor, con el objetivo de evitar la integración para así no tener que lidiar con una competencia fuerte a sus intereses en su propio continente. Y en segundo lugar, a las élites económicas de cada Estado.

En términos históricos, la fractura de ALC en los Estados que la componen actualmente no respondía únicamente a factores geográficos (como la distancia) o sociológicos (como la formación de culturas independientes) sino más bien a intereses económicos de las élites criollas que patrocinaron la independencia. Es cierto que previo a la colonización América no estaba, ni de cerca, comprendida por un solo Estado, peor aún una sola nación. También es cierto que las diferentes formas de administrar el territorio, así como la influencia de las culturas locales, y la constante variación de dinámicas sociales contribuyeron al surgimiento paulatino de lo que podría identificarse como una identidad nacional. Aunque esta identidad nacional todavía era un constructo completamente artificial durante la reestructuración del continente después de los procesos de independencia del siglo XIX.

Sin embargo, se debe destacar que los mayores beneficiarios de la fragmentación estatal no era la sociedad en general, que en términos geoestratégicos se pudo haber beneficiado de contar con Estados mucho más amplios, con mayores recursos y mayor población para enfrentar a las potencias globales de la época. Quienes adquirieron un beneficio real de las fracturas eran aquellas élites que podían adoptar esquemas mucho más favorables a sus agendas personales (Mazzuca, 2021). A través de una serie de acuerdos, así también como de un ciclo comparativamente corto de conflictos interestatales, las élites locales lograron aislar territorios en los cuales desarrollar sus propios proyectos de Estado-nación, que varios podrán percibirse como aún inconclusos. Lo que esto generó, lejos de significar una emancipación de yugo de explotación, es el reemplazo de la autoridad europea por una autoridad local que, para desgracia de la comunidad local, en muchos casos fue incluso más cruel que los colonizadores².

² Se puede señalar que, en los últimos años, en algunos países han aparecido ciertos voceros de un segmento reidentificado con el hispanismo que, entre propaganda, revisionismo histórico y reivindicación, ha intentado posicionar la idea de que los procesos de independencia fueron un error y, al menos la América española, estuvo mejor administrada mientras estuvo bajo la colonia europea.

En esencia, el problema que surgió de la independencia, aparte de la contracción de deuda externa, es que se generaron nuevas cadenas de producción orientadas al servicio de intereses externos y no a un proyecto nacional. Poco ayudaba el ciclo de conflictividad interna que la mayoría de Estados de la región tuvieron que enfrentar. La puja entre las élites locales que veían su propia ventana de oportunidad para crear sus propios Estados, así como la injerencia de actores extrarregionales que auparon el conflicto y favorecieron al surgimiento de nuevas fuerzas de confrontación y atomización, terminó por asentar un esquema orientado hacia el comercio de materia prima, con baja especialización (lo que genera roces adicionales, pues los Estados vecinos no forman economías complementarias, sino competitivas), poco grado de industrialización e innovación, y concentración de la riqueza en las pocas familias que poseían la tierra, o los derechos sobre la comercialización de los recursos extraídos.

El rezago cultural, atado a esquemas machistas y racistas, también influyó de forma negativa en la dinamización de modelos de economía inclusiva, algo que persiste hasta la actualidad en la mayoría de sociedades de la región. Sin embargo, el eje central de la problemática radica en el hecho de que pocos actores nacionales ostentan amplios segmentos de la economía, mientras que la mayoría de la población ni siquiera encaja en el sistema productivo, incluso enfrentando condiciones de desempleo, subempleo, o simplemente empleos de bajo retorno económico. Ahora bien, se debe destacar que, como lo plantean Alvaredo y su equipo de trabajo (Alvaredo et al., 2023), del *The Latin American and Caribbean Inequality Review* (LACIR), existe una variación significativa de país a país que no permite una total claridad al momento de hacer un diagnóstico general. En términos de información, los investigadores estiman que parte del problema está en que existe diferencia en los datos, en los conceptos y en la gestión de los datos (Alvaredo et al., 2023), algo que está vinculado tanto a las diferencias en sus orígenes coloniales, variaciones idiomáticas y nivel de desarrollo económico.

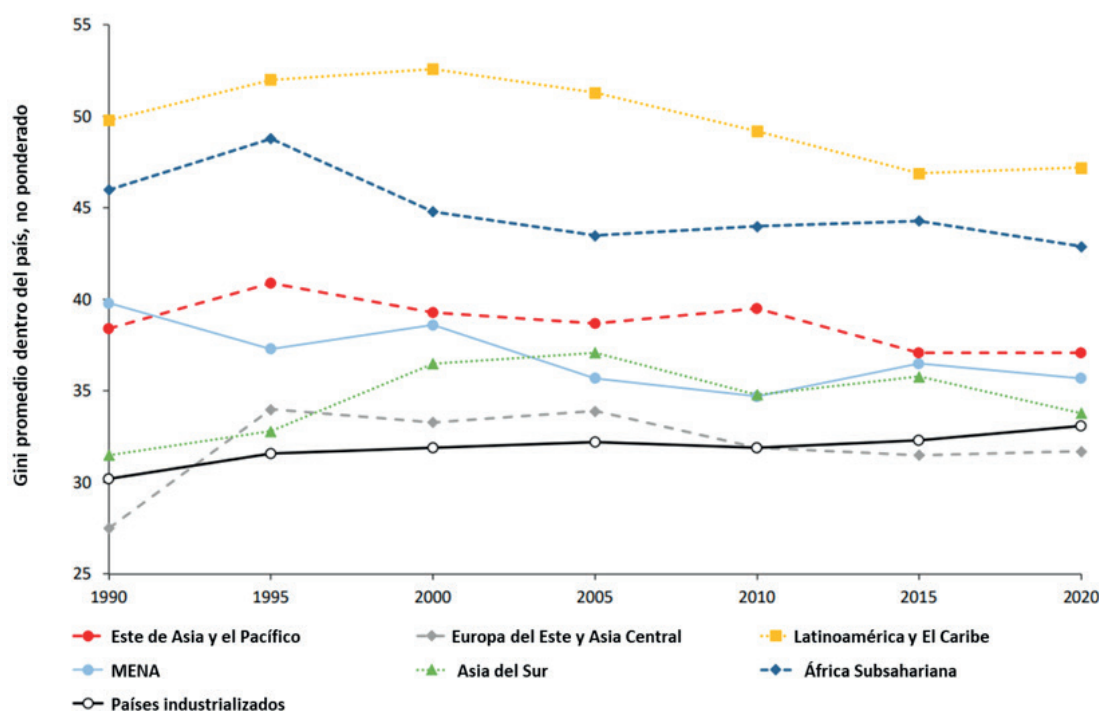
Sin embargo, por media regional, ALC es identificada como la región más desigual del mundo. Como lo muestra la Figura 5, la región ha tenido una desigualdad superior al resto del mundo³, aunque a partir del siglo XXI comenzó un proceso de declive que, lamentablemente, en el último lustro ha vuelto a despuntar. La estructura productiva y distributiva se hace notar y pone a la región en una posición inconveniente frente al resto del mundo, pues es incapaz

³ Recientemente han surgido nuevos análisis y evaluaciones sobre la inequidad que encuentran que el África Subsahariana tiene otros factores de desigualdad que podrían hacerla incluso más desigual que ALC. En cualquier caso, la realidad de ALC como una región sumamente desigual es innegable.

de hacer buen uso de sus capacidades estructurales, y la estanca en dinámicas que no solo afectan a la productividad económica, sino que generan tensiones internas que retrasan al avance y desarrollo de los Estados. El margen frente a los países industrializados es demasiado amplio, incluso cuando estos países enfrentan sus propias crisis de acumulación económica.

Figura 5

Niveles y dinámicas de la desigualdad por ingresos/consumo en el mundo 1990-2020



Nota: Adaptado de Alvaredo et al., 2023.

La sobreconcentración de la riqueza es uno de los retos que los Estados-nación del siglo XXI han evitado abordar. Es cierto que la discusión para establecer medidas globales para lidiar con este problema es cada vez más presente, las alertas levantadas por varios autores entre los que figuran Joseph Stiglitz (2012), Thomas Pikety (2014) y Anthony Atkinson (2015) u organizaciones de alcance mundial como Oxfam (Ahmed et al., 2022), o la misma Cepal (Bárcena, Cimoli, y García-Buchaca, 2018), han permitido sentar las bases para un debate a favor de comenzar a mejorar los sistemas tributarios y poder enfrentar la pobreza, pero también los factores de inequidad que la perpetúan. El debate técnico es bastante álgido, pero lo cierto es que la conversación política tiende a mantener discusiones superficiales entre una falsa competencia entre capi-

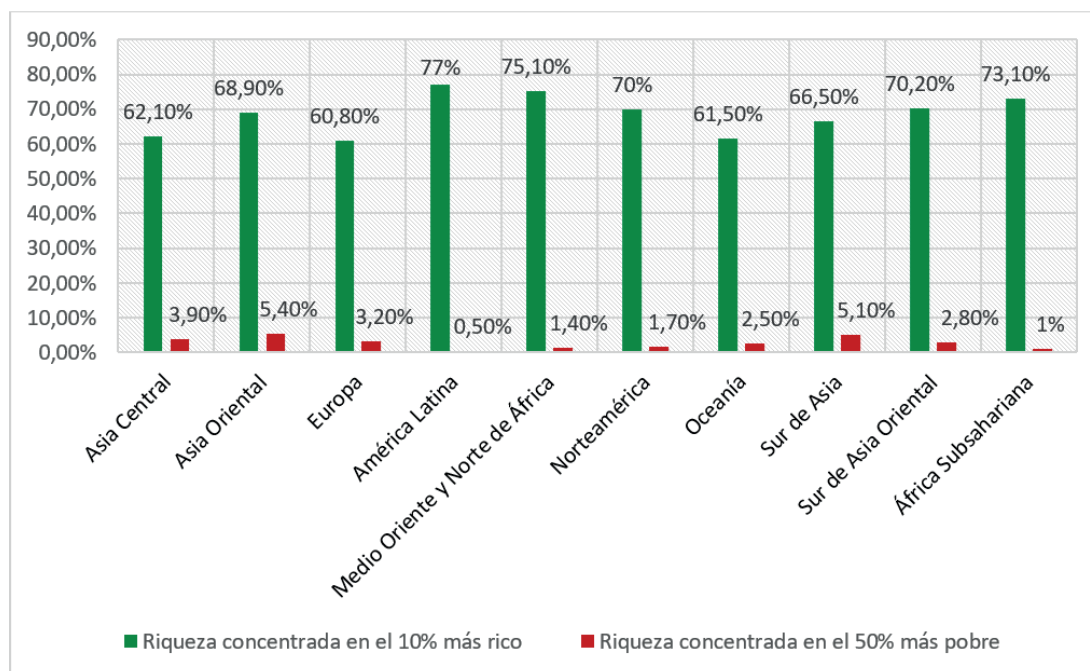
talismo y comunismo, cuando esta es una agenda que supera esas fronteras ideológicas.

La concentración de la riqueza también contribuye a la concentración del poder político. Los actores con mayor capacidad financiera tienen una mayor capacidad para invertir en el financiamiento de partidos afines a sus intereses, o directamente para participar en política sin preocuparse de su subsistencia o estabilidad financiera. En consecuencia, la legislación también se modifica a favor de los grupos de interés que financian las campañas y los partidos políticos (Chomsky, 2019). Normalmente estos grupos presionan por la desregulización, pero no sólo para acelerar los flujos económicos o reducir costos y plazos burocráticos, sino que directamente presionan a favor de la eliminación de controles y seguimiento, la reducción de contribuciones (en forma de eliminación de tasas e impuestos) e incluso la generación de subsidios y bonos a sus empresas (mientras se quejan de los programas sociales o subsidios a los sectores vulnerables). Bajo la noción de distribución en cascada a través de la generación de empleo se ha ido debilitando a los Estados o transformándolos en agentes facilitadores de las empresas de quienes financian al sistema político. Incluso sectores como los bancos enfrentan rescates financieros por parte del Estado, mientras que el resto de la ciudadanía debe lidiar con las consecuencias de las crisis económicas por cuenta propia. De esta forma se privatizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas.

Como respuesta a esta realidad, ideas como un impuesto global a la riqueza (Plikety, 2014), sobre todo la de los superricos cuya riqueza ha crecido en 109% en la última década (Al Jazeera, 2023), o la de establecer impuestos a las grandes compañías transnacionales desde el G7 han logrado ir ganando terreno (Inman y Savage, 2021). Curiosamente, esto se ha alcanzado sin levantar alertas sobre el comunismo, que en otras décadas habrían impedido cualquier acción coordinada para controlar a las grandes empresas globales, pues habrían sido asociadas como medidas de carácter, por lo menos, soviético. Este es un debate que debe ser particularmente relevante en América Latina, que se ha ganado el doloroso título de ser la región más desigual del mundo; como lo ejemplifica la Figura 5 y también la Figura 6.

Figura 6

Distribución de la riqueza por región en 2021



Nota: Adaptado de: Statista, 2023a

Como lo evidencia la Figura 6, existe una malsana competencia en términos de distribución de la riqueza en el mundo, pero este es un problema que se agrava en los países en vías de desarrollo. Aunque este tipo de referencias no evidencian la dimensión real de cuánta riqueza existe en cada región del mundo, sí deben servir como punto de partida para entender algunos de los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Algunos sectores (principalmente de la derecha política) afirman que el problema es exclusivamente de volumen, es decir solo la pobreza, por lo que es necesario producir más y aumentar el patrimonio general.

Sin embargo, como se planteaba previamente, la desigualdad es uno de los problemas estructurales en la región y sus orígenes pueden ser rastreados al propio diseño de los Estados. Retomando la cuestión del pasado colonial, se debe destacar el hecho de que las comunidades estaban categorizadas por su origen étnico, pero también desde una faceta económica. Como lo plantean Martínez e Iyer:

En la época colonial, las sociedades latinoamericanas estaban organizadas en un rígido sistema de castas determinado por la raza. Las dos

castas superiores incluían únicamente a los blancos. Por debajo de éstas se situaban las castas formadas por individuos de ascendencia mixta europea e india, los mestizos. Los siguientes en la jerarquía eran los de ascendencia mixta europea y africana, los mulatos. En las castas inferiores estaban los indígenas y los negros. (Martínez y Iyer, 2008, p. 55)

La variación en la supervivencia e integración de las culturas locales con las élites criollas, así como la cantidad de población negra que llegó a sus territorios también fueron factores que fue redefiniendo la estructura de los nuevos Estados de ALC. Esta coyuntura aporta a que la región sea una zona muy heterogénea en términos económicos. Prácticamente cada Estado latinoamericano ha enfrentado su propio proceso de consolidación socioeconómica como una especie de autoidentificación, de manera que no existe una tendencia única en la región. Sino que más bien, en función de su composición poblacional o su dimensión territorial se termina teniendo un cierto nivel de desarrollo económico, aunque no necesariamente en términos de distribución. Países como Brasil y México con un Producto Interno Bruto (PIB) que los pone entre las economías más grandes del mundo luego palidecen frente a Estados pequeños como Uruguay, Guyana o incluso Trinidad y Tobago en términos de su PIB per cápita, a pesar de que esto no garantice una apropiada distribución de recursos.

Aquí vale la pena hacer un paréntesis y destacar que también es cierto que el PIB o el PIB per cápita no son herramientas suficientes para comprender la complejidad económica de la región. No obstante, son un buen punto de partida común para distinguir las dimensiones de la capacidad productiva y de la distribución de estas capacidades en cada país. En su mayoría, orientadas a la exportación de bienes sin valor agregado, son pocos los países y sectores que han logrado superar esta etapa de producción de bienes primarios, concentrando gran parte del esfuerzo en el campo de las energías fósiles, la minería, la agricultura y la ganadería. Como lo muestra la Tabla 2, solo Costa Rica, Trinidad y Tobago, República Dominicana, El Salvador y México tienen una canasta exportadora de productos básicos inferior al 50% de la totalidad de su oferta exportable.

Tabla 2

Dependencia de las exportaciones de productos básicos

País	% Exportación de productos primarios en relación con las exportaciones totales
Venezuela	98.2
Panamá	96.6
Ecuador	93.8
Belice	93
Bolivia	91.8
Perú	89.4
Chile	88.4
Guyana	87.1
Paraguay	86.8
Argentina	86.1
Uruguay	83.1
Colombia	76.6
Surinam	76
Brasil	73
Honduras	68.2
Jamaica	58.2
Barbados	55.7
Nicaragua	55.7
Guatemala	53.1
Costa Rica	40
Trinidad y Tobago	35.9
República Dominicana	31.9
El Salvador	24.6
México	23.2
Cuba	n/d
Haití	n/d

Nota: Adaptado de Vulnerability Atlas, 2023a

Esta realidad, también ha influido en que la distribución de los beneficios económicos no sea proporcional, pues corresponde a áreas donde los ingresos suelen ser desiguales entre los dueños de la explotación y los obreros que participan en la actividad. Por ejemplo, la media regional de PIB per cápita es de 9140.79 dólares (ver Tabla 3) algo que de por sí está muy por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OECD por sus siglas en inglés) de 43,260.70 dólares, y de los 24 países de ALC evaluados solo 10 superan esta media (World Bank, 2023). Por otro lado, mientras el índice de Gini, que evalúa la desigualdad por ingreso, tiene un promedio de 0.32 puntos en los países más desarrollados de la OEC (OECD, 2019), en la región el menor puntaje, que es el de República Dominicana, no baja de los 0.38 puntos. En tanto, el promedio regional de 0.45 puntos, con varios países que ni siquiera generan datos alrededor de este índice desde hace décadas, y otros que se encuentran en los países con peor calificación global como Brasil, Panamá y Colombia.

Se debe rescatar como positiva la evolución de tendencias en el último siglo, con excepción de Surinam y Venezuela, todos los países han logrado un incremento en el PIB per cápita (ver Tabla 3). La variación en el índice de Gini entre 2002, 2008 y los años subsiguientes también indica un proceso de distribución que debe ser destacado. No obstante, si se comparan las cifras de 2008 con los datos más recientes de la mayoría de países, cuya recolección oscila entre 2020 y 2021, se ve que existe un estancamiento en la reducción de la desigualdad. Esto resulta problemático, pues podría ser un indicador de que el ejercicio de crecimiento económico de la región podría estar concentrado en bolsillos poblacionales, sin representar un beneficio real para las comunidades humanas. Es decir, los países estarían produciendo más en términos nominales, pero el crecimiento real de la economía no favorecería a la nación en general.

Tabla 3

Coyuntura económica de los países de América Latina y El Caribe

País	PIB 2022 en mil millones de USD	PIB per cápita 2008	PIB per cápita 2022	Variación PIB per cápita	Gini 2002	Gini 2008	Gini más reciente
Guyana	14.52	902	18989	18087	n/d	n/d	0.45
Uruguay	71.89	8161	20795	12634	n/d	0.45	0.41
Panamá	71.97	5688	17357	11669	0.57	0.52	0.51
Chile	300.73	6235	15355	9120	0.55	0.52	0.45
Costa Rica	68.39	5189	13198	8009	0.49	0.47	0.49
Trinidad y Tobago	27.88	10964	18222	7258	n/d	n/d	0.4
República Dominicana	112.5	3688	10120	6432	0.54	0.55	0.38

Cuba	107.4	4363	9499	5136	n/d	n/d	n/d
Ecuador	116.36	1745	6391	4646	0.51	0.5	0.46
Paraguay	41.28	1521	6153	4632	0.57	0.53	0.43
Perú	242.4	2924	7125	4201	0.51	0.48	0.4
México	1414.1	7092	11091	3999	0.51	0.52	0.45
Argentina	632.24	9885	13686	3801	0.58	0.52	0.42
Guatemala	93.66	1699	5473	3774	0.54	0.59	0.48
Brasil	1924.13	4448	8197	3749	0.61	0.59	0.53
Colombia	343.94	2983	6630	3647	0.57	0.58	0.51
El Salvador	31.61	2677	5127	2450	0.53	n/d	0.39
Bolivia	43.22	1173	3523	2350	0.61	0.57	0.41
Jamaica	16.04	3713	6047	2334	n/d	n/d	0.45
Honduras	31.52	1452	3040	1588	0.59	0.58	0.48
Nicaragua	15.77	897	2255	1358	0.58	0.53	0.46
Haití	20.54	391	1748	1357	n/d	n/d	0.41
Surinam	14.52	6616	5858	-758	n/d	n/d	0.58
Venezuela	93.11	5884	3500	-2384	0.5	0.41	n/d

Nota: Obtenido de Naciones Unidas, 2010; datos tomados de Statista 2023b, 2023c, 2023d; Datos Macro, 2023.

La pandemia de COVID-19 tuvo un severo impacto en la lucha contra ambas problemáticas. De forma general, la enfermedad impactó en una etapa en la cual ALC no estaba atravesando su mejor momento; el boom económico que había acompañado a su crecimiento durante las primeras décadas del siglo XXI había cedido y, entre escándalos de corrupción y polarización política, los gobiernos no supieron gestionar la grave crisis multidimensional. La pandemia hizo evidente y agravó las pésimas condiciones de los servicios de sanidad y educación pública en varios países (Cepal, 2022). Por ejemplo, para 2020 “alrededor de 12 millones de niñas, niños y adolescentes estaban fuera de la escuela en la región, incluidos 9,7 millones de adolescentes en edad de cursar educación secundaria” (Unicef, 2023). Aunque paulatinamente los países lograron recuperarse del shock inicial de la nueva enfermedad y adquirieron las vacunas necesarias para evitar un mayor daño, lo cierto es que el retroceso en el resto de escenarios no ha terminado.

Unicef (2023) hace referencia a un severo problema de pobreza de aprendizaje, que en países como Honduras y Paraguay llega casi hasta el 80% de niños y niñas. Mientras tanto, Cepal (2022) habla del impacto que tendrá la pandemia en todas las generaciones cuya educación se vio truncada o, por lo

menos empeorada, por la suspensión de clases, modificación en el pensum, o directamente por el deterioro de la calidad, debido a la ausencia de materiales, recursos tecnológicos o incluso por el impacto psicológico que tuvo la pandemia en niños y jóvenes. En lo que denomina como un “efecto cicatriz” se hace referencia a la pérdida de habilidades y destrezas educativas (y posteriormente profesionales) que tendrán las generaciones educadas bajo las condiciones excepcionales de la pandemia. Los efectos reales están aún por delimitarse, pero lo cierto es que los factores negativos nuevamente impactarán más en los sectores menos favorecidos que en aquellos que sí disponían de capacidad de hacer una migración digital.

En términos de desigualdad, es evidente que las personas más pobres tuvieron que vivir momentos mucho más complejos que sus contrapartes mejor acomodadas. Este retroceso estructural requiere de esfuerzos adicionales para poder compensar esta pérdida, o al menos una pausa en la lucha contra estos vicios económicos. Lo cierto es que lo que se está haciendo actualmente no es suficiente. Bien sea por una contracción general de las capacidades globales para atender a los sectores más vulnerables, o incluso por un cambio en la mentalidad en un ciclo donde priman identidades egoístas o visiones políticas prácticamente eugenistas que dejan de lado la idea de cooperación social de velar por sus congéneres, aunque estos sean sus compatriotas. En este sentido, el retroceso será un problema cuyo impacto tiene que seguir siendo medido en el mediano y largo plazo.

El problema de la desigualdad también se hace vigente en el cálculo que los ciudadanos de ALC hacen al momento para determinar si su país de origen, donde cuentan con sus redes de apoyo, derechos como ciudadanos (al menos en el papel), así como el sentido de pertenencia de la nacionalidad (fluctuante), es suficiente como para albergarlos. Lamentablemente, la realidad es que mucha gente en la región no considera a su país como un lugar apto para hacer su vida. En consecuencia, la migración, o al menos la aspiración de migrar, se vuelven una realidad vigente para amplios sectores, incluso pertenecientes a las élites. Como destinos habituales está el norte global, principalmente Estados Unidos, pero también existen aquellos que migran intrarregionalmente.

Un factor importante para destacar sobre la región es que la economía de ALC está potenciada por sus migrantes que envían remesas de regreso a sus países, en muchos casos llegando a representar un porcentaje relevante del PIB nacional. Como lo indica la Tabla 4, en países como Honduras, El Salva-

dor, Jamaica, Nicaragua y Guatemala, las remesas llegan a montos que representan al menos una quinta o cuarta parte del total de su PIB. En otros casos, aunque el aporte es menor, las remesas no dejan de ser equivalentes a toda una industria productiva que nutre la economía de sus países.

Tabla 4

Contribución de remesas en relación con el PIB de países de América Latina

Nº	País	Porcentaje remesas en relación con el PIB
1	Honduras	28,8
2	El Salvador	26,7
3	Jamaica	25,6
4	Nicaragua	22,2
5	Guatemala	20
6	Haití	15,9
7	República Dominicana	10,3
8	Guyana	6,8
9	Venezuela	5,3
10	Surinam	4,9
11	México	4,6
12	Ecuador	4,2
13	Bolivia	3,5
14	Colombia	2,8
15	Costa Rica	1
16	Perú	1,7
17	Paraguay	1,3
18	Trinidad y Tobago	1
19	Panamá	0,9
20	Argentina	0,2
21	Uruguay	0,2

Nota: Adaptado de Arévalo, 2023.

Solo entre los diez Estados que perciben más remesas en la región se habla del ingreso de más de 131.000 millones de dólares, aunque México es el país con más ingresos en este rubro con cerca de 59.497 millones de dólares de remesas en 2022 (Guevara, 2023). En cualquier caso, el gran volumen de ingresos desde el exterior es un factor para considerar de forma permanente en los análisis sobre la región. Entre los errores de la agenda política regional ha sido el desconocimiento a la naturaleza migratoria de sus comunidades. Por tal razón, la política pública en este ámbito sigue siendo deficiente, la planificación estratégica tiende a ignorar a la cuestión migratoria hasta que existe una crisis o asume posturas traídas desde otras realidades y latitudes, y persisten dema-

siados rasgos de xenofobia presentes en el discurso público, que incluso llegan a traducirse en actos de violencia.

LAC es una región de migrantes, su mestizaje no solo es producto de la colonización europea de los siglos XVI en adelante, sino también la llegada de la población negra, traída forzosamente de África, así como de los desplazamientos de las comunidades nativas dentro de los nuevos Estados construidos en el siglo XIX, y la llegada de nuevos migrantes europeos, e incluso asiáticos, durante el siglo XX⁴. En general, América es una de las pruebas más claras de que el ser humano es una especie migratoria. A diferencia de otros animales que son incapaces de adaptarse a nuevos climas o biomas, y se ven condenados a la extinción cuando su entorno cambia o existe demasiada presión demográfica, el *Homo Sapiens* es capaz de asumir el riesgo de abandonar su territorio y buscar oportunidades incluso en espacios con culturas, entornos y realidades totalmente ajenas a sí mismo.

La insatisfacción con la situación nacional es una realidad vigente en varios de los países de ALC. Para muchos sectores de la población el “*American dream*” sigue siendo una realidad vigente en su imaginario. El poder del aparato cultural estadounidense forma parte del entramado cultural de muchos estratos de la región. Desde una visión aspiracionista, en la que se anhela replicar la prosperidad estadounidense, replicada en la copia a los diseños arquitectónicos (muchas veces de mala calidad) o los entramados de los barrios privados de las principales ciudades de la región; pasando por el romanticismo generado por marcas queridas de caricaturas y películas de las grandes casas productoras como Disney o Warner Brothers. Esto también se ve expresado en el más burdo de los consumismos pagando los productos de Apple con sobreprecio, alegrarse por la llegada de franquicias como Starbucks como si fuese una victoria nacional, o pedir envíos de productos de consumo básico desde Estados Unidos, en lugar de acceder a productos locales.

Paralelamente, para algunos su realidad nacional también los rebasa y terminan viendo en los Estados Unidos como la única oportunidad de salir adelante. El efecto es tal que, en países como Perú, Nicaragua, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Honduras, más de 4 de cada 10 personas están dispuestas a emigrar, y no muy atrás están Guatemala, Venezuela y El Salvador, con 3 de cada 10 (CID Gallup, 2023a). Aunque países europeos o en otras latitudes pueden estar en agenda, Estados Unidos tiende a ser el destino predilecto. Como se verá más adelante, este flujo tiene un impacto relevante a

⁴ Incluso se puede hacer mención que la llegada del *homo sapiens* a América fue un ciclo permanente de olas migratorias que, a través de miles de años, fueron colonizando el continente.

nivel cultural, tanto para los Estados Unidos como para la misma región. Más allá de esto, lo cierto es que las brechas económicas (sumadas a factores de inseguridad asociados a estas brechas) hacen de la migración una condición necesaria para la supervivencia y para el acceso a una calidad de vida digna, tanto para emigrantes, como para sus familias que se quedan en sus países de origen.

La urgencia por buscar mejores condiciones de vida hace que cientos de miles de personas se expongan a maltrato, tanto a la potencial deportación y explotación en sus países de origen, así como al riesgo de emigrar por zonas tan peligrosas como el Tapón del Darién, o a las redes de trata de personas, la cooptación de narcoguerrillas y la estigmatización xenófoba de las comunidades de acogida o de los países de paso. El 2023 fue un año particularmente difícil con más de medio millón (casi imposible de saber a ciencia cierta) de personas atravesando una de las regiones más aisladas del mundo como lo es el Tapón del Darién (Rueda, 2023). No todos llegan a su destino, varias vidas se pierden en el camino, otros cumplen su sueño y alcanzan los Estados Unidos, aunque al menos 200.000 personas fueron detenidas solo hasta septiembre de 2023 (Alvarez, 2023), incluso ante las deportaciones, miles de personas vuelven a intentar llegar a su destino soñado. Estas historias, cargadas de dramas y esperanzas son consecuencia de economías nacionales incapaces de satisfacer a las necesidades de su gente.

La desigualdad estructural de ALC también responde a factores de índole sociológica. Por un lado, las mujeres siguen siendo afectadas por el machismo. Las mujeres tienden a verse empujadas a la vida doméstica, y se mantienen alejadas de carreras técnicas (por lo tanto, también están apartadas de los mejores salarios) (Caparrós, 2021; CEPAL, 2022a). Es importante destacar que este machismo no solo es impuesto por los hombres, sino que en muchos casos es perpetuado por mujeres que se benefician o se han adaptado a la mentalidad que perpetúa los estigmas y vicios de este vicio cultural. Aunque existen avances en la materia, y la agenda de la mujer está cada vez más presente en debate público, se debe señalar que las resistencias culturales todavía impactan de forma permanente en la lucha contra la desigualdad.

Por otro lado, en la región también se viven desigualdades generacionales. De acuerdo con uno de los estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “un 41% de los jóvenes en la región se dedica exclusivamente al estudio, un 21% solo trabaja, un 17% realiza ambas actividades y un 21% no

estudia, se capacita o trabaja” (Novella et al., 2018, p. 22). Este último grupo considerado popularmente como los “nini” se enfrenta a entornos de mayor inestabilidad económica, ejercen presión adicional a sus familias y a los sistemas estatales, y son potenciales objetivos de la economía informal, o peor aún de la economía criminal. La discusión sobre estos segmentos poblacionales tiende a ser genérica; se suele hablar de “aumentar cupos en universidades” o “incentivar el empleo joven”, pero con salvedades, la mayoría de países parece no saber qué ofrecerles a sus jóvenes más vulnerables.

El estudio del BID también revela que las mujeres jóvenes se ven más afectadas de la ausencia de estudio y trabajo, con al menos un 27% de las jóvenes que no logran participar activamente en la vida económica (Novella et al., 2018). Y aunque estos problemas varían de país a país, lo cierto es que los desafíos para alcanzar la equidad entre sexos siguen siendo una barrera constante para el desarrollo de la región y el bienestar de la población. Sobre todo, cuando se lo piensa desde una perspectiva de realización plena de capacidades y expectativas de vida. Los estigmas sobre la maternidad, personalidad, proyección profesional, anclados a la cultura machista también inciden de forma negativa en este escenario

Otra de las agendas que no debe de ser dejada de lado en la discusión es la de los primeros años de vida, a pesar de que los esfuerzos para eliminar problemas como la desnutrición infantil han sido importantes, logrando hitos como la reducción regional del 16,7% al 9% de este problema entre 2000 y 2018 (Suárez, 2020). Como se mencionaba previamente, este tipo de problemas dificulta la capacidad del individuo y, por lo tanto, de las comunidades. Mientras que “un estado nutricional adecuado, acompañado de estimulación temprana y cuidados apropiados, garantiza que los niños y niñas alcancen su potencial de crecimiento físico y desarrollo intelectual y cognitivo, dimensiones fundamentales para su desarrollo económico y humano en la edad adulta” (Suárez, 2020), el escenario de desnutrición está acompañado de un peor desempeño en el espacio educativo, el desarrollo de habilidades sociales, y por lo tanto, la inserción laboral y económica en el futuro.

El problema para ALC es grave, pues alrededor de 10 millones de niños y niñas padecen de desnutrición (Unicef, 2023), bien sea por no comer lo suficiente o por una mala alimentación. Repartidos alrededor de la región, aquellos que no se vean afectados por la enfermedad u otros males relacionados al origen de su desnutrición (como entornos de violencia o falta de acceso a otros

medios de vida) tendrán una adultez más compleja (CEPAL-Unicef, 2010). En este sentido, mientras no se erradique este problema, varias condiciones del llamado “efecto vecindario” pueden seguir afectando a la región, como los son el “bajo rendimiento y el abandono escolar, el desempleo y el subempleo, la fecundidad adolescente, la violencia y el crimen” (CEPAL-Unicef, 2010, p. 118-119).

Ahora bien, parte de la cuestión radica en que se tiende a romantizar la infancia e ignorar a las personas que pasan a la adultez, pero que en su niñez sufrieron privaciones y abandono. Una de las aproximaciones más comunes es la protección a los menores de edad hasta llegar a los 18 años, incluso cuando el cerebro aún no está plenamente desarrollado (Garrido, 2023), y a partir de ese punto se espera que exista una total independencia. Al adulto se le exige hacerse cargo, casi como si la mayoría de edad implicase una transición mágica en que el ciudadano se manifiesta en cuerpo presente. Esto ignora por completo los efectos persistentes, insidiosos, y de largo plazo que tienen la pobreza y la falta de alimentación en la infancia, el daño en el proceso de formación psicológica, y el impacto negativo en las dinámicas sociales entre el individuo y su comunidad. En más de un sentido, se genera una situación en la que la víctima de las privaciones asume una posición de victimario, favoreciendo a la aparición de la violencia contra su propio entorno.

Esta no es una conclusión aislada. La visión general en la academia, aunque con sus matices, es que las regiones con mayor desigualdad suelen tener niveles de crimen e inseguridad más altos (Fajnzylber, Lederman, y Loayza, 2002; Wilkinson, 2008; Ellis, Beaver y Wright, 2009; Coccia, 2018). En la misma lógica, la pobreza es otro de los factores detonantes, a pesar de la evidencia con esta condición también es mixta (Ellis, Beaver y Wright, 2009). Ambos fenómenos, particularmente insidiosos en ALC, como se veía previamente, contribuyen entonces a que la inseguridad se mantenga prevalente y el desarrollo resulte esquivo. El tener segmentos poblacionales que no se desarrollen a plenitud no solo resulta éticamente aberrante, sino que también obliga a los Estados a destinar recursos y esfuerzos adicionales a programas de seguridad interna, que países con menor desigualdad y pobreza pueden abandonar paulatina y parcialmente.

El elemento de la inseguridad será abordado a mayor profundidad en el tercer capítulo de este libro. Sin embargo, vale la pena tomar en cuenta desde este punto que uno de los núcleos fundamentales de las tendencias de crimen

y violencia en ALC está atado a las realidades expuestas en este capítulo. Parte fundamental del análisis presentado hasta el momento es que las consecuencias de seguir manteniendo un modelo disfuncional en el que pocos segmentos de la población concentren la mayor parte de la riqueza tiene consecuencias severas en la capacidad real de los países de la región en salir de la etiqueta del “en vías de desarrollo”. En términos ideológicos, el problema también radica en que esas élites no tienen un compromiso nacional, dado que prefieren proteger su patrimonio personal o familiar, antes que asegurar un cambio en las condiciones que desde su origen provocan el malestar, la inestabilidad y la inseguridad (incluso en detrimento propio).

En este escenario nuevamente es necesario lanzar anclas hacia el pasado formativo de los Estados de la región. Su proceso constitutivo difiere del caso europeo, en el que las guerras fueron dando forma no solo a las fronteras, sino incluso a las mismas identidades nacionales, en el caso de ALC (obviando las realidades del Caribe), los Estados han sido contruidos en gran parte por las élites locales y sus intereses comerciales aupados por potencias extrarregionales que demandaban materia prima y condicionaron a los nuevos Estados de la región a través de deuda externa (Mann, 2023). La guerra interestatal ha sido comparativamente escasa en el continente americano. Como consecuencia de ello, la región construyó Estados débiles, guiados por el comercio, con una tendencia a la liberalización y desregularización (en varios ciclos), como se planteaba en párrafos anteriores, pero se debe señalar que además se establecieron modelos con estructuras fiscales que han demostrado ser incapaces de satisfacer las necesidades de sus poblaciones (con ciertas excepciones en Chile, Costa Rica y Uruguay) (Mazzuca, 2021).

Esta herencia permanece vigente hasta la actualidad donde, tal y como lo demuestra la Tabla 5, la estructura fiscal de la región asigna responsabilidades de forma desproporcionada hacia los consumidores, recolectando un 48% del total de tributos al consumo, ya sea general o específico, frente al 32% de la OECD. Paralelamente, en la región se recoge apenas el 26% a través de impuesto a la renta, frente al 33% de la OECD, así como un 4% en impuestos a la propiedad frente al 6% de la OECD. Finalmente, solo el 18% de lo recolectado surge de las contribuciones a la seguridad social, frente a un 26% en el caso de los países más desarrollados. Aunque esta cifra corresponde a una media y existen países que se salen de estos ejes, lo cierto es que estos valores llegan a explicar una parte de los problemas estructurales de las falencias económicas en la región.

Tabla 5

Porcentaje de ingresos fiscales sobre la recaudación total

Estructura fiscal (%)		
Tipo de impuesto	OECD	LAC
Consumo general o específico	32	48
Renta de particulares y empresas	33	26
Propiedad	6	4
Contribuciones a la seguridad social	26	18
Otros	3	4

Nota: Adaptado de González, 2023.

En esta misma línea, también vale la pena evaluar al ingreso fiscal como fuente del PIB. Tal y como lo señala la Tabla 6, la gran mayoría de países de la región, con excepción de Cuba y Barbados, están (muy) por debajo del promedio de los países de la OECD en términos de la importancia que tiene la tributación en la economía nacional. Es debatible si esto corresponde a la capacidad productiva que el sistema estatal y las condiciones geoestratégicas le permiten al sector privado, o si es un error de aproximación ideológica que establece las tasas de tributación. También es necesario agregar el factor de la informalidad y el desempleo como factores que evitan que exista un modelo donde pueda ser el ingreso fiscal el que cubra una parte significativa de los recursos del Estado. No obstante, si se analizan las tendencias de la región, con la excepción de Chile, los países que suelen entenderse como referentes de calidad de vida en ALC están por encima del promedio regional de ingresos fiscales.

Tabla 6

Tamaño de la base de ingresos

País	Ingresos fiscales como % del PIB
Cuba	37.5
Barbados	35.2
Promedio OECD	34.1
Brasil	31.6
Argentina	29.4
Jamaica	27.7

Uruguay	26.6
Belice	26.1
Nicaragua	25.4
Costa Rica	22.9
Bolivia	22.4
El Salvador	21.9
Promedio ALC	28.4
Guyana	21.4
Trinidad y Tobago	21.1
Chile	19.3
Honduras	19.2
Ecuador	19.1
Colombia	18.7
México	17.9
Perú	15.2
Venezuela	14.4
Panamá	13.7
Paraguay	13.4
República Dominicana	12.6
Guatemala	12.4
Haití	n/d
Surinam	n/d

Nota: Adaptado de Vulnerability Atlas, 2023b; OECD, 2023b

En este sentido, la región demuestra tener un problema en la forma en que funciona la tributación. El sistema fiscal de ALC tiende a ser regresivo y propenso a la evasión, sus administraciones suelen ser débiles y propensas a la corrupción, esto contribuye a que existan bajos niveles de recaudación, lo que a su vez genera un círculo vicioso (Corbacho, Cibils y Lora, 2013). La solución probablemente radica en mejorar los esquemas de progresividad, es decir, quien tiene más, debe pagar más. No obstante, esto implica un cambio cultural, pues implica que las élites adquieran un compromiso en el que sacrifiquen parte de su riqueza e ingreso a favor de una mejora en las condiciones generales del resto de la población y, en consecuencia, de sus países.

Ahora bien, que un cierto formato de tributación funcione en los países industrializados no significa per se que es el modelo que va a funcionar en el resto de países. Sobre todo, cuando los niveles de desarrollo económico y las capacidades productivas no son semejantes. Lo que sí se puede cuestionar es

la perpetuación de esquemas que demuestran no ser funcionales y no tratar de aplicar los modelos que han mostrado prosperidad. De forma no tan curiosa, en lugar de apoyar una mayor responsabilidad fiscal, las élites regionales favorecen a que se cambie el modelo hacia el otro polo, afirmando que con una baja de tributos van a tener mayor posibilidad de invertir y contratar a más personas, siguiendo un modelo “reaganista” de economía en cascada.

El problema resulta ser que este esquema opera más en lógicas de servicio a los intereses del norte global que a los Estados en desarrollo. Como aclaración vale recalcar que no se plantea que el modelo liberal no genera riqueza, Chile o Panamá son ejemplos perfectos de ello. Sin embargo, y como lo revelan las cifras de este capítulo y las reflexiones del resto de este texto, se debe destacar que este modelo no es eficiente al momento de distribuir esa riqueza, y en varios sentidos depende de que este objetivo no se cumpla (para perpetuar el esquema productivo). En este sentido, varios males crónicos de lo que se atraviesa en la región están ligados a la aplicación de esta receta que beneficia ampliamente a pocos y deja en pésimas condiciones a otros.

Por otro lado, también es necesario aclarar que esta no es una defensa a la aplicación de un modelo de corte comunista o socialista. De la misma manera, la evidencia ha demostrado que los países que han recurrido a estas prácticas no han logrado alcanzar la prosperidad. Sus defensores podrán argumentar que esto se debe a la intervención insidiosa de Estados Unidos, el cual, a través de sanciones y bloqueos económicos, e incluso intervención política y militar, han ejercido presión para que los gobiernos de izquierda fracasen. No obstante, también es necesario admitir que las voces de millones de personas insatisfechas con los resultados de Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros, no pueden ser ignoradas o simplemente delegadas a los errores de Washington D.C.

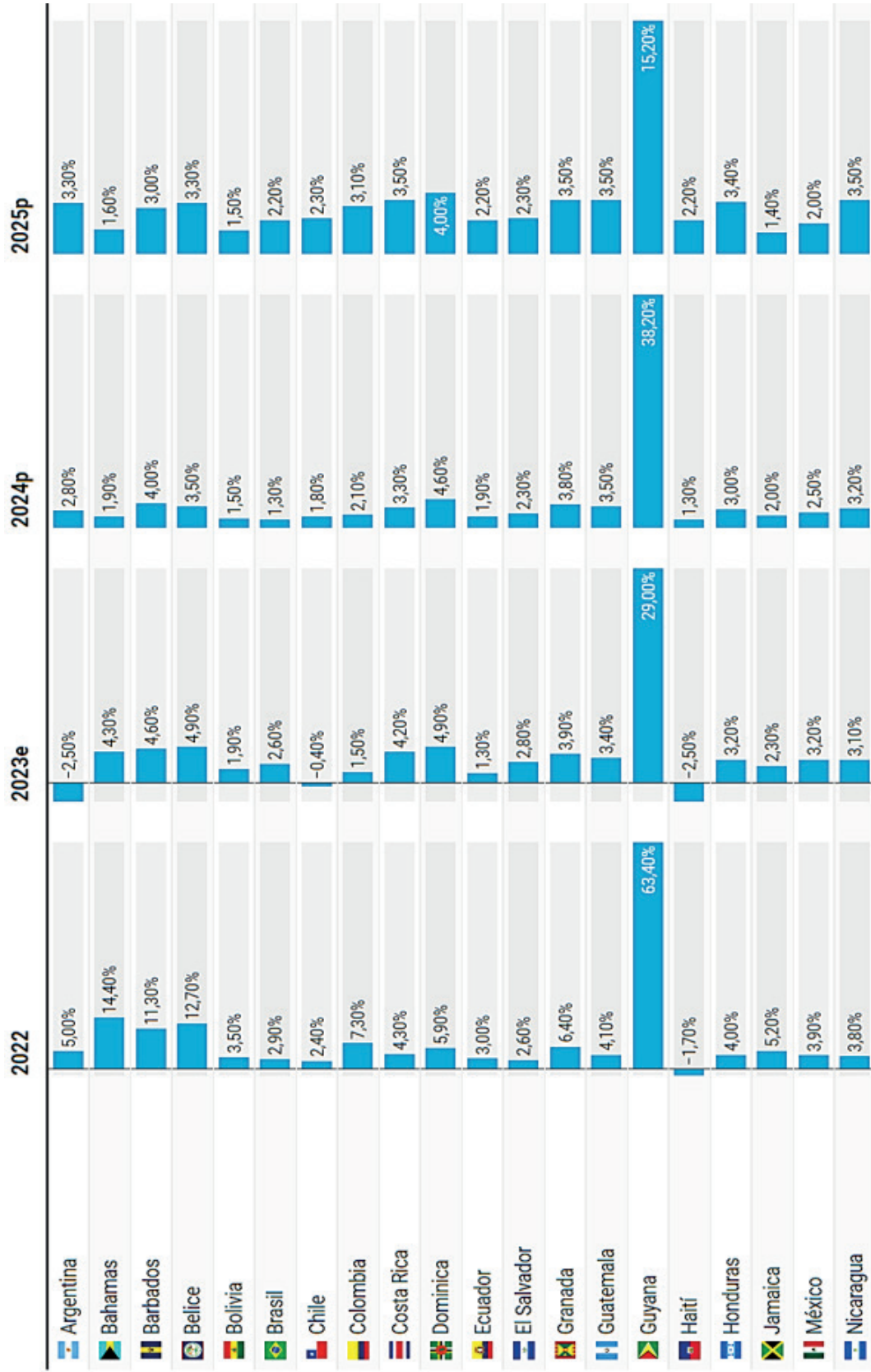
Poniendo temporalmente en pausa la discusión política, que será abordada a mayor detalle en el siguiente capítulo, vale la pena destacar que el factor de desigualdad en ALC hace muy complejo llegar a conclusiones generales, no solo entre Estados, sino en general dentro de los Estados, además de la ya problemática recolección de datos (Alvaredo et al., 2023). Si bien es cierto, cifras como el PIB y sus variantes, así como índices generales como el índice de Gini, dan un pantallazo general sobre el estado de la economía, lo cierto es que deja vacíos importantes sobre la calidad de la prosperidad general. En consecuencia, los datos tienen que ser contrastados con la realidad palpable, o al menos la percepción que tiene la población de esta. Un proxy significativo es el nivel de satisfacción que tiene la población con sus líderes y sistemas políticos.

En los últimos años, el PIB sigue creciendo (después del período de pandemia y los primeros meses pospandemia), tal y como lo proyecta el Banco Mundial (ver Figura 7). Sin embargo, la comunidad de ALC no refleja estar satisfecha con el nivel de vida en sus países y el cuestionamiento a los líderes políticos es cada vez mayor. Cualquiera que esté pendiente de noticieros y redes sociales estará al tanto de la permanente decepción y decepción con la forma en que sus países parecerían estar avanzando. Desde la inflación, a la inseguridad, a la oposición política, entre la que se mezcla el malestar propio de la vida diaria, como el agotamiento laboral, los problemas amorosos, la derrota del equipo de fútbol favorito, o el mal clima, parecen hacer ver a la región en uno de sus peores momentos.

Lo “curioso” es que, como lo ha reflejado esta sección del libro, en teoría las cosas estarían mejorando, al menos en términos de producción económica. Análisis como el Índice global de la felicidad, que analiza la satisfacción de los ciudadanos del mundo en función de su calidad de vida y la percepción de su entorno, no encuentran variaciones significativas en la región en los últimos años, incluso después de la pandemia (Helliwell et al., 2023). A pesar de esto, existe un reflejo de que “las cosas no van bien” que merece ser analizado en búsqueda de respuestas. Uno de los aspectos que tendrían que rescatarse entonces es que existen al menos dos segmentos: uno satisfecho con la situación actual y otro inconforme. La desigualdad se hace presente hasta en estos aspectos. De hecho, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Jamaica, El Salvador, Colombia y Venezuela están a la cabeza en términos de la brecha más amplia entre la mitad más feliz y la menos feliz del índice global de la felicidad (Helliwell et al., 2023).

Figura 7

Proyecciones de crecimiento del PIB de ALC (2022-2025)



Nota: Tomado de Banco Mundial, 2023b

A pesar del crecimiento económico, en términos de PIB, uno de los reflejos en que la situación no termina de ser del agrado de la población está en el ámbito político. El péndulo político parece oscilar de manera constante en la región y la política tradicional se ha visto golpeada por fuerzas disruptivas, aunque prácticamente tampoco han resultado exitosas en cambiar la perspectiva de satisfacción ciudadana. En este sentido, el siguiente capítulo evalúa a detalle el deterioro de la conformidad con el modelo democrático. De la misma manera, se presenta información relevante a actores disruptivos en el sistema político que podrían estar contribuyendo de forma nociva a la calidad política de la región, sacando provecho del descontento popular en beneficio de agendas particulares e incluso extrarregionales, al debilitar al aparato estatal.

Como conclusiones para este apartado se debe señalar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad tiene que ser una agenda que no pierda prioridad en la región. Ahora bien, si es que se superan los aspectos de pobreza extrema, enhorabuena, pero la lucha no habrá terminado, de inmediato la agenda deberá ser los siguientes niveles de la pobreza general y los aspectos multidimensionales, e incluso cuando esto se deje atrás, la ambición de los liderazgos debería ser repensar lo que se entiende por pobreza para empezar a trabajar en nuevas formas de asegurar la plena satisfacción de vida de su población.

La falta de alfabetización digital, la pobre educación financiera, la desinformación, las brechas tecnológicas y los esquemas de polarización entorpecen la capacidad real de tomar acciones concretas para mejorar la calidad de vida de la población. De forma adicional, “la escasa capacidad del Estado es una de las principales causas de las bajas puntuaciones de la región en relación con el funcionamiento del gobierno y la cultura política” (EIU, 2023, p. 43).

De esta manera, a pesar de los avances en la mejora de las condiciones económicas registrados en los últimos años, el malestar se extiende y se profundiza en todos los segmentos poblacionales (con cierto énfasis en los sectores menos favorecidos). Esto deviene en la extensión de la frustración y el malestar sistémico que, a su vez, se manifiesta en formas de inestabilidad, movilización popular e incluso en muestras de violencia. En este sentido, los siguientes capítulos de este texto abordan varios de los retos que enfrenta la región, desde lo político y desde la seguridad. Al igual que en los aspectos económicos abordados en esta sección, se debe destacar la heterogeneidad y variaciones entre países, pero también la transversalización de problemáticas comunes que afectan prácticamente a toda la región de forma crónica.

Capítulo II: Inconformidad sistémica y sus consecuencias políticas

La debilidad de los Estados en ALC es perceptible en muchos niveles. Nuevamente existen algunas excepciones: Chile, Costa Rica y Uruguay son casos particulares de éxito, con sus propias características históricas y dinámicas atípicas frente al resto de países de la región. Brasil y México, debido a su enorme volumen territorial han logrado desafiar sus propias debilidades y posicionarse incluso entre los países más prósperos del mundo, desde lo nominal. Argentina y Venezuela, previo a sus respectivas crisis, solían ser tomados como ejemplos durante el siglo pasado. También hay que destacar el caso extremo de Haití, que lamentablemente es el ejemplo de lo que no se debe ser, y que incluso llega a sobrerrepresentar la imagen de un Estado débil.

Haití es, sin lugar a duda, la referencia de a dónde no llegar. Envuelto en la máxima expresión de pobreza, corrupción y pérdida de control estatal, Haití sirve incluso como chivo expiatorio para decir “aún no estamos tan mal”. Aunque en otros casos también es usado irónicamente para señalar los momentos en los que se empieza a perder la esperanza cuando se escucha “ya somos Haití” o “estamos peor que Haití”. Afectado por los desastres y la limitación de recursos naturales Haití también enfrenta condiciones de baja capacidad de sostenibilidad y sustentabilidad, siendo un Estado particularmente frágil. En su propia crisis permanente, Haití también es un caso de fracaso colectivo en el continente, en el que no ha existido una acción organizada para poder rescatar a su población de la miseria, a pesar de ocasionales esfuerzos de caridad en los peores momentos de la primera nación libre del continente.

Más allá de estos casos “excepcionales”, lo cierto es que ALC se suele caracterizar por ocupar un permanente espacio en los rangos medios de la escala global en prácticamente la mayoría de índices. A pesar de que en la práctica formal se ha abandonado el uso de las referencias sobre primer mundo o su opuesto tercer mundo, ALC en su mayoría vendría siendo parte de una clase media global. Esta realidad tiende a mantener a sus países lejos de la toma de decisiones (espacio reservado para el G7 o con suerte al G20) o incluso lejos de la lista de mayor preocupación de la ayuda internacional. Con sus excepciones, como el ya mencionado Haití, Belice, Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua, la mayoría de países han llegado o superado el rango de países de renta media alta (OECD, 2023a). Es así como a ALC ha alcanzado un punto de mayor autonomía y, de cierta manera, más independencia.

A pesar de estos avances, las tendencias en redes sociales, titulares de medios, la variación en el péndulo político y el aumento de movilizaciones sociales de gran escala demuestran que la población no está satisfecha con el nivel alcanzado. Por otro lado, parecen ser muy pocas las expresiones en las que se plantea que el interés de los Estados de ALC es el de ocupar un rol más importante a escala global. Con la excepción de Brasil, y ocasionalmente México, la mayoría de países de la región no se ven dentro del debate para ser voces que participen de la política mundial, más allá de su participación en la ONU y sus conferencias, u ocasionales liderazgos en temas específicos en asuntos como la lucha contra el cambio climático o contra los efectos nocivos del narcotráfico. Es más, en los últimos años se ha visto incluso una mayor participación de los países africanos, en agendas importantes como el establecimiento de un sistema fiscal global, incluso a pesar de la resistencia del norte global (Faes, 2023).

En la región muchas de las demandas sociales de la actualidad giran alrededor de una falta de acceso a mejores servicios del Estado y a bienes de consumo. Como se planteaba en el capítulo anterior, el reclamo es más bien aspiracional. A la comunidad de ALC no le basta con no morir de hambre, ahora demanda por educación de calidad, que le permita acceder a trabajos bien remunerados, donde se respeten horarios y se garantice cobertura social y vacaciones. En caso de enfermar ya no les basta con remedios caseros y paliativos, ahora se demanda atención médica en hospitales bien equipados. De la misma manera, la gente busca seguridad, al aumentar su propiedad también demanda al Estado mayor protección, en ocasiones esto incita a la aceptación de discursos violentos, e incluso radicalismos políticos cercanos a ideas de corrientes ancladas al fascismo.

Por otro lado, las demandas no terminan ahí. Las minorías, tradicionalmente explotadas y apartadas de la toma de decisiones o de las garantías desde el Estado, ahora reclaman por el cumplimiento y la ampliación de derechos. Los movimientos indígenas, feministas, LGBTIQ+, afrodescendientes, entre otros, plantean reclamos que incomodan al statu quo y reclaman por un lugar en la agenda al mismo nivel que los pedidos tradicionales. Este tipo de demandas no solo se traduce en un choque cultural, que amerita su propio nivel de estudio, sino que se vuelve un desafío adicional para los débiles Estados de la región. Si de por sí resultaba difícil satisfacer necesidades básicas de la comunidad en general, los justos reclamos de las minorías, cansadas de ser minimizadas, pueden llegar a volverse en una carga demasiado pesada para un barco que se tambalea entre las olas.

Los debates por el “progresismo”, que en más de una ocasión son consecuencia de la globalización de las causas, con luchas traídas desde Europa o Norteamérica, generan cismas culturales con los sectores tradicionalistas, que ven estos nuevos reclamos como excesivos, innecesarios e incluso amenazantes. Lo cierto es que ALC mantiene gran parte de su aparataje cultural ligado al catolicismo y, en ciertos países, a un creciente segmento protestante, que resultan resistentes a nuevas ideas de corte individualista o progresista. No obstante, al igual que en muchas regiones del mundo, las nuevas generaciones de ALC se encuentran en un proceso de distanciamiento con la religión. Este es un proceso gradual, lo que no significa que todos los segmentos poblacionales están abandonando la religión; sin embargo, lo cierto es que los adultos jóvenes tienden a ser menos religiosos que sus padres (Pew Research Center, 2018).

Esta evolución cultural ha provocado generaciones más tolerantes a las libertades civiles, permitiendo que se debatan y aprueben cuestiones que en el siglo pasado hubiesen sido impensables, como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el derecho al aborto, los derechos ambientales, y la plurinacionalidad. Estos cambios culturales han modificado la política, forzando al cambio del sistema electoral más allá de los partidos tradicionales. La mayoría de países de ALC han adoptado esquemas multipartidistas, ampliando las opciones electorales para los votantes, pero al mismo tiempo volviendo más compleja la gobernanza. De la misma manera, el fenómeno del populismo ha sido un factor significativo para acceder al poder en la región, y parece haberse acoplado como modelo estable para ganar elecciones (Casullo, 2019).

El populismo se alinea con el agotamiento de la política tradicional posdictaduras. Aunque el mérito de regresar a la democracia en las décadas finales del siglo XX es encomiable, lo cierto es que en términos de resultados económicos y sociales las sociedades parecen no percibir los cambios necesarios. Al mismo tiempo, aunque las dictaduras habían cedido, los sectores que las habían apoyado y se habían beneficiado, en su mayoría nunca dejaron el poder. Tal vez los espacios políticos se habían flexibilizado, y la persecución a la izquierda ya no tenía una faceta criminalizadora. Sin embargo, la causa original por la que, en primera instancia, habían surgido grupos radicales que buscaban enfrentar a los gobiernos y sus modelos capitalistas, anclado en la mala distribución de los recursos seguía vigente (en algunos países más que en otros).

En consecuencia, se abrió la puerta para que surja una oleada de gobiernos que reivindicaban una propuesta, en primera instancia, moderada y que con-

fiaba en las elecciones como vía para alcanzar el poder y usarlo en bien del “pueblo”⁵. Se debe señalar que la categoría de pueblo para comienzos del siglo XXI estaba reservada para aquellos segmentos de población vulnerable que había sido oprimida durante décadas o siglos.

Ahora bien, en la mayoría de casos esta aproximación surgió desde lo ideológico y lo político, y la categorización técnica de los segmentos más vulnerables se utilizó desde el aparato burocrático para la asignación de transferencias monetarias, pero no ha quedado claro quién es el “enemigo interno”. De esta manera, se cultivó una visión de lucha de clases sin entender quién era la clase dominante o la clase dominada.

Entre finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI se fortalecieron agendas en las que se reconocían las falencias estructurales de los Estados de ALC. Por un lado, las ideas socialistas dejaron de ser perseguidas de forma violenta y se hicieron con un espacio en la agenda política de varios países de la región (nuevamente no en todos). Por otro lado, los organismos internacionales, desde las Naciones Unidas, pasando por el Banco Mundial, e incluso el FMI, así como los agentes de cooperación internacional vieron que era necesario invertir socialmente desde las bases, sobre todo porque los modelos en cascada, promulgados desde el neoliberalismo, simplemente no funcionaban cómo se había proyectado. La agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se transformó en un ancla para corregir errores, acelerar procesos en beneficio de comunidades más amplias, y también para compensar por los errores de implementación previa. De ahí también que naciera la actual visión de que la ONU o las organizaciones cercanas a su esquema están “contaminadas” por el socialismo o el marxismo, como los voceros del neoconservadurismo intentan promulgar, incluso cuando los máximos financistas de la organización siguen siendo las potencias liberales occidentales.

Por otro lado, el Estado de bienestar europeo se mostró ante el mundo como un caso de éxito notable. A pesar de la brutal destrucción provocada por la Segunda Guerra Mundial, para finales del siglo XX, Europa había logrado recuperarse de forma más que satisfactoria, no solo recuperando su nivel de prosperidad económica, sino que manteniendo su liderazgo global (aunque admitiendo el encabezamiento estadounidense). En este sentido, la idea de contar con un Estado benefactor no parecía descabellada, sobre todo después de los fracasos contundentes del neoliberalismo en los 80, en lo que se ha lle-

⁵ Los gobiernos de Tabaré Vázquez en Uruguay o de Fernando Henrique Cardoso en Brasil pueden ser consideradas como las primeras voces visibles hacia una transición política en la región hacia un modelo lejos de los partidos tradicionales del siglo XX y que admitían una postura más endémica sin caer en un nacionalismo chauvinista.

gado a reconocer como la “década perdida”, y sus coletazos durante los 90, en especial después de percibir los estragos comerciales y económicos de la crisis financiera asiática.

En consecuencia, el siglo XXI vino acompañado de gobiernos que veían en la redistribución de la riqueza como una estrategia necesaria, y que servía para captar votantes fieles. Esto también provocó un proceso de autoidentificación. Los perceptores de bonos, planes, o transferencias del Estado se comenzaron a identificar con ese segmento del pueblo explotado y desplazado de forma directa, cayendo en algunos casos en lo que se entiende como clientelismo. Otros grupos se identificaron con las ideas o fueron sujetos de procesos educativos dirigidos desde el Estado, que en algunos países han sido clasificados como adoctrinamiento. En cualquier caso, incluso personas que no pertenecían al segmento más vulnerable llegaron a identificarse con la lucha por una aparente justicia social. Finalmente, los segmentos de clases medias, medias altas y altas fueron sometidas a un proceso de estigmatización. En algunos casos este proceso fue simbólico, sin embargo, los gobiernos más radicales establecieron esquemas de comunicación que identificaban a aquellos con más recursos como enemigos de la patria. Esto último fue más notable en los casos de Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, o Rafael Correa en Ecuador.

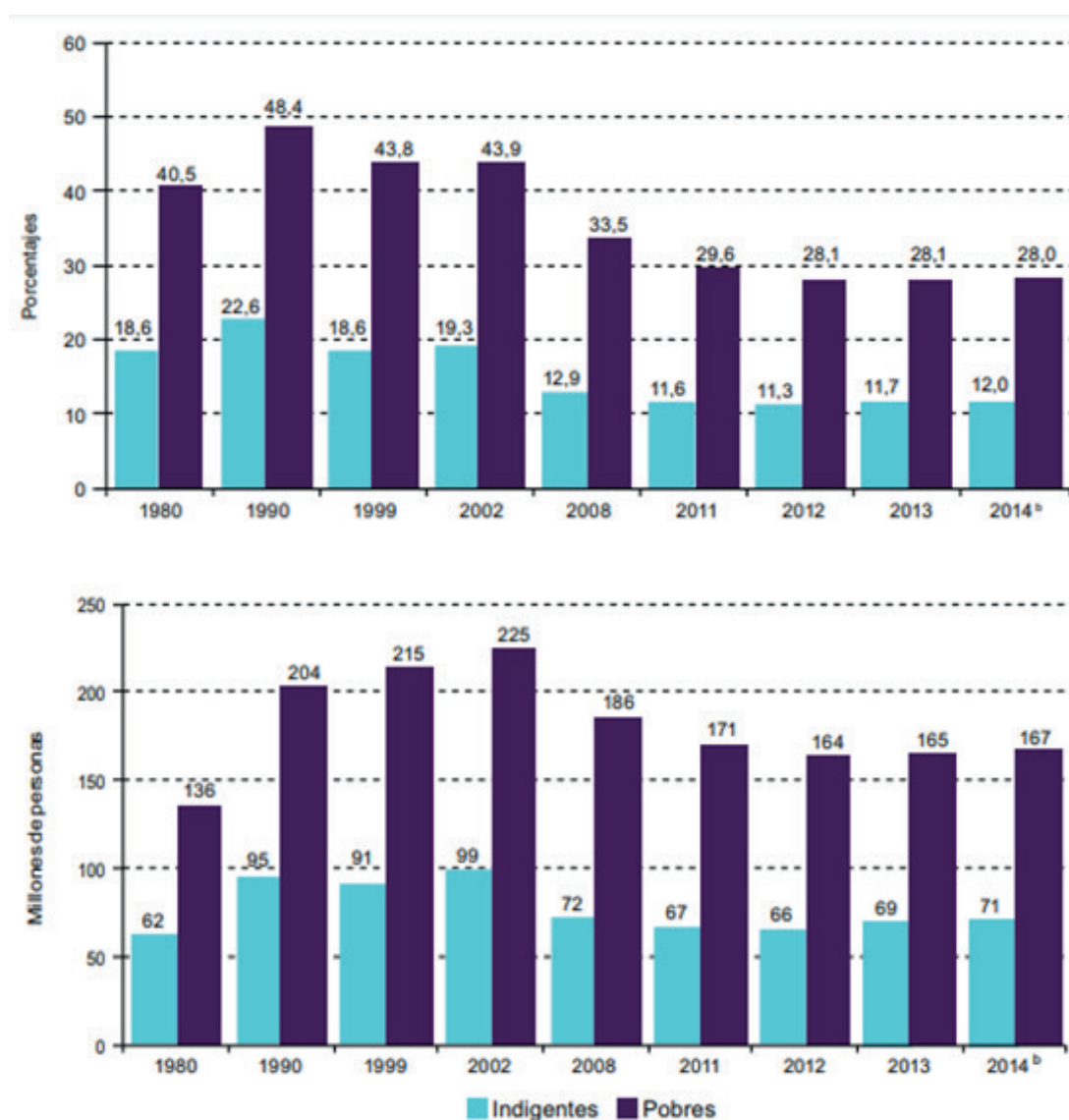
Uno de los problemas que surgió con este tipo de dinámicas políticas es que se consolidó una etapa de significativa polarización. Segmentos enteros de la población regional pasaron a una competencia muy poco saludable a nivel interno, una lógica de “nosotros” contra “ellos”, en la que el enemigo de la nación estaba adentro. Los gobernantes del socialismo del siglo XXI hicieron poco para lidiar con este fenómeno y más bien lo auparon, pues cohesionaba al grupo cercano de votantes y debilitaba a los opositores, que en muchos países se han visto incapaces de articular una respuesta orgánica incluso hasta la primera mitad de la década de 2020. La fractura identitaria se ha vuelto más notable con el paso de los años y, como se verá más adelante, es uno de los núcleos que afecta al sistema político regional.

Por otro lado, durante esta etapa en la que se recurrieron a estrategias de redistribución de la riqueza desde lo fiscal, y desde los programas del Estado, se logró una reducción importante de la pobreza, como se discutía en el capítulo anterior, y también como lo muestra la Figura 8. Entre las décadas de 1980 y 1990 se habían acumulado cantidades significativas de personas que vivían

en la pobreza o directamente la indigencia. La primera década del siglo XXI, liderada en su mayoría por gobiernos del “socialismo del siglo XXI” o afines, consiguió sacar a un segmento considerable de esta condición. Los primeros lustros del siglo XXI estuvieron caracterizados por altas tasas de inversión en programas educativos, construcción de viviendas, hospitales, infraestructura crítica, así como las ya destacadas transferencias monetarias, ya sea a través de formatos condicionales como no condicionales. No obstante, en la década de 2010 este proceso de reducción de la pobreza se estancó.

Figura 8

Evolución de la pobreza y de la indigencia en América Latina, 1980-2014



Nota: Tomado de CEPAL, 2014

Las comunidades que habían dejado atrás la vulnerabilidad llegaron a construir sólidos vínculos con los gobiernos de quienes los habían apoyado a salir adelante. De forma que se ha demostrado una problemática con los años, pues esos vínculos muchas veces se transformaron en un personalismo casi mesiánico, amplios segmentos de la población de la región romantizaron la imagen de líderes como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega o Rafael Correa en esquemas en los que el líder político se transformó en un vocero único, casi incuestionable. Esto despertó un esquema de polarización que se ha anclado en algunos sectores de la sociedad. Incluso con el paso de los años siguen existiendo personas —en ambos espectros de la afinidad— que son incapaces de pensar la política por fuera de estas individualidades, o por lo menos de las fuerzas políticas a las que representan. Esto incurre incluso por fuera de lógicas de una reflectividad política crítica en la que se puedan reconocer los aciertos y los fracasos por igual.

En esta línea, una de las conclusiones que se debe tener sobre este ciclo es que la reducción de la pobreza no solo estuvo ligada al cambio de la aproximación política, a un modelo con mayor voluntad política hacia la redistribución de la riqueza, sino también a la amplia disponibilidad de recursos, subproducto del llamado boom de las commodities (Viveros y Sánchez-Bender, 2016; Balakrishnan y Toscani, 2018). El consumo de materia prima potenciado por el crecimiento de la demanda desde la República Popular China permitió a los gobiernos de ALC aplicar medidas de redistribución rápida, con casos como los de Brasil, Bolivia y Perú, donde parte importante de la inversión se hizo en las localidades donde se extraían los recursos (Balakrishnan y Toscani, 2018). No obstante, cuando la demanda cayó y los precios también, los Estados de ALC se encontraron incapacitados de mantener su estrategia de desarrollo. Es aquí cuando surge no solo un descontento amplio, sino también se evidencian errores en la gestión, sobre todo vinculadas a la corrupción.

Uno de los esquemas más visibles fue el del conglomerado brasileño Odebrecht, dedicado a la construcción, la ingeniería y la industria petroquímica, quien está involucrada en una serie de coimas para obtener contratos con los gobiernos del resto de la región. En uno de los escándalos más resonados de las últimas décadas, en las que incluso llegaron a participar el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el FBI, se encontró que Odebrecht, ahora Novonor, había recurrido a prácticas ilegales sobornando a altos funcionarios de distintos Estados de la región y el mundo, entre los que estaban Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú, Repúbli-

ca Dominicana y Venezuela, con el fin de asegurarse contratos principalmente para construir infraestructura pública (Matute, 2016). En una de las operaciones anticorrupción más grandes de la historia, al menos 91 personas fueron judicializadas debido al pago de coimas por alrededor de 780 millones de dólares (Whitaker, 2022).

Aunque la corrupción en este proceso es innegable, también es importante destacar que este fue un ejercicio de posicionamiento de liderazgo regional (e incluso global) fallido. La idea de asegurarse los contratos implicaba un enriquecimiento ilícito, cuestionable en el marco actual de la ley, pero también era una apuesta que le hubiese representado a Brasil una participación amplia en proyectos estratégicos en un amplio abanico de países. De esta forma, para Estados Unidos, la interrupción de esta red de corrupción no solo fue una cuestión ética, sino también una cuestión estratégica. Al frenar la penetración de la empresa brasileña, que tenía vínculos con el aparato político de su país de origen, también se dio un golpe drástico al imaginario de las sociedades de la región acerca de la transparencia de sus gestiones. El caso “Lava Jato”, por el que incluso se llegó a detener a Lula Da Silva⁶, fue tomado como un punto fuerte de crítica a todos los gobernantes afines al mandatario brasileño, algunos de los cuales también estuvieron conectados con la red de sobornos (BBC Mundo, 2018).

En este entorno, la mayoría de países dieron un “giro a la derecha” abandonando la propuesta del socialismo del siglo XXI e incluso comenzando su propio ciclo de persecución a aquellos que apoyaban esta tendencia o formaron parte de estos gobiernos. Paralelamente se retomaron aproximaciones liberales, cayendo incluso en ciclos neoliberales, donde se contrajo la participación del Estado y se abandonaron los programas sociales y el gasto público. El argumento para ello estaba en que para mantener esta tendencia era necesario contraer deuda nacional y externa, insostenible, después de un ciclo de endeudamiento irresponsable, enriquecimiento ilícito, y a su vez en la inflación que devenía en la emisión de moneda de forma descontrolada. Los dos países más golpeados por la inflación han sido Venezuela y Argentina, mientras que otros Estados han logrado contenerla a través de la reducción del gasto público, estabilización de la productividad, o a través del uso de monedas extranjeras como el dólar, como ha ocurrido en Ecuador, Panamá y El Salvador.

⁶ Lula sería liberado en 2019, después de 580 días en prisión, antes de cumplir la sentencia a 8 años y 10 meses a la que había sido condenado. Esto no fue porque el político brasileño haya sido necesariamente inocente, sino porque no se habían cumplido todas las etapas del juicio, al quedar apelaciones pendientes (Infobae, 2019). En 2021 la sentencia fue anulada pues Lula “fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro que, según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la “competencia jurídica” requerida para analizar esos casos” (BBC News Mundo, 2021b). Posteriormente, en 2023, Lula volvería a asumir la presidencia después de ganar en una dura contienda frente a Jair Bolsonaro en 2022.

Lo cierto es que estos nuevos gobiernos no corrigieron el error de la izquierda y, en lugar de subsanar la polarización rampante, la agravaron, probablemente con Uruguay como la gran excepción visible. Ambos segmentos se equivocaron y prefirieron el rédito político para captar poder, en lugar de establecer acuerdos que les permitan establecer una agenda ante el cambio de la dinámica global. Sumada a la contracción del crecimiento económico, y consecuente empeoramiento de la calidad de vida, esta mala gestión política provocó una pérdida apoyo a la democracia, registrado por encuestadoras y estudios de opinión pública regionales (LAPOP, 2021; EIU, 2023, Corporación Latinobarómetro, 2023; V-Dem Institute 2023). Por un lado, 6 de cada 10 personas en la región prefieren a la democracia y la entienden como mejor forma de gobierno. Sin embargo, este es un equilibrio incómodo, pues no representa una mayoría significativa, y esto facilita el surgimiento de actitudes autoritarias e incluso dictatoriales. Por ejemplo, al menos un tercio de las personas en la región justificarían que fuerzas militares se tomen el poder de su Estado, ya sea por cuestiones ligadas a la inseguridad, a la corrupción u otros fenómenos sociales, o incluso aceptarían una captura del Ejecutivo gobernando sin la participación de un poder legislativo, en violación al principio de división de poderes (LAPOP, 2021).

Por otro lado, las encuestas revelan que la mayoría de la región busca un entorno de orden donde poder desarrollar su vida a plenitud sin que esto signifique necesariamente la tolerancia a la arbitrariedad, aunque varios países empiezan a perder esta resistencia y han comenzado a normalizar el autoritarismo de forma transaccional (Corporación Latinobarómetro, 2023). Existen contrastes y fluctuaciones, con la excepción de Jamaica, Guyana y El Salvador, menos de la mitad de los encuestados en ALC por LAPOP (2021) apoyan a un líder fuerte, aunque incumpla las reglas. No obstante, este es un equilibrio en riesgo, pues en la mayoría de países de la región existe insatisfacción con los resultados de la democracia, solo con Uruguay (82%) y El Salvador (78%) tienen mayorías amplias de satisfacción (LAPOP, 2021). De esta forma la tendencia de apoyo al autoritarismo ha ido al alza, con México, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, como los países que han incrementado sus niveles de tolerancia (Coorporación Latinobarómetro, 2023).

Nuevamente hay que tomar en cuenta que la satisfacción vigente con la democracia es relativa, pues la recuperación tras la pandemia ha sido lenta. Y esto es muy importante, pues para 2021, el 61% de la población en la región sentía que su situación económica había empeorado (LAPOP, 2021). De la mis-

ma manera, en 2021 el PIB per cápita de la región seguía por debajo de los niveles prepandemia, aunque en 2022 se logró una recuperación en V, como lo demuestra la Figura 9, incluso superior a la época antes del COVID-19 en la mayoría de países. No obstante, como se vio en el capítulo anterior, esta recuperación económica no es necesariamente proporcional, y hay segmentos de la población que aún no logran retornar a sus condiciones de vida previas, o peor aún se encuentran con una calidad de vida deteriorada en comparación con su realidad prepandemia.

Figura 9

Evolución del PIB per cápita de ALC



Nota: Tomado de Banco Mundial, 2022.

Aunque esta es una realidad que varía de país a país, lo cierto es que la pandemia ha dejado en evidencia las fracturas estructurales de las sociedades y los Estados de ALC y el mundo; algo que genera insatisfacción y vacíos en la capacidad de los Estados de tomar acciones a favor de su población. Una infraestructura de salud debilitada tanto por la herencia histórica de falta de capacidades, así como la contracción voluntaria por parte de los regímenes conservadores y liberales contribuyeron a que la pandemia de COVID-19 sea particularmente severa para la región. Tal y como lo plantean Cid y Marinho (2022, p. 11):

Junto a una acumulación de desigualdades en salud y a una desigual distribución de los determinantes sociales de la salud, los sistemas de salud

de la región, uno de los principales determinantes sociales de la salud, presentan un conjunto de problemas estructurales, tales como subfinanciamiento crónico, altos niveles de fragmentación y segmentación.

En promedio, 27% del total de muertes por COVID-19 provinieron de ALC cuando su población representa apenas el 8% de la población global (Cid y Marinho, 2022). A pesar de las advertencias de los organismos internacionales, la respuesta del aparato estatal fue débil, incluso negligente. En uno de los casos más lúgubres, el populista conservador Jair Bolsonaro, que presidía sobre Brasil, llegó a burlarse de la enfermedad en varias ocasiones, y a pesar de ser uno de los países más poderosos de la región se negó a tomar medidas de prevención y contención, transformando a Brasil en uno de los países más afectados por la pandemia, provocando e 65 millones de casos y más de 1'600,000 muertes solo hasta marzo de 2022 (Werneck y Guevara-Rosas, 2021; Cid y Marinho, 2022).

La pandemia fue un nuevo ejemplo de lo corrosiva que llega a ser la desigualdad, pues mientras algunos sectores pudieron cumplir a cabalidad los procesos de cuarentena sin preocupación a perder sus ingresos, empleos, o cómo tener comida sobre la mesa, otros segmentos de la población estuvieron obligados a exponerse al contagio, a la acción informal o ilegal para acceder a recursos, a la desnutrición y a la pérdida de su estabilidad emocional. El tono de la comunicación manejado por algunos sectores era que la pandemia afectaba a todos por igual, pues todos estaban en el mismo barco. Sin embargo, un símil más realista es que todos estaban enfrentando la misma tormenta en medio del mar, pero cada uno tenía una embarcación diferente. Mientras los sectores más acomodados podían enfrentar la pandemia con entretenimiento en casa, trabajo digital, salud privada, y con entregas a domicilio, los más vulnerables tuvieron que ver la pérdida de sus opciones laborales o la precarización de sus condiciones, entornos de encierro que afectaron a su salud mental (sin hacer de menos las crisis de otros segmentos), sin contar con acceso a atención psicológica y psiquiátricos, sistemas públicos colapsados, e incluso llegando a depender de donaciones alimenticias.

En esta misma coyuntura, otra de las tendencias generales en la región fue la falta de inversión en medidas de soporte social. En parte por la falta de capacidad económica, de ahorro, y redes de contingencia financiera, pero también motivados por sesgos ideológicos, los gobiernos de ALC se limitaron a ver a sus poblaciones enfermar y perecer, mientras contemplaban cómo el norte

global aplicaba medidas de emergencia económica a través de programas de ayuda económica, condonación o suspensión de intereses y deuda. En países como Ecuador la ausencia del Estado durante la pandemia fue notable y tuvo un impacto en el imaginario de la población que sintió un abandono por parte de sus gobernantes (Camino y Gortaire-Morejón, 2022). Cuando tuvieron que llegar las vacunas el problema lejos de disiparse se hizo más evidente, la desigualdad al acceso de vacunas marcó brechas en los tejidos sociales entre países y dentro de ellos y, es más, perpetuó la pandemia en el marco del surgimiento de nuevas variantes del virus que se multiplicaron debido a la falta de inmunización (Cid y Marinho, 2022).

En términos políticos, el agotamiento social contribuyó a generar un campo fértil para que la izquierda política recupere espacios. No obstante, a diferencia de la primera etapa de gobiernos alineados con el socialismo del siglo XXI, los gobiernos de ALC de la primera mitad de la década de los 2020 no representan una corriente única, ni cuentan con una presencia absoluta en otros poderes del Estado (Gortaire-Morejón et al., 2023). La pérdida de la confianza absoluta, que había sido ganada en la primera década del siglo XXI y que había permitido establecer aplanadoras políticas, se tradujo en la creación de bloques de oposición fuertes y sistemáticos. Esto ha desmentido a aquellos que promovían el temor de una nueva ola de izquierda que “afectaría” a la región. Por otro lado, lo que sí se ha generado es una barrera importante para las agendas de los nuevos gobiernos, que se ven limitados en sus acciones; la caída de Pedro Castillo en Perú, y la oposición que enfrentan Gabriel Boric en Chile o Gustavo Petro en Colombia son prueba de ello.

De forma paralela, el crecimiento de esta insatisfacción también ha favorecido al incremento de segmentos políticos que desconfían del Estado y buscan su reducción. Muchos de ellos han evadido convenientemente los radares de la inteligencia y la observancia de la comunidad internacional (especialmente Estados Unidos), pues aunque su vocería apunta a la contracción e incluso a la desaparición del Estado-nacional, siguen alineados con la agenda capitalista, llegando a un punto radical en este sentido. El anarcocapitalismo ha crecido en América Latina de forma significativa y se ha cubierto de la bandera de un llamado libertarianismo, que se ancla en el término libertad para promover su agenda de desregulación y contracción de lo público.

En términos filosóficos el libertarianismo tiende a conectarse con las reflexiones de Ayn Rand, Robert Nozick, Ludwig von Mises, y más atrás con

las visiones clásicas de John Locke, Adam Smith, David Ricardo y de Frederic Bastiat. Políticamente, el libertarianismo suele replicar las estrategias aplicadas por Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, en las que se contrae la participación del Estado en las relaciones comerciales, aunque suele tener una alta presencia en el ámbito de la seguridad interna y la defensa. En general, desde la parte económica se sigue la corriente de pensamiento de Milton Friedman y Friedrich Hayek, y posteriormente los economistas conocidos como los Chicago Boys, promotores de una visión del capitalismo en el que las relaciones humanas estén ancladas al intercambio comercial, con la menor intervención posible de un aparato estatal, afirmando que esto produce los mejores resultados para el individuo.

No obstante, es importante destacar que esta corriente económica tuvo un romance insano con las dictaduras capitalistas, principalmente la de Augusto Pinochet en Chile, aceptando los abusos del Estado en otros ámbitos, siempre y cuando se permita al mercado un modelo con las menores restricciones posibles (Selwyn, 2015). Por otro lado, Friedman planteaba que la implementación de su propuesta de modelo económico, a través de sus alumnos, que implicaba la aplicación de un tratamiento de choque para privatizar y desregular las relaciones comerciales, permitió la transición de la dictadura militar a un sistema democrático (LibertyPen, 2013; Iber, 2023). En la actualidad, frente a una nueva oleada de libertarios en la región se tiende a ver un fuerte discurso reivindicador de esta y otras dictaduras, sosteniendo que las violaciones a derechos humanos eran necesarias o, por último, propaganda.

Este nuevo ciclo es problemático para la democracia, sobre todo tomando en cuenta que tras la crisis de las décadas de 1980 y 1990, donde se implementaron las medidas del Consenso de Washington, las visiones a favor de las dictaduras capitalistas y una liberalización descontrolada fueron reemplazadas por un movimiento a favor de un respeto irrestricto a la democracia y la búsqueda de un Estado de derecho. Vale destacar que uno de los hitos importantes de la época es que parte de la izquierda latinoamericana rompió con las visiones marxistas y maoístas de lucha armada, aunque los vínculos con algunas agrupaciones guerrilleras (principalmente en Colombia) no se rompieron totalmente. La ola rosa apuntaba a la recuperación, o incluso a la participación del Estado por primera vez, con una visión de derechos de las personas por encima de las agendas del mercado (tanto nacional como internacional).

El crecimiento del libertarianismo en la región está atado a los ya mencionados escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y sobre todo la

pérdida del talante democrático en países como Venezuela y Nicaragua, que entorpecieron esta ola de la izquierda y comenzaron a generar malos resultados económicos. El fin del “boom de las commodities” fomentado por el crecimiento del consumo de la República Popular China afectó a los gobiernos de izquierda que habían aplicado medidas de elevada inversión pública (en muchos casos mero gasto clientelar). La sobreideologización impidió a la mayoría de movimientos progresistas hacer una transición rápida y adoptar una postura más moderada, negándose a asumir una postura autocrítica y denunciar los abusos de los procesos ya autoritarios. Entre los malos resultados y la pérdida de la vocería como fuerza de cambio, la izquierda fue cediendo espacios en la juventud cada vez más desencantada con el sistema

En este escenario, los gobiernos de derecha pudieron retornar al poder en la mayoría de Estados latinoamericanos. Entre los ejemplos notables, Sebastián Piñera, en Chile, y Mauricio Macri, en Argentina, aplicaron estrategias clásicas de tendencia liberal y conservadora, reduciendo la inversión pública y alejándose de procesos latinoamericanistas a favor de objetivos globales. Sin embargo, para algunos segmentos de la región ya no bastaba con una faceta moderada que apuntaba meramente a la prudencia en el gasto fiscal y la estabilidad en las arcas para momentos difíciles de la administración del Estado. Al contrario, algunos gobiernos llegaron con posturas directamente en contra del Estado, entrando directamente al libertarianismo, anclados en ideas de Think Tanks con financiamiento extranjero que promovían las visiones defendidas durante los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los 80 (Rocha, 2019). Anclados en el resentimiento que había generado la mala administración de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, estos nuevos gobiernos se permitieron adoptar posturas radicales y discursos de populismo de derecha, copiando estrategias discursivas de los populismos de izquierda.

Destacan, por ejemplo, el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, que se alineó a las visiones de estos Think Tank y con la administración del también populista de derechas Donald Trump (Rocha, 2019). Bolsonaro se rodeó de un entorno conservador en el apartado social, incluso legitimando a la dictadura militar de entre 1964 y 1985, así como de segmentos liberales y neoliberales que interrumpieron la visión que Lula y posteriormente Dilma Rousseff habían implementado para adoptar un rol de liderazgo en el sur global y volver a un modelo tradicional de inserción en los mercados del norte; y también de segmentos promotores del libertarianismo. Para llegar al poder, originalmente Bolsonaro se ancló al Partido Socialcristiano de Brasil, que previamente había promovido

la campaña de Everaldo Pereira, bajo el lema de “privatizarlo todo”, aunque luego rompería la alianza con este partido (Rocha, 2019).

Bolsonaro pudo conectarse a algunos espacios de juventudes con ideas libertarias que sentían un profundo rechazo por la agenda del progresismo del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño. Es más, muchos de ellos, anclados el Movimento Brasil Livre, fueron incitadores y participes en las manifestaciones a favor del impeachment de Dilma Rousseff tras las revelaciones sobre el caso Lava Jato (Fang, 2017). Este tipo de acciones demostraron una mutación de la derecha tradicional (normalmente ajena a la ocupación de las calles), adoptando estrategias más habituales de la izquierda regional. Y aunque Bolsonaro no fue el líder de estas movilizaciones, a lo largo de su presidencia (y posterior a ella) utilizó esta herramienta de forma habitual, asentando el fenómeno de populismo de derecha que encontró reflejo en otras figuras globales como Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, Viktor Orbán en Hungría o Recep Tayyip Erdoğan en Turquía.

Entre las figuras importantes que jalaron al ultraconservador Bolsonaro a una tendencia ultraliberal en lo económico está uno de sus hijos. Eduardo, diputado por Sao Paulo desde 2015, también se alineó a esta tendencia, llegando a cursar un posgrado en Economía Austríaca ofrecido por el Instituto Mises Brasil (Rocha, 2019). Por otro lado, dentro de su gabinete y como promotor de las visiones de Estado mínimo estuvo Adolfo Sachsida, quien ocupó los cargos de Secretario de Política Económica y Ministro de Minas y Energía, y que llegó a afirmar que entre uno de sus objetivos inconclusos estuvo la privatización de Petrobras, una de las empresas estatales insignia de Brasil (Aepet, 2023). Sachsida también “forjó un grupo de 11 economistas que semanalmente intercambiaban ideas con Bolsonaro” (Rocha, 2019).

Probablemente, la influencia más minarquista, entendiendo como minarquismo a la búsqueda de la reducción del aparato gubernamental en su gabinete, venía de su Ministro de Economía, Paulo Guedes, formado en la Universidad de Chicago. Con este entorno, Bolsonaro emprendió una misión para contraer el aparato público de Brasil, consiguiendo la privatización de Electrobras, alcanzando la segunda privatización más grande de la historia del país al reducir la participación del Estado en esta empresa estratégica (ámbito, 2021; Giuliano, 2022). En esta misma línea, con Guedes se recortaron alrededor de 105,000 puestos de trabajo en las empresas públicas, eliminando un 19% del aparato burocrático en este ámbito, y de 630,700 a 568,400 en el ámbito de ser-

vidores públicos lo que implicó un recorte de un 10% del personal, mientras que la inversión federal se redujo a sus niveles más bajos en 50 años, antes del año de elecciones (Fucs, 2022).

Por otro lado, también se apuntaron a aspectos importantes en el rol de Brasil en el mundo, aplicando formalmente a la OECD, lo que podría ayudar a atraer inversión extranjera reduciendo el llamado “costo brasileño” (Fucs, 2022). Sin embargo, Brasil aún debe cumplir varias condiciones fiscales y ambientales que le impiden por ahora ser miembro pleno de la OEC. Estas barreras también terminaron dificultando que se concrete el acuerdo UE-Mercosur, así como acuerdos con Estados Unidos, Canadá y México (Irajá, 2022). Debe señalarse además que durante este período político Brasil perdió su rol de liderazgo estratégico en la región, sobre todo en Suramérica. En una concepción distinta del mundo, el gobierno de Bolsonaro volvió a apostar por las dinámicas periféricas, como un proveedor del norte global, en lugar de ser una de las cabezas del sur.

Cabe recalcar que muchos de los objetivos de Guedes y Bolsonaro se vieron entorpecidos por la pandemia (Meyerfeld, 2022), a la que Bolsonaro se negó a atender con la responsabilidad que ameritaba, siendo uno de los voceros más grandes del negacionismo del COVID-19. En parte por esto, y también debido a la tensión generada por la contracción del Estado, Bolsonaro perdió las elecciones de 2022, frente al expresidente Lula, que había salido de prisión después de que se determinara que el juez que lo había sentenciado (Sérgio Moro, que incluso fue seleccionado como Ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gabinete de Bolsonaro) no tenía competencia para imputar a Lula Da Silva.

Irajá (2022) sostiene que la falta de éxito de la agenda de Guedes recae en gran parte en Bolsonaro, quien:

Fiel a sus convicciones corporativistas, centralizadoras, populistas y electoralistas, forjadas a lo largo de las décadas en las que formó parte del bajo clero de la Cámara de Diputados, el presidente socavó medidas que, a su juicio, chocaban con sus ideas retrógradas y supuestamente, según su razonamiento, amenazaban su proyecto de reelección.

No obstante, el líder de la ultraderecha brasileña no logró vencer a un Lula que supo aliarse con sectores de la centroderecha. Lejos de aceptar su derrota, Bolsonaro trató de aplicar la estrategia del trumpismo en Estados Unidos, acusando de fraude electoral, incluso antes de que se dieran las elecciones, motivo por el cual fue sancionado por la justicia brasileña, perdiendo sus derechos

políticos por ocho años (Nicas, 2023). Parte del peligro de esta postura estuvo en que el bolsonarismo buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas del Brasil para que se tomaran el poder. En este esquema, la democracia primó, pero ha despertado un peligro latente en una región con un pasado ligado a los golpes de Estado.

Otro de los espacios en los que las voces a favor de una visión anarcocapitalista encontraron puerto fue Ecuador. Empezando a encontrar un patrón, las ideas libertarias han sido promovidas desde Think Tanks con apoyo extranjero. Por un lado, el grupo Libre Razón que ha tomado mucha fuerza en Universidades Privadas de la capital como la Universidad de Las Américas y la Universidad San Francisco de Quito, anclándose en grupos de jóvenes que sirven como agentes replicadores de la iniciativa, muchos de los cuales llegaron a encontrar espacios laborales en el gobierno de Guillermo Lasso. El mismo presidente Lasso ha sido promotor de otro de estos Think Tanks, Ecuador Libre, probablemente el más fuerte al momento de consolidar su gobierno.

Mientras Libre Razón ha sido un grupo más coordinado por jóvenes, cercanos a CREO, movimiento político con el que Guillermo Lasso llegó al poder, varios de los miembros de Ecuador Libre terminaron por integrar el gabinete de gobierno. El mismo exmandatario aparecía como presidente del Think Tank, acompañado en el directorio equipo de las siguientes figuras:

- Aparicio Caicedo, quién fue asignado como asesor presidencial ad honorem, en una incómoda postura en la que no rendía cuentas al electorado, para luego ser contratado como consejero de manera oficial, y posteriormente, salir en medio de escándalos de potencial tráfico de influencias.
- Juan Carlos Holguín, que fungió como Canciller.
- Pablo Arosemena, que sería Gobernador de Guayas, y posteriormente sería Ministro de Economía y Finanzas.
- Ana Balda, que ocupó el cargo de Consejera de Gobierno en la Presidencia de la República.
- Ana Belén Cordero, que fue Asambleísta hasta la “Muerte Cruzada” y luego sería seleccionada como Secretaria Nacional Anticorrupción.
- Eduardo Bonilla, que fue secretario de comunicación de la Presidencia de la República.
- Juan Francisco Núñez, que ocupó el cargo de Gobernador de Manabí.

- Sergio Iannuzzelli, quien fue subsecretario general de Despacho Presidencial.
- Jorge Gallardo, fue seleccionado como delegado de Ecuador frente al FMI.
- Marcos Miranda, que fue Subsecretario General Jurídico de la Presidencia de la República.
- Guillermo Avellán, que ocupó el cargo de Gerente General del Banco Central del Ecuador.
- Francisco Briones, seleccionado como Director del Servicio de Rentas Internas.

El resto de miembros del equipo y del consejo asesor de Ecuador Libre también fueron incorporados al gobierno en diferentes puestos, destacando a figuras como Diego Ordoñez, que renunció a su puesto en la Asamblea Nacional, para ser Asesor de la Presidencia, y posteriormente ser encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de no tener ni experiencia ni educación en la materia. Fabián Pozo que fue Secretario General Jurídico de la Presidencia y que estuvo a la cabeza de varios decretos de estado de excepción con errores legales, y que posteriormente no tendrían efectos reales en la crisis de inseguridad que atravesó el país a lo largo del mandato del presidente Lasso. Bernarda Ordóñez, que fue Secretaria de Derechos Humanos y terminaría renunciando después de varias masacres en las cárceles del país y de que afirmara tener diferencias irreconciliables después de que Guillermo Lasso vetara la ley de interrupción del embarazo.

De manera general la administración de Guillermo Lasso estuvo caracterizada por una serie de errores de gestión, claras muestras de desconocimiento de conceptos básicos de la administración pública, bajos niveles de popularidad (su propia figura como banquero le impedía replicar los ejercicios de populismo de derecha, aunque sus asesores intentaron cambiarle este rostro en TikTok) y pobres resultados en la mayoría de ámbitos. A pesar de que su postura original para llegar al poder replicaba la idea de que su administración lidiaría con la ineficiencia de un “Estado obeso”, lo cierto es que a lo largo de su mandato se demostraría que más bien el Estado ecuatoriano no contaba con capacidades reales para lidiar con sus desafíos estructurales.

En consecuencia, después de lograr gestionar el acceso a vacunas contra el COVID-19 en 2021, que podría ser considerado como una de sus pocas accio-

nes exitosas, el gobierno de Guillermo Lasso se quedó sin piso político para operar e incluso surgió una serie de crisis de gestión en el ámbito de la salud, con escasez de medicinas en hospitales públicos (Primicias, 2022a). También tuvo que lidiar con una incómoda relación con el movimiento indígena, donde se presentaron severas protestas contra el gobierno, prolongando una tensión que venía desde la administración de Lenin Moreno, y que han obligado al Estado a establecer una serie de acuerdos que demandaban la ejecución de presupuestos y cambios en la concepción de la relación entre el Estado y las comunidades indígenas (BBC News Mundo, 2022)⁷.

No obstante, el foco de tensión más severo y con el que la administración de Lasso fue incapaz de dar una respuesta apropiada fue en el ámbito de la seguridad. La administración del presidente ecuatoriano cometió el error de no interpretar bien el riesgo de la violencia que comenzó en los centros de privación de la libertad, que inició en la administración de Lenin Moreno en febrero de 2021, con una serie de levantamientos en Guayaquil, Latacunga y Cuenca, que terminó con la vida de 79 personas privadas de la libertad, muchas de las cuales ni siquiera tenían sentencia ejecutoriada o estaban detenidas por delitos menores (ver Tabla 7), un problema que se extendió a lo largo de los años de mandato de Guillermo Lasso y que se volvió una agenda cotidiana para medios y ciudadanía (Primicias, 2021; La Hora, 2022; GK, 2023). El error más grande del gobierno ecuatoriano en este ámbito estuvo en creer que este tipo de eventos se mantendrían aislados en las cárceles, sin afectar al resto de la ciudadanía.

Tabla 7

Saldo de víctimas en masacres carcelarias en Ecuador

Masacre	Fecha	Cárcel	Ubicación	Víctimas
1	23 de febrero de 2021	Azuay N.º 1 (Turi)	Cuenca	34
		Regional del Guayas	Guayaquil	31
		CPL Cotopaxi	Latacunga	8
		Penitenciaría del Litoral	Guayaquil	6
2	21 de julio de 2021	Penitenciaría del Litoral	Guayaquil	8
		CPL Cotopaxi	Latacunga	19
3	29 de septiembre de 2021	Penitenciaría del Litoral	Guayaquil	119

⁷ Es importante destacar que el movimiento indígena ecuatoriano ha sido un actor político activo desde la década de 1990 y que sus movilizaciones masivas no se han dirigido exclusivamente a estos dos mandatarios. Es más, se debe señalar que el rol del movimiento indígena.

4	12 y 13 de noviembre de 2021	Penitenciaria del Litoral	Guayaquil	68
5	3 de abril de 2022	Azuay N.º 1 (Turi)	Cuenca	20
6	9 de mayo de 2022	Bellavista	Santo Domingo	44
7	18 de julio de 2022	Bellavista	Santo Domingo	12
8	3 de octubre de 2022	CPL Cotopaxi	Latacunga	16
9	5 de octubre de 2022	Penitenciaria del Litoral	Guayaquil	13
10	7 de noviembre de 2022	Cárcel de El Inca	Quito	5
11	18 de noviembre de 2022	Cárcel de El Inca	Quito	10
12	14 de abril de 2023	Penitenciaria del Litoral	Guayaquil	12
13	17 de julio de 2023	Penitenciaria del Litoral	Guayaquil	31
Saldo de víctimas				456

Nota: Adaptado de Primicias, 2022b; infobae, 2023a; GK, 2023. Fecha de corte: septiembre 2023

El problema es que la violencia en las cárceles solo vaticinaba un escenario de caos y violencia territorial, principalmente en las ciudades de la Costa ecuatoriana, pero con una clara incidencia en la estabilidad y seguridad del resto del país. El núcleo de la cuestión es que, en medio de un escenario que demandaba inversión por parte del Estado, las visiones libertarias impidieron al gobierno ecuatoriano reaccionar y atender los vacíos que se habían agravado en términos económicos y sociales de un país con una desigualdad creciente. Aunque se debe admitir un acto de responsabilidad en términos fiscales, debido a que se dedicó a contener el endeudamiento que superaba los límites autoimpuestos por el Estado ecuatoriano, adquirido en parte por la administración de Rafael Correa, lo cierto es que la mala lectura de la coyuntura (y un cierto grado de egolatría) frenó la aplicación de medidas que podrían haber contenido la violencia en el país.

En este sentido, el gobierno de Guillermo Lasso continuó con un modelo donde la inversión pública, sobre todo en infraestructura y ampliación de

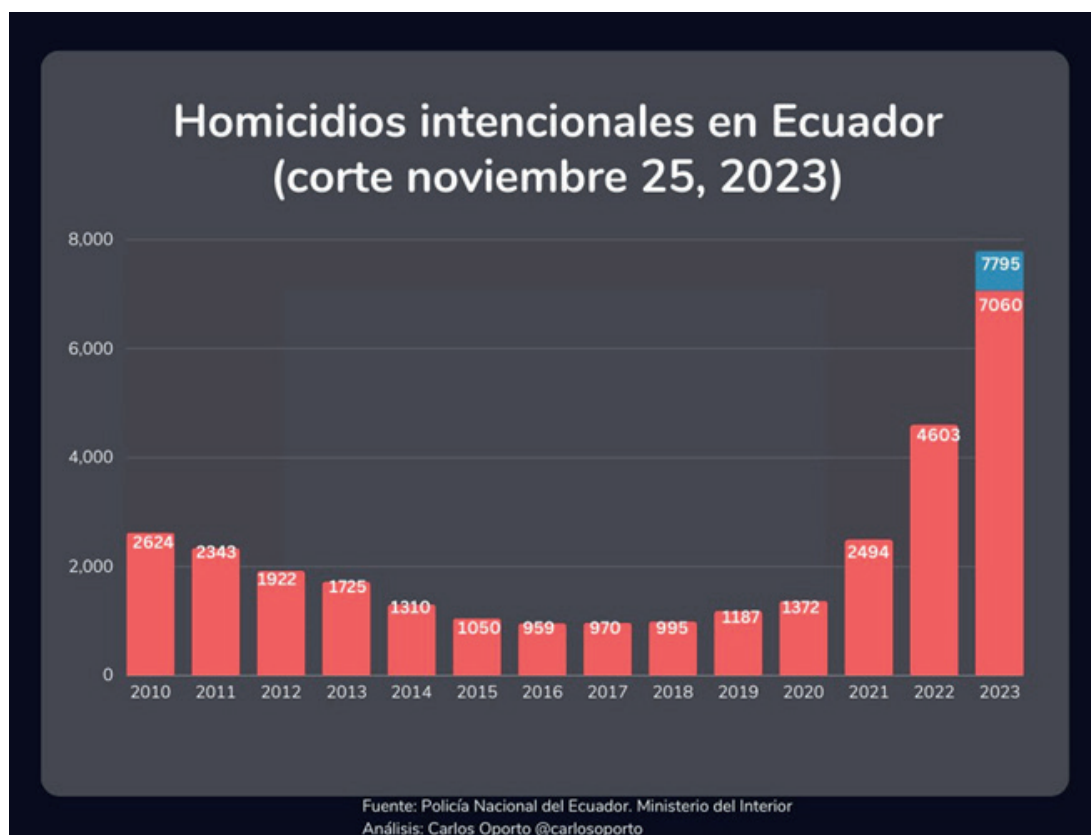
capacidades, solo se ajustó a la inflación, pero dejando vacíos económicos y sociales en espacios tradicionalmente vulnerables, donde el crimen transnacional organizado pudo establecer alianzas con los grupos locales. A través de estos vínculos las prácticas criminales se radicalizaron y el esquema de reclutamiento se “sofisticó” al adquirir herramientas y modelos refinados en Colombia y México. Con ello, el crimen violento, manifestado en el sicariato, los secuestros exprés, asaltos con armas de fuego, saqueos a locales y conjuntos privados, y asesinato incrementaron de forma dramática⁸. El nivel es tal que, solo entre el 24 de mayo de 2021 y el 6 de septiembre de 2023, se registraron 11.189 muertes violentas (Oporto, 2023a).

Lejos de registrarse un cambio en la dinámica de gobierno, la administración de Guillermo Lasso optó por acusar a su oposición de ser la causante de la inestabilidad y buscar la pérdida de su imagen. El Ejecutivo de Lasso rompió los vínculos con la función legislativa, en un modelo que, como mínimo puede interpretarse como falta de experiencia, por no hablar de falta de aptitudes políticas, y sin tratar de reducir sus expectativas, procuró ingresar propuestas de ley que evidentemente no iban a ser aprobadas. Cuando la impopularidad de ambas funciones, enfrascadas en una contienda sin sentido de Estado llegó al punto en el que la Asamblea Nacional estuvo a cerca de conseguir la destitución de Guillermo Lasso a través de un juicio político, que en principio estaba ligado a omisiones para lidiar con un presunto caso de Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), el ejecutivo llamó a Muerte Cruzada (CNN Español, 2023).

Ecuador tuvo que enfrentar entonces un proceso “sui generis” para llamar a elecciones anticipadas; en un entorno donde la violencia ya superó los índices de 2022, como lo indica la Figura 10, pudiendo llegar al menos a los 7795 homicidios intencionales para fines de 2023. El asesinato del candidato presidencial, el exasambleísta Fernando Villavicencio fue una muestra más de que la contracción del Estado facilitó la penetración de los grupos de crimen organizado, adoptando una postura intervencionista en el ámbito político (Gortaire-Morejón, 2023a). Con una prácticamente nula aprobación por parte del electorado, Guillermo Lasso ni siquiera optó por postularse a una reelección, aunque la ley se lo permitía, y su movimiento político no se animó a enviar candidatos para la Asamblea.

⁸ Para algunos sectores el aumento de la violencia estuvo ligado al aumento de la inmigración como consecuencia de la crisis de refugio venezolana. Sin embargo, los datos levantados por las mismas instituciones ecuatorianas revelaban que la gran mayoría del crimen en el país era perpetrada por nacionales y una porción ínfima de la población venezolana había participado en actos ilícitos (Hinojosa, 2023).

Figura 10

Homicidios intencionales en Ecuador 2010-2023*Nota:* Tomado de Oporto, 2023b

Para 2017, la tasa de muertes violentas era de 5 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2023 esta cifra aumentó a unos devastadores 40 asesinatos, transformando a Ecuador en la nación con más violencia registrada de la región (Molina, 2023). Mucha de esta violencia se ha concentrado en zonas del país donde los grupos de crimen organizado han acumulado poder, y se disputan el territorio y su población, tanto como centro de operaciones, así como de medios humanos. Sin embargo, el problema también se extiende a otras regiones debido a la falta de sanción y prevención de este tipo de delitos, provocando una cadena de crímenes violentos en contra de una sociedad civil secuestrada en medio de la inoperancia de las autoridades.

Resulta llamativo que, a pesar de estos malos resultados, los segmentos promotores del anarcocapitalismo y el libertarianismo sigan generando atracción en los electorados de la región. En Chile podría darse el beneficio de la duda, cuando en 2021 un 45% del electorado le dio el voto a José Antonio Kast, siendo superado por Gabriel Boric (BBC News Mundo, 2021a). Se puede argumen-

tar que el electorado chileno aún desconocía los pésimos resultados de Brasil y Ecuador, aunque es poco excusable que el segmento del electorado que le dio el voto a Kast ignorara sus vínculos con la extrema derecha y la apología a la dictadura de Pinochet.

Es más, entre los errores en la administración de Boric para satisfacer a plenitud su agenda y una falta de visión hacia el exterior, Kast continúa posicionándose como una fuerza de oposición atractiva para el electorado de Chile. El más claro ejemplo de ello ha sido cuando su partido ganó la mayor cantidad de asientos, 23 entre 51 disponibles, en el nuevo consejo constituyente, luego de que la propuesta de la izquierda chilena no lograra atraer suficiente apoyo para ser aprobada (Montes, 2023). Sin embargo, aunque el consejo constituyente partía con la ventaja de saber que la mayoría del electorado chileno no aspiraba a tener una carta magna anclada en una visión demasiado progresista, su bloque cometió el error de plantear algo demasiado a la derecha⁹. La propuesta constitucional no tuvo los resultados esperados para la derecha y fue finalmente rechazada en diciembre de 2023, a pesar de la caída de la aprobación de Boric, que para septiembre de 2023 ya superaba, en promedio, los 60 puntos de desaprobación (Cadem, 2023; Critería, 2023; Activa, 2023).

Los efectos de las propuestas anarcocapitalistas en otros países podrían haber mitigado la tendencia y redujeron el apoyo a figuras como Kast. Además, que exista un segmento dispuesto a darle su voto a la propuesta anarcocapitalista, no implica que exista otro segmento (como el que votó por Boric) que está en contra de darle la posibilidad de ostentar la presidencia. En consecuencia, nombres como el de la expresidenta Michelle Bachelet o Evelyn Matthei, la exministra de trabajo y previsión social del gobierno de Sebastián Piñera ya empezaban a hacer contrapeso en encuestas al ultraderechista Kast. El caso chileno es un ejemplo de que, al menos en parte, la cultura política latinoamericana no hace un “copia y pega” de un país a otro.

Es cierto que se perciben tendencias, y que algunos actores políticos trascienden sus realidades nacionales para penetrar en el imaginario de otros países de América Latina. Sin embargo, las lecciones sobre el éxito o fracaso de una tendencia parecieran solo aprenderse al vivirse en primera persona. En este sentido, se puede ver el caso de Argentina que recientemente acaba de optar por otorgarle el poder a uno de los voceros que durante años ha pregonado el anarcocapitalismo en la región, Javier Milei. El nuevo presidente argentino, junto a figuras como Agustín Laje y Gloria Álvarez, es uno de los nombres que

⁹ Se podría argumentar que la derecha chilena terminó sacando una victoria indirecta pues, al menos en el corto plazo, Chile mantendrá la constitución que estaba vigente, y que la izquierda buscaba cambiar por su vínculo con la dictadura de Pinochet.

ha aprovechado la viralidad de internet y las redes sociales para hacerse un espacio en una política regional. A pesar de su personalidad ecléctica y agresiva, Milei supo labrarse un camino que aprovechaba el descontento sistémico de la población argentina y afianzó su figura como un vocero contra el mismo.

Es más, incluso antes de que Milei optara por entrar a la vida política, varias de las juventudes libertarias de otros países ya estaban haciendo eco de sus posturas antisistema, sobre todo para hacer contra a las vocerías del socialismo del siglo XXI. Como se ha planteado previamente, esta difusión no ha sido solamente orgánica, sino que ha dependido de ejercicios coordinados y financiados. Argentina replica el ejercicio de promoción de ideas libertarias a través de ONG con financiamiento externo. Resuenan la Heritage Foundation que se ha pronunciado a favor de la candidatura de Milei, tratando de hacerlo menos amenazante para la democracia (Humire, 2023); la Fundación Pensar y la Fundación Libertad, ambas bajo un paraguas de la fundación transnacional Atlas Network, que tiene como organización madre al Institute of Economic Affairs de Reino Unido, fundada en 1981, y que actualmente conecta y financia a más de 500 socios globales, donde al menos 100 están en América Latina y el Caribe (Atlas Network, 2023).

La Fundación Atlas se ancla a Argentina principalmente a través de la figura de Alejandro Chafuen, quien fungió como CEO de la Fundación entre 1991 y 2018. Chafuen “ha pasado su vida adulta trabajando para socavar los movimientos sociales y gobiernos de izquierdas en Sudamérica y Centroamérica, e impulsar en su lugar una versión del libertarismo favorable a las empresas” (Fang, 2017). En términos operativos esta fundación alcanza sus objetivos de promoción ideológica a través de las siguientes estrategias:

Concede subvenciones a nuevos grupos de reflexión, imparte cursos sobre gestión política y relaciones públicas, patrocina actos de creación de redes en todo el mundo y, en los últimos años, ha dedicado recursos especiales a incitar a los libertarios a influir en la opinión pública a través de las redes sociales y los vídeos en línea. (Fang, 2017)

Milei ha recurrido a un excéntrico uso de discursos violentos. Incluso dentro de la categoría política de “outsiders”. Milei no sólo rompe con el statu quo en su forma de entender el Estado (llegando al absurdo de eliminar ministerios básicos de cualquier país como el Ministerio de Educación y Trabajo para aglutinarlos en una amalgama junto a Desarrollo Social, Mujer y Cultura en un Solo Ministerio de Capital Humano), sino que también ha recurrido abierta-

mente al insulto y al uso de recursos como martillos para “demoler” maquetas del Estado, o motosierras para simular la forma en la que recortará al Estado y a la “casta” política (La Voz, 2023). Javier Milei utiliza elementos pasionales que despiertan emociones intensas sobre todo en un segmento joven que, con poca esperanza en el futuro, acostumbrados a la política demagógica, pero sin claridad en las lecciones del pasado, ven en Milei casi un mesías. También cala en un sector conservador frustrado por no ser el centro de atención y que ve en las izquierdas una amenaza para su forma de entender el mundo.

Más allá de los resultados electorales:

La red libertaria, que ha remodelado el poder político en un país tras otro, también ha funcionado como una extensión silenciosa de la política exterior estadounidense, con grupos de reflexión asociados a Atlas que reciben financiación discreta del Departamento de Estado y de la Fundación Nacional para la Democracia, un brazo fundamental del poder blando estadounidense. (Fang, 2017)

La estrategia del libertarianismo ha conseguido despertar un sentimiento antisistema, pero que se anclan en el sistema de las transnacionales globales y ponen a la gente, principalmente jóvenes, al servicio de los intereses de estas corporaciones. De esta forma, las agendas nacionales pierden valor y los Estados-nación se debilitan al momento de regular y proveer servicios para los sectores más vulnerables. Los resultados de esa pérdida de fuerza son evidentes en el aspecto de seguridad y desarrollo económico, para el profesor australiano Jeremy Walker “El método de los Think Tank permitió a las empresas decir cosas que ellas mismas no podían decir sin que pareciera que se limitaban a hablar de sus propios motivos de lucro” (Westervelt y Dembicki, 2023). Por otro lado, la excusa ante los malos resultados tiende a ser que las medidas implementadas no tuvieron la suficiente radicalidad asignando culpas a otros sectores, principalmente de izquierda, pero llegando al punto donde la derecha liberal o la centroderecha es empujada hacia la izquierda también.

Y es que otra de las características del libertarianismo latinoamericano es la promoción de una agenda polarizadora. Es cierto que la tendencia de aplicar un formato de amigo-enemigo a nivel interno retomó vigencia desde que las voces del socialismo del siglo XXI comenzaron a catalogar a cualquier segmento que se opusiera a su visión como “neoliberal”. También es cierto que esto último fue una respuesta sistémica a la persecución que la izquierda sufrió durante las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX. Sin

embargo, en términos políticos la región enfrenta uno de sus momentos más duros pues el objetivo estratégico de la nación ha perdido espacios en la gran mayoría de Estados.

Mientras a nivel interno las sociedades, sobre todo las juventudes, se enfrentan a batallas culturales que les impiden articularse en una coyuntura más cercana a su realidad en el día a día, organizaciones externas se aseguran de perpetuar esta fractura. Atlas y otras organizaciones libertarias a modo de cascada reciben fondos de grandes corporaciones vinculadas a la explotación petrolera, como las fundaciones de la familia Koch y ExxonMobil; tabacaleras como Phillip Morris; proveedoras de tarjetas de crédito como Mastercard, en incluso el financiamiento de eventos y actividades de la mano del mismo gobierno de Estados Unidos (Jones, 2005; Fang, 2017).

No es de sorprenderse entonces que la agenda libertaria tienda a ser negacionista del cambio climático o que les resulte tan fácil encontrar espacios de lujo para desarrollar sus eventos (con convocatorias que normalmente no justificarían el nivel de egresos). Atlas se defiende de estos últimos argumentos sosteniendo que el ingreso que reciben de estas grandes compañías es inferior al 1% y que la mayoría de sus recursos viene de donantes individuales (Fund, 2021). Sin embargo, nada impide que los dueños y miembros de estas corporaciones sean los donantes individuales. Curiosamente, los sectores libertarios tienden a denunciar con vehemencia las actividades semejantes de la izquierda latinoamericana casi siempre vinculándola con la Open Society Foundations de George Soros.

En esa misma línea, de parte de la izquierda regional también hay procesos de organización que han sido alertados como problemáticos. El Foro de São Paulo (FSP) ha sido señalado como una fuente de inestabilidad política por parte de la derecha regional. El foro es un espacio de reunión entre partidos políticos de izquierda que se celebra casi anualmente y que mantiene su nombre debido a la primera reunión que tuvo lugar en la ciudad brasileña en 1990. Al FSP se le atribuye la creación del entorno que llevó a la “marea rosa”, como se les conoció a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, al poder a comienzos de los 2000. Paralelamente, se le reclama la inclusión, aceptación y solapamiento de los regímenes autoritarios de izquierda como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sus opositores más acérrimos también han denunciado potenciales vínculos con las narcoguerrillas y con redes de corrupción transnacional. Una mirada objetiva nos permite entrever un espacio político

complejo de América Latina, con actores que simplemente buscan la conexión de las izquierdas regionales, así como de otros elementos que aspiran a usar el poder en beneficio personal.

El FSP es un escenario complejo, combina fuerzas de “extrema izquierda, partidos comunistas tradicionales, socialistas radicales, populistas de izquierda, partidos socialdemócratas” (Kostiuk, 2019, p. 153). Por otro lado, el FSP no cuenta con una estructura burocrática, no es una organización internacional, pues no cuenta con un esquema organizativo que le garantice una continuidad, más allá de las fuerzas políticas de los diferentes movimientos y partidos que lo conforman. La agenda que lo motiva es plural y va en torno a derechos laborales, feminismos, ambientalismos, juventudes, campesinado, minorías étnicas. Como es de esperarse muchas de las fuerzas aglutinadas tienen aspiraciones directamente anticapitalistas, algunas voces todavía ven con recelo la democracia liberal y apoyan a regímenes con tendencias dictatoriales como los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En otros casos, los partidos que lo integran tienen visiones reformistas, adaptadas al capitalismo y a la democracia liberal, renunciando al núcleo duro del marxismo.

Ahora bien, Kostiuk (2019, p. 155) sostiene que “si bien las derechas latinoamericanas aseveran lo contrario, no hay prueba alguna de que el FSP hubiera trabajado excepcionalmente para la Cuba comunista o para el Brasil del tiempo de Lula, ni que sirviese ahora tan solo a los intereses de Venezuela”. Entendiendo que el Foro carece de una capacidad orgánica para actuar, los esfuerzos o apoyos que han nacido a favor de estos gobiernos han sido acciones más propias de cada partido o de cada gobierno. No obstante, es innegable que la existencia de este espacio favorece la articulación y la generación de redes de contactos y, por supuesto, de intereses políticos y económicos

El FSP también aspira a la construcción de una integración regional. El modelo propuesto apunta a “la recuperación de la cultura y la identidad histórica de los pueblos latinoamericanos” (Kostiuk, 2019, p. 158). Algunas de las raíces de iniciativas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), sobre todo cuando se trataba de su propuesta original como Comunidad de Naciones Suramericanas, e incluso la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pueden encontrar su origen anclado en los diálogos que líderes políticos como Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales y Luis Inazio Lula Da Silva (a los que luego se sumaron otros mandatarios) tuvieron en el marco de los diálogos y las reflexiones del FSP.

Por otro lado, el FSP no es el único espacio donde la izquierda regional ha tratado de agruparse. De forma gradual también nació el llamado Grupo de Puebla en 2019, en la ciudad de Puebla de México, que se articuló como una nueva red, que afirma estar alineada con visiones progresistas y de izquierda. A diferencia del FSP, el Grupo de Puebla no está compuesto por agrupaciones políticas, sino directamente por personalidades, autoridades electas, diplomáticos, académicos y otros funcionarios públicos de la región; eso sí, asociados en su mayoría a partidos que forman parte del FSP. Varios exmandatarios forman parte de los fundadores de este grupo, incluyendo a Alberto Fernández, Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Ernesto Samper, Rafael Correa, José Luis Rodríguez, Manuel Zelaya, Martín Torrijos, Fernando Lugo, Leonel Fernández, y José Mujica, e incluso el actual presidente Luis Arce de Bolivia (Grupo de Puebla, 2021).

El Grupo de Puebla tampoco tiene una capacidad organizativa en estricto sentido. Esta agrupación realiza reuniones anuales, que empezaron con 30 representantes en 2019 y se ha extendido a 200 líderes en 2023. Mientras los sectores afines a la izquierda ven en este tipo de acciones de conexión regional una oportunidad de vínculo y fortalecimiento de agendas comunes, los sectores afines a la derecha los ven con preocupación y cierto grado de desprecio. Los argumentos alrededor de los cuestionamientos al FSP y al Grupo de Puebla suelen girar en torno al temor de que se utilicen como mecanismos para desestabilizar a la región, sobre todo en términos de mercado, y que se defiendan o promuevan sistemas de carácter autoritario o incluso redes criminales transnacionales.

En este sentido, algunos actores ven a estas iniciativas como amenazas y riesgos, directamente como enemigos del Estado. No obstante, también se debe destacar que esta aproximación representa un riesgo en sí mismo. Por un lado, criminaliza la asociatividad política y genera un conflicto directo con la participación de la izquierda a través de canales legítimos en la búsqueda de acceso a la toma de decisiones a través de la vía electoral. El pasado de una izquierda que piensa que al poder se lo debe tomar por la vía armada no es tan distante como algunos podrían llegar a pensar. En consecuencia, que existan puntos de formación y articulación política de izquierdas que reconozcan a la democracia electoral como la vía legítima al poder es un avance significativo en términos históricos.

Ahora bien, así como las fuerzas del libertarianismo apuntan a construir modelos que debilitan al Estado para beneficio de ciertos sectores, en el FSP y

el Grupo de Puebla también hay algunas aproximaciones que se alejan de un modelo de garantías plenas para todos los sectores. Por ejemplo, los actores más afines al marxismo clásico siguen promoviendo modelos que pueden llegar a atentar contra la propiedad privada. Como es natural, esto resulta una amenaza para muchos sectores y despierta profundos rechazos. De la misma manera, la promoción permanente de la lucha de clases, no como un modelo explicativo sino como una forma de vida y de subsistencia de su rol político, también termina generando, en más de un caso, persecuciones, así como la perpetuación de modelos de enemigos internos dentro del mismo Estado-nación.

Trascendiendo afinidades y rechazos, es evidente que las diferentes tendencias tanto de izquierda como de derecha han adoptado prácticas transnacionales, por ahora por fuera del sistema político oficial de los Estados. Esto invita a repensar la forma en la que se gestiona la política de forma internacional. En lugar de acusar de conspiraciones y penetración subterránea, los aparatos políticos oficiales están en la obligación de generar condiciones en donde el intercambio de ideas, capacidades, e incluso fondos económicos sea transparente. En Europa, a través de la Unión Europea ya se ha visto el establecimiento de partidos transnacionales que operan en distintos Estados de la Unión, así como alianzas que, sin pertenecer a la misma estructura, conforman coaliciones basadas en ideas comunes.

Alcanzar esto sería un logro de madurez política, que en el corto plazo parece improbable. No obstante, la tecnología, en términos de telecomunicaciones e interconexión financiera, así como las realidades globalizadas hacen impostergable mejorar las condiciones de una política transnacional transparente. Esto podría mitigar de cierta forma la desafección existente a la democracia, y también podría fortalecer los incentivos detrás de la integración regional. Actualmente, el Parlamento Latinoamericano —por poner un ejemplo— prácticamente no recibe ni atención, ni interés, y por lo tanto tampoco presión, para lograr avances en beneficio de la población. Esto también genera desapego en la sociedad civil regional que poco conoce de estas instituciones o que simplemente ve este tipo de ejercicios como un desperdicio de dinero o como una nueva escala de burocracia internacional que no trabaja para ellos.

En este sentido, es cierto que el beneficio de estas instituciones radica en mantener foros que perpetúan las relaciones pacíficas entre los actores políticos de los Estados; sobre todo en un entorno donde el conflicto interestatal

podría estar en auge. No obstante, en este punto histórico ese rol empieza a perder prevalencia, e incluso puede llegar a causar efectos contrarios. Entre los efectos de las demagogias y populismos y los malos resultados políticos y económicos, el ciudadano común puede llegar a perder la confianza en los parlamentos regionales, y empezar a clamar por su disolución. Es más, lo más probable es que el motivo por el cual este no es un pedido masivo radica en el hecho de que son pocos los ciudadanos al tanto de su existencia.

Más allá de esto, dotar una mayor interconexión política entre las sociedades de ALC podría ser el motor necesario para que se genere un punto de quiebre en el que los proyectos regionales dejen de ser un ejercicio limitado a los gobernantes de turno. De la misma manera, Este podría ser un detonante de la generación de una identidad regional que trascienda de los factores etnoculturales clásicos (Gortaire-Morejón y Montalvo, 2020). A través de este ejercicio, los tejidos sociales comunitarios tendrían una mayor resistencia a las presiones extrarregionales y también se salvaguardaría la paz a nivel regional (como se ha visto por varias décadas en Europa). Paulatinamente, esto podría contribuir a enfrentar de forma conjunta retos desde el exterior de la región.

Una de las cuestiones que no puede ser ignorada para entender la coyuntura regional es el rol de los Estados Unidos. A pesar de la contracción de su intervención a través del poder duro, América Latina sigue siendo el área de influencia geoestratégica de Estados Unidos. En retrospectiva histórica, las intervenciones militares y los golpes de Estado asistidos por la CIA no son tan antiguos como la memoria de algunas generaciones pareciera recordar. La victoria frente al denunciado imperialismo estadounidense no es tanto propia. Aunque una parte del establishment político en los Estados Unidos parece haber renunciado la idea de intervenir en la región, lo cierto es que en ningún momento se ha hecho una denuncia abierta de las doctrinas Monroe y Kennedy. En parte, la contracción de la injerencia estadounidense en la región ha sido una respuesta a la lección aprendida de los malos resultados para las poblaciones locales; sin embargo, otra gran parte corresponde al sentimiento de victoria que provocó el colapso de la Unión Soviética y la sensación de hegemonía sin disputas que esto generó.

Con la derrota del comunismo (que nunca llegó siquiera a la etapa última propuesta por sus teóricos) y el fin de la fuente de financiamiento para las guerrillas con ideología marxista, Estados Unidos pudo redirigir sus esfuerzos hacia otras áreas de interés; sobre todo después de los atentados del 11 de sep-

tiembre de 2001, que señalaron a Medio Oriente como la nueva zona de intervención prioritaria. Incluso ante el ascenso de gobiernos de izquierda en ALC, la política exterior de Washington se tornó mucho más tolerante, y durante los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump se pudo captar una tendencia de baja intensidad en las presiones e incluso un cierto grado de indiferencia estratégica, aunque vale la pena destacar el tono beligerante del discurso de Trump frente a la región.

Por otro lado, la desconfianza hacia Estados Unidos sigue siendo una variable constante en algunos segmentos de la población de ALC. Incluso se ha llegado al punto de pensar que “Washington apoya la democracia si, y solo si, los resultados concuerdan con sus objetivos estratégicos y económicos” (Chomsky, 2019, p. 104). Ahora bien, este tipo de conclusiones no están aisladas en un esquema conspiracionista. Uno de los ejemplos claros ha estado en la forma en la que el Departamento de Estado ha reaccionado a los intentos de reelección de algunos mandatarios que han optado por vías en contra de sus instituciones democráticas, como el caso de Evo Morales, en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, o recientemente, Nayib Bukele en El Salvador. Mientras que, en Bolivia y Nicaragua, Estados Unidos se expresó con preocupación (con justa razón) por la afrenta a la democracia, en el caso salvadoreño, el Departamento de Estado llegó a cambiar su discurso al punto de afirmar que la omisión de la carta constitucional salvadoreña por parte de Bukele se trataba solo de una cuestión de carácter interno, a pesar de que previamente había cuestionado la medida (Contrapunto, 2023).

La aproximación de Washington se ha vuelto mucho más prudente frente a ALC, por lo menos en lo más evidente, como el uso de medios de fuerza militar o participación de la CIA que parecen haber quedado de lado, o al menos han sido suspendidas. Sin embargo, el trauma de su legado sigue vigente. Como lo muestra la Figura 11, la gran mayoría del continente americano sufrió de intervenciones estadounidenses, ya sea durante el período de formación estatal en el siglo XIX, o durante el siglo XX. Cabe destacar que el mapa hace uso del listado utilizado por el Global Policy Forum y que, en casos como Argentina, Paraguay y Uruguay, el apoyo a las dictaduras militares del siglo XX podría interpretarse como un acto de intervencionismo, pero que también puede entenderse como sólo colaboracionismo.

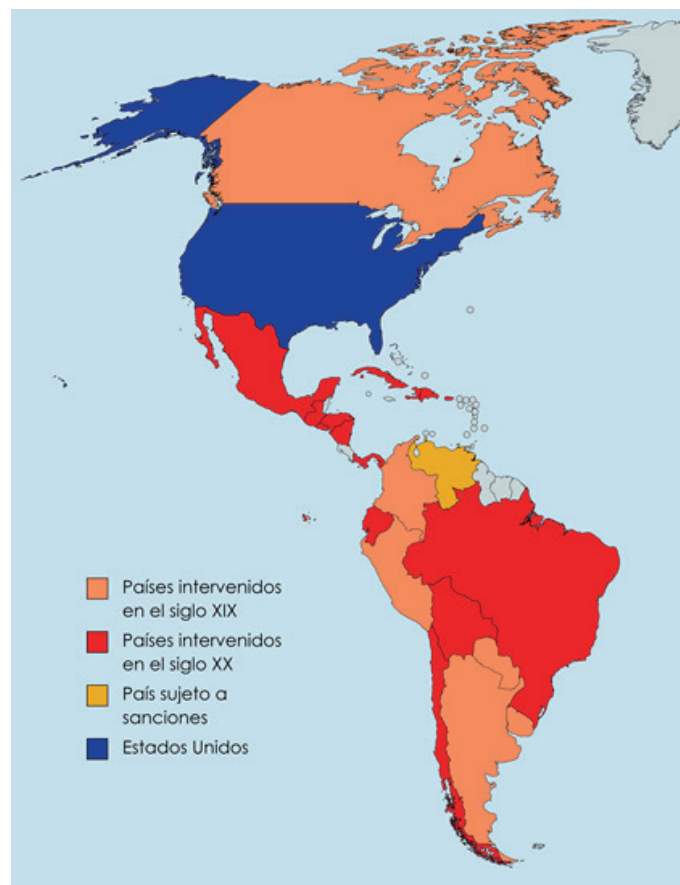
En cualquier caso, lo innegable es que la política exterior estadounidense tiene un legado cuestionable que va en contra de la mayor parte del Derecho

Internacional vigente en la actualidad, y que despierta malestar incluso en las nuevas generaciones de los países que se vieron intervenidos en algún momento.

A pesar de que Estados Unidos no ha enviado sus tropas para intervenir en la región en los últimos años, en ningún momento se puede interpretar esto como un abandono total de ALC. La búsqueda de acuerdos de libre comercio se transformó en una de las estrategias predilectas para asegurar influencia sin tener que recurrir a la violencia militar. De esta manera, entre 2006 y 2009 se concretó el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés), que incluye a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. En la misma línea, los acuerdos con Chile (2004), Perú (2009), Colombia (2012), Panamá (2012), y con México a través del NAFTA (1992) y reformado a través del USMCA (2020), han sido instrumentos importantes para asegurar una relación cooperativa, pero sobre todo de alta influencia en la región (U.S. Customs and Border Protection, 2023).

Figura 11

Mapa de intervencionismo estadounidense en América



Nota: Elaborado a partir de GPF (2005). Varios de los países sufrieron de intervenciones en más de una ocasión. Cuba sigue siendo objeto de un embargo

Es más, analizando la forma en la que estos acuerdos han moldeado las relaciones comerciales y diplomáticas de ALC se puede argumentar que el establecimiento de los mismos ha sido una pieza fundamental en la estrategia de los Estados Unidos para evitar que la región dé un giro definitivo que expulse sus intereses, o al menos mitigue la probabilidad de cambio. En más de una ocasión, los países que han establecido acuerdos de libre comercio con Estados Unidos han servido de freno para procesos de integración regional latinoamericana, pues sus obligaciones legales, o simplemente sus intereses comerciales, empujan a los representantes diplomáticos a asumir posturas de contención ante aquellos países que apuntan a un modelo integracionista más localista.

Aunque dista de ser la única variable causal, lo cierto es que los procesos de integración regional latinoamericanos se han vuelto mucho más complejos desde que los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos han entrado en vigor. Desde la parte económica, los países que no aspiran a que sus mercados se vean comprometidos con importaciones estadounidenses han tenido que ajustar su estrategia frente a los países que tienen estos acuerdos, incluso empeorando las relaciones de intercambio. Al mismo tiempo, cuando algunos países apuntan a aplicar estrategias proteccionistas con fines desarrollistas o retomar la Industrialización por Sustitución de Importaciones o procesos similares, se encuentran con la realidad de que no resulta viable aplicarlo de forma integral debido a las condiciones que ya obligan a sus contrapartes asociadas con Estados Unidos.

La influencia de lo económico afecta también en lo político, los gobiernos de la izquierda del socialismo del siglo XXI no lograron concretar una institucionalidad sólida en sus apuestas como el ALBA-TCP o la Unasur, que entraron en un ciclo conocido como “nuevo regionalismo” (Gortaire-Morejón y Montalvo, 2020). El ALBA-TCP solo logró atraer a gobiernos afines al régimen de los Castro en Cuba y Estados caribeños que se beneficiaban de las prebendas de Caracas, mientras que la Unasur colapsó entre la incapacidad de llegar a acuerdos mínimos entre representantes de izquierda y derecha, pero también como consecuencia de las distintas velocidades con las que los países buscaban participar en la integración. En una investigación previa (Gortaire-More-

jón y Montalvo, 2020) algunos actores involucrados en el proceso de Unasur revelaron que delegaciones como Colombia participaban muy poco de las reuniones y acuerdos, e incluso cuando lo hacían actuaban de forma disruptiva frenando avances. Otros países, como Chile, asumían un rol prácticamente de observador sin tratar de ser motor de nuevas iniciativas o invirtiendo recursos (a pesar de tenerlos) en acelerar el proceso de integración.

Más allá de esto, los nuevos procesos de integración no han prosperado y los antiguos se han estancado. Probablemente el más afectado ha sido la Comunidad Andina (CAN) que, debido a los acuerdos de libre comercio de Colombia y Perú perdió a Venezuela como miembro y generó una brecha con Ecuador y Bolivia de un lado y los socios de Estados Unidos por otro. Y aunque la CAN no ha desaparecido y objetivos puntuales, como el *roaming* entre países y el rol mediador frente barreras al comercio entre sus miembros, han seguido avanzando, lo cierto es que la idea de la subregión andina como un proceso ahora tiene más de categoría académica que de proceso de articulación orgánico.

Por otro lado, un proceso que tuvo una etapa de crecimiento y éxito relativo fue el Mercado Común del Sur (Mercosur) que había establecido importantes líneas para dinamizar el comercio en el llamado Cono Sur. Liderado por Brasil y Argentina, con Uruguay y Paraguay aprovechando un entorno más amigable de cooperación y comercio con sus mayores socios, Mercosur logró atraer la atención regional e incluso global, entre las décadas de 1990 y principios del siglo XXI. No obstante, tras las tensiones diplomáticas en Paraguay, y Venezuela —que se había sumado a la organización tras su abandono de la CAN— el Mercosur ha entrado en una compleja etapa de estancamiento. El establecimiento de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea ha sido un largo proceso de negociación que comenzó en 1999 (Unión Europea y Mercosur, 1999). Sin embargo, las diferencias en las normativas internas, así como intereses geopolíticos, que incluyen el uso y preservación de la Amazonía, han postergado el fortalecimiento del vínculo comercial entre el bloque económico más importante de Suramérica y Europa.

Se debe destacar que las tensiones políticas internas han distraído la atención estratégica fuera de lo regional y lo retornan a lo nacional. En consecuencia, el péndulo político ha sido particularmente fuerte en Brasil y Argentina, dos de los países más importantes de la región en los últimos años, lo que genera que los procesos que requieren cambios drásticos en las estructuras

estatales se suspendan o incluso se abandonen por completo. El giro PT-Bolsonaro-PT ha dado muestras de ser bastante accidentado. Y ahora, el giro Kirchnerismo-Macri-Kirchnerismo suma un nuevo actor disruptivo como lo es Milei, que tuvo que traicionar su propio discurso y aliarse con Macri, pero que desde los primeros días de su mandato ha optado por dar un giro radical en la aproximación que el Kirchnerismo había aplicado durante muchos años, llegando a suspender subsidios y recortar puestos en la burocracia, en un proceso que seguramente estará lleno de tensiones, muchas de las cuales tendrán a la calle como escenario de conflicto.

En contraste, Uruguay ha sido una excepción dentro de estas transiciones, demostrando resiliencia democrática. José Mujica es uno de los pocos voceros del socialismo del siglo XXI que ha logrado concentrar legitimidad prácticamente frente a todas las tendencias políticas, y los siguientes gobiernos de Tabaré Vázquez y Luis ALCalle han mantenido dinámicas orgánicas y con bajos niveles de polarización. Sin embargo, la capacidad de influencia de Uruguay sobre el resto de países de Mercosur es significativamente baja. Paraguay tampoco representa un contrapeso real y su coyuntura política dista de ser un referente para la región, sobre todo en el marco de una política que prácticamente solo mira hacia dentro, sin una presencia real en las relaciones con la región. Mientras tanto la Venezuela de Nicolás Maduro continúa suspendida de la organización. En este sentido, aunque Mercosur sigue vigente, lo cierto es que ha perdido viada. Con esto, Mercosur es un ejemplo de que, al depender prácticamente en su totalidad de los actores políticos, en el momento en el que existen transiciones y, en consecuencia, brechas ideológicas, los procesos de integración se estancan o colapsan¹⁰.

Otro de los escenarios en esta materia es que se buscan alternativas a los procesos ya comenzados. Como parte del marco del fracaso de Unasur¹¹, varios de los países con mayores vínculos con Estados Unidos optaron también por generar su propio espacio de integración comercial, sobre todo bajo el argumento de que Unasur no cumplía con el rol económico necesario. De esta manera, Chile, Colombia y Perú se unieron a México en la Alianza del Pacífico (AP). En su origen, la AP atrajo la atención de varias decenas de países, con Ecuador, Costa Rica y Panamá, como potenciales nuevos miembros.

¹⁰ Un potencial ingreso de Bolivia, tras la aprobación de tratamiento del ingreso de Bolivia al Mercosur al Senado brasileño podría implicar un repunte del organismo. Sin embargo, la llegada de Javier Milei a la presidencia argentina podría representar todo lo contrario, con un estancamiento y la generación de conflictos internos en la organización.

¹¹ Se debe señalar que desde el retorno de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil los intentos para reiniciar la corriente de Unasur, al menos en términos discursivos, han revivido. En diciembre de 2023 se reinició el trabajo del Consejo de Delegados y Delegadas, con la ausencia de Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. No obstante, la inestabilidad política, la polarización y la existencia de gobiernos que se oponen al imaginario de Unasur (sobre todo al vínculo que tiene con el régimen de Nicolás Maduro) no termina de garantizar que la iniciativa pueda ser retomada con la seriedad que amerita. A lo que se debe sumar que las posturas de Javier Milei, de Argentina, también resultan anacrónicas con este proceso.

Y aunque este espacio ha sido útil para acelerar los vínculos entre sus miembros, lo cierto es que nuevamente la falta de involucramiento de la sociedad civil, y la falta de atención a lo político han sido motivo de estancamiento.

En consecuencia, tras la caída del gobierno de Pedro Castillo en Perú, la AP se dividió en dos bloques con México y Colombia, liderados por Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, a favor del depuesto Castillo, y Chile y Perú, con Gabriel Boric y Dina Boluarte, apoyando al nuevo gobierno de transición peruano. Esta tensión incluso llegó a generar un impase en la transición de la presidencia pro tempore de México a Perú, llegando al punto en el que Chile tuvo que recibirla temporalmente por falta de reconocimiento del gobierno mexicano al gobierno de Boluarte (Dote, 2023). A pesar de que la AP se ha promovido como uno de los casos de mayor potencialidad en la integración, y que tiene un diseño interesante pues apunta a una visión distinta con miras al Asia-Pacífico como zona de interés, lo cierto es que sus miembros no han asumido un compromiso real de dotar a la organización de un rol real que supere los fracasos anteriores de la integración en ALC.

De la misma manera, el otro reemplazo infructuoso de la Unasur fue el Prosur, que no pasó de ser un foro de discusión entre presidentes que respondían a los gobiernos liberales y conservadores que surgieron como respuesta al socialismo del siglo XXI, y que en principio fue una de las vías para enfrentar la crisis venezolana, sin ningún éxito. En este sentido, Prosur no ha logrado ser una institución real para la región, y se caracteriza nuevamente con muy poca noción por parte de la ciudadanía regional de su existencia. Al mismo tiempo, el rápido retorno de gobiernos asociados con la izquierda, en muchos casos apenas tras un mandato de los gobiernos de derecha, significó el abandono de esta iniciativa. Y aunque potencialmente podría permanecer como nicho latente para una nueva etapa donde los gobiernos conservadores y liberales retomen el poder, lo cierto es que no deja de ser un ejemplo de la forma débil con la que se entiende a la integración en la región.

Por otro lado, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) también se mantiene como un foro más, aunque en este caso logra aglutinar a la mayoría de países de ALC. Tal vez el factor más importante de este espacio sea el punto de contacto generado con la República Popular China, que en su aspiración para contestar a la hegemonía estadounidense ha visto en CELAC un canal eficiente de comunicación. No obstante, en términos de distribución de beneficios para la ciudadanía, la CELAC no deja de ser

un espejismo impalpable. Se debe sostener que la integración latinoamericana adopta formas que ayudan a evitar tensiones entre sus Estados miembro; un mérito que es reconocido por pocos. Sin embargo, frente a procesos como la Unión Europea, que han servido para garantizar beneficios migratorios, laborales y económicos, o la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN por sus siglas en inglés) que ha sido un acelerador de comercio intrarregional y dinamizador de posicionamiento común frente a otros actores (como China), la integración de ALC adolece de dinamismo y resultados concretos.

Como consecuencia, la sociedad civil de es sumamente ajena y desinteresada frente a los procesos de integración regional, transformándolos en un “gusto adquirido” de aquellos que participan de las discusiones sobre Relaciones Internacionales o Política Exterior. En términos estratégicos esto es un problema severo, pues no existen factores de presión a los segmentos políticos para mejorar las condiciones de cooperación entre Estados, y peor aún alcanzar niveles de supranacionalidad. Esto ha interferido de manera significativa al momento de establecer mecanismos de respuesta frente a fenómenos como el Crimen Transnacional Organizado, como se verá a mayor detalle en la siguiente sección de este texto.

Dentro de todo, no todos los procesos regionales han colapsado totalmente, el Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (Caricom por sus siglas en inglés) son importantes instrumentos de conexión entre sus Estados miembro, y ayudan a darle viabilidad y posicionamiento común a países que, de lo contrario, se ven debilitados por sus capacidades nacionales. No obstante, la inestabilidad interna o la falta de recursos económicos para proyectar acciones de poder por fuera de sus fronteras nacionales hacen de estas iniciativas éxitos focalizados; aunque nuevamente se debe destacar que el valor más importante de estos espacios de integración está en la preservación de la paz entre sus miembros. Esto último es algo a destacar en una etapa en la que Centroamérica ha tenido que lidiar con severos problemas como las caravanas migrantes, el incremento de la inseguridad ligado al crimen organizado y al narcotráfico, y el posicionamiento de liderazgos autoritarios como el de Ortega en Nicaragua, Bukele en El Salvador, y las protestas en Guatemala, ante los bloqueos para el ascenso del candidato electo Bernardo Arévalo.

Con estos antecedentes es más fácil entender por qué existen sectores que no perciben como adecuado analizar a ALC como una región única. Sin embargo,

en este texto se mantiene la idea de que ALC es una región que no se mueve como tal, pero que las fuerzas de su realidad como un bloque con desafíos comunes la obligan a reencontrarse a pesar de que algunas fuerzas internas se repelen. El reto pareciera estar en poder aprovechar esa puja constante por el cambio, de forma que se pueda canalizar ese esfuerzo para alcanzar soluciones a problemas comunes. Sociedad civil y actores políticos en todos los países repiten constantemente que los problemas giran en torno a la pobreza, a la desigualdad, a la corrupción y a la inseguridad en menor o mayor medida. Sin embargo, en esfuerzos desordenados cada Estado intenta por cuenta propia dar respuesta infructuosamente. Esto genera una sociedad regional desunida y con menos capacidad de acción para enfrentar su inconformidad con el sistema.

Trascendiendo de esta agenda, y tal como se veía en el primer capítulo, una tendencia común ante la frustración con sus propias realidades es la migración. Al dejar atrás sus países, millones de ciudadanos de ALC parecen encontrar espacios en los que sus talentos, o por lo menos su ambición de crecer, son aprovechados y sumados a la cadena productiva. Esta diáspora afecta (en términos de mutación) la propia cultura de ALC. Las remesas sociales empiezan a cambiar el mapa cultural en los países de origen, desde las tradiciones, la vestimenta, la música, hasta llegar a tener las mismas aspiraciones. El país que recibe la mayor migración desde ALC es, sin sorpresa para nadie, los Estados Unidos. Con alrededor de 63,6 millones de hispanos (a los que podría sumarse los migrantes de otras nacionalidades caribeñas) en 2022 (Krogstad et al., 2023), lo que representaría el 19% de la población estadounidense, el ciclo de intercambio cultural entre Estados Unidos y ALC es cada vez más intenso, y es parte de un rediseño de estructuras, sobre todo para Estados Unidos.

En consecuencia, para entender el futuro de ALC, otro de los elementos a tomar en cuenta tiene que ser la esencia misma de Estados Unidos. Desde la perspectiva de su composición interna, en los últimos años Estados Unidos ha atravesado un proceso de transformación de su propia población, en la que se puede percibir que la población latina crece de manera significativa (como lo muestra la Figura 12) especialmente dentro de los Estados del sur, entre los que figuran Texas, Nuevo México, Arizona, California y Florida; del noreste en Nueva York y Nueva Jersey, y también hay que incluir a Estados como Nevada, Colorado e Illinois (Lacomba, 2022). Las nacionalidades más representadas en estas nuevas mayorías son los que provienen de México, Puerto Rico¹²,

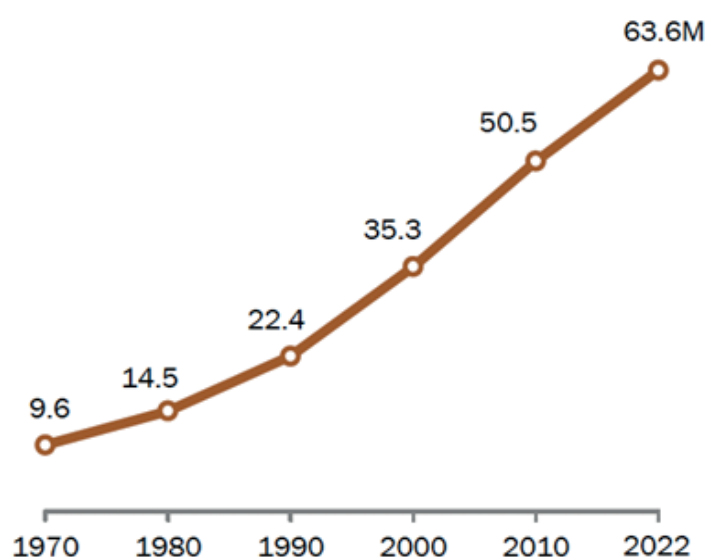
¹² Una de las discusiones que se aborda muy poco dentro de la discusión sobre ALC es el contexto de Puerto Rico, su origen histórico, posición geográfica e idioma lo reclaman como parte de la región. No obstante, su figura como Estado libre asociado lo vuelve un territorio con realidades propias, y a su población en una comunidad que cuenta con el privilegio que la mayoría de personas de ALC parece querer tener: poder viajar a Estados Unidos de forma legal. En cualquier caso, ocasionalmente se escuchan voces a favor de la independencia puertorriqueña o, al menos, de la hipocresía de las neocolonias de Estados Unidos en la actualidad.

El Salvador, Cuba y República Dominicana; mientras que los suramericanos con mayor representación son los colombianos, los ecuatorianos y los venezolanos (Krogstad et al., 2023).

Aunque este es un factor de contexto interno para los Estados Unidos que representa un gran reto para el sistema político estadounidense, no es menos cierto que esto puede implicar una mutación importante para la forma en la que se entiende a ALC. Se debe comprender que con la presencia de más latinos dentro de los Estados Unidos la manera en la que se plantea la política hacia la región probablemente se adapte o modifique en las próximas décadas. Ahora bien, esto no significa necesariamente que este cambio político va a ser en beneficio de los Estados de América Latina o el Caribe. Es posible que una mayor consciencia de la realidad de ALC genere que la región resulte más prioritaria en la agenda de Washington D.C. Sin embargo, prioridad no significa benevolencia, ni mucho menos integralidad.

Figura 12

Crecimiento de la población hispana en Estados Unidos



Nota: Adaptado de Pew Research Center, 2023.

A pesar de que se tiende a homogenizar a la población Latina dentro del territorio estadounidense como un solo grupo humano, lo cierto es que muchos de los latinos o hispanos en Estados Unidos demuestran un sentimiento de pertenencia a elementos exclusivos de su identidad nacional. Al menos el 65% de la población de origen hispano en Estados Unidos tiene una ascen-

dencia mexicana, con más de 36.5 millones de personas, cerca de 5.7 millones de puertorriqueños hacen parte del 10% que sigue en la lista, mientras que cubanos, salvadoreños y dominicanos bordean el 4% con alrededor de 2 millones de ciudadanos estadounidenses con este origen (Lacomba, 2022). De esta forma, estadounidenses con ascendencia mexicana, cubana, dominicana, etc., seguirán manteniendo características propias de sus sociedades de origen, sin generar necesariamente un vínculo de conexión con el resto de hispanohablantes, latinos o caribeños. Traducido a un nivel de política, estos vínculos no necesariamente significan que la política de los Estados Unidos va a ser igual para toda América Latina y el Caribe, sino que al contrario, podría llegar a atomizar los esfuerzos y estar dirigida a los bloques de naciones donde las mayorías latinas estadounidenses muestren un mayor interés.

Todo es proporcional al crecimiento del acceso al poder de los hispanoamericanos y latinoamericanos en Estados Unidos. A pesar del crecimiento relativo de este segmento poblacional, las posiciones de poder siguen resultando comparativamente escasas. De los 100 representantes al Senado, solo 6 puestos están ocupados por personas de ascendencia latina, lo que representa apenas un 6% del total (Congress, 2023). La Cámara de Representantes amplía un poco el porcentaje a un 11.5%, con 50 asientos de los 435 representantes disponibles para personas con un origen latino (Congress, 2023). Tomando en cuenta que 19% de la población estadounidense es latina se percibe que todavía existe una brecha importante en el acceso a posiciones de autoridad.

No obstante, nombres como los de los senadores Ted Cruz o Marco Rubio, ambos de origen cubano, que incluso han intentado ser candidatos presidenciales por parte del Partido Republicano, o de Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de origen puertorriqueño, que ganó relevancia por ser una de las representantes más jóvenes, han comenzado a ser más presentes en el debate público. En la administración de Biden (2021-2025), también figuran algunos latinos como parte de su gabinete, Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, Xavier Becerra, Secretario de Salud, y Miguel Cardona, Secretario de Educación, demuestran que los hispanoamericanos se han labrado espacios en el statu quo de la toma de decisiones. Sin embargo, la gran mayoría de representantes políticos siguen teniendo un origen puertorriqueño (que sigue siendo parte del esquema de dominio estadounidense) o mexicano, con casos aislados de personas con otros orígenes nacionales representados en el sistema político estadounidense.

En consecuencia, el incremento de hispanoparlantes en la política estadounidense no implica que todos los países de ALC tendrán una vocería en la toma de decisiones del hegemon. Es más, la herencia latina de estos actores políticos no significa que exista algún vínculo real con sus Estados de origen. Dentro de todo, el motivo por el que han sido electos sigue siendo la representación de los intereses del pueblo estadounidense, por lo que una agenda a favor de otros Estados les resultaría contraproducente e incluso podría ser percibida como un acto de traición. El escenario que sí es probable es que estos actores pueden empezar a promover políticas de inversión, mayores vínculos con los actores políticos de sus Estados de origen, o un cambio en la cultura política estadounidense que haga más fáciles a los representantes de ALC el conectar con Estados Unidos.

No obstante, esto también depende de que los estadounidenses de origen hispano mantengan sus lazos de conexión con otros hispanos. Por ejemplo, una de las encuestas del Pew Research Center encontró que la mitad de los hispanos de cuarta generación en Estados Unidos no se identifican como tales (Lopez, Krogstad y Passel, 2023). En este sentido, el origen genético no representa necesariamente la subsistencia de la cultura. Por otro lado, tomando en cuenta que las culturas latinas o hispanas no tienden a evitar los matrimonios por fuera de su cultura y que, es más, suelen ver con buenos ojos que se establezcan relaciones con personas de otros entornos, especialmente si son de tez blanca, entonces es probable que exista una pérdida de identidad latina o incluso del país de origen con el pasar de las generaciones, sobre todo tras la pérdida del lenguaje (Lacomba, 2022). Ocurre en la misma Latinoamérica, países con historias comunes, que formaron parte del mismo territorio durante la época colonial, o que se fracturaron después de las independencias tienen poblaciones con sus propias identidades autónomas, incluso si sus antepasados nacieron al otro lado de la frontera.

¿Unos Estados Unidos más latinos podrían fortalecer al panamericanismo? Es difícil de creer mientras su hegemonía global no esté perdida. Para Estados Unidos actuar en el marco de sus aliados tradicionales, sobre todo conectados con el resto de la comunidad angloparlante, sigue siendo, en el corto y mediano plazo, el canal principal del alcance de sus objetivos nacionales. Aplicar estrategias de contención, con desembolsos no significativos en términos de cooperación y ayuda internacional, y continuando con los procesos de promoción del libre mercado y lucha contra las drogas podría resultar suficiente para conseguir los objetivos estratégicos de Estados Unidos frente a ALC.

No obstante, la aceleración de la penetración del crimen transnacional organizado y, sobre todo, de la República Popular China en desafío de su hegemonía han provocado el retorno de Estados Unidos a la arena de ALC. Uno de los países que ha retomado una dinámica colaborativa con Estados Unidos ha sido el Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso aprovechó un canal de comunicación generado por los Senadores de origen latino Robert Menendez y Marco Rubio que, en conjunto con otros Senadores de ambas bancadas, lograron que se apruebe la Ley de la Asociación entre Estados Unidos y Ecuador, que ha generado canales de financiamiento a acciones ambientales y democráticas, pero sobre todo se tradujo en la retoma del vínculo en materia de seguridad y defensa que, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, se había debilitado (Foreign Relations Committee, 2022). De la misma manera, tras la caída de Pedro Castillo del poder, el Perú también habría fortalecido sus vínculos con Washington D.C. sobre todo para contar con mayor apoyo militar (Córdova, 2023). Ambos países parecen haber aprovechado el vacío que surgió con el ascenso con el presidente izquierdista Gustavo Petro en Colombia, un aliado tradicional de Estados Unidos en la región.

De manera más general, “Biden pretende presentar a los países latinoamericanos una alternativa a China que aboga por un mayor compromiso económico de Estados Unidos, incluidas más inversiones y el desarrollo de los acuerdos comerciales existentes” (Hunnicutt, Solomon y Spetalnick, 2022). En cualquier caso, este podría ser un retorno temporal, la compleja relación con China, el conflicto ruso-ucraniano, y ahora el incremento de tensiones entre Israel y sus vecinos han complicado el escenario de los intereses estadounidenses en otras zonas de interés. A pesar del cambio en la retórica, en una aproximación mucho más gentil hacia América Latina que la que tuvo Donald Trump, que inicialmente permitió generar canales para lidiar con el COVID-19 a través de la donación de vacunas, así como generar apoyo económico sobre todo para enfrentar el problema (WOLA, 2022a), Biden se encontraría en una situación en la que deba priorizar su atención hacia focos críticos que afectarían la seguridad global.

En este sentido, el retorno de Estados Unidos a la región podría ser un factor importante en la política de los próximos años para ALC; pero es un factor condicionado políticamente. A diferencia de otras etapas de la historia, donde la política exterior de Estados Unidos en América era notoriamente hegemónica en la región, y con un interés abierto de intervención y apoyo dirigido a los gobiernos afines sin inferencia de la visión política del presidente de turno,

en los últimos años se registró una mayor dependencia ideológica. Como se mencionaba previamente, el gran ejemplo fue Donald Trump que dejó de lado el rol de su país en la región y en una postura bastante xenófoba (que sacó a la luz los resentimientos de muchos de sus electores) enfrió las relaciones entre Estados Unidos y ALC. La administración de Biden ha recuperado gradualmente el relacionamiento, con algunos actores estratégicos; sin embargo, la dinámica aún no ha tomado las dimensiones del siglo XX. La confianza en Estados Unidos había caído hasta un 39% en el período 2018-2019 (era Trump) y se ha venido recuperando gradualmente con un 57% en 2021 (gobierno de Biden) (LAPOP, 2021).

En este sentido, un potencial retorno de Trump a la Casa Blanca, o la llegada de cualquier líder que no considera a ALC como una prioridad podría generar un nuevo retroceso en las relaciones con la región. Ahora bien ¿En qué incide esto con las dinámicas políticas de ALC? Lo cierto es que representa un desafío para las cancillerías de los Estados de la región, puesto que la lectura sobre el relacionamiento con Estados Unidos no es tan clara como lo fue siempre. Los líderes de la derecha, tradicionalmente más afines con los estadounidenses, no tienen la garantía de tener un aliado estratégico en Washington D.C. que entregue la misma cantidad de recursos y ofrezca el mismo grado de interés en la agenda de forma permanente. Es cierto que no serán escasas las puertas que se abran para aquellos que están dispuestos a alinearse a los intereses estadounidenses; sin embargo, no se sabe si al golpear la puerta de la Casa Blanca habrá respuesta.

Por otro lado, la misma izquierda de ALC termina encontrándose en una posición confusa. El discurso del intervencionismo del que se han anclado durante décadas termina viéndose caricaturizado cuando la atención estadounidense está en otras regiones. Sin embargo, el desliz del exdirector de la CIA James Woolsey en una entrevista en la que no pudo negar la intervención de Estados Unidos en elecciones en exterior deja la puerta abierta para el debate (Democracy Now!, 2018). Adicionalmente, siempre se podrá discutir sobre los intereses reales detrás del apoyo a Ucrania frente a Rusia, o al sudeste asiático frente a China, también se le puede exigir rendición de cuentas (sin ningún éxito) por autoproclamarse como el Estado líder en la defensa de la libertad mientras da su apoyo incondicional al genocidio de palestinos por parte de Israel en Gaza, o a sus vínculos con las dictaduras del Golfo Pérsico, mientras que garanticen la provisión de combustible para Occidente. Por otro lado, mientras más tiempo pase entre la época de los apoyos a las dictaduras lati-

noamericanas, a los golpes de Estado amparados por la CIA, o las invasiones para deponer a regímenes que no son del agrado de Washington D.C. es más difícil convencer a las nuevas generaciones de ALC que Estados Unidos es un enemigo, o el causante de los problemas locales.

Ahora bien, el agotamiento de la visión confrontativa es relativo. El bloqueo económico a Cuba sigue siendo un elemento unificador para las izquierdas, tanto radicales como moderadas, en la región (incluso el mundo). La desconfianza existente a cualquier retorno agresivo no es escasa, y las agendas nacionalistas también pueden recurrir a esta amenaza en cualquier momento. En cualquier caso, la dinámica política y diplomática tiene que ser más trabajada y, en consecuencia, la forma en la que se planifican las estrategias de seguridad y de defensa también merecen una revisión constante de la doctrina, valorando activamente la relación con los Estados Unidos. Reforzar las agencias de inteligencia estratégica en el ámbito internacional y aumentar la cooperación interagencial no estaría fuera de lugar para mejorar los resultados.

Sea como fuere, el vínculo entre Estados Unidos y ALC se muestra como una realidad vigente que trasciende la relación a nivel de gobiernos. En este sentido, el fenómeno hispano o directamente latino tiene que ser evaluado como parte de los análisis del futuro de la región, el continente e incluso el mundo. Aunque aún parece distante en la agenda, es posible que en algún momento se hable de un presidente latino que se anime a liderar un proceso de reconexión con ALC más horizontal. Sin embargo, en la coyuntura actual esto no es más que “wishful thinking” para los latinoamericanos, o una pesadilla para los supremacistas blancos. Los análisis sociológicos e incluso antropológicos serán necesarios para entender este fenómeno a mayor detalle.

Sea cual fuere el caso en el futuro de los Estados Unidos, el reto en ALC también es contar con mejores líderes. Desde la fundación de sus Estados, la gran mayoría de los países de la región optaron por un régimen presidencialista. En su origen, esto resultaba innovador, pues la gran mayoría del mundo seguía en modelos de monarquía absoluta, pero ALC optó por replicar la estrategia de Estados Unidos y confiar en un presidente, electo por el pueblo, y con una rotación que evite la concentración del poder. No obstante, la historia ha sido cruel con la región y la mayoría de sus presidentes no han logrado estar a la altura de sus desafíos. Con excepciones, gran parte de los presidentes son recordados con indiferencia, o directamente no suelen ser parte de la memoria histórica de las naciones (algo drástico comparado con Estados Unidos donde

normalmente existe una cultura relativamente amplia de aprecio y reconocimiento a sus expresidentes).

Probablemente el aspecto político resulta una de las variables más heterogéneas al momento de hablar sobre ALC. A pesar de que existen ideas generales sobre los presidentes de los países más relevantes, o del ocasional escándalo político de algún mandatario corrupto, lo cierto es que cada nación tiende a manejar de forma muy autónoma su política. Probablemente, y como se discutía previamente en términos de los parlamentos regionales, este desconocimiento sobre la política de los países vecinos es hasta conveniente. Para las clases políticas (si es que las hay) lo mejor es solo rendirle cuentas (si es que lo hacen) a los ciudadanos de sus países. Como excusa también se tendrá el hecho de que incluso en Europa, la región con mayor integración del mundo, no se ha llegado a modelos de política transnacional real.

En cualquier caso, la búsqueda por mejores liderazgos en ALC es uno de los motivos de inconformidad sistémica. La concepción de que todos, o al menos la gran mayoría, de que los políticos son corruptos o roban, es un estigma que forma parte de la cultura popular, y que parece ser incluso una excusa para que esta dinámica se repita. La idea de escoger entre el “mal menor” o “el menos malo” forma parte de los debates en redes sociales cada vez que una elección se acerca. Esta debilidad en los liderazgos es una expresión de la flaqueza en la oferta de los partidos políticos, pero también es un síntoma de sistemas políticos donde la gente no se ve representada. En este sentido, es fundamental trabajar en la mejora de los sistemas de partidos, para que estos puedan ofrecer no sólo mejores candidatos, sino también mejores administradores.

LAC es una región que arroja demasiados “mesías”. Como se discutía previamente, varios países han tenido a líderes sumamente populares que aglutinan a millones de personas que los idolatran y los ven como únicos salvadores de su patria. Aunque en el siglo XX ya se había visto este tipo de fenómenos, destacando por ejemplo a Juan Domingo Perón de Argentina, no es sino el siglo XXI el que parecería haber arrojado a la cohorte más amplia de líderes populistas (Casullo, 2021). La gran capacidad de estos liderazgos ha sido precisamente la de canalizar el descontento popular y asumir un rol de voceros de los desamparados y los pobres, o incluso refundadores de la patria.

Ahora bien, una de las cuestiones a tomar en cuenta es que “los ejecutivos populares pueden potencialmente socavar la oposición de los ciudadanos hacia acciones antidemocráticas de un ejecutivo mientras que al mismo tiempo

refuerzan la satisfacción con democracia” (LAPOP, 2021, p. 13). Este equilibrio entre la democracia y el autoritarismo ya han dado lecciones sobre los escenarios futuros que llegan a tener, con liderazgos que directamente se pasan a la dictadura como Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela; actores sempiternos en el debate político a pesar del rechazo que han generado en amplios sectores de la población como el caso de Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia; y tampoco hay que dejar de lado a aquellos que han logrado mantener un grado de respeto que aún les permite reocupar cargos públicos a pesar de las antipatías de otros segmentos como el caso de Lula Da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, o Michelle Bachelet en Chile. Finalmente, se debe volver a mencionar el caso de José Mujica, quien goza de un retiro exitoso, con admiración prácticamente desde todos los bandos políticos por su prudencia y respeto de los procesos institucionales.

Por otra parte, se debe hacer énfasis en el “fenómeno Bukele”. El presidente salvadoreño ejemplifica que los personalismos no dejan de ser una cuestión atractiva para las comunidades políticas de la región. Nayib Bukele ha ganado popularidad como un líder casi mesiánico que ha logrado contener de forma significativa la violencia y la inseguridad que acosaba a El Salvador desde hace varios años; sobre todo por los grupos criminales organizados conocidos como las maras salvatruchas. La situación de seguridad del Salvador será abordada a más detalle en el siguiente capítulo, pero por ahora debe destacarse que, tras la detención de 68,000 personas, una cifra que ha animado a personas que ven en la inseguridad como uno de los mayores problemas de su realidad, pero que también ha preocupado a expertos en seguridad y en materia de derechos, el presidente salvadoreño ha conseguido acumular una popularidad sorprendente que incluso ha llegado a alcanzar el 90% de satisfacción dentro de su propio país (Oppenheimer, 2023).

A través de una poderosa campaña en redes sociales, que ha capitalizado la transnacionalidad del internet, Bukele ha conseguido atraer apoyos por parte de ciudadanos de otros Estados. Por ejemplo, la encuestadora Click en Ecuador, le daba a Bukele una popularidad del 58,59% a comienzos de 2022, más del doble de apoyo que tenía el expresidente Lasso para el momento, que se vio incapaz de culminar su mandato como se mencionaba previamente (La Hora, 2023). De la misma manera, según la encuestadora Atlas, el presidente de El Salvador era el político extranjero en actividad más popular en Argentina, con un 49% de aprobación para noviembre de 2023 (AtlasIntel ESP, 2023). En Colombia también se tenía registro de una tendencia similar, con un apa-

rente 55% de la población que apoyaba la idea de tener un líder como Bukele para su país, según la encuestadora Datexco (Maldonado, 2023).

A pesar de que muchos lo han visto como un caso ejemplar y toman como referencia la popularidad y satisfacción de la población salvadoreña, el caso de la administración de Bukele oculta una gestión que se desvía de la democracia liberal tradicional. Entre los hechos más disruptivos está la toma del congreso con el ejército para amedrentar a sus opositores a que acepten su plan de endeudamiento en 2020 (Guzmán, Rauda y Alvarado, 2020). También se registra, el trato indolente a al menos 1600 personas que, durante el período de COVID-19, fueron retenidas en centros que no cumplían estándares mínimos (VOA, 2020). A esto se sumó el aprovechamiento indebido de las condiciones excepcionales para realizar acciones consideradas excesivas por diferentes organizaciones de Derechos Humanos, en las que se registraron detenciones arbitrarias y abusos por parte de las fuerzas policiales, lo que incluso provocó la declaración de inconstitucionalidad del decreto que había validado el confinamiento inicial (Human Rights Watch, 2020; FESPAD, 2020).

En honor a la verdad, es importante destacar que, como se discutía previamente, la pandemia enfrentó a la región a condiciones nunca antes vividas que pusieron bajo la lupa a fracturas y vacíos estructurales de los Estados. Es cierto que la tensión entre las libertades y el bien ulterior de preservar la salud pública, en función de las capacidades para evitar el colapso de los sistemas sanitarios la mayoría de Estados en la región, sometieron a su población a un confinamiento (involuntario en muchos casos), cuestión que la mayoría de marcos legales no contemplaba hasta el momento. En estricto sentido esto representaba una limitación a los Derechos Humanos, justificada en el bien ulterior de la preservación de la vida. Sin embargo, esta condición fue aprovechada por ciertos gobernantes para cumplir sus propias agendas y comenzar con acciones que traspasaban la realidad de la pandemia, haciendo un uso inapropiado del contexto para lograr objetivos distintos a los de la prevención de la salud.

Esto mismo fue lo que se percibió en el caso salvadoreño, donde el gobierno aprovechó la excepcionalidad para acelerar una estrategia de lucha contra las maras que ha tenido importantes resultados en términos de seguridad, pero que, al mismo tiempo, ha sido ampliamente cuestionada y denunciada por sus métodos que atentan contra los Derechos Humanos y coquetean con el autoritarismo. En cualquier caso, para Tiziano Breda:

La mayoría de salvadoreños miden la democracia y el sistema de pesos y contrapesos sobre la base de la capacidad de las instituciones de resolver sus problemas, y han visto que en los 30 años de democracia los gobiernos no han sabido resolver los problemas de pobreza, de marginación [sic], de violencia y se han visto todos envueltos en escándalos de corrupción. Ellos han vivido de todos modos con sus derechos suspendidos por la imposibilidad de moverse por las pandillas y si ven que hay alivio en esa opresión, esa es la medida que usan para establecer que las cosas van bien (Maldonado, 2023).

La cuestión entonces viene a ser si el resto de las sociedades de la región estaría realmente dispuesta a tolerar este tipo de modelos con tal de vivir en espacios de vida más seguros. “El público latinoamericano debería tener claro qué es democracia y qué no lo es, pero no la tiene por la tardanza, la debilidad y la poca claridad en la condena de todo aquello que no es democrático” (Cooperación Latinobarómetro, 2023, p. 16). De la misma manera, el problema de que se perpetúen malos resultados y que la criminalidad esté en aumento podría facilitar la tolerancia a aproximación antidemocráticas. En esta línea, una encuesta reciente de CID Gallup (2023b) encontró que un 87% de los peruanos y ecuatorianos, así como un 82% de costarricenses, percibían que la criminalidad estaba en aumento. De la misma manera, alrededor de 7 de cada 10 encuestados en República Dominicana, Argentina y Colombia respondían de forma similar (CID Gallup, 2023b). Esta situación podría llegar a ser detonante para la búsqueda de gobiernos considerados de “mano dura”.

Sin embargo, y de forma llamativa, casos como Venezuela, donde solo 3 de cada 10 encuestados sentían que la criminalidad estaba en aumento, o de México, donde la cifra solo aumenta a 4 de cada 10 (CID Gallup, 2023b), indican que pueden existir algunos factores que condicionan estos resultados. Por un lado, pueden existir sesgos en la recolección de la data o corresponder a la coyuntura específica de la fecha de recolección (que en este caso corresponde a septiembre de 2023). Por otro lado, al tratarse de una percepción, es posible que en ciertas sociedades donde la violencia se ha normalizado no se distinga una variación real en las dinámicas criminales por costumbre, mientras que otros países tradicionalmente menos violentos, variaciones menores pueden percibirse como algo más grave.

No obstante, al tratarse de México y Venezuela existen condiciones externas a la coyuntura de la criminalidad que pueden ser evaluadas. Ambos son países

que han resultado beneficiarios del incremento de la conflictividad global. Las tensiones de la guerra ruso-ucraniana, la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, y la guerra de Israel en Gaza, han sido factores de incertidumbre que han alterado los flujos de comercio global, han puesto en riesgo la cadena de producción y distribución de combustibles fósiles, y han reforzado la idea en Occidente de que es necesario asegurar el acceso a energías y productos en países cercanos geográficamente o afines políticamente. Esto ha abierto las puertas al llamado *nearshoring*, como oposición al *offshoring*, del cual México ha sido uno de los mayores beneficiados (HSBC, 2023), y también ha obligado a repensar la relación con el régimen venezolano, llegando al punto de suspender sanciones (aunque la justificación ha girado en torno a las elecciones de 2023) (Agobian, 2023).

Estados Unidos habría optado por aceptar el incremento de los costos de producción y renunciar a la influencia en el exterior a través de su presencia empresarial, pero a cambio se asegura de tener una cobertura geopolítica más cómoda. Por ahora, la reacción del entorno ha sido relativamente favorable. El retorno de la inversión estadounidense es visto con buenos ojos, en momentos donde la capacidad de inversión de otros actores es difusa. Es cierto que los BRICS están en un proceso de expansión. No obstante, en el panorama de incertidumbre política y de seguridad, no existen garantías de que la inversión y el comercio de China y Rusia puedan llegar a reemplazar realmente a la de Estados Unidos. Mientras tanto, India y Brasil están en crecimiento, pero aún están lejos de una posición que les permita ser actores globales, y Sudáfrica solo tiene capacidades para ser un actor regional.

Ahora bien, retomando la cuestión continental, es importante tomar en cuenta que el nivel de inconformidad sistémica no es homogéneo, ni a nivel regional ni a nivel interno. Como se planteaba en el capítulo anterior, existen segmentos que se han visto beneficiados del modelo vigente. Debido a los vínculos económicos y políticos de estos sectores, sus aspiraciones de cambio son comparativamente bajas y, de hecho, se resisten al mismo. No obstante, esta no solo es una cuestión de clase económica, los factores étnicos y de género son cuestiones de suma importancia para comprender la inconformidad sistémica en la región. Nuevamente se deben recordar los matices de país a país, pero no se puede pasar por alto que las luchas por representación, seguridad y prosperidad tienen (y tendrán cada vez más) un origen anclado en las mujeres, las comunidades indígenas, afrodescendientes y los grupos GLBTIQ+.

Es cierto que ALC ha logrado superar muchas de las costumbres enquistadas en la herencia colonial y la doctrina religiosa. El rol de la mujer en la sociedad es cada vez más respetado y se ha logrado romper con los esquemas que la condenaban a una vida de cuidadora del hogar asociada a la reproducción y preservación de las nuevas generaciones. Esta transición no ha sido sencilla y ha implicado décadas de debate, manifestaciones públicas, e incluso la sangre y vida de activistas que reclaman que la mujer tenga el mismo trato y derechos que el hombre. Los últimos años en la región han estado caracterizados por el incremento de mujeres en posiciones de poder político y económico, así como el uso de la calle como medio de expresión del descontento (ONU Mujeres, 2023).

Algunos países como Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay han dado pasos importantes para asegurar una paridad en la toma de decisiones políticas, acceso a una economía independiente y estable (más allá de sus parejas), contar con una autonomía física, así como de tener un bienestar social aceptable (ONU Mujeres, 2022). Paralelamente Honduras, Guatemala, Nicaragua y Venezuela han fallado en asegurar estas condiciones mínimas o han sido incapaces de reportar sus avances (ONU Mujeres, 2022), condicionados por la debilidad o el autoritarismo de sus gobiernos. En general, la región ha avanzado de forma estable hacia un cambio estructural, tanto desde lo legislativo como desde lo cultural. No obstante, existen segmentos de la población en la región que aún no logran desprenderse de los esquemas machistas, por lo que la mujer sigue ocupando espacios que no son proporcionales al hecho de que representan más del 50% de la población.

La violencia contra la mujer sigue siendo un problema importante en varios de los países de ALC. Esta violencia toma muchas formas, en algunos casos no es perceptible a simple vista, pues se trata de cuestiones de carácter económico (secuestro de salarios, imposibilidad de trabajar, bloqueo a empleo o ascensos de la mujer solo por el hecho de ser mujer), en otros casos es psicológico (perpetuación de estigmas, gaslighting, acoso). A esto se suma que la persistencia de la violencia física, en términos de abusos, violaciones, o directamente en golpes y asesinatos, es una de las cuestiones que hacen de la posibilidad de llevar una vida digna en la región una cuestión mucho más difícil para las mujeres frente a los hombres. Una de las cifras más alarmantes es que “una de cada cuatro (25%) mujeres de entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida” (UNODC, 2022a, p. 10). En este sentido, no solo se trata de una cuestión de imagina-

rios, sino de un sistema que muchas veces se niega a reconocer la necesidad de cambios y que no es capaz de garantizarle dignidad a su porción femenina.

El sistema que se niega a cambiar es un problema al que también se enfrentan las minorías étnicas. A pesar de ser la población originaria en el continente, los pueblos indígenas han tenido que ver cómo el Estado minimiza sus necesidades y sus voces, y en algunos casos toma a su organización más como una amenaza que como un reclamo digno de atención (Jaquette, 2013). La carga contra los indígenas viene desde tiempos coloniales, cuando a las poblaciones nativas se les asignaron roles de inferioridad infantilizándolas y segregándolas en un esquema de castas atado al color de la piel. A pesar de los esfuerzos propagandistas de nuevos grupos hispanistas, lo cierto es que la carga de la estructura colonial persiste hasta la actualidad de manera que el legado del racismo subsiste tanto en términos económicos, como políticos y culturales.

Las poblaciones indígenas han ido mutando con el tiempo, algunos pueblos optaron por la amalgamación total, otros fueron extinguidos sin opción de decidir. Se estima que entre el 8% y 10% de la población de la región mantiene su identificación como indígena, lo que representa a por lo menos a entre 42 y 58 millones de personas, y a más de 500 lenguajes (Banco Mundial, 2016; OPS 2023). El problema empieza a hacerse más visible cuando se entiende que el 14% de la población pobre es indígena, sujetos a condiciones de menor escolaridad y la exposición a barrios y comunidades con menor calidad de servicios públicos (Banco Mundial, 2016). El esquema es complejo porque existe una dualidad entre la resistencia a la modernización, con la búsqueda del respeto a las culturas originarias y el rechazo al “pensamiento colonial”, así como el desencuentro y la antipatía desde las poblaciones mestizas y blancas que siguen viendo en inferioridad a lo indígena.

Precisamente por ello, para ciertos segmentos el ser indígena es inherentemente negativo, incluso si el origen genético de la gran mayoría de los habitantes de la región se remonta a los pobladores originales de la región (Carrás, 2021). Se debe reconocer que la relación con lo indígena varía de país a país. Al menos 27 millones de mexicanos, un 21,5% de la población total, se identificaban como indígenas, paralelamente 8.3 millones de peruanos y chilenos (26% y 12.4% respectivamente) también se perciben como tales (OPS, 2023). Entre estos tres países se encontraría alrededor de los indígenas de la región. Por otro lado, Guatemala y Bolivia son los países que, con un 43,6% y un 41,5%, tienen los porcentajes más amplios de población autoidentificada como

indígena (OPS, 2023). Estos entornos tienden a hacer que la agenda indígena sea particularmente prevalente en la discusión política. Otros países, como Ecuador (y ocasionalmente Colombia) han visto a sus comunidades indígenas surgir como actores políticos de gran relevancia, con sus propias luchas y procesos.

La marginación que enfrenta la población indígena nuevamente tiene matices de género. La mujer indígena (sobre todo las más jóvenes) tienden a verse aún más afectadas por la pobreza y las carencias en los servicios (OPS, 2023). A la discriminación tradicional del sistema machista se le suman los elementos culturales y el racismo, que se transforman en barreras para el pleno desarrollo de la mujer indígena, que incluso llega a ser apartada de las luchas feministas. A pesar de esto, la vocería de las mujeres indígenas es cada vez más visible y se vuelve menos necesario el transfuguismo cultural, logrando mantener los elementos culturales de su propia identidad como la vestimenta, acentos e incluso su propio idioma para integrarse en las discusiones políticas (la cuestión económica pareciera no ser tan evidente).

En general, el reto para los pueblos indígenas está en el choque simbólico entre la modernidad y el “tribalismo” que se le asigna a lo originario. Un choque entre la civilización y el salvajismo. Algunos sectores folklorizan a las culturas originarias tomándolos como un atractivo turístico o una cuestión que solo es recordada en alguna fiesta nacional, o algún disfraz para los niños dentro de los eventos cívicos. Otros también lo romantizan al estilo rousseauiano, con lo indígena como lo plenamente puro, representantes de una etapa en la que el ser humano no estaba contaminado por la industria o el capitalismo. Esta perspectiva luego se choca con la realidad de que, como cualquier ser humano, las personas indígenas también están sujetas a sus ambiciones o intereses personales, y pueden tener aspiraciones más allá del cuidado de la naturaleza o la vida sin acceso a los avances tecnológicos del siglo XXI.

Debe señalarse que el indigenismo en la región, especialmente en Sudamérica, ha crecido de la mano de Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia y de la región, que gobernó al país del altiplano entre 2006 y 2019. A través de su Movimiento al Socialismo (MAS), Morales encabezó un proceso de posicionamiento de lo indígena más allá de la agenda occidental. El crecimiento de Bolivia desde que Morales asumió el poder ha sido notable y es reconocido tanto por la izquierda como por la derecha (esta última con amplio recelo), en redes sociales incluso se lo ha llamado un milagro económico. Sin

embargo, Morales no ha estado exento de críticas o de cuestionamientos. Su intento de ser reelecto a pesar de que la población se opuso a la reelección indefinida a través de un referéndum le generó una lluvia de críticas políticas, e incluso la Corte IDH tuvo que intervenir y plantear que la reelección no es un derecho humano (Cusicanqui, 2021). A pesar de esto, Morales sigue siendo una figura política presente en Bolivia y sigue intentando acceder al poder, planteando su candidatura para 2025 (Toledo-Leyva, 2023).

Más allá de lo problemático de la situación política de Morales a nivel interno, lo cierto es que su figura se ha vuelto relevante en una escala regional. Su promoción de la Runasur, un “mecanismo de integración plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de la región” (Runasur, 2021) demuestra un grado de liderazgo que hace un par de décadas habría sido completamente inviable. Actualmente no existen garantías de que este intento de organización colectiva transnacional pueda articularse y superar las barreras de la política local, y la tradicional falta de continuidad de los procesos de integración más allá del personalismo. Sin embargo, una diferencia importante de esta propuesta radica en la búsqueda de integración desde un criterio étnico y social más allá de los gobiernos.

Por ahora, los resultados son escasos, y el temor generado en los sectores más conservadores parece más bien infundado. Morales ha recibido denuncias desde Perú por considerar al proyecto de Runasur como una cuestión de separatismo (Opini3n, 2023). La articulaci3n de proyectos transnacionales sigue un rumbo natural en las dinámicas de regionalizaci3n (Gortaire-Morej3n y Montalvo, 2020). El problema vuelve a estar en la falta de capacidad de los Estados de la regi3n en dar vida a proyectos que sepan articular a los movimientos sociales y dar respuesta a sus luchas. De ninguna manera se busca sostener que el rol de Morales es netamente altruista o plenamente positivo. Sin embargo, es fundamental entender el origen de sus motivaciones y sobre todo destacar la gran capacidad de articulaci3n que ha logrado (incluso en ausencia de recursos econ3micos) para los movimientos étnicos y sociales.

La inclusi3n de la causa afrodescendiente en la discusi3n habla precisamente de otra de las minorías más vulnerables en la regi3n. En varios países las comunidades nativas han desaparecido, bien sea por su extinci3n o por su amalgamaci3n con la poblaci3n colonizadora. Sin embargo, otra comunidad humana también llegó al continente americano como núcleo de la mano de

obra que necesitaron los colonos, la esclavitud muchas veces es solo asociada con Estados Unidos, pasando por alto que millones de pobladores de África fueron llevados de manera forzada a ALC. Varios Estados de la región vieron su economía colonial y poscolonial anclada al trabajo y explotación de los descendientes de esos esclavos, que hoy han alcanzado la libertad y representan alrededor del 21% de la población de la región (Pulsante, 2022).

“Los países con un mayor porcentaje de población afro son Haití (95,5%), Brasil (50,9%), seguido por Cuba (35,9%) y Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana que representa entre un 7% y un 10% de la población” (Pulsante, 2022). Y nuevamente hay que enfrentar al “depende” como condición explicativa de la situación de vida de esta comunidad humana. Lo cierto es que el racismo contra las personas afrodescendientes es una realidad vigente y aunque existen casos de éxito y prosperidad, lo cierto es que en la mayoría de estas personas enfrentan casos de discriminación, segregación, así como la perpetuación de su explotación. En algunos países también se llega a ver un proceso de invisibilización de su población afrodescendiente, minimizando su rol o incluso desconociendo la existencia de personas de color entre los habitantes nativos de su población, esto se ha visto en países como México, Argentina o Chile (López, 2014; Gonzalez de Gispert, 2019); errores técnicos en los procesos de censo también llegan a invisibilizar la magnitud de la población afrodescendiente, lo que los expone a tener menor representación y atención del Estado como ha ocurrido recientemente en Ecuador (Prensa Latina, 2023).

A pesar de estas presiones, el orgullo de la población afrodescendiente parece verse reforzado en algunos países. Por ejemplo, en Brasil cada vez más personas se reconocen a sí mismas como “negras” o “pardas” (Velasco y Rocha, 2019). La aceptación de la identidad afrodescendiente está anclada a la reducción paulatina de los estereotipos racistas que identificaban a la población negra como inferior, y a causas que tienen un impacto cultural amplio como las luchas de Black Lives Matter (BLM) en Estados Unidos. Como cualquier lucha social, estas manifestaciones causan resistencia, algunos sectores conservadores ven con incomodidad el crecimiento de la presencia de lo “afro” como una identidad general, y prefieren que se mantenga como algo limitado a las comunidades negras. Sin embargo, la esencia de la cultura de ALC no puede desprenderse de la influencia de su comunidad afrodescendiente, desde su música, los sabores de sus alimentos, a la forma de vestir, entre otros.

La tensión entre la población afrodescendiente y sus Estados por ahora no ha alcanzado puntos de conflictividad tan altos como los que se han visto en Estados Unidos, o como la que han tenido las agrupaciones indígenas en ALC. No obstante, descartar escenarios en los que los grupos afrodescendientes se manifiesten de forma colectiva contra las condiciones de marginalización y discriminación no parecería algo improbable; más bien depende de la articulación de las agendas y el establecimiento de una identidad colectiva más consolidada. En este sentido, la inconformidad de los segmentos afrodescendientes es un malestar latente que podría traducirse en un conflicto de gran escala si los Estados de la región no son capaces de articular sus demandas y lidiar con la bomba de tiempo que representa su discriminación e invisibilización.

En términos de lucha contra la invisibilización, uno de los segmentos que ha ganado más visibilidad es el de la comunidad GLBTIQ+. En una afrenta contra la cultura conservadora anclada en el cristianismo que ha nutrido a las estructuras de pensamiento de la región, las personas con preferencias sexuales diversas han alzado su voz y han reclamado inclusión y atención en el Estado. Muchos de los reclamos de estas agrupaciones giran en torno a derechos civiles, reconocimiento ante la ley, matrimonio igualitario y adopción homoparental. Esto genera choques culturales intensos, sobre todo en términos generacionales, aunque la transición hacia el reconocimiento de estas libertades y derechos ha ido gradualmente en aumento. Por otro lado, los reclamos en términos económicos, políticos y la erradicación implican mayores conflictos.

Aunque en algunos casos la preferencia sexual de los individuos ha dejado de ser motivo de discriminación y barrera para el desarrollo económico, esto es algo que todavía depende mucho de cada individuo y la posibilidad de enfrentar rechazo sigue siendo alta.

Por ejemplo, las mujeres transgénero tienen muy pocas opciones de ser empleadas en el mercado de trabajo formal dada la discriminación y el estigma al que se enfrentan. Independientemente del nivel educativo que tengan, muchas veces quedan reducidas a pedir limosna o al trabajo sexual. (Banco Mundial, 2017)

La ausencia de normativa que prevenga la discriminación, y que solvete los problemas para garantizar educación, salud, o empleo de calidad a esta comunidad vulnerable son un reto significativo para ALC, sobre todo porque al menos el 11% de esta comunidad ha enfrentado ataques físicos y 23% han tenido que lidiar con injurias en su contra (CIDH, 2015).

Los problemas para reconocer las agendas ajenas son parte de una dinámica extendida en la región. Las sociedades de ALC no han logrado articular estrategias de debate nacional que reconozcan las diferencias como algo normal y válido. Al contrario, la polarización se ha ido anclando en el habitus del debate público. En algunos segmentos no politizados, la situación no sería tan significativa. Sin embargo, el internet y las redes sociales han abierto las puertas a que más personas puedan ejercer su vocería política, incluso si no participan de las dinámicas partidistas o electorales. Twitter (ahora X) se ha vuelto uno de los espacios más obvios para este tipo de discusiones. Facebook, Whatsapp, Telegram, Instagram, así como Youtube también cuentan con su propia cuota o dosis de carga política, las cadenas masivas y los mensajes desde cuentas anónimas influyen en los imaginarios populares de forma amplificadora. Paulatinamente, otros canales como Tik Tok, se han abierto espacio en la discusión política para segmentos jóvenes que, de lo contrario, no suelen encontrar vocería en el aparato “formal”.

Al comienzo de la politización de las redes, la academia desconoció su rol y se mostró cauta, sobre todo por la presencia del anonimato y de la posibilidad de inflar tendencias a través de las llamadas granjas de trolls. La posibilidad de que “bots” multipliquen mensajes de forma inorgánica, sin una persona detrás de cada cuenta, sigue siendo uno de los motivos por los que se piensa que el internet no es capaz de traducir el sentir popular con claridad. No obstante, la realidad es que las redes sociales son el nuevo campo de batalla político. Las campañas electorales son el ejemplo perfecto de ello. Millonarios esfuerzos para hacerse virales se ven durante cada año electoral. En las últimas elecciones ecuatorianas los candidatos gastaban entre 10.000 y 30.000 dólares en pauta diaria (y esa era solo la cifra visible desde sus cuentas oficiales) (Primicias, 2023b). En el caso de Argentina, solo hasta el 7 de noviembre se habían gastado casi 8 millones y medio de dólares en las plataformas de Meta (Davidovsky, 2023).

El gasto en redes no se limita al periodo electoral. La propaganda política a través de redes sociales es uno de los rubros permanentes de la gran mayoría de gobiernos. La situación es tal, que los asesores de comunicación ven casi como una obligación el apartar presupuestos para las pautas en redes sociales. El crecimiento y difusión orgánicos no son suficientes en una era donde la *infoxicación* es un problema vigente. Los gobiernos, tanto con intención de comunicar, como con ambición de adoctrinar y vender su propia realidad a sus ciudadanos han tenido que entrar en las redes sociales de forma obligatoria.

Es más, los gobiernos más populares dependen de una presencia digital bien establecida, que cada vez es más transnacional, con comunidades que se hacen presentes incluso frente a medios y vocerías internacionales, como se ha visto en el caso de El Salvador, cuyo gobierno se ha anclado incluso en granjas de trolls e influencers pagados para mejorar su posicionamiento global (Kinosian, 2022).

Adaptarse a las nuevas generaciones es parte de los retos políticos de la modernidad, no solo para ALC. Sin embargo, los últimos años en la región han demostrado que la política “tradicional” no es tan aceptada entre los jóvenes. Aparte de la convicción de cambio generalmente asociada con la juventud es posible entrever que los sistemas actuales no generan esperanza para las nuevas generaciones. Precisamente las redes sociales han sido canal de expresión de descontento y malestar, y en varias ocasiones esto se ha traducido en la activación de otras formas tradicionales de expresión de la frustración como lo son las movilizaciones sociales¹³. Las protestas en Nicaragua contra el régimen de Ortega (2018-2021), las protestas en Chile que se transformaron en el llamado “estallido social” (2019-2020), así como las protestas de 2021 en Colombia, son algunos de los ejemplos donde los segmentos más jóvenes de la población demostraron su interés real en la política y sobre todo su inconformidad con el sistema, y en que las redes sociales fueron importante núcleo de aglutinamiento.

En este sentido, las brechas generacionales también requieren atención. Niños, jóvenes y adultos mayores (nuevamente con mayor gravedad para mujeres, minorías étnicas y población GLBTIQ+) enfrentan problemas de segregación o vulnerabilidad debido a ausencia de redes de apoyo, y la incapacidad de acceder a empleo pleno para costear sus necesidades (OPS, 2023). Las discusiones para mejorar estas situaciones tienden a ser fuente de conflictividad y devenir en protestas sociales. Los gobiernos de ALC parecen aún ser incapaces de garantizar comienzos y finales dignos para sus ciudadanos. Atrapados en esquemas de consumo, pareciera que algunas tendencias del poder político se anclan en la idea de que quien no puede pagar por la dignidad no la merece.

Este tema no es exclusivo de la región, en general, el siglo XXI está demostrando ser una etapa de complejidad en la conexión intergeneracional. El problema es que varios de los avances políticos y filosóficos que ha dejado el siglo XX no han podido ser traducidos efectivamente para las siguientes generaciones. Es importante tomar en cuenta que el modelo actual está anclado a

¹³ Se debe partir del punto de que las nuevas generaciones son nativos digitales, gran parte de su realidad está en las redes sociales e incluso, en ciertos casos, existen personas cuya realidad total está en lo digital. La pandemia de COVID-19 también contribuyó a ampliar este espectro e incluir a más personas en el mundo digital, a través del trabajo en casa y la educación en línea.

los traumas y lecciones que dejó la Segunda Guerra Mundial, la intención de no volver a repetir esos errores movilizó al mundo hacia una visión humanista, anclada en el derecho y la democracia. Mientras tanto, las nuevas generaciones (exentas del trauma) son un poco menos cautelosas en tomar medidas para acercarse a modelos que podrían repetir estos errores. Como lo establece el último informe de la Open Society Foundations:

Los jóvenes de hoy han crecido y se han politizado al tiempo que surgía la era de la policrisis, durante la cual las formas de agitación climática, económica, tecnológica y geopolítica han crecido y se han reforzado mutuamente en un grado nunca visto. Así pues, aunque la mayoría de la población mundial sigue teniendo fe en la democracia, esa fe se está agotando. Y estos resultados sugieren que podría debilitarse con cada generación. (2023, p.4)

El sistema le ha prometido a la gente que, a través de su capacitación y esfuerzo, su calidad de vida sería igual o mejor que la de sus padres. Y aunque muchos pueden verlo, lo cierto es que, tal y como se veía en el anterior capítulo, varios son los segmentos que ven su situación precarizada, su futuro menos próspero, y están sujetos a condiciones de seguridad y estrés que provocan decepción y rechazo en el modelo actual. Como ya se ha planteado varias veces, el esquema de desigualdad provoca tensiones incluso al nivel de la conceptualización del mundo. El sentimiento de injusticia no es igual para todos, en consecuencia, mientras unos disfrutan el modelo, otros lo resienten. El choque frente al “resentimiento social” es uno de los debates más activos en las redes sociales, y que genera más fracturas a nivel de tejido social.

En general, la consecuencia política más evidente se ha visto en los resultados electorales de los últimos años. En la región, de las 18 elecciones competitivas, presidenciales, desde 2019 solo en Paraguay (2023) ganó el oficialismo (Munck, 2023); a lo que se suma que, desde 2013, el 73% de las elecciones han sido favorables a la oposición, por sobre el oficialismo (Latinometrics, 2023). Sin el contexto presentado en este libro se podría argumentar que se trata únicamente de un péndulo político que incluso podría estar asociado con una saludable alternancia. No obstante, comprendiendo las presiones existentes y el malestar generalizable a gran parte de los segmentos poblacionales en realidad se puede asociar estas transiciones a la inconformidad con el sistema. En este sentido, los actores políticos entran a ciclos en los que saben que prácticamente solo tienen un período de gobierno para realizar sus actividades.

Vale la pena destacar como algo positivo que la mayoría de transiciones políticas en la región han sido pacíficas y sin mayor conflicto. Esto es un mérito importante pues ancla a la vía electoral como el medio legítimo para acceder al poder. Existen algunas excepciones en las que se ha tratado de imponer la narrativa “fraude”, algo que debe verse con mucha preocupación debido al efecto de desestabilización que tiene en la confianza de los ciudadanos en sus sistemas electorales (LAPOP, 2021). Esto ocurrió en Ecuador en 2017 (donde incluso se llegó a un proceso de recuento de votos) (Swissinfo, 2017), en Perú en 2021 (Fowks, 2022), en Brasil en 2022, donde las agrupaciones bolsonaristas incluso llegaron a demandar la intervención de fuerzas militares para evitar la posesión de Lula Da Silva (France24, 2022), e incluso, de forma adelantada, en Argentina por Javier Milei en 2023, advirtiendo que si no llegaba a la presidencia se trataba de un fraude (Hauser, 2023)¹⁴. Este tipo de estrategias, planteadas mayoritariamente desde la derecha, pueden convertirse en un problema severo para la democracia si es que no se toman medidas correctivas desde los sistemas electorales.

Por otro lado, Cuba, Venezuela y Nicaragua mantienen modelos autoritarios en los que la oposición no existe o está orillada y condicionada a lo que el poder de turno aspira. El riesgo latente de que otros gobiernos adopten estos formatos contribuye a la polarización. Al mismo tiempo, el miedo a ser la “siguiente Venezuela” se ha integrado en el discurso político de la mayoría de procesos electorales. Tampoco son escasos los llamados a “irse a Cuba”, para aquellos que dan la mínima muestra de tener una ideología de izquierda. Más allá del evidente problema de violencia política que estas posturas representan, también está el hecho de que esto genera bloqueos en la búsqueda de acuerdos. No todas las izquierdas se moldean a favor del “castrochavismo”, así como no todas las derechas se ven reflejadas en las dictaduras militares del Cono Sur.

Es de significativa importancia reconocer también que la puesta en práctica de los valores entre izquierda y derecha están lejos de ser aplicado a plenitud en la región. Candidatos de “izquierda” terminan aplicando prácticas de “derecha” y viceversa. Las cátedras de filosofía y de ciencia política no han logrado construir ciudadanías plenamente conscientes de las características que dividen a una de otra tendencia, lo que contribuye que existan culturas políticas relativamente pobres (EIU, 2023).

¹⁴ Tras los resultados finales se podría plantear esta postura como cierta. Sin embargo, en términos de protección de la institucionalidad, emitir este tipo de declaraciones representa un riesgo severo para la democracia pues puede provocar conflictividad en la transición, así como reducir la gobernanza en el futuro.

En consecuencia, la aplicación de la política tampoco termina entrando en el “tipo ideal” que se enseña en las clases de administración pública; variaciones culturales, limitaciones económicas, y desviaciones de la norma impiden una plena ejecución de la política, incluso cuando hay buenas intenciones de por medio. La democracia entonces adopta dos facetas en conflicto: por un lado, se entiende como un modelo ideal en el que el ciudadano es capaz de elegir a su político, pero por el otro, los políticos no son “buenos” y hacen mal su trabajo y los resultados son insatisfactorios, por lo que la democracia no es el mejor modelo, o incluso es menos deseable.

Posterior a ello, se debe prestar especial atención a las desviaciones en el uso del poder, pues los que lo cooptan hacen un uso desproporcionado del mismo, sin respetar las divisiones de los poderes del Estado, desconociendo la legitimidad de la oposición, interfiriendo con el trabajo de la prensa, recurriendo a las instituciones del Estado para beneficio propio o dentro de una agenda exclusiva ligada a su ideología particular, en lugar del interés general. Este dualismo entre el deber ser de la democracia y las debilidades en su ejecución hacen que la mayoría de regímenes políticos en la región sean entendidos como democracias defectuosas o modelos híbridos, con apenas tres democracias plenas: en Chile, Costa Rica y Uruguay (EIU, 2023). A pesar de que como región se encuentra detrás del norte global en Norteamérica y Europa Occidental, hay que añadir que el uso de recursos populistas y demagogos, tanto de la izquierda como de la derecha, estaría contribuyendo al deterioro de la calidad democrática en la región, por lo que se “ha registrado la mayor recesión democrática de todas las regiones en los dos últimos decenios” (EIU, 2023, p. 31)¹⁵.

En una coyuntura de estabilidad y prosperidad, la competitividad democrática podría ser motor de transparencia en la gestión, en la actualidad parece más bien ser un síntoma de un modelo político incapaz de satisfacer a su gente. En este sentido, el constante vaivén político puede llegar a generar un riesgo innecesario, vinculado con el contexto de corrupción al que se enfrenta de manera crónica la región. Al no contar con procesos estables ni garantías de continuidad, el constante cambio de autoridades y tendencias políticas puede ir minando la política de Estado. La diplomacia es probablemente uno de los espacios con mayor visibilidad en este sentido. La agenda de socios y aliados de varios países en la región ha tenido giros drásticos. Con un gobierno se establecen estrategias liberales y se marcan caminos de cooperación junto a

¹⁵ Vale la pena destacar que los estándares planteados por el EIU nacen de una visión occidental-liberal de la democracia, por lo que podría haber reflexiones desde otras corrientes ideológicas que conciben insuficiente o inadecuada esta comprensión del fenómeno.

Estados Unidos o Europa, y con el cambio de gobierno se hacen giros hacia China, el resto de los BRICS, y hacia los vecinos regionales. Esto genera incertidumbre, lo que afecta al comercio internacional, pero también aumenta el malestar social de los segmentos que pierden representatividad en las agendas internacionales de sus Estados.

De la misma manera, los giros políticos se vuelven problemáticos cuando no existe un apropiado respeto a los procesos de administración pública. La existencia de la polarización implica ciclos de persecución contra funcionarios que trabajaron en administraciones anteriores, y el surgimiento de movimientos políticos anti-Estado implica también el despido de funcionarios. La consciencia de esta pérdida de estabilidad podría favorecer a la persistencia de prácticas de corrupción. Esta última idea requiere un análisis mucho más profundo, pero puede entenderse en términos de supervivencia económica; si las personas saben que solo tienen cuatro años de trabajo estable (pensando en que sobrevivirán a los constantes giros políticos), se tratará de aumentar los beneficios económicos, aunque esto implique actuar por fuera de la norma o la ética. De la misma manera, esto transforma a la burocracia en un cuerpo de gobierno y no de Estado, con funcionarios que responden a favor de las agendas de los políticos de turno en lugar de a los intereses nacionales.

La alta rotación burocrática y la interrupción de procesos públicos entorpece la calidad de servicio entregado al ciudadano. De esta manera, los niveles de satisfacción del ciudadano con los servicios de su Estado empiezan a reducirse, ampliando discursos en los que se busca reducir la aportación, eliminar puestos de trabajo, o privatizar espacios estratégicos. Cabe destacar que en ningún momento se debe apelar por un modelo donde el Estado tenga control absoluto de los sectores donde el sector privado sea más eficiente, pero se debe salvaguardar el bien común, y evitar la consolidación de los monopolios naturales que dejan a las personas privadas de bienes y servicios que deberían ser de carácter público. En cualquier caso, el objetivo debe estar en el beneficio de la comunidad humana que hace parte del Estado-nación en todos sus estratos, no solo con los segmentos con los que se tiene afinidad.

Sin embargo, esto no es posible mientras los esquemas de corrupción sigan vigentes. Como lo establece Luciana Torchiaro “en el continente americano, 27 de 32 países llevan varios años en un punto muerto en la lucha contra la corrupción. Es preciso hacer mejor uso de la tecnología, redoblar la colaboración entre los fiscales a lo largo de la región e implementar más medidas con-

tendientes para represar los flujos financieros ilícitos” (InSight Crime, 2023). En general, los países de ALC se encuentran en posiciones incómodas en el Índice de Percepción de la Corrupción, con la excepción de Uruguay y Chile (14 y 27) (Transparency International, 2022), por lo que las sociedades tienen mayores niveles de desconfianza interpersonal lo que, a su vez, contribuye a las fracturas del tejido social, provocando pérdidas económicas y sobre todo, una mayor violencia.

Precisamente, una de las cuestiones que más insatisfacción genera en este sentido es el sentimiento de inseguridad. El miedo a ser ultrajado de sus pertenencias es algo común en la región. La cercanía al hurto y al robo es algo que resulta casi común en ALC, la gente ya conoce de antemano que no puede confiarse en ciertos espacios de la vida pública en los que la posibilidad de regresar a casa sin un celular, un bolso, o una billetera es alta. El castigo social por la ingenuidad también suele ser alto, las víctimas de la inseguridad muchas veces son sancionadas por el reproche del entorno cercano e incluso de desconocidos. Dejarse robar, violar o matar es una irresponsabilidad propia para algunos. Y esto está lejos de ser una justificación al delito o al crimen, es solo saberse vulnerables. LAPOP (2021) encontraba que al menos 46% de la gente en la región percibe que sus barrios son algo o muy inseguros.

La arquitectura de la región habla mucho de este sentir. Raras son las construcciones que no están rodeadas por un muro, una cerca de alambre de púas, rejas metálicas o, en los casos más drásticos, una mezcla de todo. A esta lista se le suman los pintorescos cristales de botellas rotas, clavos, o el ya tradicional cableado de alta tensión para evitar intrusos. Los sistemas de videovigilancia son prioridades en las municipalidades que se los pueden permitir, en negocios prósperos para sus operadores e importadores. Las empresas de seguridad privada son proveedoras de empleo que muchas veces acogen a miembros de las fuerzas de seguridad pública que no lograron continuar con sus carreras estatales, o incluso llegan a ser espacios en los que infractores de la ley pueden reformarse. Los edificios de departamentos o los conjuntos de las principales ciudades suelen tener varios turnos de “guardias” que tienen como rol proteger a las decenas o cientos de habitantes que confían en la seguridad que contratan directamente por encima de aquella provista por el Estado a través de sus fuerzas policiales.

La imagen hollywoodense de casas con amplios jardines sin muros externos, o apenas con vallas de madera o cercos vivos son la excepción a la regla;

reservadas para alguno de los conjuntos privados o tal vez para la ruralidad. E incluso los espacios públicos o los parques de varias ciudades están cercados o tienen horarios de uso. Esto último poniendo a prueba el concepto mismo de lo público. Ahora bien, algunos podrán argumentar que incluso en Europa o Estados Unidos donde los derechos y libertades civiles están más desarrollados y defendidos, también existen este tipo de limitaciones. No obstante, en un entorno como el de ALC donde lo privado es limitado en función de la clase económica, con poco espacio de desarrollo o satisfacción de necesidades personales, la ausencia de lo público termina siendo una privación adicional.

La limitación sobre el espacio público no viene solo del Estado (normas) o desde lo privado (costos de uso), sino que lamentablemente también está condicionado por la violencia. En más de un sentido, se puede argumentar que por más que se generen espacios públicos de poco sirve si el ciudadano común tiene miedo de salir de su casa o su barrio. El sentimiento de inseguridad es probablemente el factor de inconformidad sistémica que más resuena (y une) a ALC. Pero esto no es aislado, desde el norte global la percepción sobre inseguridad en la región también es amplia. Los países desarrollados incluso tienen lineamientos de seguridad para visitar ALC. La Figura 13 refleja la imagen proyectada desde los Estados Unidos, poniendo a varios de los países de la región como zonas inseguras donde el viajero debe tomar serias consideraciones o incluso no atreverse a viajar.

Es más, conociendo el pesimismo local, algunos se animarán a cuestionar si no se está siendo demasiado gentil con la categorización. En cualquier caso, lo cierto es que existe un problema real en términos de la seguridad en ALC. Tal vez la ausencia de conflictos bélicos hace menos dramática la presencia de la región en los medios internacionales; hablar de estratagemas de corrupción y delito común vende, pero no tanto como los grandes conflictos militares del mundo. El meollo del asunto está en que para la población de la región no basta con no vivir sin guerras, si es que de por sí no puede vivir una vida en paz.

Figura 13

Mapa de recomendaciones de viaje de Estados Unidos sobre ALC



Nota: Adaptado de: Department of State y Bureau of Consular Affairs, s.f.

Como golpe al orgullo nacional, pocos podrán debatir la consideración del Departamento de Estado.

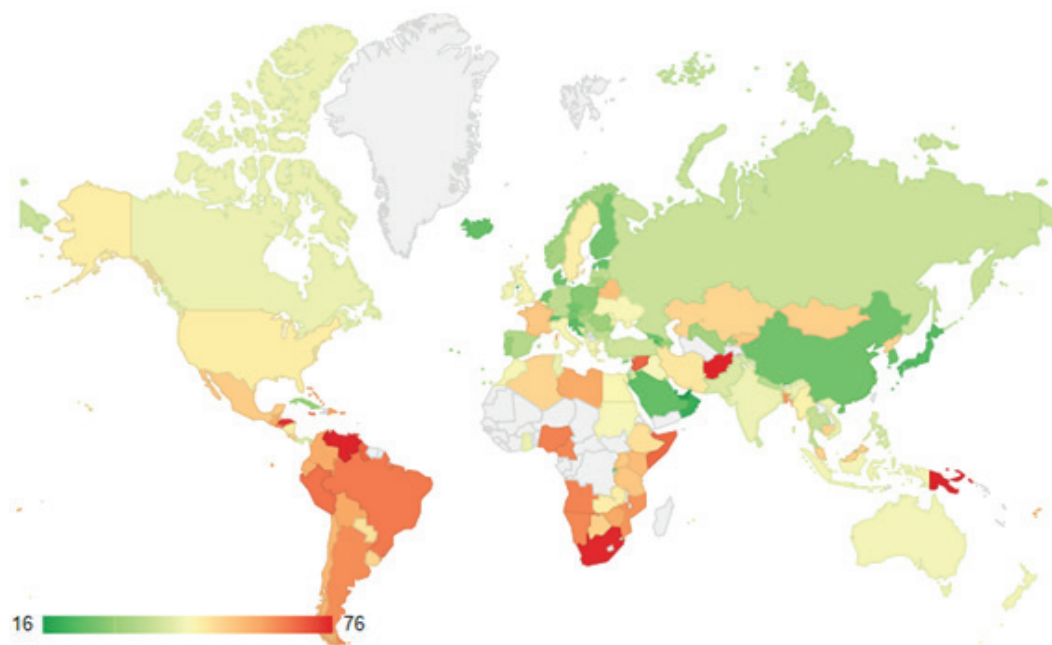
En este sentido, el siguiente capítulo aborda a mayor detalle los aspectos de la (in)seguridad en la región. Nuevamente habrá reflexiones particulares que varios lectores o especialistas podrán desconocer como una realidad general; especialmente para aquellos que forman parte de los entornos excepcionales como Chile, Costa Rica y Uruguay, que han formado parte de la mayoría de excepciones de este texto, y a los que se suma Argentina de acuerdo con la calificación de estos países en el Índice de Paz Global (IEP, 2023). En cualquier caso, como se verá más adelante, el gran reto de los Estados de la región es empezar a pensar más allá de sus fronteras nacionales. La ineficiencia en la gestión y la debilidad de sus capacidades han abierto las puertas a enemigos que actúan sin distinción de su nacionalidad o estatalidad. Entre el agotamiento, la frustración o simplemente la ambición, el crimen organizado se suma a la competencia por la riqueza, el poder, y en el peor de los casos, la legitimidad.

Capítulo III: Los actores criminales como ejemplo de transnacionalidad

Si hay una agenda que ocupa permanentemente los titulares de la región es el temor a la inseguridad. Aupada por la pobreza y la desigualdad, los delitos contra la propiedad, incluyendo aquellos que devienen en crímenes violentos, son un elemento de sempiterno malestar para la gente de ALC. Como se plantea previamente, existen excepciones, países donde la criminalidad ha sido aislada a bolsillos en los segmentos suburbanos y que no termina de extenderse a las zonas más pudientes y frecuentadas por los turistas, o casos como el de Cuba, donde el control del Estado es tan amplio que se previene el delito de antemano. Lo cierto es que la percepción de inseguridad no es exclusiva a los medios de comunicación, sino que se extiende a la sociedad civil. La Figura 14 refleja un mapa global sobre la percepción de criminalidad donde se puede ver a ALC como una de las regiones más inseguras, en paralelo con un continente como África, donde debe resaltarse el hecho de que se trata de una zona todavía afectada por los conflictos bélicos, los grupos extremistas y que son al menos un siglo y medio más joven que los Estados de ALC.

Figura 14

Mapa del índice de criminalidad por país 2023



Nota: Tomado de Numbeo, 2023

Este problema se ha agravado en los últimos años. El crimen organizado es un fenómeno que ha tomado ventaja del debilitamiento de los Estados, la falta de resultados en la lucha contra la desigualdad y, sobre todo, las brechas en la cooperación entre Estados. El análisis comparado entre los resultados presentados por la Global Initiative Against Transnational Crime (GIATC), que ha publicado el Índice Global de Crimen Organizado en 2021 y 2023, demuestra una tendencia hacia la inseguridad global (Global Initiative Against Transnational Crime, 2023). Y este no es un problema exclusivo de ALC, según el GIATC, 83% de la población global vive en países con altos niveles de crimen. Dentro de todo, esta es una cuestión de carácter económico; de acuerdo con Nick Lewis, del Standard Chestered Bank, alrededor del 4% del PIB global —equivalente a cerca de 4 billones de dólares— pertenecen a la economía criminal (Global Initiative Against Transnational Crime, 2023).

La criminalidad en general tiene muchas facetas, la característica general es que rompe con la norma establecida. Lo que es un delito en un país puede variar en otro por factores culturales, económicos o históricos que la criminología puede explicar de mejor manera. Sin embargo, existen algunas áreas generales que se suelen incluir dentro de los esquemas del crimen, sobre todo cuando se trata de un esquema organizado.

La Figura 15 aglutina a la mayoría de estas áreas, que se asocian normalmente con un objetivo común: la satisfacción de objetivos económicos. Cuando la búsqueda de riqueza se pervierte en un esquema en el que se está dispuesto a hacer daño a otros, se entra en ciclos que requieren la sanción del Estado para reparar el perjuicio realizado y evitar nuevos agravios. El problema empeora cuando no se trata de un solo individuo, sino de una agrupación que opera de forma sistemática en detrimento de otros.

Figura 15

El “pulpo” del Crimen Transnacional Organizado



Nota: Tomado de Gortaire-Morejón, 2022b.

El crimen organizado transnacional es una amenaza que nace de todos los aspectos mencionados en los anteriores capítulos. La incapacidad para lidiar con la pobreza y la desigualdad, el fracaso del aparato político para encontrar soluciones cooperativas, la ausencia de una capacidad real de cooperación internacional entre los Estados, y las múltiples agendas insatisfechas son la cuna de un mal sistémico en el que grupos dedicados al delito optan por extender sus redes de acción más allá de las fronteras nacionales y comienzan a actuar de forma incluso más orgánica que los Estados. Y aunque existen excepciones, el desinterés por sus compatriotas pareciera ser una característica que se aglutina en estos grupos. No solo existe una pérdida de la empatía con la víctima directa de algún acto violento como el robo o el asesinato, o de los esquemas de explotación como la trata y tráfico de personas, sino que se pierde el remordimiento de hacer un severo daño al país del que forman parte.

Los poderosos cárteles de la droga de América Latina y el Caribe desafían el control estatal sobre el territorio y son corrosivos para las instituciones nacionales, además de amenazar la seguridad de los ciudadanos de a pie. Este problema ha exacerbado los ya elevados niveles de corrupción en la región y está erosionando las normas democráticas en muchos países. (EIU, 2023, p. 13)

La gran cantidad de recursos producida en las actividades ilegales permite a sus operarios transformarse en verdaderos agentes disruptivos. En algunos casos, su desempeño es tal que empiezan a actuar como gobiernos paralelos a los de su Estado, imponiendo su autoridad a través de la fuerza armada, la extorsión, el chantaje, y el miedo, mientras que, en otros casos, la autoridad se ejerce a través de relaciones clientelares con la población, o incluso con miembros del gobierno legítimo, con transacciones económicas, garantía de seguridad, e incluso provisión de servicios.

La magnitud del crimen organizado en ALC es tal que, por ejemplo, si se considerase a los cárteles mexicanos como un grupo empresarial, sería el quinto empleador más grande del país, con entre 160.000 y 185.000 miembros (Prieto-Curiel, Campedelli y Hope, 2023). Se debe señalar que la economía criminal, a pesar de su atentado a la ética, genera empleos, mantiene familias, y dinamiza la productividad de varios de los Estados de ALC. Esto genera procesos de secuestro social en los que algunos sectores de la población ven con más desconfianza a los gobiernos. A esto se debe sumar la pérdida de la confianza interpersonal, llegando incluso a puntos en que los mismos empleados del Estado no terminan de tener confianza plena entre sí. La posibilidad de que oficiales de otras instituciones públicas, o incluso de que sus propios equipos de trabajo tengan vínculos con grupos criminales entorpece la gestión pública. Una lucha compleja que se acompaña de la presión natural del trabajo, la demanda de mejora desde el resto de la sociedad civil, y los potenciales recortes presupuestarios y laborales.

Para agravar la situación, el aprendizaje de la criminalidad organizada es muy rápido. Esto se debe en gran parte a la gran flexibilidad que los actores criminales tienen comparativamente frente a los actores estatales de acuerdo con Angela Olaya de la Conflict Responses Foundation (Global Initiative Against Transnational Crime, 2023). Los grupos del CTO han encajado en el modelo capitalista sacando provecho de los vacíos estructurales del régimen global actual. Mientras que los Estados perpetúan visiones antagónicas con la modernidad, tratando de mantener imaginarios de nación que son esquivos para las nuevas generaciones, el CTO se acelera y compenetra con la búsqueda de bienestar económico, e incluso de estatus. De esta forma, se aprovecha de las necesidades de las personas para atraerlas y captarlas en sus bases.

Ya se ha discutido varias veces sobre los factores de desigualdad que favorecen no sólo a la insatisfacción con el sistema, sino también a la pérdida

del tejido social. Las carencias de educación, las pérdidas en afectividad y la descomposición del vínculo con el otro contribuyen de manera nociva a que los individuos que participan de actividades delictivas sean más violentos. Esto se refleja en los altos índices de homicidio intencional que se registran en la región;

UNODC estima que la mayor parte (37%) de los homicidios intencionales en el mundo fue registrada en las Américas, aun cuando en la región vive menos del 8% de la población mundial. La presencia de armas de fuego ilícitas agrava aún más el impacto de la violencia, con un estimado de 75% de homicidios cometidos con armas de fuego, cifra significativamente superior al promedio en el mundo (54%). (UNODC, 2022a, p. 9)

El CTO es solo parte de estas cifras, pues la violencia no le es exclusiva. Sin embargo, los grupos criminales potencian este tipo de delitos violentos pues se anclan en el miedo en búsqueda de la impunidad. Su trabajo empieza temprano, en búsqueda de jóvenes a quienes reclutar, sacando provecho sobre todo de los más vulnerables, asegurándose también tener a miembros más manipulables e incluso más desensibilizados. Por ejemplo, solo en México se estima que “hay entre 30 y 40 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) que sirven para algún cártel de drogas o grupo criminal local” (Martínez, 2023). En la escalada de la violencia en Ecuador, uno de los sectores más afectados son precisamente los menores de edad, que son reclutados para ser sicarios (Ramírez, 2023). Los grupos del crimen organizado buscan también aprovechar la normativa que protege a los NNA para evitar sanciones más duras, e incluso evitar el perfilamiento o generar sorpresa pues rara vez se espera que sea un menor el atacante con intenciones homicidas.

No es la primera ni la única etapa en que los NNA se han visto particularmente afectados por la violencia. Tampoco es la única coyuntura en la región. El reclutamiento de menores de edad para la participación en conflictos internos ha sido otra de las heridas más bochornosas de la región. Miles de niños fueron reclutados en El Salvador durante su guerra civil, de entre 1980 y 1992, con un 60% de reclutamiento forzado y un 80% de las fuerzas siendo menores de edad, y que dejó al menos 75,000 muertos (Pestaña, 2007). El impacto de la guerra y el trato enfrentado ha dibujado la nueva sociedad salvadoreña en un entorno que, incluso tres décadas después, parece aún no haber roto con la violencia. Las maras que nacieron de las cicatrices de la guerra y que acosaron a su sociedad durante estos años parecen ahora estar en extinción frente al

régimen de Bukele. No obstante, y como se verá más adelante, parece que la lección sobre evitar dejar más víctimas inocentes no ha quedado asentada con solidez.

Otro de los casos a mencionarse es el de los NNA reclutados durante el conflicto interno en Colombia, pues retumban como uno de los ejemplos donde el Estado se mostró incapaz de proteger a los más vulnerables. Alienados y privados de la protección de sus familias, miles de NNA se transformaron en enemigos del mismo aparato que les negó la seguridad para tener infancias sanas. Incluso tras la firma de la paz entre las Farc y el Estado colombiano, los remanentes de las guerrillas y los grupos criminales que han heredado los espacios no ocupados por el Estado han continuado con su acoso a la niñez, con lo que hasta el 2022 se registraban al menos 600 niños reclutados para actividades por fuera de la ley (Watson, 2022). De la misma manera, el 2023 no ha sido un año sencillo e incluso se registró un incremento durante el primer trimestre del año en el reclutamiento de menores de edad (Hernández, 2023).

El caso colombiano es importante, pues también fue el punto en el que las causas políticas de los conflictos internos dieron un oscuro giro al volverse negocios destructivos y violentos. Las guerrillas de América Latina fueron (y en algunos casos siguen siendo) reflejo de que el problema de la desigualdad no es un fenómeno reciente. Y aunque la mayoría nacieron ancladas en una aspiración ideológica de cambio profundo del sistema en beneficio de las mayorías, o por lo menos de los más vulnerables, lo cierto es que perdieron cualquier ápice de legitimidad en el momento en el que empezaron a optar por actos criminales para sostener sus campañas de resistencia. El peor de estos vínculos es el narcotráfico.

“ALC es el origen de toda la cocaína consumida a nivel global y en algunos países de la región se ha reportado la producción a gran escala de cannabis, metanfetaminas y heroína con fines de tráfico transnacional” (UNODC, 2022a, p. 16). Esta producción tiene como destino principal el norte global, con Estados Unidos, Europa y habría que sumar a Australia como los destinos más atractivos para entregar productos que apenas sirven para satisfacer breves momentos de euforia, pero con potenciales riesgos severos en la salud mental y el entorno social de los consumidores en caso de caer en adicciones. Este texto no tiene el alcance de reflexionar acerca de los orígenes del consumo ni de las adicciones, pero sí debe destacar el severo impacto que tiene que algunas personas en su egoísmo carente de empatía con el mundo hagan uso de

productos que cuestan millones de dólares a los Estados de ALC en costos de seguridad, y sobre todo la pérdida de miles de vidas humanas, solo para cubrir una necesidad superflua en alguna discoteca, estudio de grabación, hotel, o mansión.

A pesar de esta realidad, el aumento del consumo de drogas alrededor del mundo, especialmente de la marihuana, es permanente y exponencial con alrededor de 284 millones de personas, de entre 15 y 64 años, que consumieron algún estupefaciente al menos durante 2020 (UNODC, 2022b). Esto representa un incremento de cerca del 26% del consumo en relación con la década de los 2010 (UNODC, 2022b). A esto se suma que entre los impactos de la pandemia de COVID-19 se debe agregar también un incremento en el consumo debido a factores de salud mental, como compensación a la depresión y ansiedad (Ali et al., 2021; Senate RPC, 2022); un impacto que se ha empezado a notar en las dinámicas de inseguridad regional, y sobre todo para países como Ecuador, que ha entrado en un ciclo de violencia único en su historia.

Otro de los impactos de la pandemia fue el estancamiento de la exportación de lo producido durante los meses de aislamiento y cuarentena global. Como lo planteaba Naciones Unidas:

La producción y distribución de cocaína parece estar interrumpida en los países productores de América Latina, al mismo tiempo que la escasez de heroína en Europa y Norteamérica está causando que sus consumidores recurran a prácticas aún más peligrosas. La recesión económica a largo plazo causada por la pandemia tiene el potencial de conducir a una transformación duradera y profunda de los mercados de drogas. (Naciones Unidas, 2020)

Esto tuvo al menos tres efectos notables. El primero fue el uso de la droga como forma de pago; principalmente en Ecuador, un país históricamente considerado como de paso, se pudo ver cómo los grupos del crimen organizado empezaron a pagar a las personas que participaban en la logística con droga y armas en lugar de dinero (Primicias, 2023c). Esto se tradujo en aumento del consumo local, pero también en la ampliación de los grupos que participaban en el comercio de cocaína; a los tradicionales carteles mexicanos y colombianos se han sumado actores extrarregionales como la mafia albanesa. Esta competencia generó conflictividad, pero también su propio proceso de I+D, ampliando también la red de clientes, los modos de operación, y mejorando las estrategias de acción (Primicias, 2023c). Otra variación notable ha sido el

incremento de la participación de las mujeres, pues el crimen organizado normalmente tiende a acoger solo a hombres. Esto se ha registrado principalmente en México, donde se ha visto que las mujeres participan en “la recopilación de información, el tráfico de drogas a pequeña escala, el sicariato y la dirección de células delictivas” (Loaiza, 2023). Incluso se ha comenzado a ver a agrupaciones pequeñas lideradas por mujeres.

El segundo efecto notable puede ser denominado el efecto de represa rota. Es decir, cuando el comercio global regresó a la normalidad, toda la droga que se había acumulado empezó a salir de forma masiva, tratando de aprovechar el incremento de la demanda y, por lo tanto, de los precios. Como consecuencia, durante los últimos años se han registrado cifras récord en incautaciones, principalmente de cocaína, no solo en ALC, en Ecuador y Colombia, sino también en Europa, en Países Bajos y España, e incluso en Asia, en Hong Kong (Primi-cias, 2023d; Rodríguez, 2023; Raziél, 2023; DW, 2023c; La Moncloa, 2023). Esta realidad rompe con el discurso demagógico de ciertos actores políticos que han asociado el aumento de las incautaciones con un gran desempeño de sus fuerzas de seguridad; lamentablemente, lo que muestra la tendencia es que se decomisa más porque se comercia más.

El tercer efecto de la pandemia hace referencia al incremento de consumo de sustancias más peligrosas, como se señaló previamente (Naciones Unidas, 2020). Tras la pandemia, los índices de consumo de fentanilo aumentaron significativamente en Estados Unidos. Las redes sociales —principalmente Tik Tok— pusieron en evidencia la aterradora realidad de decenas de ciudades estadounidenses donde “zombies”, producto de la adicción a los opioides, se tambaleaban o yacían en las calles a plena luz del día, en una de las imágenes más depresivas que el hegemon global puede ofrecer sobre su ciudadanía. Y aunque el fentanilo no es una droga reciente, su popularización en los últimos años, en gran parte anclada a la pandemia, ha contribuido a la mayor crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos. “En 2021, murieron 107.622 ciudadanos estadounidenses de sobredosis, 94% más que en 2019. De ese total, el 82,3% de los casos involucró opioides sintéticos” (Pérez Ricart y Ibarrola, 2023).

El fentanilo presupone un nuevo desafío para los Estados Unidos, toda vez que su producción es relativamente más sencilla que la de otras drogas, y los materiales para su elaboración son más fáciles de acceder para los grupos criminales en México. En consecuencia, Pérez Ricart e Ibarrola (2023) han encon-

trado que el fentanilo ya ha provocado algunos cambios en las dinámicas del CTO en México, pues han generado que las organizaciones se fragmenten y reduzcan su tamaño, se busque la profesionalización de sus cuadros (al más puro estilo de la famosa serie *Breaking Bad*), y se apunte a la desterritorialización. Esto último adquiere un talante diferente cuando se piensa que gran parte de la incapacidad de los Estados en dar respuesta a este tipo de problemas radica en que existen sólidas resistencias a operar de forma flexible, por lo que un aumento en la movilidad de estos actores ilegales solo podría afectar aún más en la capacidad de dar respuestas eficientes y efectivas a los nuevos grupos y dinámicas.

La desterritorialización potencialmente también afectará a los vínculos comunitarios entre los grupos del CTO y la población local (Pérez Ricart y Ibarrola, 2023). Aún no existe total comprensión del impacto que tendrá esto en términos de seguridad e incluso en los cambios en las economías criminales. Sin embargo, uno de los riesgos que deben alertarse es que la ausencia de interconexión social se traduzca en mayores índices de conflictividad y violencia. Al no tener una relación de apego con la comunidad donde se realizan las acciones, los miembros de los grupos criminales tendrían menos escrúpulos en hacer daño a la sociedad civil local. El efecto Pablo Escobar, en el que los capos de la droga se vuelven una especie de mecenas violentos, pero que retribuye a su entorno con favores económicos e incluso obra social, potencialmente se vuelve imposible, quedando solo el esquema de resentimiento, violencia y explotación.

En este punto es importante destacar que, a diferencia de los grupos armados organizados, los grupos del crimen organizado tienden a carecer de objetivos políticos que puedan ser reconocidos como legítimos. La aspiración de un grupo criminal tiende a ser económica o material, para satisfacción de intereses personales; mientras que la esencia de un grupo armado tiende a ser la búsqueda de un objetivo relacionado con la toma del Estado, ya sea en búsqueda de un cambio en la gobernanza o en términos de control territorial, hacia una independencia. Esto no significa que el crimen organizado no pueda hacer uso del Estado para sus objetivos, pero se debe considerar que este uso no tiene un fin altruista de por medio. Como se propone en la Tabla 8, existen diferencias relevantes entre los Grupos del CTO y los Grupos armados que deben ser tomadas en cuenta no solo desde una perspectiva académica, sino que son vitales para diagnosticar el tipo de intervención necesaria para enfrentar el desafío que cualquiera de estos grupos representa para el Estado.

Tabla 8

Caracterización de Grupos del CTO y Grupos Armados

Grupos del Crimen Transnacional Organizado	Grupos armados
Tienen un objetivo económico o material	Tienen un objetivo político, que puede verse complementado con un objetivo económico o material
Se desarrollan en espacios donde el Estado no cuenta con un legítimo control del territorio o de las relaciones de intercambio	Se desarrollan en el marco de un conflicto interno
Prefieren operar lejos del aparato estatal o lo usan a su favor sin integrarse a él	Buscan el reconocimiento del aparato estatal
Carecen de reconocimiento o legitimidad estatal o política	Pueden contar con reconocimiento o legitimidad internacional por parte de otros Estados o grupos políticos
Pueden optar por mantener una relación cooperativa con su entorno, pero tienden a basar su control en la coacción y el miedo	Dependiendo de la popularidad del reclamo original puede tener una gran aceptación en su entorno, o pueden recurrir a la coacción y el miedo
Sus miembros permanecen afiliados por un beneficio económico o material, incluso por factores de afinidad, o por coerción	Sus miembros permanecen afiliados por un motivo ideológico, pero también puede alinearse a objetivos económicos materiales o coerción
Sus operaciones pueden extenderse a más de un territorio nacional en función de los beneficios que esto genera	Tienden a operar dentro de un solo territorio nacional o zonas fronterizas al mismo

Nota: Tomado de Gortaire-Morejón, 2022b.

Distinguir el tipo de amenaza resulta tan importante como un buen diagnóstico médico. Es cierto que un tratamiento agresivo de antibióticos puede curar una infección, pero también puede hacer un severo daño a otros órganos del cuerpo, o en su defecto, puede no ser el motivo real por el que se curó el individuo, sino que la persona pudo curarse a pesar del tratamiento y no como consecuencia de este. De la misma manera, un gobierno puede optar por tratar a un grupo de crimen organizado como un grupo armado y aplicar un tratamiento que deteriora otros aspectos de la vida de la nación, o que provoca daños en personas inocentes, sin siquiera solucionar el problema original.

La historia en ALC parece sincerar la realidad de que, incluso tras la eliminación de las amenazas contra el Estado, si no se atiende a las causas de origen, los problemas resurgen décadas después.

También es importante destacar que una aproximación securitista, entendida como el aumento de los medios de fuerza, sanciones más fuertes y reducción de garantías legales, puede traer buenos resultados en términos de control de la violencia y percepción de inseguridad en las calles en el corto plazo. Sin embargo, no es una garantía de éxito. Los casos más destacados son nuevamente Colombia y México. En su intento de lidiar con las guerrillas y con los grandes carteles del narcotráfico ambos países emprendieron procesos de refuerzo a sus fuerzas de seguridad en los denominados Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. Estos son casos emblemáticos del error en la comprensión de los fenómenos a los que se buscaba atender. Por ejemplo, Hurst (2002) escribía:

El “Plan Colombia”, la pieza central de 1.300 millones de dólares de la estrategia de Estados Unidos para reducir los hábitos de consumo de drogas ilegales en el país mediante la reducción de la oferta en los países de origen es fundamentalmente defectuoso. No sólo no cumplirá su objetivo principal de reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, sino que además tendrá el efecto indeseable de provocar un derramamiento de sangre adicional en el extranjero, al proporcionar más combustible a una guerra civil que dura ya 37 años.

El Plan Colombia partía desde una lógica de eliminación de la amenaza. Se buscaba erradicar la producción y el tráfico de drogas, y deshacerse de las organizaciones guerrilleras y de los carteles, ambos grupos atados a al narcotráfico (Rosen y Martínez, 2016). Para esto, Estados Unidos financió y armó al ejército colombiano, se proporcionó capacitación táctica y estratégica, se compartió inteligencia, se generaron líneas de financiamiento y se apoyó en los procesos como las fumigaciones a las plantaciones de coca, lo cual generó conflictos severos con comunidades locales e incluso con población ecuatoriana debido al impacto que químicos como el glifosato tuvieron en la salud de víctimas inocentes. En una estrategia que estuvo vigente entre el año 2000 y 2015, Colombia se aseguró la presencia de militares y contratistas estadounidenses, aunque no se logró concretar el objetivo del presidente Álvaro Uribe para que Estados Unidos pueda usar siete bases en territorio colombiano (AFP Colombia, 2018).

En cualquier caso, aunque el Plan Colombia aportó con concepciones de fuerza debilitaron el poder relativo de las FARC, se trató de un mecanismo que no abordó “las causas profundas de la insurgencia en el país, que se centran en una profunda desigualdad económica y una violenta exclusión política” (Rochlin, 2010, p. 716). De esta manera el Plan Colombia terminó siendo abandonado en lo que muchos consideraron un fracaso y un desperdicio de recursos, aunque sus defensores procuran reivindicar su impacto, casi siempre sin hacer mención de que se sobredimensionaron los resultados originales y surgieron una serie de consecuencias negativas vinculadas con violaciones de Derechos Humanos, la perpetuación de al menos una década más de conflicto interno, e incluso la inutilidad al momento de detener la producción de droga, lo que aumentó año tras año (Rincón y González, 2021). Parte del problema radica en que el cálculo del daño económico difícilmente puede cuantificarse, por lo que puede generar miopía en términos de admitir el daño real que el Plan Colombia tuvo en el objetivo de interés popular de proveerles seguridad.

En la actualidad, Colombia tiene una neblina que se eleva desde sus élites bastante inteligentes en el marketing y la alegría envidiable de su gente. A pesar de haber superado una de las etapas más crueles de su historia con la firma de la paz con las FARC. Colombia está lejos de ser un país pacífico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue en actividades, y en conflicto activo contra el aparato estatal colombiano, aunque mantiene ciclos de negociación con el gobierno. Los grupos paramilitares, producto de la fallida intención de tratar de solucionar el conflicto permitiendo actividades de grupos que, en principio, no tenían obligaciones para respetar el Derecho Internacional, también persiste. Y ahora se puede decir que muchos de sus miembros se encuentran integrados a los grupos de crimen organizado e incluso conectados con parte de las disidencias de las FARC y otros grupos con los que tuvieron que enfrentarse en primera instancia (Turkewitz, 2022).

En otra de las historias fundamentales a relatar, y a pesar de lo infructuoso del Plan Colombia, la narrativa de los agentes de la securitización logró también llevar la agenda hacia México, después de décadas de ascenso de los carteles del narcotráfico y una agobiante pérdida del control del territorio no solo por la captura de los cargos políticos, sino por la falta de voluntad política para acabar con las redes de corrupción, buscaba desesperadamente una salida, y qué mejor que con el apoyo de Estados Unidos. En 2008 se lanzó la Iniciativa Mérida, llamada así por la reunión que los presidentes Bush y Calderón tuvieron en la ciudad del mismo nombre, replicando la lógica de provisión de apo-

yo a las fuerzas de seguridad mexicanas a través de inteligencia, capacitación y líneas de financiamiento. Una vez más, los mecanismos utilizados fueron infructuosos en el objetivo de enfrentar a los grupos criminales y reducir el narcotráfico.

Para Arteaga (2009), por ejemplo, la Iniciativa Mérida fue una estrategia que aportaba de forma negativa a debilitar la democracia mexicana, pues normalizaba los espacios de excepcionalidad. Esta crítica es importante de analizar, pues plantea uno de los grandes retos de la seguridad moderna, en la que los derechos y libertades alcanzados después de largos procesos de lucha y consolidación social no pueden simplemente ser descartados en la búsqueda de seguridad. El Estado no tiene como opción escoger entre una corriente o la otra, sino que tiene la obligación de proveer seguridad mientras garantiza una apropiada gestión democrática y garantías civiles. Adoptar una aproximación de guerra contra los grupos criminales, aunque para ciertos sectores conservadores puede resultar atractivo en el mensaje, lo cierto es que en la práctica se traduce en una confusión, pues lleva a un problema de carácter económico y social, a una categoría netamente de seguridad.

Ahora bien, la intervención a través de medios de fuerza no es negativa per se. De hecho, frente a actores violentos que no buscan legitimidad en el Estado es prácticamente imposible dar una respuesta que no implique una contención. Es importante admitir que, dentro del esquema del crimen, y sobre todo en el marco del crimen organizado, existen individuos que no se ven operando a través de medios netamente legales. Para algunos, el costo de oportunidad de entrar a una “vida decente” es más alto que continuar operando por fuera del marco normativo, otros se ven a sí mismos como irrecuperables. El reto para los gobiernos es justamente distinguir entre aquellos que no tienen reparo en vivir en permanente conflicto con su sociedad de aquellos que atraviesan un potencial periodo de transgresión, pero que con las herramientas adecuadas pueden compensar su daño para posteriormente entrar en una dinámica de compromiso con su entorno y la ley.

Sin embargo, con aproximaciones securitistas se cae en dinámicas de criminalización generalizada, sobre todo por el involucramiento de las fuerzas armadas en acciones de seguridad sin tener la capacitación y entrenamiento para ello, por lo que se potencian las violaciones de Derechos Humanos (Melgar Manzanilla y Márquez Gómez, 2018). El conflicto surge de que los medios utilizados y la comprensión de la amenaza están desorientadas, sobre todo

porque la capacitación para las fuerzas militares está enfocada hacia la guerra, por lo que no se reconoce al adversario en la categoría de ciudadano, sino directamente como enemigo. En este sentido, entre 2006 y 2019, se llegaron a registrar 301 casos y 1712 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo casos de tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales (México Unido Contra la Delincuencia, 2021).

Más allá de estas aterradoras cifras, la debilidad de la estrategia fue tal que, entre 2006 y 2021, México acumuló “más de 300,000 asesinatos, en su mayoría atribuidos al crimen organizado, y unos 90,000 desaparecidos” (El Economista, 2021), demostrando un muy pobre cumplimiento de los objetivos de la estrategia aplicada. Precisamente por ello, en 2021 se declaró al Plan Mérida como “muerto”, aunque la cooperación entre México y Estados Unidos no paró, pues se abrió un nuevo plan entendido como el Entendimiento Bicentenario (El Economista, 2021). En términos prácticos el giro estratégico no fue realmente drástico. En el Entendimiento Bicentenario se han plantado iniciativas conjuntas para reducir la adicción a las drogas, con campañas educativas sobre los peligros del fentanilo y la importancia de eliminar el estigma asociado al uso de sustancias para apoyar tratamientos y la recuperación. Además, se ha establecido un panel binacional de expertos en salud pública y se ha trabajado en la capacidad forense para identificar víctimas de desaparición forzada (Consulado de México en Orlando, 2022).

En el ámbito de la seguridad fronteriza, se intensificaron los esfuerzos para combatir el tráfico de narcóticos, armas y personas, con patrullaje espejo en la frontera compartida y la coordinación con el Departamento de Seguridad Interior y otros socios del orden público (Consulado de México en Orlando, 2022). Según las fuentes oficiales mexicanas, se ha incrementado la incautación de drogas, la detención de líderes del crimen organizado y existe un mayor rastreo de armas de fuego con conexiones entre México y Estados Unidos (Consulado de México en Orlando, 2022). Además, se ha aprobado la legislación en el Congreso de los EE.UU. para fortalecer las leyes contra el tráfico de armas y proporcionar fondos para la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). En el ámbito financiero, se han bloqueado cuentas vinculadas a narcotraficantes y se ha implementado un enfoque innovador para el enjuiciamiento de traficantes de drogas, incluyendo la emisión de las primeras sanciones por tráfico de armas (Consulado de México en Orlando, 2022).

La nueva estrategia todavía no es evaluable en su totalidad. Se ha llegado a un punto de caricaturización del problema debido al mensaje de “abrazos

y no balazos” promovida por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y por la percepción de que los grupos criminales de México no han cedido, sino que se mantienen activos y en constante evolución. Los grupos del crimen organizado juegan con el control legítimo del territorio mexicano, estableciendo controles al libre desplazamiento, ostentando la autoridad para regular las relaciones comerciales y el uso de la tierra, y tomando el control de relaciones políticas en varias localidades. El problema se agrava debido a la competencia existente entre los propios grupos del CTO, principalmente de grupos mayoritarios como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, que se disputan “Sonora, Zacatecas y Baja California, pero también lo hacen en Chihuahua con el Cártel de Juárez. En el sur del país se enfrentan con Los Zetas en Veracruz y Tabasco” (Infobae, 2023b).

El impacto de esta competencia no solo está en la violencia que genera heridos, muertos y millonarias pérdidas, tanto en las filas de los grupos criminales, como en las fuerzas de seguridad del Estado, y también en ciudadanos inocentes, sino que se traslada al imaginario sobre la conflictividad. México avanza y se desarrolla paralelamente al caos de su inseguridad, mientras el debate en algunos Estados gira en torno a la supervivencia, a la necesidad de emigrar, a la probabilidad de actuar por fuera de la ley para sobrevivir, o a la incapacidad de circular en las noches por los toques de queda planteados por los cárteles; en localidades como Ciudad de México se debate sobre la gentrificación producida por los cientos de nómadas digitales que han inmigrado al país. El contraste mexicano ya ha sido vivido en países como Colombia, donde la violencia era una posibilidad probable, pero para muchos era una probabilidad más propia de la ruralidad que de las ciudades. Ahora las decenas de tiroteos y asesinatos anuales solo son estadística y parte de las cadenas de Telegram y WhatsApp, o un rincón muy oscuro de Twitter.

El futuro parece incierto, y esta incertidumbre genera ansiedad en ciertos sectores, no solo de México, sino de ALC como un conjunto que buscan desesperadamente una salida que les garantice paz. La posibilidad de que los gobiernos tomen el control a través de medidas de fuerza se valora como legítima, y justamente el camino de la securitización predispone a visiones en donde los actores gubernamentales (que asumen el rol de los buenos) tengan toda la autoridad necesaria para poder eliminar a las amenazas, aunque esto implique tener autoridad sobre la vida de sus propios ciudadanos. La situación de malestar genera una falsa narrativa de que es mejor tener líderes ho-

nestos con atribuciones extraordinarias, a que no se haga nada y se permita a la “gente mala” seguir cometiendo sus fechorías.

No obstante, como se venía diciendo, al ligarse con regímenes con tendencias autoritarias se favorece a que surjan actitudes criminales desde el Estado. Esto se debe a que cuando se pierde la capacidad de control a los gobiernos se favorece al establecimiento de esquemas en los que el aparato estatal se transforma en un medio de enriquecimiento ilícito, o al menos ilegítimo, de aquellos que ostentan el poder. El problema también se agrava porque, en el marco de la excepcionalidad, las autoridades gubernamentales tienden a sacar beneficios carentes de un marco de justicia y legitimidad, lo que afecta al imaginario de la sociedad sobre sus líderes y el motivo real de sus acciones.

En los esquemas autoritarios la gente puede sentir seguridad en las calles, sin temer que otros individuos atenten contra ellos o su propiedad. No obstante, el temor a otros miembros de la sociedad civil tiende a ser reemplazado por el temor a las fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios políticos que, sin cadenas de control pueden hacer un uso abusivo de su autoridad. En los casos de autoritarismos de corte marxista, también se ve cómo el mismo aparato estatal se vuelve una amenaza contra la propiedad privada de sus ciudadanos. No obstante, la existencia de un gobierno autoritario no implica que los miembros del CTO desaparezcan, en algunos casos incluso llegarían a establecer alianzas o amalgamas con los regímenes, como se ha denunciado en el caso del cartel de los soles en Venezuela (Unidad de Investigación de Venezuela, 2022).

El problema entonces vuelve a girar en torno a la cuestión democrática. El GIATC ha encontrado que las democracias plenas demuestran una mayor resiliencia ante el crimen organizado que los regímenes autoritarios y los gobiernos intermedios (Global Initiative Against Transnational Crime, 2023). En este sentido, el fortalecimiento de la seguridad también está ligado al fortalecimiento de la sociedad civil para que, a su vez, esta también participe de forma más efectiva en la toma de decisiones políticas. La construcción de una sociedad civil organizada, con un tejido social más fuerte, genera resiliencia ante el crimen organizado y otros retos del siglo XXI. No obstante, el CTO tiene claro esto, incluso mucho más que los actores políticos, tanto así que en las zonas donde toman el control se aseguran de fracturar el tejido social, eliminando o cooptando a los liderazgos locales.

Uno de los gobiernos que ha ganado prevalencia en el debate de la seguridad es el ya mencionado caso del popular Nayib Bukele en El Salvador. En

funciones desde 2019, su estrategia de baja tolerancia al crimen, que ha combinado el despliegue de las fuerzas de seguridad a lo largo del país, la detención de decenas de miles de personas, la aplicación de un plan de presencia territorial abrasivo, combinado con un discurso de mano dura y ruptura con la agenda de Derechos Humanos, le ha ganado la admiración de muchos sectores y el rechazo de otros tantos. Varios políticos en ALC han intentado posicionarse como “el Bukele” de su país (Freeman, 2023), mientras que las redes sociales del presidente salvadoreño se llenan de comentarios y likes incluso de personas de otros países.

La estrategia de Bukele ha implicado el uso de prácticamente todo el aparato estatal direccionado a la pacificación del país. El presidente Bukele cuenta con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, y con eso se ha permitido cambiar el sistema judicial a su favor. De esta manera, entre marzo de 2022 hasta la fecha en la que se redacta este texto el presidente salvadoreño se ha permitido trabajar en un entorno de estado de excepción permanente, e incluso consiguió una modificación legal para poder postularse nuevamente a la presidencia, aunque la norma lo prohibía (Esteban, 2023). Con esta condición se limitan varios derechos y libertades, y se han podido mantener detenidas a personas que no han recibido juicios, de la misma manera se permitió hacer juicios masivos, algo que atenta contra el derecho a un trato diferenciado e individual. De la misma manera, se han registrado violaciones a derechos humanos de las personas detenidas y esquemas de potencial corrupción en las compras públicas (WOLA, 2022b).

Bukele ha adoptado una postura totalmente innecesaria, puesto que en su cruzada por la seguridad, ha roto con los organismos de Derechos Humanos, ridiculizando su misión y humillando a los defensores de Derechos Humanos. Esto ha provocado un falso imaginario de que los Derechos Humanos y la seguridad son antagónicos, cuando la realidad es completamente opuesta. La existencia de los Derechos Humanos busca garantizar seguridad para todas las personas y evita los abusos del Estado, sobre todo para los sectores antagónicos al poder de turno. En este sentido, Bukele y su gobierno han promovido un discurso violento y riesgoso para el futuro de la región, pues facilita a otros gobiernos autoritarios limitar derechos y libertades, alterando la cultura política de la sociedad regional.

Como se planteaba en el capítulo anterior, uno de los mecanismos aplicados para asegurar buenos resultados ha sido la propaganda en redes sociales.

Como revelaba una investigación de Reuters en 2022, el régimen de Bukele ha recurrido a contratar a gente (trolls e influencers) cuyo único rol ha sido el defender a su gobierno y mejorar la reputación del presidente salvadoreño, con evidente éxito (Kinosian, 2022). El proceso incluye crear “cuentas falsas en Twitter para alabar a Bukele y Nuevas Ideas y amplificar sus mensajes” así como “vigilar a los críticos de Bukele y denunciar cada mes a cientos de ellos ante Twitter por supuestas infracciones de las normas de la plataforma, en un intento de que la empresa suspendiera sus cuentas” (Kinosian, 2022). De la misma manera, el gobierno tiene el control de 14 estaciones de radio y 10 de televisión. Esto representa una de las estrategias de propaganda transnacional con mayor éxito hasta la actualidad.

Por otro lado, esto no significa que la población salvadoreña no encuentre en la mejora de su seguridad un profundo respiro de alivio, ni que todas las expresiones de satisfacción disponibles en internet sean artificiales, lo cierto es que existe una representación alterada de la realidad, que afecta a la comprensión real de la situación, tanto de los propios ciudadanos salvadoreños como de los observadores externos. Es cierto que mucha gente ha encontrado en Bukele una vocería y un líder para responder a su insatisfacción. Precisamente en los capítulos anteriores se analizaban los distintos factores de inconformidad sistémica de la región y el presidente de El Salvador ha sabido jugar con esa realidad y vender un discurso que no solo es efectivo para su país sino a nivel regional, con mucha gente de otros países que “desearían tener un presidente como Bukele”.

El problema es que la proyección de una realidad tergiversada invisibiliza a la minoría insatisfecha, la cual es perseguida de forma pública, siendo atacada y asociada con criminales. El irrespeto a la divergencia es una afrenta a la libertad de expresión y también pone en tela de duda la transparencia de la información revelada ante el mundo. Si el gobierno de Bukele fuese tan perfecto como afirma ¿Por qué tendría que negar la voz a cualquier opositor? ¿Qué habría que ocultar? Lo cierto es que varios medios y voces han revelado paulatinamente que el régimen salvadoreño ha recurrido a la violación de sus obligaciones con los derechos y libertades, incluso de inocentes para lograr la pacificación del país, pero también para cooptar el poder.

Los periodistas en El Salvador se han visto perseguidos y caricaturizados, una práctica común en otros gobiernos autoritarios de la región, como Venezuela o Nicaragua. Se reporta que al menos tres docenas de periodistas y opo-

sitores encontraron que sus teléfonos habían sido intervenidos con “spyware” (un software destinado para espiar y extraer información) aunque el gobierno salvadoreño se deslindó de esta denuncia (Kinosian, 2022). Oscar Martínez, periodista salvadoreño afirma que solo en su medio, 22 periodistas sufrieron de intervención, y durante 17 meses se ha sufrido espionaje (DW, 2023a). En una entrevista realizada a un exministro de seguridad salvadoreño se afirmaba que en general toda la oposición de El Salvador tiene sus comunicaciones intervenidas¹⁶. Lejos de ser actos de seguridad nacional estas son riesgosas afrentas a la libertad de la comunidad y peligrosos ejemplos para otros gobiernos que podrían animarse a replicar las estrategias.

La persecución a la oposición dista de ser una práctica reservada a El Salvador, en los últimos años, la dictadura de Daniel Ortega ha adoptado prácticas cada vez más denigrantes contra sus opositores. Más de 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad nicaragüense (Yugas, 2023), en algo que solo puede definirse como un crimen de lesa humanidad, al transformar a estas personas en apátridas, volviéndolas vulnerables a quedar privados de derechos tanto en Nicaragua como en el exterior. La expulsión de organismos no gubernamentales, empresas e incluso instituciones educativas, completan una sinfonía de atentados contra el pluralismo ideológico y las libertades civiles. Aunque las denuncias y vocerías en contra del régimen casi feudal de Ortega no son escasas, lo cierto es que las acciones para cambiar este contexto desde ALC han sido casi nulas.

La región ha entrado a un ciclo en el que los principios de “autodeterminación de los pueblos” y “no injerencia” se han vuelto prácticamente una excusa para pasar por alto los abusos cometidos por los gobiernos en contra de su pueblo. La ausencia de instrumentos transnacionales para corregir estas desviaciones antidemocráticas y que atentan contra la dignidad humana es notable. También lo ha sido en Venezuela, donde el régimen de Maduro incluso ha podido reasentarse en el poder, incluso llegando al punto de que la economía venezolana vuelva a crecer, después de casi una década de inestabilidad y caos. Claro que el régimen venezolano hace de menos los más de 7.7 millones de ciudadanos que han tenido que emigrar, de los cuales al menos 6.5 se han quedado en ALC (ACNUR, 2023). Y aunque algunos han comenzado a retornar a su país, varios optan por volver a emigrar al darse cuenta de que las condiciones siguen siendo peores que lo que tenían en el exterior (Luján, 2022).

¹⁶ Precisamente por este riesgo se opta por omitir el nombre del funcionario, para salvaguardar su integridad.

Con mucha probabilidad esta indiferencia al resto de regímenes le ha dado las señales al gobierno de Bukele para pasar por alto sus obligaciones internacionales y aplicar una agenda que, aunque se le debe reconocer el éxito en reducir el crimen común y organizado, se aleja de las buenas prácticas de gobernanza y hace un abuso flagrante de sus atribuciones, acercándose cada vez más a un totalitarismo. El exministro, al que se hacía referencia previamente, lo planteaba de forma irónica, al decir que las dictaduras tienden a ser muy seguras. Lo cual es cierto en la mayoría de los casos, pues el Estado a través de sus agentes de seguridad se encarga de eliminar a los riesgos cuando todavía están en un punto de amenaza. El problema de esto es que en más de una ocasión la amenaza es identificada de forma errónea, anclada a sesgos ideológicos y políticos, atacando a inocentes o sobredimensionando el castigo.

En términos generales el problema de las megacárceles es que son espacios difíciles de gestionar de manera sostenible. Si no se encuentran mecanismos que aseguren el apropiado manejo, aislamiento entre tomadores de decisión dentro de la cárcel y el exterior, y sobre todo un apropiado sistema de rehabilitación y reinserción el problema a futuro para El Salvador podría ser aún más grave que el que se ha solventado parcialmente. Como lo plantea Oppenheimer (2023) “así como los líderes [de] las maras se conocieron en las prisiones de California, las cárceles de Bukele podrían pasar a la historia como campos de entrenamiento de futuros ejércitos de delincuentes”. Este es un efecto que solo podría evaluarse en el largo plazo. El problema estaría en que el intermedio otros países podrían optar por replicar la estrategia salvadoreña sin calcular los impactos en el mediano y largo plazo¹⁷.

Se ignora, por ejemplo, el caso de la cárcel de San Pedro, en La Paz, Bolivia. En este centro de privación de la libertad prácticamente se ha entregado la administración del espacio a los mismos grupos delictivos, solo con 3300 detenidos (Semana, 2023). Ignorando al sistema de organización social por fuera de los muros de la prisión, San Pedro funciona a su propio ritmo, con dinámicas organizacionales inherentes, muy lejanas a la rehabilitación o la búsqueda de reinserción en la sociedad. En general, ALC no suele ser reconocida por la calidad de sus sistemas penitenciarios, pero la idea de generar espacios con una gran conglomeración suele estar asociada con la pérdida de capacidad de control en el corto o mediano plazo. Este problema se agrava cuando las propuestas carecen de sostenibilidad financiera, sobre todo si las supuestas soluciones no atacan al problema de raíz.

¹⁷ Mientras se escriben estas páginas el gobierno ecuatoriano ha planteado de establecer barcasas que sirvan como cárceles como una medida desesperada para contener a sus grupos de crimen organizado.

Como lo plantea Tiziano Breda, considera que:

...el peligro es que se expanda la noción de que solo con medidas de emergencia puede enfrentarse el crimen, aunque veo difícil que eso ocurra. Esto ha sido posible en El Salvador por sus características, un país pequeño, sobrepoblado, donde ha sido más fácil la concentración de poder. (Maldonado, 2023)

Precisamente por ello, la proyección falseada de la realidad hace menos transparentes los resultados. Por ejemplo, varios periodistas han denunciado y se encuentran investigando potenciales vínculos entre el gobierno de Bukele con los líderes del crimen organizado (DW, 2023a). Justamente esta es una de las agendas que requeriría mayor atención y transparencia, pero que el oficialismo está ocultando del ojo público nacional e internacional.

En 2020, informes del medio “El Faro” revelaron que documentos oficiales del gobierno salvadoreño habrían negociado un acuerdo de paz con las maras (Martínez et al., 2020). Según la investigación:

Cientos de reportes del sistema penitenciario que confirman decenas de reuniones secretas entre funcionarios y líderes pandilleros desde junio de 2019 e informes de inteligencia que explican lo pactado en esos encuentros. Los representantes del Ejecutivo y la MS-13 han negociado la reducción de homicidios, beneficios carcelarios y promesas de largo plazo vinculadas al resultado de las elecciones legislativas de 2021. (Martínez et al., 2020)

Este tipo de acuerdos no habría sido algo sui generis, en 2012 durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes también se logró una serie de acuerdos que permitieron reducir la violencia de forma temporal en el período 2012-2013 (Martínez et al., 2022; Esteban, 2023). En términos prácticos, si los acuerdos bajo el gobierno de Bukele son reales lo cierto es que habrían funcionado, pues El Salvador ha dejado de ser el país más violento de la región con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, a un país con solo 95 homicidios en los primeros cinco meses de 2023, aunque las muertes provocadas por las fuerzas de seguridad han dejado de ser computadas en la lista (Esteban, 2023; Swissinfo, 2023). Precisamente por esas variaciones metodológicas queda en entredicho la realidad del discurso bukeleano, a lo que además debe sumarse el hecho de que otros factores de inseguridad siguen siendo comparativamente mucho más altos que otros países de la región, por ejemplo “la tasa de criminalidad total en El Salvador continúa situándose entre las más altas del mundo” (Esteban, 2023).

El impacto de la estrategia actual también es cuestionado desde la perspectiva económica. Por ejemplo “el FMI predice que la deuda del país —alimentada conjuntamente por la costosa campaña antipandillas y las reformas económicas populistas— alcanzará el 97,5% del PIB en 2027. Si el gobierno no puede recortar los cheques, es difícil imaginar que policías y soldados sigan patrullando las calles gratuitamente” (Freeman, 2023). Una de las preocupaciones vigentes está ligada al impacto real de la estrategia de Bukele pues, a partir del pico de violencia de 2015, la tendencia sobre homicidios estaba decayendo gradualmente (Esteban, 2023). En este sentido, una de las preguntas a plantearse es si la radicalidad de la estrategia de Bukele era necesaria o si ha sido una excesiva muestra de poder de corte populista.

Por ahora las cifras de satisfacción y la imagen del presidente salvadoreño podrían darle la razón. La pacificación de la vida diaria también es importante, la economía de cualquier país puede mejorar si es que se logra un entorno seguro y estable. De nada sirve no contraer deuda o tener un buen manejo macroeconómico si es que la gente tiene miedo a salir a la calle o viven en permanente extorsión por grupos criminales, como pueden dar fe los ciudadanos ecuatorianos frente al gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023). Sin embargo, la popularidad no es sinónimo de un accionar apropiado ni sostenible. Varios dictadores en la historia han sido sumamente populares con la mayoría de su población, a costa del sacrificio de segmentos minoritarios. La obligación democrática y el marco del derecho internacional demanda que no se pasen por alto los abusos que podrían estar sufriendo sectores sin mucha vocería.

Entre los abusos denunciados se encuentran desapariciones forzadas, persecución selectiva basada en apariencia física, tatuajes, o denuncias sin respaldo legal, y trato denigrante en los centros de detención, que incluso han llegado al punto de provocar la muerte de los detenidos. “En algunos casos, las fuerzas de seguridad ni siquiera comunican a las familias el paradero de los capturados, lo que obliga a cientos de personas a peregrinar entre las barrolinas y los centros penitenciarios buscando información” (Focos, 2023a). De la misma manera, la falta de transparencia se vuelve criminal cuando no es posible comprender la cantidad de personas detenidas que están falleciendo al interior de las cárceles salvadoreñas, como lo plantea una investigación de la plataforma Focos (2023b) “la información sobre las personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción es casi inexistente, incluso para las familias que viven el duelo”. Cabe recordar que de acuerdo con la norma en sociedades democráticas es responsabilidad de los gobernantes el

proteger la vida de sus ciudadanos incluso cuando estos han sido privados de libertad.

La captura de civiles inocentes, pretendiendo que tienen vínculos con los grupos criminales ha sido otra de las denuncias registradas (Focos, 2023c). Hasta agosto de 2023 más de 7000 personas detenidas de forma injusta fueron liberadas (DW, 2023b). Sin embargo, la denuncia general es que existe un trato irrespetuoso e inhumano incluso contra aquellos que no pertenecen a ninguna agrupación criminal. “Las torturas que vive la población carcelaria en los centros penitenciarios son un castigo que recae sobre todos por igual” (Focos, 2023c). Bukele se ha mostrado resistente a admitir los errores de su gobierno en la gestión y respeto del debido proceso y trato humano. Es más, ha construido una narrativa burlesca en la que conecta a las personas que reclaman por un mejor trato hacia los detenidos (sobre todo aquellos que no han recibido ningún juicio) asociándolos con grupos criminales, para luego ser respaldado por olas de sus trolls y de segmentos antiderechos de la región.

Saliendo del apartado salvadoreño, existe un importante debate a ser destacado. En la comunidad de ALC se percibe un alto grado de desinterés e incluso animosidad contra los segmentos que tratan de abordar a las cuestiones de seguridad desde una perspectiva anclada en derechos. Las redes sociales son un campo minado para defensores de Derechos Humanos en la región. La agenda del Estado de Derecho todavía resulta ajena culturalmente para amplios sectores de la población, tanto desde una perspectiva de derecha que la asocia con el socialismo o el comunismo, como desde la izquierda que suele entenderlo como una postura burguesa. Tal vez, simplemente no se ha alcanzado el desarrollo cultural suficiente como para que la población se sienta en el derecho de exigir dignidad y derechos en todas las condiciones. A pesar de tener anclas en la visión cristiana-occidental, existen otros elementos coyunturales de la cultura política que es ajena a la irrenunciabilidad de la dignidad del individuo o el ciudadano frente al gobierno.

Por otro lado, es posible entender (sin justificar) que la frustración del entorno de inseguridad latente provoca una reducción en la empatía hacia aquellos que cometen delitos o crímenes. Esto no es propio de ALC, los discursos de respuesta violenta hacia la violencia están presentes en prácticamente todas las culturas. Y es que no son pocas las culturas (sobre todo en los casos no-occidentales) en las que el castigo físico, la tortura, y la privación de derechos son contemplados como respuestas válidas ante aquellos que atentan contra

otras personas, a la propiedad privada o el Estado. Sin embargo, lo que debe destacarse en ALC, es que el marco normativo interno y los compromisos internacionales adoptados por los aparatos estatales de los países de la región han sido asumidos alrededor del pleno cumplimiento de Derechos Humanos, por lo que su incumplimiento no solo es éticamente reprochable, sino que es directamente ilegal.

La inseguridad ha servido como punto de anclaje para que las medidas ilegales desde el Estado lleguen a tener apoyo popular. Sin embargo, paralelamente se debe destacar el rol que ha tenido Estados Unidos tras las intervenciones señaladas previamente, Washington D.C. también ha promovido estrategias de cooperación, sin llegar a ser mucho más legítimas, aunque varias se realizan en el marco del derecho internacional. Como se discutía previamente, el socio por excelencia en la materia de seguridad en Suramérica ha sido Colombia, siempre justificado en el conflicto de larga data que llevaba con los grupos guerrilleros, paramilitares, así como los cárteles de narcotráfico. México también ha sido otro socio estratégico, sobre todo por la relación vecinal, aunque esto no ha logrado evitar la penetración del narcotráfico tanto en términos institucionales como territoriales. Otros países como Panamá y Costa Rica se han beneficiado de tener la garantía de su seguridad anclada en un apadrinamiento desde los Estados Unidos, ya sea por factores geoestratégicos, económicos o culturales, estos países han logrado evitar la inseguridad como un mal crónico (al menos por ahora).

Como lo plantea Córdova (2023), Estados Unidos se encuentra en un ciclo de retorno a la región desde los términos de seguridad. En los últimos meses, tanto el cuerpo legislativo como el ejecutivo de los Estados Unidos ha trabajado en reforzar los mecanismos que le permitan desplegar esfuerzos económicos (en términos de defensa y seguridad) y militares en ALC, con los casos de Ecuador y Perú como puntos focales. Para Córdova (2023), los motivos que explican el marco político-estratégico de este retorno estadounidense se pueden resumir en la Estrategia para el Combate del Crimen Organizado Transnacional, generada en 2011 durante la administración de Barack Obama, que pone al combate CTO como una prioridad estratégica de los Estados Unidos, y que le da una relevancia adicional a su Comando Sur como fuerza articuladora de esfuerzos en la región.

El segundo elemento que define la coyuntura es la Estrategia de Seguridad Nacional generada en 2017 bajo el gobierno de Donald Trump, en la que se

colocaron a China y a Rusia como amenazas a la seguridad estadounidense (Córdova, 2023). En este sentido, se debe contemplar el hecho de que el incremento de la participación de la RPC en ALC a través de su agenda económica, que incluía la llegada de préstamos y capitales empresariales chinos, así como del incremento del comercio bilateral con los países de la región, y de los vínculos políticos que Rusia había reforzado principalmente con actores como Venezuela y Cuba, fueron vistos con suma desconfianza desde Washington D.C. La posibilidad de un desplazamiento de la hegemonía estadounidense se incrementó, por lo que tomar medidas para evitar la ampliación de estas agendas extrarregionales se ha vuelto en un punto de interés.

Como tercer punto, Córdova (2023) destaca la aprobación de la Ley de Fragilidad Global en 2019 así como la Estrategia de los Estados Unidos para Prevenir Conflictos y Promover Estabilidad de 2022. Estos documentos contaron con un respaldo bipartidista establecen condiciones para la prevención de conflictos de gran escala, acciones de estabilización, medidas de cooperación y de gestión de las acciones necesarias para salvaguardar la estabilidad y seguridad de los intereses estadounidenses (Bureau of Conflict and Stabilization Operations, 2022). Esta aproximación tiene una visión unilateral del mundo en la que existen algunos Estados más frágiles que otros que requieren de acciones para prevenir y solucionar conflictos, y aunque admiten la necesidad de coordinar con los organismos multilaterales lo cierto es que responden a criterios de interés nacional.

Finalmente, Córdova (2023) señala a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2022 publicada por Joe Biden, donde se incluye el concepto de disuasión integrada, lo que implica el uso de todos los recursos militares y no militares para asegurar que ningún adversario se anime a actuar hostilmente contra Estados Unidos. La concepción general que se extrae de estos documentos es que, para la Casa Blanca, así como para el resto de instituciones de los Estados Unidos, la agenda de seguridad es una prioridad estratégica que amerita la intervención no solo dentro de sus fronteras, sino a nivel global. Córdova destaca el hecho de que esto genera sesgos en la forma en la que se diseña la política exterior, algo que “se traduce en una expansión del poder militar en todos los demás ámbitos de la acción (Córdova, 2023, p. 3).

El retorno de la agenda de seguridad tiene criterios propios de la lucha contra la delincuencia, pero también tiene un criterio geopolítico, tanto a nivel interno como externo. Por un lado, la contención de la inseguridad puede ser

un medio para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Entornos locales más estables pueden reducir la violencia e inestabilidad que empujan a miles de ciudadanos de ALC a emigrar hacia Estados Unidos, en una agenda que incomoda de forma particular a los sectores más conservadores. Por otro lado, al tener en la seguridad un pilar de participación en la región, Estados Unidos puede evitar el desplazamiento promovido por la República Popular China, cuya agenda nacional requiere de los recursos naturales de ALC y potencialmente el apoyo diplomático de los países de la región para defender y promover sus intereses globales.

En cualquier caso, para varios países de la región entrar en la agenda de disputa hegemónica de parte de cualquiera de los bandos en conflicto pareciera no ser la opción más prudente. A menos de que existan acuerdos claros, más o menos horizontales, donde el país reciba beneficios específicos y se mantengan compromisos sostenibles y que se alineen con los objetivos estatales, el alinearse hacia solo un frente podría ser contraproducente. Es cierto que Estados Unidos difícilmente abandonará su palestra como líder global y continental, pero rechazar los vínculos con China es privarse de un socio que puede servir tanto como consumidor como proveedor. El reto entonces está en encontrar el equilibrio estratégico, estableciendo asociaciones que no representen una alineación total, aunque también se debe admitir que son pocos los países con capacidades instaladas para equilibrar su agenda a ambos bandos de forma perfecta.

Una de las características que aqueja a la gestión de las Relaciones Internacionales es la fuerza de la urgencia. Por ejemplo, en la coyuntura de inseguridad, la atención de la ciudadanía reclama por soluciones inmediatas. Incluso cuando las voces expertas encuentran que la puerta de salida es un proceso de largo plazo, el reclamo suele girar a las soluciones inmediatas. Este inmediatismo hace de la agenda global algo reservado para ciertas élites políticas y económicas, mientras el resto de la población busca salidas económicas o apela a la derrota del crimen como la prioridad. Ahora bien, es cierto que sin un entorno pacífico y estable los éxitos en el apartado diplomático pueden parecer superfluos, pero también es cierto que la apropiada gestión de la geopolítica no es un antónimo de la gestión de lo interno. Esta falsa dicotomía facilita a la postergación de la agenda internacional a un punto que no termina de llegar en el que lo nacional ya está solucionado.

Como se ha planteado en este texto, parte del problema de los Estados de ALC es que ahora se enfrentan a actores paralelos con gran capacidad de ac-

ción y que se muestran más conscientes de la necesidad de operar en el escenario internacional, solo que optan por hacerlo por fuera de la legitimidad¹⁸. Bien sea porque la gran capacidad financiera les ha permitido reclutar a individuos con conocimientos técnicos y profesionales, o simplemente por un conocimiento innato de su entorno, el CTO en ALC parece ser más que capaz de establecer una planificación estratégica. La ausencia de obligaciones éticas o judiciales simplifica su proceso de toma de decisiones y acelera los cambios necesarios. El CTO está regido por las normas del mercado, mientras existe demanda surgirá la oferta, y mientras existan condiciones de reclutamiento existirá personal que participe en sus dinámicas.

Como salida para el problema del CTO se han encontrado algunas opciones. Por ejemplo, la UNODC propone que la estrategia regional debería girar en torno a la armonización de iniciativas transfronterizas especializadas, el planteamiento de iniciativas nacionales y regionales para abordar delitos que afectan el ambiente, así como a establecer intervenciones basadas en la evidencia y adaptadas al contexto, colaboración nacional y entre países (UNODC, 2022). Ahora bien, en el papel estas propuestas enfrentan desafíos como la insuficiente capacidad económica de implementar estos procesos, la falta de voluntad política, la ausencia de personal especializado, la presión popular que busca resultados inmediatos, así como la amenaza permanente de los mismos grupos del CTO a los que no les conviene un cambio de condiciones.

Precisamente por esto, una de las discusiones que no pueden perderse de vista es el impacto que tienen las condiciones de vida en la región en la criminalidad. Desde el ámbito de la criminología se reconoce que existen factores genéticos que inciden en la psicopatía, pero como lo plantea Vicente Garrido, también tiene que existir un ambiente facilitador que detona las conductas patológicas (Wild, 2023). En este sentido, vale la pena cuestionarse si el ambiente que se genera en las desiguales y violentas sociedades de ALC no se está potenciando la activación de actores psicópatas capaces de hacer severo daño a su entorno. Pocos son los países de la región que mantienen un seguimiento apropiado de la salud mental de sus ciudadanos y, aunque el personal de salud, psicólogos, psiquiatras y otros grupos aliados trabajan en mejorar la comprensión de la relevancia de este eje de la vida humana, existe todavía un profundo desconocimiento y hasta rechazo cultural de entender a los aspectos psicológicos como factores que influyen en el desempeño colectivo de las sociedades.

¹⁸ Originalmente el argumento iba a ser que actuaban por fuera del derecho. Sin embargo, algunas agrupaciones del CTO han dado muestras de ser capaces de utilizar la ley a su favor, y han construido dinámicas y prácticas alrededor de los sistemas legales para evitar sanciones y orientar al aparato estatal a sus intereses.

LAC enfrenta como desafío que incluso en el escenario ideal en el que por acto virtuoso logre solventar todos sus males económicos y políticos de forma instantánea, el trauma generado en sus poblaciones provoca que individuos, e incluso segmentos amplios de la población, ya no crean en un modelo cooperativo o, peor aún, que actores con afectaciones psicopatológicas sean incapaces de adaptarse a una sociedad plenamente sana. El mundo desarrollado es prueba de esto, la criminalidad y la violencia difícilmente pueden ser llevadas a cero, y ocasionalmente surgen actores que rompen con la paz social y realizan daños severos contra otros. Los factores psicosociales potencian o contienen a los individuos en sus actos de violencia, y un entorno más saludable contribuye (pero no elimina) a reducir los crímenes, sobre todo si dicho entorno tiene mejores niveles de igualdad (sin ser esta la única variable). Como plantea Sen “no es difícil ver que la injusticia de la desigualdad puede generar intolerancia y que el sufrimiento de la pobreza puede provocar ira y furia” (2008, p. 7).

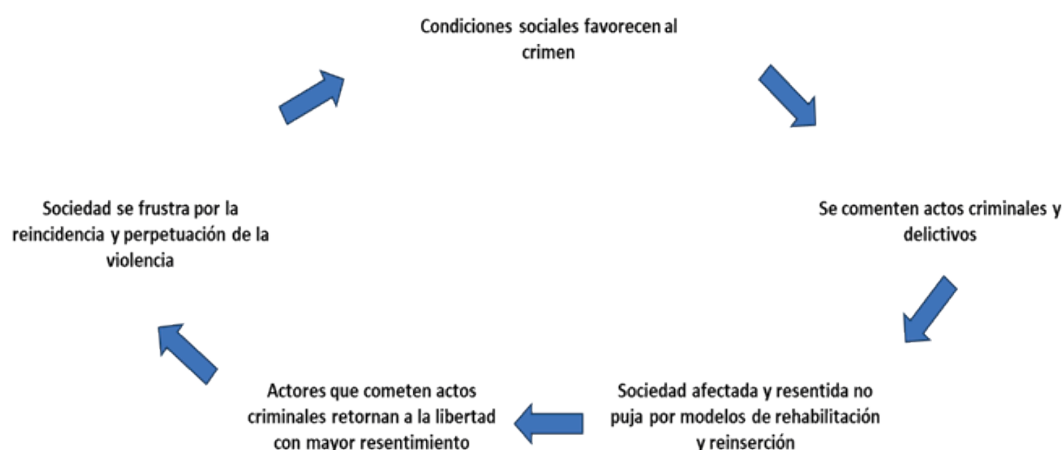
El punto central es que, mientras se mantengan dinámicas como las vigentes, donde el individuo enfrenta constantes entornos de malestar, con pobreza, hambre y desnutrición, falta de empleo, inseguridad, falta de acceso a la salud y la educación de calidad, ausencia de redes de apoyo y contención, permanente polarización política, esquemas de violencia desde la sociedad y desde el aparato estatal, y, en general, una coyuntura de estrés permanente, tampoco es sorprendente que la cantidad de actores que actúan violentamente sea tan alta. Esto no es de ninguna manera una justificación ética, es simplemente una explicación de la realidad. Que esta explicación devenga en una obligación moral para empezar a actuar para reducir los márgenes de probabilidad de generar actores violentos es una situación distinta.

Parte de la problemática pareciera radicar en que para atender a las causas del problema es necesario abordar los fenómenos con objetividad y lejos de las pasiones políticas. Sin embargo, como se ha visto en los capítulos anteriores, la cuna del problema y la respuesta del sistema están más cerca de la polarización que del abordaje técnico. En consecuencia, los problemas se perpetúan o, en su defecto, mutan hacia otras dinámicas que, sin ser solución, maquillan la realidad. En este sentido, la Figura 16 simplifica el ciclo de la violencia criminal que se enfrenta tanto en LAC como en otras regiones del mundo. Sin ignorar los factores individuales, lo que se debe entender es que la existencia de condiciones sociales que favorecen al crimen forma parte de un círculo vicioso que surge de la propia frustración de la sociedad. Sin embargo, esa frustración lo que genera es la perpetuación de modelos fracasados que generan que los

actores que cometen actos criminales continúen en las mismas dinámicas, prolongando y agravando las condiciones que favorecen al cometimiento de actos criminales.

Figura 16

Ciclo de la violencia criminal



Uno de los errores más comunes en el medio de este malestar es pensar que basta con eliminar a los individuos que cometen actos criminales. Una frase común en el argot popular es la conocida “muerto el perro, muerta la rabia”, en lo que se aduce que una vez que se elimina al actor delictivo se elimina el problema. No obstante, la misma frase nace de una falacia lógica. Si bien la muerte del agente que lleva el factor viral puede contener su expansión de forma temporal, lo cierto es que el virus de la rabia persiste en otros agentes o el medio natural. A la rabia no se la contiene porque se han matado a todos los perros, sino que se han requerido décadas de generación de condiciones de control, alejamiento de otras especies animales que puedan portar el virus y contagiarlo, esquemas de vacunación y control veterinario, normativa de control para mascotas, programas de educación sobre el buen cuidado de animales y limpieza del entorno, entre otros.

E incluso en el marco de esta condición, la rabia sigue siendo un patógeno que podría retornar si es que se incumplen con los protocolos que han servido para apartarla del día a día de la mayoría de la sociedad. En ese mismo sentido, la existencia del crimen y la violencia asociada no puede ser simplificada a la pena de muerte, que de hecho ha sido encontrada como factor insuficiente y contraproducente en la lucha contra el delito alrededor del mundo (Neuma-

yer, 2003; ACLU, 2007; Olutola, 2020; Guntara y Jamal, 2021; Oliphant, 2022). Esto no debe entenderse como la eliminación del uso legítimo de la fuerza, otra de las caricaturizaciones ultraconservadoras; el Estado debe intervenir a través de los medios necesarios para asegurar el bienestar de la población, pero su poder debe estar contenido a mecanismos que funcionan.

Otro de los problemas que enfrentan los gobiernos es que la materia prima para solventar sus crisis, que no es otra cosa que su propia gente, necesita aceptar y sobre todo dotar de legitimidad a las prácticas probadas como exitosas. Retomando el símil médico, no basta con que el médico sepa la cura para la enfermedad, sino que requiere de que el paciente confíe en su opinión, y sobre todo, que esté dispuesto a cumplir con el tratamiento. Desde la perspectiva política, pareciera que ocurre bastante que los expertos en su administración y planificación no son capaces de convencer a sus pacientes (la sociedad) de que sus propuestas son necesarias para solventar los males de sus naciones. La competencia por posicionar una agenda técnica frente a los populismos y las demagogias por ahora está pérdida y se debe enfrentar con resignación de que lo poco que se puede hacer es un avance y una contención para los males que aquejan a la región.

Precisamente por eso, los actores políticos de ALC deberían empezar a reflexionar, pero sobre todo a actuar, de una forma en la que se empiecen a sentar las bases de lo que se aspira como región. Las dinámicas de interconexión son permanentes, no solo desde una perspectiva de vecindad o cercanía cultural, sino que incluso es una visión impuesta desde el exterior. ALC tiene un rol imaginario en el mundo, y por ahora ese rol es contraproducente para los intereses de sus ciudadanos. Si no se empiezan a tomar más acciones, lo más probable es que ese rol sea internalizado en la propia cultura de la población, de manera que sea insuperable romper con esos patrones, debido al grado de normalización que tengan los patrones más habituales. Como se mostraba en el anterior capítulo, las herramientas de cooperación vigentes no son suficientes.

La integración regional de ALC tiene que adquirir criterios de supranacionalidad, porque las amenazas y competidores frente a los que se enfrenta tienen mayor capacidad de acción transnacional que los actores estatales de la región. Los nacionalismos y chauvinismos en este momento no solo resultan obsoletos, sino que responden a criterios abstractos que no marcan pautas de diferenciación suficiente. Tal vez con la excepción de Brasil, las Guayanas, y

algunas de las islas del Caribe, la fractura de ALC es más simbólica que práctica. Es importante destacar que los avances tecnológicos han simplificado las condiciones que llegaban a justificar las fracturas coloniales y el período formativo de los Estados de la región. Las telecomunicaciones y la capacidad de infraestructura moderna podrían modificar el diseño organizativo de la región y volverla mucho más exitosa y eficiente.

La lucha contra la criminalidad es un espacio en donde la supranacionalidad podría hacerse vigente. La consolidación de la Ameripol, una asociación policial al nivel de la Europol, no solo podría ayudar a “a que los países latinoamericanos mejoren su coordinación para combatir el crimen organizado transnacional” (Pintado, 2023), sino que también podría ayudar a la construcción de lazos de transnacionalidad a nivel de estructuras que son, en principio, apartidistas, y que en consecuencia pueden tener mayor estabilidad en el tiempo. Con una Ameripol realmente funcional se podría conseguir romper con la paradoja de la (in)seguridad.

La paradoja de la (in)seguridad es la condición en la que los actores de las fuerzas de seguridad del Estado, o de los actores cercanos a estas, establecen barreras a la integración porque ven en los otros actores estatales una amenaza. Esto ocurre debido a las teorías realistas de las relaciones internacionales, a los nacionalismos y otros factores de desconfianza a lo extranjero. Para el pesar del desarrollo de la región, la existencia de estos actores en la toma de decisiones perpetúa las brechas en los procesos de cooperación internacional. De esta manera, cuando se intenta trascender y tomar medidas supranacionales estos grupos suelen surgir como fuerzas de contención, entorpeciendo las dinámicas con argumentos securitistas o barreras burocráticas y normativas. Nuevamente, el problema es que los actores que operan por fuera de la legitimidad no utilizan estas narrativas ni construcciones identitarias, sino que priorizan sus beneficios económicos o de poder.

Precisamente por este trasapelamiento de los roles se ha contribuido al fortalecimiento de las narrativas anti-Estado discutidas en el capítulo anterior. En lugar de construir dinámicas útiles para la población que mejoren la calidad de vida, generen estímulos para el crecimiento económico y se generen dinámicas de orgullo y posicionamiento de imaginarios comunitarios, muchos gobiernos se han convertido en sinónimos de barreras y estorbos para el bienestar de la sociedad. No son pocos los que ven en el aparato gubernamental un enemigo, o por lo menos un punto de desafección que pareciera estar más

bien diseñado para el beneficio de su personal que para el de la población. En este sentido, un cambio en la forma en la que la burocracia opera es necesario en mayor o menos grado, dependiendo el país. Lo cierto es que, mientras el ciudadano de a pie está obligado a cumplir con los cientos de normas y controles, los grupos que operan por fuera de la legitimidad (y aquí hay que incluir a varios grupos de poder) se saltan las reglas y operan en su propio marco en detrimento del resto de la sociedad.

En general, existen aspectos culturales que ya deberían levantar las alarmas. La narcocultura es un fenómeno cada vez más vigente en varios países. No solo con las telenovelas o la presencia de esta temática en la música popular, sino también desde la perspectiva aspiracional. En algunos países, por ejemplo, México, ya se empieza a escuchar de forma permanente que el sueño de algunos niños es llegar a ser narcotraficantes (González, 2022). El deseo de pertenecer a un grupo, visto tantas veces en las pandillas juveniles, pero sobre todo el anhelo de salir del círculo de la pobreza, potencian la aspiración de sumarse a actividades delictivas, mientras los Estados-nación hacen poco para romper con esta idea, incluso llegando al inútil punto de solo cuestionar a los individuos que participan de estas ilusiones, en lugar de reflexionar por qué se ha llegado a tal punto.

Las redes sociales también evidencian una desensibilización sobre los profundos daños que tiene el narcotráfico en las sociedades. Una de las facetas oscuras de Tik Tok son varias cuentas de lo que informalmente se conoce como “CartelTok”, donde usuarios vinculados a los cárteles de la droga comparten vídeos sobre el cultivo, procesamiento y producción de diferentes tipos de drogas, aunque destacan los contenidos de cocaína, acompañados casi siempre con música relacionada con la vida de los narcotraficantes. Estas canciones, generalmente conocidas como narcocorridos, adornan las imágenes de lo que representa la vida de los cárteles y hacen ver a los vídeos de producción de droga como una actividad casual e insignificante. Aunque cualquiera puede acceder a estos contenidos y perder la capacidad de asombro frente a esta realidad, lo cierto es que el mayor impacto se da para jóvenes que, sin un criterio formado, pueden llegar a normalizar el mundo del crimen organizado, e incluso verlo como algo entretenido y atractivo.

Volviendo a la discusión sobre lo aspiracional, mencionada en el primer capítulo, el dilema radica en el hecho de que la vida del crimen organizado pareciera ser un modelo por lo menos deseable para miles de personas en el

continente. Existen algunos factores, por un lado, está la coerción violenta, la constante amenaza de que al no sumarse a los grupos delictivos se abre el escenario de ser víctima de estos, tanto personalmente como a nivel de familia o personas cercanas. Este secuestro forzado no es muy distinto a cuando las hordas reclutaban forzosamente a los territorios ocupados. Se podría argumentar que la diferencia es que en aquella época se mantenían profundas diferencias de agrupación social, factores culturales e incluso étnicos; ahora dentro de la propia comunidad, donde las diferencias son escasas, se toman medidas fagocitarias que terminan dinamitando su propio entorno y posibilidades de desarrollo¹⁹.

El otro factor va de la mano de las expectativas de vida. Si la sociedad formal solo presenta un espectro de supervivencia no es de sorprenderse que la ambición llevará a algunos individuos a aceptar medios de vida catalogados como inmorales por el resto. Desde la perspectiva ética es cuestionable, no puede entenderse como una justificación, sus actividades merecen la sanción correspondiente de acuerdo a la ley, pero también resulta casi un absurdo pretender que el moralismo es suficiente para contener estos escenarios de acercamiento con el crimen. Como se discutía previamente, la pobreza y la desigualdad no son garantías de bajeza moral o de participación en actividades ilegales, pero son factores que aumentan las probabilidades.

Nuevamente, la ausencia de datos específicos para la región hace difícil plantear certezas, pero otras referencias revelan que personas que viven en desigualdad y privaciones tienen muchas más probabilidades de participar en acciones delictivas, además es importante destacar que también es mucho más probable que se vean afectados por ellas (Harrell et al., 2014). Las sociedades deben entender, y si estas no lo hacen, por lo menos los tomadores de decisión, que el criterio moral no es barrera suficiente para eliminar la constante amenaza de inseguridad. Como lo plantean De Courson y Nettle (2021), los individuos en situación de vulnerabilidad “no pertenecen a tipos fijos, sino que condicionan su comportamiento a su nivel actual de recursos y al comportamiento de la población que les rodea”. Es más, para estos autores “la acción óptima para los individuos que están cerca del umbral de desesperación es explotar a los demás” (De Courson y Nettle, 2021).

Las páginas de este libro recogen varios de los elementos que podrían explicar por qué las nuevas generaciones ven en el delito un refugio o un objetivo y no como algo cuestionable y aberrante, como debería ser. La responsabilidad

¹⁹ Este tipo de condiciones no son exclusivas de LAC, ni propias de este período histórico

de cambiar estas condiciones debería estar en cada uno de los lectores de estas páginas, a menos que se busque ser cómplice de esta realidad. La oportunidad de salvación del futuro está anclada en que exista al menos la esperanza de que ese futuro existe. Sin condiciones para confiar en que hay una salida, el conflicto entre “buenos y malos” solo es un juego de disfraces en el que la ignorancia sobre la realidad ajena impide entender que esta no es una discusión binaria, sino que hay una escala de matices que requiere un ojo crítico para poder dilucidar cuál es la salida definitiva del laberinto actual

En este sentido, el reto para los Estados está en proteger a los sectores vulnerables del reclutamiento forzado y la extorsión, mitigar la probabilidad de participación en actividades criminales mejorando las condiciones sociales en las que se desarrollan sus ciudadanos reduciendo pobreza y desigualdad, y eliminar el marco aspiracional en el que la vida por fuera de la ley se pueda interpretar como la única alternativa de desarrollo. Este reto es particularmente complejo porque este tipo de aproximaciones son costosas, toman tiempo, y dan poco rédito político. En consecuencia, los tomadores de decisión suelen optar por medidas que resulten más llamativas para la población, recurriendo a muestras de poder y discursos de “mano dura”, que los vuelven más populares.

El problema es que la popularidad, como se ha visto en este texto, no siempre es traducción de resultados que perdurarán en el tiempo, e incluso la popularidad camufla los actos criminales desde el mismo aparato estatal. Y es que hay un último factor cultural que afecta a la región y que debe ser señalado, y va de la mano de lo mencionado en el segundo capítulo sobre los factores que hacen de la democracia un concepto sembrado de dudas y con tantos detractores. Y es el hecho de que existe una cultura política que abraza la violencia y la normaliza como válida siempre y cuando no se traduzca en una afectación personal o al entorno cercano. En ALC se percibe mucho apoyo a los actos de represión e incluso tolerancia a la violación de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional en sus distintas facetas.

En ALC aún existen sectores que peligrosamente apuestan por legitimar los abusos de poder desde los gobiernos que les son afines. La tortura y los tratos denigrantes, rechazados por la mayoría de constituciones u obligaciones internacionales contraídas por los Estados, siguen siendo demandados por la misma población. Este es un fracaso absoluto desde los sistemas educativos que no solo fallan en el aspecto ético de dotar de principios que erradiquen

conductas incivilizadas, sino que también niegan a sus ciudadanos comprensión sobre los riesgos a su integridad y a la reputación de su Estado frente al mundo. También es muestra de fracaso administrativo pues demuestra que no han sido capaces de entregar condiciones a su población en las que la extrema violencia no sea rechazada o anclada como un medio del pasado.

En este sentido, existen varios niveles de violencia que pueden ser aprovechados por los grupos del CTO. Por ejemplo, una sociedad de por sí desensibilizada a los actos violentos probablemente tendrá más elementos dispuestos a actuar violentamente. Los horrores vistos en países como México y Ecuador donde en cárceles, o incluso en la vía pública, se degollan y decapitan personas al más puro estilo del terrorismo radical islámico, son posibles porque las barreras morales son bajadas y porque el impacto ya sólo se alcanza con muestras de deshumanizante violencia extrema (e incluso muchas veces esto ni siquiera es suficiente por la normalización de estas realidades).

Continuando con el ejemplo ecuatoriano, los eventos de ataque masivo alrededor de todo el territorio, incluso llegando al punto de tomarse uno de los canales más populares de la televisión, mientras paralelamente se registraban tiroteos a nivel nacional, secuestros y asesinatos de guardias penitenciarios, autos quemados y coches bomba en diferentes ciudades del país, que tuvo como respuesta la declaración de conflicto interno por parte del recientemente ascendido presidente Daniel Noboa, son reveladores. El CTO ha llegado a un punto donde son capaces de desafiar al mismo Estado-nación. Este tipo de actos presentan una faceta del terrorismo pocas veces presenciado y prácticamente sin ejemplos de haber sido derrotado. Ecuador se ha transformado en ese sentido en un campo de prueba tanto de la medida de respuesta como para otras organizaciones delictivas.

El nivel de miedo provocado y el hartazgo por la desmedida violencia ha abierto las puertas para que medidas autoritarias y en violación del Derecho Internacional Humanitario (vigente desde la declaración de guerra) y los Derechos Humanos se vean justificadas e incluso animadas desde la misma sociedad civil. Al igual que en el caso salvadoreño, la población ecuatoriana parece más que dispuesta que la sanción al CTO vaya más allá de la privación de la libertad y caiga en actos igual o más violentos que los cometidos por los actores criminales. También se han dado fuertes muestras de desafección por aquellos que han advertido que este accionar, aparte de caer en una baja moral, puede representar el daño de la imagen del país frente al mundo y sanciones internacionales en términos legales, diplomáticos y económicos.

No obstante, sobre este último punto se debe destacar que el agotamiento de las sociedades con un sistema que, a su parecer, solo protege a los actores delictivos e incluso, presuponen, que justifica su accionar, también parece provocar una mayor tolerancia o indiferencia a los excesos de los Estados en la lucha contra el crimen. Si bien es cierto que los organismos de Derechos Humanos y los activistas del campo alzan su voz en contra de víctimas inocentes colaterales, trato injusto y cruel, mala gestión carcelaria, o directamente delitos contra el derecho a la vida, no es menos cierto que el régimen pareciera estar bastante debilitado y muchos de estos reclamos se quedan en lo simbólico. Aprovechando esto los regímenes optan por debilitar su reputación de forma temporal, arriesgándose a que los siguientes gobiernos tengan que pagar las multas, y compensar las críticas con las adulaciones e incluso agradecimiento de quienes buscan la erradicación del crimen.

Para cerrar este acápite se debe decir que ALC tendrá que sumar a sus dolorosos ciclos de dictaduras, conflictos internos, y crisis económicas una etapa de competencia con el CTO, los resultados de este último abate aún están pendientes. La experiencia pareciera favorecer a que la resiliencia de los pueblos de la región servirá como mecanismo para superar a este gran desafío. Sin embargo, como se ha visto a lo largo de este libro, se requiere un trabajo holístico que combine los esfuerzos de seguridad, con una agenda real de cambio en las estructuras para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad, y para que la política se mantenga como un campo de discusión retórica y no un campo de batalla abierto para la satisfacción de intereses personalistas en detrimento de la democracia y del bienestar general.

¿Podrán empezar a comprender los Estados de la región que la verdadera salida está en la transnacionalidad? Es una pregunta que requiere aún al menos un par de años de desarrollo. Mientras tanto el CTO no se paraliza y sus áreas de acción y número se potencian casi sin control. ¿Tendrán algún rol los organismos de integración vigentes o permanecerán al costado mientras las dinámicas de inseguridad se perpetúan? ¿Llegará en algún momento una etapa de reformulación del Estado que permita desafiar a los retos del siglo XXI o se seguirá optando por mantener la estructura vigente desde hace siglos? Por ahora, ALC no parece muy propensa a ser la primera región en innovar en su modelo de organización social, pero la urgencia de lidiar con el problema transnacional del crimen podría terminar siendo un incentivo para ello.

Capítulo IV: La región que no es. ¿Hacia dónde vamos y qué podemos hacer?

ALC es una región compleja que se construye muchas veces desde el exterior y que puja por distinguirse desde el interior. La noción de que el latino se vuelve más latino cuando sale de Latinoamérica parece una realidad cierta. Y es que hasta que no se ve el objeto desde el exterior no es posible ver lo homogénea que puede ser la cultura de aquellos que provienen de ALC, tal vez con la excepción de los países con un origen colonial inglés, francés o neerlandés. Muy similar al experimento de la bola de baloncesto en el que si se ve de cerca es posible de ver las miles de imperfecciones, pero desde lejos se alcanza a ver apenas una esfera, ALC es un compendio de diversidad semejante.

Cuando se dice diversidad semejante se hace referencia al hecho de que por más que los mismos latinoamericanos tratan de señalar sus diferencias, dentro de la heterogeneidad global la realidad de ALC sigue siendo equiparable. Ahora bien, y como se ha visto a lo largo de este libro, lo cierto es que las fracturas de la región hacen muy difícil cambiar la mentalidad interna de asociarla como un todo. Para una persona que crece en los barrios acomodados de Brasilia, la vida en la provincia de Esmeraldas resulta completamente ajena, incluso indiferente. Lo mismo ocurre para un habitante de La Paz frente a un habitante de La Habana. Es cierto que la región no es una copia exacta de sí misma, aunque algunos rezagos de la vida en colonia suspiran a lo largo de Hispanoamérica.

Es más, si se identifican los patrones generales, la región tiene importantes elementos comunes, sobre todo en términos de sus desafíos. Como se ha visto a lo largo de este libro no son pocas las facetas en donde los “males” de la región parecen compartidos, y lo cierto es que si se tomasen medidas de carácter regional resultaría mucho más sencillo obtener buenos resultados y acelerar los cambios estructurales necesarios. Por ejemplo, si se aplicasen medidas tributarias comunes, sería mucho menos probable que las empresas transnacionales y los inversionistas condicionen los esfuerzos de los gobiernos de ALC para enfrentar la pobreza y la desigualdad (cuando está en su agenda). Al mismo tiempo, se podría evitar de mejor manera problemas como la evasión y la elusión fiscal, asegurando una apropiada redistribución de la riqueza.

La lucha contra el lavado de dinero de forma articulada también se beneficiaría si los esfuerzos se realizan de forma integrada. Los Estados, en coopera-

ción con su banca nacional y agencias de regulación financiera, deberían mejorar la trazabilidad de los flujos de dinero, pero sobre todo la posibilidad de que sanciones y medidas de control puedan ser transversalizadas. El problema, que no es exclusivo de la región, es que los intereses económicos superan las buenas intenciones de los Estados, y los actores criminales (incluyendo a grandes evasores) mueven su dinero a aquellos países que han optado por mirar al otro lado frente al origen del dinero. Precisamente, si se lograsen compromisos más estrictos de forma colectiva se podría presionar para que aquellos países más flexibles en su control se integren a un modelo común transnacional.

Por otro lado, la lucha para mejorar la democracia en la región tiene que ser una prioridad comunitaria. Este libro es una referencia más de que la búsqueda del desarrollo está ligada a una mejora del sistema político. El ejercicio de gobernanza legítimo a través del Estado es uno de los remedios a las alternativas criminales que, tal y como se ha planteado y demostrado en este documento, se benefician de la contracción de las capacidades estatales. Ignorar esta realidad es seguir aplazando una solución estructural al entorno de corrupción y violencia que afecta a las distintas comunidades de la región. La ciudadanía debe entender que las tendencias ideológicas no deben ser excusa para proteger a gobiernos que han caído en el autoritarismo.

Probablemente este reto sea incluso más difícil que los aspectos de cooperación financiera. Mejorar la democracia en ALC no depende de un ejercicio a corto plazo, las generaciones vigentes ya adolecen de mantener una cultura política que, en muchos países, más bien responde a una incultura democrática. La falta de tolerancia traducida en polarización, y el desconocimiento sobre el deber ser del Estado abren las puertas a modelos administrativos poco funcionales que se anclan más en la popularidad y el marketing político que en una apropiada gestión de lo público. Como se ha visto en los capítulos anteriores, hay excepciones, pero lo cierto es que una de las tareas de la misma democracia es convencer a la gente de que es el mejor modelo.

Los detractores de la democracia, voceros del autoritarismo, el mesianismo y la demagogia acechan constantemente al debate público, y en varios casos logran convencer a la gente y alcanzar el poder. Aunque en el ciclo actual las dictaduras son minorías, lo mismo ocurre con las democracias plenas, tener esta excepcionalidad debe ser preocupación general. El trabajo está en la educación, se necesita reforzar la capacidad de la ciudadanía de pensar, reflexionar, filosofar, darles la oportunidad de ver en la política un campo de

desarrollo, no un espacio de conflicto, pereza, y abuso. Las lamentables cifras económicas hacen de esta una tarea difícil en el corto plazo, pero esto no la hace menos necesaria.

Otra de las agendas fundamentales está en los ámbitos de la inteligencia y la seguridad ciudadana. Si los cuerpos de inteligencia desconfiasen menos de sus vecinos la probabilidad de tener mayor control territorial sería más amplia. La perpetuación de agendas propias de los Estados premodernos genera y facilita el flujo de actores por fuera de la ley entre fronteras nacionales, haciendo más inseguro el entorno regional. El intercambio de buenas prácticas y acceso a nuevos protocolos y tecnologías podría acelerar y fortalecer las capacidades de aquellos países que se encuentran rezagados en relación con sus vecinos en la lucha contra el crimen organizado. La mencionada paradoja de la (in)seguridad podría verse derrotada a través de mecanismos como estos.

En una línea paralela está el ámbito de la defensa: tras décadas de paz, las Fuerzas Armadas se han mantenido estancadas en un modelo casi obsoleto, en el que sirven para una disuasión prácticamente innecesaria, pues sus capacidades apenas están a la altura de su vecindad, muy por detrás de los actores globales. En este sentido, las Fuerzas Armadas de ALC no son eficientes ni efectivas en su misión y perpetúan los retos del siglo XXI, en lugar de solventarlos; su naturaleza debería mutar, hacia un objetivo extravecinal y extrarregional. Sin embargo, la doctrina y la falta de claridad política ha impedido que se dé este cambio necesario.

Es más, algunos gobiernos han tratado de retomar uno de los peores aspectos de las fuerzas militares al tratar de adaptarlas a los intereses políticos del líder de turno en lugar de a favor del fin último de las Fuerzas Armadas, que es la protección del Estado. En este sentido, repensar a las Fuerzas Armadas y dotarlas de un carácter regional es uno de los pasos que en el futuro podrían asegurar una despolitización de las fuerzas, y la preservación del espíritu real de las instituciones militares. Al mismo tiempo, esto podría aportar a una mejora en la administración del gasto público, un esfuerzo más eficiente que le brindaría mayor capacidad de modernización y direccionamiento de las operaciones, así como una verdadera capacidad de incidencia en el sistema internacional desde una perspectiva de poder duro.

Al momento de redactarse este libro, ALC está prácticamente condenada a asumir una posición secundaria (por no hablar directamente de servidumbre) en varios de los espacios de toma de decisiones global. El sistema multilateral

actual no habla de un mundo entre comunes, sino de un sistema de varios escalones, donde aquellos países que quieren prosperar tienen que alinearse a lo establecido desde los grandes poderes globales, aunque esto no termine de anclarse en principios de justicia, ni siquiera en términos de la mayoría. Las brechas económicas y tecnológicas, especialmente en el campo militar, impiden una relación de horizontalidad entre los Estados. No admitir esto, no solo es caer en la ingenuidad, sino que es perpetuar un sistema viciado. Al mismo tiempo, resulta casi igual de ingenuo el pensar que los Estados que están a la cabeza en términos de desarrollo tecnológico y capacidad económica simplemente van a renunciar a sus ventajas de forma caritativa. En este sentido, los Estados de ALC que se encuentran en desventaja deberían apuntar a la cooperación internacional (con miras a la transnacionalidad) como forma para reducir estas brechas, entendiendo que un esfuerzo colectivo reduce costos de operación, dinamiza las capacidades instaladas, y acelera procesos que podrían tomar más tiempo.

Por otro lado, resulta fundamental cuestionar a la democracia desde un ojo crítico, que siga denunciando los autoritarismos, pero que al mismo tiempo busque un modelo superior o más democrático aún. La dinámica de la democracia nacionalista sigue siendo antidemocrática en su esencia y en su origen. Cuando los países se integraron a la ONU, en donde se reconoce a la humanidad como una sola especie, con un destino común, y se buscó el principio de igualdad ante un sistema multilateral, se reconocía también la igualdad de los individuos ante el mundo. No obstante, el modelo actual no les permite a aquellos en países en vías de desarrollo ejercer los mismos derechos que aquellos que habitan en los países industrializados o desarrollados. En este sentido, se sigue perpetuando un modelo de ciudadanos secundarios.

Aunque en este libro se han abordado a los factores socioeconómicos, políticos y del campo de la seguridad como motores de comprensión de lo que ocurre en ALC, lo cierto es que hay otros elementos que no pueden dejarse de lado y que merecen su propio campo de análisis. Es fundamental abordar el fenómeno del debilitamiento del multilateralismo, entendiendo la afectada institucionalidad del Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales y la cada vez más vigente bipolaridad entre Occidente y el sur global (Gortaire-Morejón, 2022b). El problema para ALC es que las acciones unilaterales no encuentran una respuesta real desde el multilateralismo, y su vocería poco o nada parecería mostrar frente al sistema mundo. Esto no solo es problemático en términos políticos, sino que implica un riesgo de seguridad,

pues en caso de que algún acto unilateral sea dirigido a cualquier país de la región parecería que no existe un espacio de contención global ante tal abuso.

La situación entre Israel y Palestina es ejemplo claro de ello. Aunque la mayoría de países han buscado establecer medidas para detener la ocupación y explotación del pueblo palestino, el sistema de Naciones Unidas se encuentra atado de manos ante la falta de decisiones vinculantes. Estados Unidos blinda con su veto a Israel ante el Consejo de Seguridad, único comité capaz de emitir resoluciones de cumplimiento obligatorio. Paralelamente, la Asamblea General reclamó por acciones de paz, como la resolución del 27 de octubre de 2023, en la que se buscaba una tregua humanitaria frente a la amenaza de invasión israelí a Gaza, tras los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, que encontró apoyo en 120 miembros frente a la oposición de solo 14 (con 45 abstenciones) (United Nations, 2023), y aun así las acciones de Israel continuaron sin oposición real. Sudáfrica alzó su voz al presentar un caso por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, demostrando que las lecciones de su apartheid han sido aprendidas, pero los efectos de esta medida difícilmente trasciendan de lo moral. Aquí se debe reconocer que a pesar de que la mayoría de países de ALC han votado a favor de Palestina, Paraguay y Guatemala adoptaron una postura a favor de Israel, lo que también es ejemplo de cómo ALC no mantiene una agenda común en todos los temas.

Lo que demuestra de alguna manera esta falta de efectividad del sistema multilateral es que, lamentablemente, existe una necesidad de reforzar las capacidades de defensa. Los Estados desprotegidos carecen de capacidad real de disuasión. No obstante, hay que saber que este aumento de capacidades se traduce en inversión militar, lo que a su vez implica reducir la inversión en otras esferas del Estado. En este sentido, y recopilando lo visto en este libro, resulta preocupante el retorno a una etapa en donde las amenazas y riesgos en el ámbito militar hagan necesario el repensar en un proceso de rearme. Sobre todo, porque la lucha para lidiar con la desigualdad, la pobreza, la inestabilidad democrática, la débil institucionalidad y los factores de seguridad interna, pueden perder prioridad en la agenda, o al menos parte del presupuesto que podía utilizarse en estos esfuerzos tendrán que ser reorientados perpetuando las problemáticas estructurales de la región.

El peor escenario sería que, por motivos ajenos a la región o por malas gestiones de la política local, los países de ALC se vean nuevamente envueltos en conflictos de carácter militar entre sí. Uno de los ejemplos de que la idea no

sería tan lejana fue la postura del diputado paraguayo Rubén Rubín, quien en septiembre de 2023 se le ocurrió afirmar que su país debería ir a la guerra con Argentina por un conflicto vinculado a la circulación en la hidrovía Paraná-Paraguay (Perfil, 2023). Aunque la propuesta de Rubín ha resultado más anecdótica y ha sido abordada incluso con burlas por lo absurdo de la propuesta, no deja de ser preocupante que se retomen estos discursos. No hay que olvidar que las tensiones entre Bolivia y Chile siguen vigentes por el asunto de la salida al mar del primero. Tampoco pueden ignorarse las movilizaciones de fuerzas militares a las fronteras en casos como el Venezuela hacia su frontera con Colombia, vinculadas al tema de la crisis migratoria venezolana, pero también a las fracturas políticas entre sus regímenes (Euronews, 2019), o acciones similares de Perú hacia sus fronteras con Ecuador y Chile, también en el marco de la crisis migratoria venezolana, pero también debo a cuestiones asociadas a la pandemia de COVID-19 (Associated Press, 2020; Diario Gestión, 2021).

De la misma manera, uno de los focos de conflicto vigentes, y que estuvo durante mucho tiempo oculta en los medios de comunicación y del debate público, es el asunto del Esequibo, en disputa entre Venezuela y Guyana. Nicolás Maduro ha ahondado un proceso de tensiones con el país vecino demandando autoridad sobre cerca de 159.000 kilómetros cuadrados que representan alrededor de dos tercios de la República Cooperativa de Guyana (Paredes, 2023). Maduro llegó al punto de convocar referéndum con el que buscaba que la ciudadanía respalde el reclamo (Delgado, 2023). Al contar con un resultado favorable, mitigado por el hecho de la baja legitimidad del sistema electoral venezolano y su millonaria diáspora, Maduro ahora contaría con una excusa para tomar acciones que impliquen el uso de la fuerza. Y aunque, Irfaan Ali, presidente de Guyana confía en que este sea un proceso que se solvente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y se logró un espacio para dialogar después de la mediación auspiciada por varios actores, incluyendo a Brasil bajo el gobierno de Lula, si algo se ha rescatado del último ciclo de violencias es que la guerra ha retomado una de sus facetas clásicas y no puede descartarse con tanta facilidad.

Al presentar este último caso no se pretende asegurar que un conflicto militar entre Venezuela o Guyana es inevitable. Al contrario, al exponerlo se busca darle suficiente visibilidad al fenómeno para que más voces puedan alzarse para prevenir el conflicto. Sin embargo, la existencia de estos desencuentros, y la vigencia de liderazgos nocivos como los de Maduro, son ingredientes de potenciales enfrentamientos entre los Estados de la región. La guerra ru-

so-ucraniana es una muestra de cómo incluso países con profundos vínculos históricos pueden verse involucrados en conflictos de gran escala. Ni siquiera el pasado bajo la misma confederación de Estados y el vínculo imperial (con favoritismo incluido) han logrado servir para contener el sangriento conflicto que ha estallado entre ambos países y que impacta de forma significativa para toda la humanidad.

Paralelamente, la tensión en el Pacífico podría atraer la atención y rotar los enfoques tradicionales de la política exterior de la región. Desde América, normalmente se acostumbra a regresar a ver al este (en este caso a Europa y Medio Oriente), pero el crecimiento de China genera un nuevo occidente. Las tensiones por Taiwán han ganado atención en la agenda política internacional, precisamente asociadas a la invasión de Rusia a Ucrania. A pesar de que el reconocimiento internacional pone a Taiwán como parte de la República Popular China, y que el gobierno de Beijing es el reconocido como titular de China, en la práctica Estados Unidos y sus aliados siguen viendo en Taiwán un territorio autónomo con un gobierno aliado, que incluso amerita ser defendido de cualquier intento de China por hacerse con su control total.

La posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y China se vuelve un escenario que merece su propio nivel de análisis y estudio (Gortaire-Morejón, 2023b). Sin embargo, se puede destacar que, en el marco del incremento de la presión que China ejerce sobre la hegemonía de los Estados Unidos, las posibilidades de que los frentes de guerra económica y tecnológica, vigentes mientras se escriben estas líneas, se transformen en un choque de carácter militar, son reales. El incremento de las capacidades militares chinas no es recibido con agrado por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos lo que eleva los niveles de alerta (U.S. Department of Defense, 2023). También se debe agregar que, desde una posición más cómoda en términos militares, el gobierno de Xi Jinping ha adoptado una postura menos cautelosa, aplicando medidas cada vez más asertivas o incluso agresivas en lo que considera su zona de influencia, realizando ejercicios militares cada vez más amplios y adoptando el control de más espacios en el Mar de China Meridional.

Mientras se redacta este texto, las acciones y desplazamiento de fuerzas se han dado en la franja asiática del Pacífico a través del posicionamiento de alianzas militares como el Aukus, entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, acuerdos bilaterales con Corea del Sur, Filipinas y Japón, o grupos de discusión como el Quad, que incluye a Estados Unidos, Australia, Japón e

India (Gortaire-Morejón, 2023b). La respuesta de la República Popular China en este aspecto es mucho menor, aunque cuenta con espacios de diálogo en la Organización de Cooperación de Shanghai y los BRICS, que se encuentran en proceso de expansión, aunque distan de ser alianzas que garantizan una participación real en un enfrentamiento de corte militar, o que se puedan interpretar como un alineamiento directo de sus miembros al bando chino.

LAC se mantiene temporalmente alejada de estas dinámicas, aunque, como se ha discutido en capítulos anteriores, Estados Unidos retorna a la región tratando de desplazar el acercamiento chino. Sin embargo, los problemas internos parecen ocupar un espacio más prioritario en su agenda, e incluso se podría agregar que las sociedades de los países de la región tienden a ver a los conflictos globales como algo ajeno y distante. A pesar de que los actores políticos tienden a asumir posturas de afinidad o rechazo de las tensiones internacionales, más bien alineados a sus identidades que a sus intereses estatales, la sociedad civil en general no suele asumir una postura que le demande a su aparato político el asumir un rol frente a estos fenómenos, salvo excepciones puntuales. De esta manera, mientras las afecciones no se perciban en el día a día de forma evidente la sociedad de ALC suele pasar por alto la conflictividad internacional.

Es válido mencionar que el internet y las redes sociales han favorecido a que exista un mayor acceso a este tipo de noticias, y que se amplíen los segmentos con una opinión formada sobre el acontecer internacional. No obstante, de forma paralela, la combinación de noticias falsas con una falta de formación adecuada para comprender los contextos internacionales genera una aproximación polarizada y casi deportiva de los fenómenos, entorpecida por las acciones propagandísticas de los actores involucrados en los conflictos. En consecuencia, la presión que suelen generar las tendencias en redes sociales dista de ser un ejercicio de acción colectiva ciudadana, y rara vez está vinculada a los intereses nacionales de los países, por lo que los decisores políticos suelen ignorar al activismo digital.

A pesar de ello, el rol de redes sociales y en general, la vida virtual es cada vez mayor en todos los sentidos de la vida humana. La pandemia de COVID-19 solo aceleró este proceso. En consecuencia, atender a lo digital es casi una obligación de Estado. La falta de control del espacio virtual puede devenir no solo en la pérdida de la articulación entre la sociedad y su Estado, sino que directamente se vuelve un potenciador de amenazas y riesgos. La irrupción

de la inteligencia artificial y el metaverso precisamente son otros aceleradores adicionales. Para ALC este reto es aún más complejo, pues no cuenta con la infraestructura digital, el capital humano especializado, y sobre todo las patentes para poder enfrentar este reto de forma directa.

En este sentido, la región enfrenta una nueva etapa de dependencia, y por primera vez corre el riesgo de que se trate de una dependencia no humana (si pasamos por alto la dependencia a corporaciones). Aunque esta es una noción que parece sacada de la ciencia ficción, lo cierto es que el proceso de evolución de la inteligencia artificial ha sido tan rápido que, de no ser controlado, podría implicar una amenaza para la humanidad (Sears, 2023). Un sistema no-humano que adolece de sesgos importantes por su desarrollo debido a la falta de participación de otras naciones y culturas podría afectar severamente a las comunidades de ALC. Es cierto que el acceso a la red puede ayudar a “aprender” más sobre las culturas latinoamericanas y del resto de la región, así como de otras regiones desconectadas del proceso de desarrollo de esta nueva tecnología. No obstante, al tener segmentos importantes que aún no se han digitalizado, el riesgo de omisión es más amplio.

¿Cuáles son las amenazas y riesgos concretos? Esta es una pregunta que se puede responder con un gran “depende”. Los usos que se le pueden dar a la inteligencia artificial son diversos, desde los chat-bots y generadores de imagen que se han vuelto de uso común en internet; pasando por los deep-fakes que ya generan confusión en las audiencias poco entrenadas al simular vídeos falsos de personalidades políticas o famosas; llegando a los asistentes en procesos de investigación científica, modelos productivos, y simuladores en la industria militar. La inteligencia artificial seguramente ya está participando en toma de decisiones, en algunos casos los actores políticos la pueden estar utilizando de forma asistencial, pero reconociendo la naturaleza de otros actores menos responsables, es probable que más de un documento oficial o pieza legislativa hayan sido redactados por Chat GPT u otras plataformas sin la seguridad de que sus contenidos sean totalmente ciertos o se ajusten a las necesidades reales de su población.

Un entorno donde la humanidad pase a ser dominada por sistemas automatizados es cada vez menos improbable. La idea no debería ser rechazada en su totalidad, existe un marco en el que el apoyo de los procesadores de computadora será capaz de arrojar mejores resultados técnicos basados en la evidencia disponible. Sin embargo, un espacio en el que la última decisión esté

dada por un sistema no-humano debe ser entendido como una amenaza. La decisión política es ante todo ética. En este sentido, una mala programación de la inteligencia artificial podría poner en riesgo a toda la humanidad, o incluso a ciertas culturas o grupos minoritarios. Por ello, entre los grandes retos del presente y el futuro cercano para ALC está el asumir una postura común frente a la inteligencia artificial que les permita precautelar sus intereses.

¿Es posible? Parece poco probable. El motivo de este pesimismo no solo radica en las reflexiones y cifras presentadas en el cuerpo de este libro, sino que se ancla en la capacidad real que ha tenido la región para enfrentar a otra amenaza existencial de la humanidad, como lo es el cambio climático. Este fenómeno potenciado por causas antrópicas afecta a la región de forma desproporcionada, al no ser esta la causante del proceso de aceleración de los efectos nocivos de la variación climática y ser potencialmente uno de los territorios que más daño percibirá, tanto por los efectos directos que tengan las catástrofes climáticas, como la falta de recursos económicos y tecnológicos para lidiar con su impacto (Alonso, 2022).

No se puede cerrar este libro sin señalar que la desigualdad incluso se percibe en cuestiones como el impacto del cambio climático. Mientras el 10% de la población más rica del mundo es responsable del 48% de los gases de efecto invernadero, solo sentirán el 3% de las consecuencias económicas de la variación climática. Mientras tanto, el 50% más pobre se verá afectado teniendo que afrontar alrededor del 75% de los costos (Hernando, 2023). Esto responde a que la población rica cuenta con la infraestructura, capacidad monetaria, capacidad de desplazamiento, e incluso la educación necesaria para adaptarse a los cambios de clima, protegerse de eventos adversos, asegurar su consumo de alimentos y agua potable, y protegerse de enfermedades e incluso reacciones violentas por carencias producidas por la variación del clima, aunque en los peores escenarios proyectados ni siquiera esto será suficiente. En cualquier caso, mientras tanto, los pobres deberán adaptarse casi como un experimento evolutivo, o perecer.

Por otro lado, vale la pena reconocer que los esfuerzos para tener una visión común frente a la agenda climática no son escasos. ALC ha logrado asumir ciertas posturas coordinadas en términos bilaterales, así como en espacios multilaterales como las Conferencias de las Partes (COP), donde también articulan esfuerzos con otras regiones en vías de desarrollo. Sin embargo, sus posturas distan de ser las que marcan la agenda, y su presión diplomática no

ha sido lo suficientemente asertiva. Es más, los agentes involucrados en la mayor cantidad de contaminación han sido capaces de insertarse en la toma de decisiones y dinámicas sociales de algunos enclaves de la región, de manera que la postura ambientalista incluso tiene focos de resistencia locales.

De esta forma, aunque las delegaciones diplomáticas de la región suelen asumir posturas comunes en las votaciones de los espacios de decisión multilateral que debaten el asunto del cambio climático, resultaría un error pensar que existe una posición homogénea a nivel regional sobre estos asuntos. Es más, varias las vocerías del ambientalismo más visibles ni siquiera nacen de ALC, y muchos de los voceros locales se enfrentan a la burla, a la persecución, e incluso a la violencia. Los casos de los activistas asesinados por los grupos criminales (con potenciales respaldos políticos y económicos) son solo otro ejemplo de la desprotección del Estado, dejando a América Latina como la región con mayor saldo de muertes por este tipo de atentados en el mundo (Pérez, 2023). Los casos de Homero Gómez, en México, Sandra Liliana Peña, en Colombia, o de Berta Cáceres, en Honduras, cuyas luchas por proteger su entorno no deben ser olvidadas, forman parte de una larga lista de más de 1700 activistas asesinados en la región (Koop, 2022).

En el marco de esta coyuntura, ALC atraviesa un período de zozobra que se ancla en los agónicos esfuerzos de una comunidad que protege al medioambiente en contra de sectores con mucho más poder y capacidades instaladas en el aparato político y el sistema económico. Un ejemplo muy cercano de ello fue el caso del grupo de activistas ambientales Yasunidos, en Ecuador, que trató de prevenir la extracción petrolera en la reserva nacional Yasuní. En un intento de hacer buen uso de los medios de democracia participativa, el colectivo reunió firmas para someter la extracción a un referéndum, el cual no pudo realizarse en primera instancia, pues el Consejo Nacional Electoral rechazó las firmas en un acto de abuso de poder ilegítimo (Sarmiento, 2023), respondiendo a la agenda del entonces presidente Rafael Correa, quien también falló en reemplazar los fondos a los que se aspiraba en una campaña de diplomacia ambiental en la que se trató de convencer a los Estados industrializados de realizar un pago compensatorio para mantener el petróleo bajo tierra. Frente a la negativa a la propuesta, Correa llegó a afirmar que “el mundo nos ha fallado” (BBC Mundo, 2013).

A pesar de la negativa desde el aparato político ecuatoriano para atender al reclamo del colectivo ambientalista, la agrupación continuó presionando por

el reconocimiento de su derecho hasta que en 2023 se dio paso a una consulta popular que buscaba interrumpir la explotación del bloque 43. El resultado fue que el 58,95% de la población se decantó por suspender las actividades petroleras (Primicias, 2023a). Y a pesar de la decisión mayoritaria de la población la protección del Yasuní tuvo que enfrentar un nuevo contratiempo cuando el expresidente Lasso llegó a afirmar que la consulta era inaplicable (Cañizares, 2023); aunque posterior a un fuerte reclamo a través de redes sociales se llegó a afirmar que esta postura solo era de índole reflexivo y que la consulta sería aplicada en respeto de la voluntad popular.

Este es apenas un ejemplo de los cientos de casos en los que la protección ambiental enfrenta oposición desde el mismo aparato estatal (sin distinción de tendencia ideológica política en el gobierno de turno). Las recientes protestas masivas en Panamá, un país que suele identificarse como uno de los puntos estables de la región, relacionadas a la oposición popular a que se otorgue una concesión a una de las grandes mineras de cobre, refleja que no se trata de un caso aislado (Associated Press, 2023). Y en general, las permanentes pujas entre el activismo y las industrias extractivas demuestran cómo la lucha contra el cambio climático es un esfuerzo cuesta arriba en una región cuyas condiciones productivas la siguen manteniendo asociada a la explotación de recursos naturales como el petróleo, los minerales, la ganadería, la piscicultura y la agricultura extensiva. Las condiciones económicas explicadas en el primer capítulo explican (aunque no justifican) esta realidad y, al mismo tiempo, demuestran que, sin una transición real es muy difícil entrever un sistema posextractivista para el corto plazo.

Mientras persista la discriminación por cualquier motivo, ya sea por género, raza, religión, identidad sexogenérica, u origen nacional, existirán economías ineficientes. Los estigmas generan modelos que carecen de capacidad plena de alcanzar una productividad que les permita a sus ciudadanos y, por lo tanto, a sus países desafiar las brechas que ya existen y que se siguen ampliando frente al mundo desarrollado. El acceso desigual a la educación, a la salud, a las oportunidades laborales, y a entornos seguros reduce las capacidades de los individuos a alcanzar vidas plenas (Sen, 1979). Como se ha insistido en este libro, la coyuntura actual de ALC amplía estas desigualdades de manera exponencial, siendo millones de individuos los que se ven privados de alcanzar su potencial y, en consecuencia, se establecen barreras reales para el desarrollo de sus países y de la región como un bloque. También como se ha discutido previamente las consecuencias de las carencias se hacen notorias en su inesta-

bilidad y violencia, a pesar de los esfuerzos de ciertas corrientes políticas que intentan camuflar el problema con sus sesgos.

No basta con aumentar los ingresos, aunque esta es una parte vital. Caer en un discurso polarizante en donde se desprecie la importancia de la lucha contra la pobreza tampoco es la solución. Lo que sí es una solución es dejar de sobresimplificar los problemas estructurales de la región al querer volverlo una discusión ideológica entre un falso dualismo entre izquierda y derecha. Aunque no es posible desprenderse de la ideología en la actualidad (y probablemente nunca), tampoco es aceptable que este tipo de discusiones se estancuen de forma que sea imposible llevar a un diálogo entre las distintas fuerzas políticas e identidades que habitan en cada país de ALC. Se debe trabajar fuertemente en reforzar las libertades y oportunidades para los individuos, proteger a los colectivos vulnerables, pero sobre todo, anteponer una agenda holística que permita apuntar a una progresividad, no solo tributaria, sino también en esquema de política pública para que los objetivos alcanzados se sigan renovando con mayor ambición.

Los retos para la región son amplios, diversos, y heterogéneos. La articulación de esfuerzos, por ahora, parece distante. Tal vez, los lectores de este libro puedan asumir un compromiso adicional para solventar los problemas vigentes y para proponer respuestas que aceleren una transición aplazada por demasiado tiempo. Mientras no existan generaciones que apunten a tomar las riendas de un futuro de ejercicio cooperativo, que salga de lógicas de hacienda, o peor aún de protección del metro cuadrado, la ineficiencia será la tónica general. En este sentido, una de las invitaciones que plantean estas páginas es aprovechar sus contenidos como un punto de partida, y transformar las realidades aquí plasmadas hacia una mejor versión.

Como aporte adicional hay que insistir en que cualquier esfuerzo en aislamiento es en vano, superficial, y un desperdicio de recursos. Las agendas nacionales requieren de complemento internacional, de preferencia regional, para fortalecer los resultados. Los cambios tecnológicos, la mejora en los medios de comunicación, la digitalización, y la mejora en los medios de transporte acortan distancias y aceleran procesos de interacción humana. Actuar detrás de las líneas fronterizas establecidas actualmente es una visión romántica, estancada en una concepción clásica que ya no existe. Los actores por fuera de la legitimidad ya no respetan esa norma, las empresas transnacionales hacen esfuerzos para saltársela, incluso la sociedad civil opera de forma fluida con

fenómenos de migración transnacional y el surgimiento de comunidades binacionales. En este sentido, los únicos que, torpemente, insisten en mantener una visión de Estado westfaliano clásico suelen ser los actores políticos y estatales, trayendo resultados pobres o, en casos particulares, aumentando los costos de control para evitar la inmigración.

Cercar nuestros países y levantar murallas no solo que carece de un criterio técnico, sino que adolece de profundos vacíos éticos. En consecuencia, los esfuerzos políticos tienen que estar dirigidos a medidas de carácter transnacional. El potencial que tiene ALC debería dejar de reflexionarse desde el romanticismo de los tiempos coloniales, cuando se veía en América una tierra llena de oro y maravillas. Ya viene siendo hora de que sus habitantes se apersonen de los procesos que les permitan llegar a un desarrollo pleno y una posición internacional más allá de los rankings medios en todos los índices. ¿A dónde va la región? Depende de factores exógenos, sí, pero la mayor parte de la responsabilidad recae sobre sus propios ciudadanos. Los lectores de este texto pueden transformarse en gestores de cambio positivo o perpetuadores de esquemas disfuncionales.

Referencias

- Abramo, L., Cecchini, S., y Morales, B. (2019). *Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: aprendizajes desde América Latina y el Caribe*. Cepal.
- ACLU (2007). "The Death Penalty: Questions and Answers". Extraído el 7 de enero de 2024 de: <https://www.aclu.org/documents/death-penalty-questions-and-answers#:~:text=Q%3A%20Doesn't%20the%20Death,than%20states%20without%20such%20laws>.
- ACNUR (2023). "Situación de Venezuela". Extraído el 22 de noviembre de 2023 de: <https://www.acnur.org/emergencias/situacion-de-venezuela#:~:text=M%C3%A1s%20de%207%2C7%20millones,Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe>.
- Activa (2023). "PULSO CIUDADANO Agosto 2023/ (28 -31 Agosto)". Extraído el 17 de septiembre de 2023 de: https://chile.activasite.com/wp-content/uploads/2023/09/230798_PULSO_CIUDADANO_AGOSTO_0903_v1.pdf
- Aepet (2023). "Ex-ministro confirma entreguismo de Bolsonaro: 'iríamos privatizar a Petrobrás'". Extraído el 14 de septiembre de 2023 de: <https://aepet.org.br/noticia/ex-ministro-confirma-entreguismo-de-bolsonaro-iramos-privatizar-a-petrobras/>
- AFP Colombia (2018). "¿Existen 8 bases militares estadounidenses en Colombia? Es inexacto". Extraído el 18 de diciembre de 2023 de: <https://factual.afp.com/existen-8-bases-militares-estadounidenses-en-colombia-es-inexacto>
- Agobian (2023). "EE.UU. flexibiliza temporalmente sanciones a Venezuela tras acuerdos entre gobierno y oposición". Extraído el 10 de noviembre de 2023 de: <https://www.vozdeamerica.com/a/eeuu-flexibiliza-sanciones-venezuela-tras-firma-de-acuerdos-en-barbados/7313492.html>
- Ahmed, N., Marriott, A., Dabi, N., Lowthers, M., Lawson, M., y Mugehera, L. (2022). *Inequality kills: The unparalleled action needed to combat unprecedented inequality in the wake of COVID-19*. Oxfam.
- Ali, F., Russell, C., Nafeh, F., Rehm, J., LeBlanc, S., y Elton-Marshall, T. (2021). Changes in substance supply and use characteristics among people who use drugs (PWUD) during the COVID-19 global pandemic: A national qualitative assessment in Canada. *International Journal of Drug Policy*, Vol. 93. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103237>

- Alonso, J. (2022). “El cambio climático se agudiza en América Latina y el Caribe”. Extraído el 13 de enero de 2024 de: <https://www.dw.com/es/el-cambio-clim%C3%A1tico-se-agudiza-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe/a-61065972#:~:text=Centroam%C3%A9rica%20y%20Am%C3%A9rica%20del%20Sur,Expertos%20sobre%20el%20Cambio%20Clim%C3%A1tico>.
- Alvaredo, F., Bourguignon, F., Ferreira, F. y Lustig, N. (2023). “Seventy-five years of measuring income inequality in Latin America”. Extraído el 7 de diciembre de 2023 de: https://eprints.lse.ac.uk/120557/3/LACIR_WP_111.pdf
- Alvarez, P. (2023). “Los cruces ilegales en la frontera entre México y EE.UU. alcanzan su máximo de 2023 con más de 200.000 aprehensiones en septiembre”. Extraído el 7 de diciembre de 2023 de: <https://cnnespanol.cnn.com/2023/10/03/cruces-ilegales-frontera-mexico-eeuu-maximo-2023-trax/#:~:text=Los%20cruces%20ilegales%20en%20la,de%20200.000%20aprehensiones%20en%20septiembre>
- Al Jazeera (2023). “Calls to tax the superrich grow as economic inequality surges”. Extraído el 25 de septiembre de 2023 de: <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/5/calls-to-tax-the-superrich-grow-as-economic-inequality-surges>
- Ámbito (2021). “Bolsonaro firmó la ley para privatizar Eletrobras”. Extraído el 14 de septiembre de 2023 de: <https://www.ambito.com/mundo/bolsonaro/firmo-la-ley-privatizar-eletrobras-n5221270>
- Arévalo, K. (2023). “Estos países de Centroamérica perciben más del 20 % de su PIB de remesas”. Extraído el 13 de septiembre de 2023 de: <https://www.vozdeamerica.com/a/estos-paises-de-centroamerica-perciben-mas-del-20-por-ciento-pib/7067558.html>
- Associated Press [Associated Press] (6 de abril de 2020). Perú envía ejército a reforzar fronteras con Ecuador y Chile. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=HoWCTU8MGoY>
- Associated Press (2023). “Quinto día de protestas en Panamá para presionar al gobierno a rescindir contrato minero millonario”. Extraído el 27 de octubre de 2023 de: <https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2023-10-27/quinto-dia-de-protestas-en-panama-para-presionar-al-gobierno-a-rescindir-contrato-minero-millonario>
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.
- Atlas Network (2023). “Over 500 partners in almost 100 countries around the

- globe”. Extraído el 18 de septiembre de 2023 de: <https://www.atlasnetwork.org/partners/>
- AtalasIntel ESP [@AtlasIntelESP] (2023, 3 de noviembre). *Barack Obama, José Mujica, Nayib Bukele y Lula son los líderes extranjeros con mayor popularidad en Argentina*. [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/AtlasIntelESP/status/1720537658667958467>
- Bachelet, M. (2019). “Las estadísticas de muertes infantiles constituyen un reclamo de justicia”. Extraído el 13 de septiembre de 2023 de: <https://www.ohchr.org/es/2019/10/data-child-deaths-are-call-justice>
- Balakrishnan, L. y Toscani, F. (2018). “Cómo el auge de las materias primas ayudó a combatir la pobreza y la desigualdad en América Latina”. Extraído el 6 de noviembre de 2023 de: <https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2018/06/21/blog-how-the-commodity-boom-helped-tackle-poverty-and-inequality-in-latin-america>
- Banco Mundial (2016). “¿Cuánto conoces a los indígenas de América Latina?”. Extraído el 17 de noviembre de 2023 de: <https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2016/11/22/cuanto-conoces-a-los-indigenas-de-america-latina>
- Banco Mundial (2017). “Cómo la exclusión LGBTI obstaculiza el desarrollo en América Latina y el Caribe”. Extraído el 19 de noviembre de 2023 de: <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/06/13/como-la-exclusion-lgbti-obstaculiza-el-desarrollo-en-america-latina-y-el-caribe>
- Banco Mundial (2022). “PIB per cápita (US\$ a precios actuales) - Latin America & Caribbean”. Extraído el 8 de noviembre de 2023 de: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZJ>
- Banco Mundial (2023a). “Tierras agrícolas (% del área de tierra)”. Extraído el 3 de diciembre de 2023 de: https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.AGRI.ZS?most_recent_value_desc=true
- Banco Mundial (2023b). “Perspectivas económicas | América Latina y el Caribe Octubre 2023”. Extraído el 8 de diciembre de 2023 de: <https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/perspectivas-economicas-america-latina-caribe>
- Banerjee, A. y Duflo, E. (2011). *Poor economics*. Public Affairs
- Bárcena, A., Cimoli, M., y García-Buchaca, R. (2018). *The inefficiency of inequality*. ECLAC, Santiago de Chile.
- Barrientos, A. y Scott, J. (2008). ‘Social Transfers and Growth: A Review’, *Working Paper 51*, Brooks World Poverty Institute, Manchester

- BBC Mundo (2013). "Correa: "El mundo nos ha fallado" con Yasuní". Extraído el 26 de octubre de 2023 de: https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/08/130815_ultnot_ecuador_correa_yasuni_mena_lav
- BBC Mundo (2018). "Los presidentes y expresidentes latinoamericanos salpicados por el escándalo Odebrecht, "la mayor red de sobornos extranjeros de la historia"". Extraído el 10 de diciembre de 2023 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38905411>
- BBC News Mundo (2021). "Elecciones Chile 2021: Boric logra un contundente triunfo sobre Kast y es el presidente electo del país". Extraído el 16 de septiembre de 2023 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59722345>
- BBC News Mundo (2021). "Lula da Silva: un juez de la Corte Suprema de Brasil anula todas las sentencias contra el expresidente brasileño". Extraído el 10 de diciembre de 2023 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56326182>
- BBC News Mundo (2022). "Protestas en Ecuador: finaliza el paro tras un acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena". Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62005086>
- Braveman, P. A., Cubbin, C., Egerter, S., Williams, D. R., & Pamuk, E. (2010). Socioeconomic disparities in health in the United States: What the patterns tell us. *American Journal of Public Health*, 100(Suppl 1), S186-S196. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.166082>
- Bureau of Conflict and Stabilization Operations (2022). "United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability". Extraído el 24 de noviembre de 2023 de: <https://www.state.gov/united-states-strategy-to-prevent-conflict-and-promote-stability/>
- Burstein, R., Henry, N.J., Collison, M.L. et al. (2019). Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017. *Nature* 574, pp. 353-358. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1545-0>
- Busso, M. y Messina, J. (Eds.) (2020). *The Inequality Crisis: Latin America and the Caribbean at the Crossroads*. IDB
- Cadem (2023). "Encuesta N° 504". Extraído el 17 de septiembre de 2023 de: <https://cadem.cl/wp-content/uploads/2023/09/Track-PP-504-Septiembre-S1-VF.pdf>
- Camino, J. F., & Gortaire-Morejón, B. (2021). COVID - 19 en el Ecuador, ¿Cómo perciben los ciudadanos las respuestas del Sistema Político a la gestión

- de la emergencia sanitaria? *Democracias*, 9(9), pp. 41–66. <https://doi.org/10.54887/27376192.65>
- Cañizares, A. (2023). ““No es posible aplicar el sí”, dice Guillermo Lasso sobre la decisión electoral de no explotar petróleo en el Yasuní”. Extraído el 26 de octubre de 2023 de: <https://cnnespanol.cnn.com/2023/09/07/no-es-posible-aplicar-si-guillermo-lasso-decision-electoral-yasuni-orix/>
- Caparrós, M. (2014). *El hambre*. Anagrama.
- Caparrós, M. (2021). *Ñamérica*. Random House
- Casullo, M. E. (2019). *¿Por qué funciona el populismo?: El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis*. Siglo XXI Editores.
- CEPAL (2012). “La urbanización presenta oportunidades y desafíos para avanzar hacia el desarrollo sostenible”. Extraído el 5 de diciembre de 2023 de: <https://www.cepal.org/notas/73/Titulares2#:~:text=Am%C3%A9rica%20Latina%20es%20la%20regi%C3%B3n,alza%2C%20pero%20a%20ritmos%20decrecientes>.
- CEPAL (2014). *Panorama Social de América Latina*. Santiago, Chile
- CEPAL (2022a). *Panorama Social de América Latina y el Caribe*. (LC/PUB.2022/15-P), Santiago, Chile.
- CEPAL (2022b). “Las tasas de pobreza en América Latina se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia, alerta la CEPAL”. Extraído el 4 de octubre de 2023 de: <https://www.cepal.org/es/comunicados/tasas-pobreza-america-latina-se-mantienen-2022-encima-niveles-prepandemia-alerta-la>
- CEPAL y Unicef (2010). “Pobreza infantil en América Latina y el Caribe”. Extraído el 11 de octubre de 2023 de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9b920aaa-1840-471f-942f-3db8fa4faeb1/content>
- Cid, C. y Marinho, M. (2022). “Dos años de pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe: reflexiones para avanzar hacia sistemas de salud y de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes”. *Documentos de Proyectos* (LC/TS.2022/63), Santiago, CEPAL.
- CID Gallup (2023a). “ELEVADO EL DESEO DE EMIGRAR: Hondureños son los que más quieren, panameños los menos”. Extraído el 2 de noviembre de 2023 de: https://www.cidgallup.com/uploads/publication/publication_files/publication_1677888945000.pdf
- CIDH (2015). “Violencia contra Personas LGBTI en América”. Extraído el 19 de noviembre de 2023 de: <https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/violencia-lgbti.html>

- CNN Español (2023). “¿Por qué Guillermo Lasso enfrenta un juicio político? ¿Cómo es el proceso y cuál es el panorama?”. Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://cnnespanol.cnn.com/2023/05/16/lasso-juicio-politico-por-que-proceso-orix/>
- Coccia, M. (2018). Economic inequality can generate unhappiness that leads to violent crime in society. *International Journal of Happiness and Development*, 4(1), pp. 1-24.
- Congress (2023). “Members of the U.S. Congress”. Extraído el 13 de diciembre de 2023 de: <https://www.congress.gov/members>
- Consulado de México en Orlando (2022). “Entendimiento Bicentenario”. Extraído el 19 de diciembre de 2023 de: <https://consulmex.sre.gob.mx/orlando/index.php/avisos/114-entendimiento-bi>
- Contrapunto (2023). “Brian Nichols: la decisión de permitir la reelección de Bukele es de los salvadoreños”. Extraído el 27 de octubre de 2023 de: <https://www.contrapunto.com.sv/brian-nichols-la-decision-de-permitir-la-reeleccion-de-bukele-es-de-los-salvadorenos/>
- Corbacho, A., Cibils, V.F., Lora, E. (2013). Undressing the Myths. En: Corbacho, A., Cibils, V.F., Lora, E. (eds) *More than Revenue*. Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/9781137315977_1
- Córdova, L. (2023). “Las operaciones de estabilización autoritaria en América Andina ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos desplaza tropas militares a Perú y Ecuador?”. Extraído el 24 de noviembre de 2023 de: https://ordenconflictoyviolencia.files.wordpress.com/2023/10/eeuu_01_final.pdf
- Corporación Latinobarómetro (2023). “Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina”. Extraído el 1 de septiembre de 2023 de: <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>
- Criteria (2023). “Agenda Criteria Septiembre 2023”. Extraído el 17 de septiembre de 2023 de: https://www.criteria.cl/descargas/Agenda_Criteria_Septiembre_2023-9bFs3.pdf
- Cusicanqui, P. (2021). “Corte IDH refuta el argumento de Evo Morales y dice que la reelección indefinida no es un derecho humano”. Extraído el 18 de noviembre de 2023 de: <https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/corte-idh-refuta-el-argumento-de-evo-morales-y-dice-que-la-reelecci%C3%B3n-indefinida-no-es-un-derecho-humano/2334242>
- Datosmacro (2023). “Índice de Gini”. Extraído el 25 de septiembre de 2023 de: <https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-gini>

- Davidovsky, S. (2023). "La campaña electoral en Facebook e Instagram: ¿qué agrupaciones gastaron más plata en publicidad en estas plataformas?". Extraído el 20 de noviembre de 2023 de: <https://chequeado.com/el-explicador/la-campana-electoral-en-facebook-e-instagram-que-agrupaciones-gastaron-mas-plata-en-publicidad-en-estas-plataformas/>
- De Courson, B., & Nettle, D. (2021). Why do inequality and deprivation produce high crime and low trust?. *Scientific reports*, 11(1), p. 1937.
- Delgado, C. (2023). "Presidente Nicolás Maduro llama a referendo consultivo para defensa del Esequibo": Extraído el 23 de octubre de 2023 de: <https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/presidente-nicolas-maduro-llama-a-referendo-consultivo-para-defensa-del-esequibo>
- Democracy Now! [Democracy Now!] (12 de marzo de 2018). As Ex-CIA Head Admits to U.S. Meddling in Elections, Is Outrage over Russian Interference Overblown?. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=0LRArfyjK1Y>
- Department of State y Bureau of Consular Affairs (s.f.). "TSG Travel Advisory Map". Extraído el 15 de diciembre de 2023 de: <https://experience.arcgis.com/experience/7999df45ba784fa7a002eb311a691d68/page/World/>
- Deshmukh, A. (2021). "This Simple Chart Reveals the Distribution Of Global Wealth". Extraído el 21 de septiembre de 2023 de: <https://www.visualcapitalist.com/distribution-of-global-wealth-chart/>
- DFID (2005). 'Social Transfers and Chronic Poverty: Emerging Evidence and the Challenge Ahead'. *Practice Paper*, UK Department for International Development (DFID), Londres.
- Diario Gestión [Diario Gestión] (28 de enero de 2021). Perú moviliza tanques y militares a frontera con Ecuador para bloquear ingreso de ilegales. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=eOj9bZJKRnM>
- Dote, S. (2023). "Chile recibe la presidencia de la Alianza del Pacífico tras la negativa del traspaso de México a Perú". Extraído el 10 de octubre de 2023 de: <https://elpais.com/chile/2023-06-28/chile-recibe-la-presidencia-de-la-alianza-del-pacifico-tras-la-negativa-del-traspaso-de-mexico-a-peru.html>
- DW (2023a). ""El Salvador camina a paso firme hacia una dictadura plena"". Extraído el 22 de noviembre de 2023 de: <https://www.dw.com/es/el-salvador-camina-a-paso-firme-hacia-una-dictadura-plena/a-65960963>
- DW (2023b). "El Salvador libera a más de 7.000 inocentes de sus cárceles". Extraído el 23 de noviembre de 2023 de: <https://www.dw.com/>

- es/el-salvador-libera-a-m%C3%A1s-de-7000-inocentes-de-sus-c%C3%A1rceles/a-66604440
- DW (2023c). “Países Bajos decomisa ocho toneladas de cocaína, un récord”. Extraído el 17 de diciembre de 2023 de: <https://www.dw.com/es/pa%C3%ADses-bajos-decomisa-ocho-toneladas-de-coca%C3%ADna-un-r%C3%A9cord/a-66498178#:~:text=La%20fiscal%C3%ADa%20neerlandesa%20anunci%C3%B3%20este,la%20fiscal%C3%ADa%20en%20un%20comunicado>.
- EIU (2023). “Democracy Index 2022 Frontline democracy and the battle for Ukraine”. Extraído el 26 de noviembre de 2023 de: https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf?mkt_tok=N-zUzLVJJUS00MzgAAAGPq5JY89RI0gStZi23ILdcIS21avhNEQo-DZEmkqKXhELwQ-PaKCmZqwacEvzZLtY6PYF2NVuAAKT2_yOAv-G8e5zcccMupzo9w3DCk6LxEx2lXefw
- Ellis, L., Beaver, K. y Wright, J. (2009). *Handbook of crime correlates*. Elsevier
- El Economista (2021). “México y EU le dicen adiós a la Iniciativa Mérida y hola al Entendimiento Bicentenario”. Extraído el 19 de diciembre de 2023 de: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-y-EU-le-dicen-adios-a-la-Iniciativa-Merida-y-hola-al-Entendimiento-Bicentenario-20211008-0060.html>
- Esteban, J. (2023). “Las cifras detrás de Bukele: ¿ha mejorado la seguridad en El Salvador? ¿Y su economía?”. Extraído el 22 de noviembre de 2023 de: <https://www.libremercado.com/2023-03-09/las-cifras-detras-de-bukele-ha-mejorado-la-seguridad-en-el-salvador-y-su-economia-6993766/>
- Euronews [euronews (en español)]. (11 de septiembre de 2019). Venezuela inicia maniobras militares en la frontera con Colombia. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=BKpPnTmyNII>
- Evans, G. W. (2016). Childhood poverty and adult psychological well-being. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(52), 14949-14952.
- Faes, I. (2023). “Cisma en Nueva York: la ONU irrumpe en el diseño de la nueva fiscalidad internacional”. Extraído el 8 de diciembre de 2023 de: <https://www.expansion.com/fiscal/2023/11/30/65664ba4e5fdea-ba738b4645.html>
- Fajnzylber, P., Lederman, D., y Loayza, N. (2002). Inequality and violent crime. *The Journal of Law and Economics*, 45(1), pp. 1-39.
- Fang, L. (2017). “SPHERE OF INFLUENCE: HOW AMERICAN LIBERTARIANS ARE REMAKING LATIN AMERICAN POLITICS”. Extraído el

- 18 de septiembre de 2023 de: <https://theintercept.com/2017/08/09/atlas-network-alejandro-chafuen-libertarian-think-tank-latin-america-brazil/>
- Fowks, J. (2022). “La fiscalía peruana desmiente el fraude electoral que denunció Fujimori para impugnar la victoria de Pedro Castillo”. Extraído el 26 de noviembre de 2023 de: <https://elpais.com/internacional/2022-01-15/la-fiscalia-peruana-desmiente-el-fraude-electoral-que-denuncio-fujimori-para-impugnar-la-victoria-de-pedro-castillo.html>
- FESPAD (2020). “Impacto de la pandemia COVID-19 en los derechos humanos y la seguridad pública”. Extraído el 9 de noviembre de 2023 de: <https://www.calameo.com/read/005879919aadedf1d20ff>
- Focos (2023a). “Decenas de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción despiertan los peores miedos de las familias de reos”. Extraído el 23 de noviembre de 2023 de: <https://focostv.com/terror-de-estado/desapariciones-forzadas.html?v=9919>
- Focos (2023b). “Muertes de reos bajo custodia del Estado: entre la opacidad y la indolencia”. Extraído el 23 de noviembre de 2023 de: <https://focostv.com/terror-de-estado/muertes-de-reos-bajo-custodia.html?v=9919>
- Focos (2023c). “las condenas que pagan los inocentes detenidos por el régimen”. Extraído el 23 de noviembre de 2023 de: <https://focostv.com/terror-de-estado/condenas.html?v=9919>
- Foreign Relations Committee (2022). “Menendez, Risch y sus Colegas Logran la Aprobación del Proyecto de Ley de la Asociación entre Estados Unidos y Ecuador como parte de Legislación Anual de Defensa Nacional”. Extraído el 12 de octubre de 2023 de: <https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/menendez-risch-y-sus-colegas-logran-la-aprobacion-del-proyecto-de-ley-de-la-asociacion-entre-estados-unidos-y-ecuador-como-parte-de-legislacion-anual-de-defensa-nacional>
- France24 (2022). “Bolsonaristas mantienen protesta en Brasilia contra asunción de Lula”. Extraído el 26 de noviembre de 2023 de: <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20221229-bolsonaristas-mantienen-protesta-en-brasil-contras-ascun%C3%B3n-de-lula>
- Freeman, W. (2023). “Nayib Bukele’s Growing List of Latin American Admirers”. Extraído el 8 de noviembre de 2023 de: <https://www.americaquarterly.org/article/nayib-bukeles-growing-list-of-latin-american-admirers/>
- Fucs, J. (2022). “20 medidas de liberalização econômica adotadas no governo Bolsonaro”. Extraído el 14 de septiembre de 2023 de: <https://www.es->

- tadao.com.br/economia/20-medidas-de-liberalizacao-economica-paulo-guedes/
- Funds, G. (2021). "Think Tanks Can Be a Frontline Defense against Pandemic Setbacks". Extraído el 18 de septiembre de: <https://www.national-review.com/2021/12/think-tanks-can-be-a-frontline-defense-against-pandemic-setbacks/>
- Giuliano, P. (2022). "Bolsonaro oficializó la privatización de la empresa energética Eletrobras". Extraído el 14 de septiembre de 2023 de: <https://www.telam.com.ar/notas/202206/595498-bolsonaro-privatizacion-elektrobras-empresa-energetica.html>
- GK (2023). "Estas son las masacres carcelarias documentadas en Ecuador entre 2021 y 2023". Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://gk.city/2022/07/18/masacres-carcelarias-documentadas-ecuador/>
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. [Global Initiative Against Transnational Organized Crime] (26 de septiembre de 2023). Global Organized Crime Index 2023 [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=QXD8J2F9sgE&t=1101s>
- González, M. (2022). "Los niños del narco en México | "Finalmente encontré algo que me hacía sentir mejor que la droga: matar". Extraído el 20 de diciembre de 2023 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59603313>
- González, D. (2023). "Global Wealth Taxation: towards a more equitable Latin American tax system". Extraído el 2 noviembre de 2023 de: <https://www.ciat.org/ciatblog-imposicion-al-patrimonio-global-hacia-una-mayor-equidad-del-sistema-tributario-latinoamericano/?lang=en>
- Gonzalez de Gispert, J. (2019). ""Aquí no hay negros": cómo se borró de la historia de Argentina y Chile el aporte de los esclavos y los afrodescendientes". Extraído el 18 de noviembre de 2023 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48508342>
- Gordon, S. H., y Sommers, B. D. (2016). Recessions, poverty, and mortality in the United States: 1993–2012. *American Journal of Health Economics*, 2(4), pp. 489-510.
- Gortaire-Morejón, B. (2022a). "Debilitamiento del multilateralismo y reconfiguración del escenario internacional de la seguridad global". Extraído el 19 de octubre de 2023 de: <https://cespe.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2022/05/DebilitamientoEscenarioInternacional.pdf>
- Gortaire-Morejón, B. (2022b). "El rol de los actores no estatales en la seguridad regional: Movimientos sociales, Delincuencia Organizada y Gru-

- pos Armados II Parte”. Extraído el 15 de diciembre de 2023 de: <https://cespe.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/SEXTO-ENTREGABLE-BERNARDO-GORTAIRE-signed.pdf>
- Gortaire-Morejón, B. (2023a). “Inseguridad en América Latina: El caso de Ecuador”. Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://geopol21.com/que-nos-dice-la-situacion-del-ecuador-sobre-la-seguridad-en-america-latina/>
- Gortaire Morejón, B. (2023b). *Dragón ascendente, águila desafiante. Desentrañando la competencia hegemónica entre China y EE.UU.* Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Sangolquí, Ecuador.
- Gortaire-Morejón, B. (comp) et al. (2023). *Ecuador hacia el 2025: Escenarios, conflictos y oportunidades.* Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. <http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/36918>
- Gortaire-Morejón, B. y Montalvo, M. (2020). *Camino a la integración desde la identidad.* Udlá Ediciones.
- GPF (2005). “US Military and Clandestine Operations in Foreign Countries - 1798-Present”. Extraído el 27 de octubre de 2023 de: <https://archive.globalpolicy.org/us-westward-expansion/26024-us-interventions.html>
- Grupo de Puebla (2021). “Quiénes Somos”. Extraído el 16 de octubre de 2023 de: <https://www.grupodepuebla.org/fundadores/>
- Guevara, T. (2023). “México y Guatemala son los países que reciben más remesas, Honduras y Brasil registran el mayor crecimiento”. Extraído el 14 de septiembre de 2023 de: <https://www.vozdeamerica.com/a/mexico-y-guatemala-so-los-paises-que-reciben-mas-remesas-honduras-y-brasil-registran-el-mayor-crecimiento/7134031.html#:~:text=M%C3%A9xico%20y%20Guatemala%20son%20los,Brasil%20registran%20el%20mayor%20crecimiento>
- Guntara, B., y Jamal, F. (2021). Penerapan Pidana Mati di Indonesia dalam Literatur Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16155>.
- Guzmán, V., Rauda N. y Alvarado, J. (2020). “Bukele mete al Ejército en la Asamblea y amenaza con disolverla dentro de una semana”. Extraído el 9 de noviembre de 2023 de: https://elfaro.net/es/202002/el_salvador/24008/Bukele-mete-al-Ej%C3%A9rcito-en-la-Asamblea-y-amenaza-con-disolverla-dentro-de-una-semana.htm
- Hagen-Zanker, J., Bastagli, F., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., y Schmidt, T. (2016). Understanding the impact of cash transfers: the evidence. Londres, Reino Unido: *Overseas Development Institute*.

- Harrell, E., Langton, L., Berzofsky, M., Couzens, L., & Smiley-McDonald, H. (2014). *Household poverty and nonfatal violent victimization, 2008-2012*. Washington, DC: US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics.
- Hauser, I. (2022). "Milei denuncia un fraude electoral en su contra y sin pruebas a tres días de las elecciones argentinas". Extraído el 26 de noviembre de 2023 de: <https://www.publico.es/internacional/milei-denuncia-fraude-electoral-y-pruebas-tres-dias-elecciones-argentinas.html>
- Helliwell J., Huang, H., Norton, M., Goff, L. y Wang, S. (2023). "World Happiness, Trust, and Social Connections in Times of Crisis". Extraído el 8 de diciembre de 2023 de: <https://worldhappiness.report/ed/2023/world-happiness-trust-and-social-connections-in-times-of-crisis/>
- Hernández, E. (2023). "Crece el reclutamiento de niños para la guerra en Colombia". Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: <https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-04-28/crece-el-reclutamiento-de-ninos-para-la-guerra-en-colombia>
- Hernando, C. (2023). "La desigualdad climática o cómo los ricos contaminan mucho más y no sufren las consecuencias". Extraído el 15 de diciembre de 2023 de: <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/desigualdad-climatica-ricos-contaminan-mucho-mas/>
- Hinojosa, M. (2023). "Personas Detenidas/Aprehendidas". Extraído el 12 de diciembre de 2023 de: <https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/personas-detenidas-aprehendidas>
- HSBC (2023). "Nearshoring to Mexico: It's happening already, what's next?". Extraído el 10 de noviembre de 2023 de: <https://www.gbm.hsbc.com/en-gb/feed/international/nearshoring-to-mexico>
- Human Rights Watch (2020). "El Salvador: Police Abuses in Covid-19 Response". Extraído el 9 de noviembre de 2023 de: <https://www.hrw.org/news/2020/04/15/el-salvador-police-abuses-covid-19-response#>
- Humire, J. (2023). "Argentina's Javier Milei Is Not a 'Danger for Democracy'". Extraído el 8 de noviembre de 2023 de: <https://www.heritage.org/americas/commentary/argentinas-javier-milei-not-danger-democracy>
- Hunnicutt, T., Solomon, D. y Spetalnick, M. (2022). "Biden unveils new Latin America economic plan at reboot summit dogged by dissent". Extraído el 12 de octubre de 2023 de: <https://www.reuters.com/world/americas/bidens-plan-pitch-latin-america-reboot-summit-dogged-by-dispute-dissent-2022-06-08/>

- Hurst, R. (2002). *Plan Colombia - A Strategy for Continued Failure in America's Fight Against Drugs*. <https://doi.org/10.21236/ada441716>.
- Iber, P. (2023). "When Milton Friedman Met Pinochet". Extraído el 14 de septiembre de 2023 de: <https://newrepublic.com/article/172441/milton-friedman-met-pinochet>
- Institute for Economics & Peace (2023). "Global Peace Index 2023: Measuring Peace in a Complex World". Extraído el 15 de diciembre de 2023 de: <http://visionofhumanity.org/resources>
- Infobae (2019). "Tras 580 días preso, Lula da Silva quedó en libertad". Extraído el 10 de diciembre de 2023 de: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/08/la-justicia-brasilena-autorizo-la-liberacion-del-ex-presidente-lula-da-silva/>
- Infobae (2023a). "Masacre en una cárcel de Ecuador: aumentó a 31 el número de muertos y el Gobierno busca retomar el control del penal". Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/07/25/masacre-en-una-carcel-de-ecuador-aumento-a-31-el-numero-de-muertos-y-el-gobierno-busca-retomar-el-control-del-penal/>
- Infobae (2023b). "El mapa del narcotráfico en México en 2023: qué cárteles dominan el territorio". Extraído el 4 de enero de 2024 de: <https://www.infobae.com/mexico/2023/05/04/el-mapa-del-narcotrafico-en-mexico-en-2023-que-carteles-dominan-el-territorio/>
- Iniciativa Panamá sin Pobreza (2023). "Informe sobre Pobreza y Pobreza Extrema en Panamá 2023". Extraído el 12 de diciembre de 2023 de: <https://panamasinpobreza.org/panama/pobreza/>
- Inman, P. y Savage, M. (2021). "Rishi Sunak announces 'historic agreement' by G7 on tax reform". Extraído el 25 de septiembre de 2023 de: <https://www.theguardian.com/world/2021/jun/05/rishi-sunak-announces-historic-agreement-by-g7-on-tax-reform>
- Insight Crime (2023). "Latinoamérica: la lucha contra la corrupción sigue estancada". Extraído el 24 de noviembre de 2023 de: <https://www.opendemocracy.net/es/latinoamerica-lucha-corrupcion-estancada/>
- Irajá, V. (2022). "Governo fracassa no projeto de modernizar a economia no modelo liberal". Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://veja.abril.com.br/economia/governo-fracassa-no-projeto-de-modernizar-a-economia-no-modelo-liberal>
- Jaquette, J. (2013). *Women's Rights, Indigenous Rights, and Social Cohesion in*

- Latin America. *Watson Institute for International Studies Research Paper* No. 2013-08. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2337599>
- Kinosian, S. (2022). "Trolls, propaganda and fear stoke Bukele's media machine in El Salvador". Extraído el 21 de noviembre de 2023 de: <https://www.reuters.com/investigates/special-report/el-salvador-politics-media/>
- Koop, F. (2022). "Más de 1.700 defensores ambientales fueron asesinados en la última década". Extraído el 3 de noviembre de 2023 de: <https://dialogo-chino.net/es/actividades-extractivas-es/58990-mas-de-1-700-defensores-ambientales-fueron-asesinados-en-la-ultima-decada/>
- Kostiuk, R. V. (2019). Foro de São Paulo: internacional unido de izquierda del siglo XXI. *Iberoamérica*, (4), 149-164.
- Krogstad, J., Passel, J., Moslimani, M. y Noe-Bustamante, L. (2023). "Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic Heritage Month". Extraído el 11 de octubre de 2023 de: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/09/22/key-facts-about-us-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/#:~:text=The%20U.S.%20Hispanic%20population%20reached,increase%20in%20the%20Asian%20population.>
- Mother Jones (2005). "Put a Tiger In Your Think Tank". Extraído el 18 de septiembre de 2023 de: <https://www.motherjones.com/politics/2005/05/put-tiger-your-think-tank/>
- Lacomba, C. (2022). "Hispanic Map of the United States 2022". Extraído el 11 de octubre de 2023 de: https://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/sites/default/files/84_en_hispanic_map_2022_1.pdf
- LAPOP (2021). "El pulso de la democracia". Extraído el 1 de septiembre de 2023 de: https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2021/2021_LAPOP_AmericasBarometer_2021_Pulse_of_Democracy_SPA.pdf
- La Hora (2022). "Las crisis carcelarias sin sentencias ni culpables". Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://www.lahora.com.ec/pais/las-crisis-carcelarias-sin-sentencias-ni-culpables/>
- Latinometrics [@LatamData]. (2023, 24 de noviembre). @J Milei shock win in Argentina: A symptom of LatAm's anti-incumbent wave? What's driving this dramatic shift? a thread: [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/LatamData/status/1728072566433333675>
- La Hora (2023). "Nayib Bukele es mejor valorado en Ecuador que los políticos nacionales, según encuesta". Extraído el 8 de noviembre de 2023 de: <https://www.lahora.com.ec/pais/nayib-bukele-valorado-ecuador-politicos-nacionales-encuesta/>

- La Moncloa (2023). “Incautado en el Puerto de Algeciras el mayor alijo de cocaína intervenido en España”. Extraído el 17 de diciembre de 2023 de: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2023/250823-mayor-alijo-cocaina-intervenido.aspx>
- La Voz (2023). ““Plan motosierra”, rock y un reducido círculo íntimo: quién es y qué propone Javier Milei”. Extraído el 18 de septiembre de 2023 de: <https://www.lavoz.com.ar/politica/plan-motosierra-rock-y-un-reducido-circulo-intimo-quien-es-y-que-propone-javier-milei/>
- LibertyPen [LibertyPen]. (2 de enero de 2013). Milton Friedman y su relación con Chile y Pinochet. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=dzgMNLtLJ2k&ab_channel=LibertyPen
- Lindert, K., Skoufias, E., & Shapiro, J. (2006). Redistributing income to the poor and the rich: Public transfers in Latin America and the Caribbean. *Social Safety Nets Primer Series*, 203.
- Loaiza, L. (2023). “Women Increasingly Participating in Organized Crime in Mexico: Report”. Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: <https://insightcrime.org/news/women-increasingly-participating-organized-crime-mexico-report/>
- López, A. (2014). La invisibilización de la población afrodescendiente durante la construcción del Estado-nación en México. *Revista de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales*, Vol. 3, Núm. 3, pp. 57-74.
- Lopez, M., Krogstad, J. y Passel, J. (2023). “Who is Hispanic”. Extraído el 19 de octubre de 2023 de: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/09/05/who-is-hispanic/>
- Luján, R. (2022). “Los venezolanos que regresan, ¿en cuánto tiempo vuelven a irse?”. Extraído el 22 de noviembre de 2023 de: <https://www.bloomberglinea.com/2022/08/18/los-venezolanos-que-regresan-en-cuanto-tiempo-vuelven-a-irse/>
- Macrotrends (2023a). “Brazil Poverty Rate 1981-2023”. Extraído el 1 de noviembre de 2023 de: <https://www.macrotrends.net/countries/BRA/brazil/poverty-rate#:~:text=Brazil%20poverty%20rate%20for%202021,a%209.7%25%20increase%20from%202020.>
- Macrotrends (2023b). “Chile Poverty Rate 1987-2023”. Extraído el 1 de noviembre de 2023 de: <https://www.macrotrends.net/countries/CHL/chile/poverty-rate>
- Macrotrends (2023c). “Uruguay Poverty Rate 2006-2023”. Extraído el 1 de noviembre de 2023 de: <https://www.macrotrends.net/countries/URY/uruguay/poverty-rate>

- Maldonado, C. (2023). "El 'modelo Bukele' atrae a políticos latinoamericanos". Extraído el 9 de noviembre de 2023 de: <https://elpais.com/internacional/2023-06-11/el-modelo-bukele-atrae-a-politicos-latinoamericanos.html>
- Mann, M. (2023). *On Wars*. Yale University Press.
- Martínez, C., Martínez, O., Arauz, S. y Lemus, E. (2020). "Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral". Extraído el 22 de noviembre de 2023 de: https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24781/Gobierno-de-Bukele-lleva-un-a%C3%B1o-negociando-con-la-MS-13-reducci%C3%B3n-de-homicidios-y-apoyo-electoral.htm
- Martínez, R. (2023). "Éstas son las actividades que los cárteles obligan a hacer a niñas, niños y adolescentes que reclutan". Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: <https://www.infobae.com/mexico/2023/11/29/estas-son-las-actividades-que-los-carteles-obligan-a-hacer-a-ninas-ninos-y-adolescentes-que-reclutan/>
- Martínez, R., y Iyer, V. (2008). Latin Americas Racial Caste System: Salient Marketing Implications. *International Business & Economics Research Journal* (IBER), 7(11), pp. 55-62 <https://doi.org/10.19030/iber.v7i11.3308>
- Mathisen, R. (2023). "Global wealth inequality mapped". Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: <https://vividmaps.com/global-wealth-inequality-mapped/>
- Matute, G. (2016). "Escándalo Odebrecht: EE.UU. dice que 12 países recibieron sobornos". Extraído el de diciembre de 2023 de: <https://cnnespanol.cnn.com/2016/12/22/escandalo-odebrecht-ee-uu-dice-que-12-paises-recibieron-sobornos/>
- Mazzuca, S. (2021). *Latecomer State formation: Political geography and capacity failure in Latin America*. Yale University Press.
- Melgar Manzanilla, P., & Márquez Gómez, D. (2018). The Merida Initiative and the Tort Claims Act: Human Rights Violations and Foreign Non-Contractual Civil Liability in the United States. *Mexican Law Review*, 11(1). <https://doi.org/10.22201/ijj.24485306e.2018.1.12510>
- México Unido Contra la Delincuencia (2021). "La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz". Extraído el 19 de diciembre de 2023 de: <https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/BRIEFING-1.pdf>
- Meyerfeld, B. (2022). "Paulo Guedes, the failed ultraliberal economic mas-termind of Bolsonaro government". Extraído el 14 de septiembre de

- 2023 de: https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2022/09/30/paulo-guedes-the-failed-ultraliberal-economic-mastermind-of-bolsonaro-government_5998679_19.html#
- Mode, N. A., Evans, M. K., & Zonderman, A. B. (2016). Race, neighborhood economic status, income inequality and mortality. *PLoS ONE*, 11(5), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154535>
- Molina, G. (2023). “Ecuador cierra el año más violento de su historia, con más de 7.000 homicidios en 2023”. Extraído el 7 de enero de 2024 de: <https://apnews.com/world-news/general-news-0ff8a41cc645e3fb0c3e3df5ec3507dc>
- Montes, R. (2023). “José Antonio Kast, the far-right Catholic who is winning over Chile”. Extraído el 17 de septiembre de 2023 de: <https://english.elpais.com/international/2023-05-14/jose-antonio-kast-the-far-right-catholic-who-seduces-chile.html>
- Munck, G. [@GerardoMunck]. (2023, 19 de noviembre). *Con la elección en #Argentina, se mantiene la tendencia en América Latina a la derrota de los candidatos oficialistas en elecciones democráticas*. [Tweet]. Twitter <https://twitter.com/GerardoMunck/status/1726379180466827670>
- Naciones Unidas (2010). “EL PROGRESO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HACIA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. DESAFÍOS PARA LOGRARLOS CON IGUALDAD”. Extraído el 13 de septiembre de 2023 de: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/259526fd-b2fe-45f1-91b4-5310f79e6913/content>
- Naciones Unidas (2020). “El coronavirus interrumpe las rutas del narcotráfico y genera una escasez de drogas a nivel mundial”. Extraído el 9 de diciembre de 2023 de: <https://news.un.org/es/story/2020/05/1473952>
- Neumayer, E. (2003). Good Policy Can Lower Violent Crime: Evidence from a Cross-National Panel of Homicide Rates, 1980–97. *Journal of Peace Research*, 40, pp. 619–640. <https://doi.org/10.1177/00223433030406001>.
- Nicas, J. (2023). “Bolsonaro enfrentará juicio por denuncias de fraude electoral”. Extraído el 14 de septiembre de 2023 de: <https://www.nytimes.com/es/2023/06/06/espanol/bolsonaro-juicio.html>
- Novella, R., Repetto, A., Robino, C. y Rucci, G. (2018). *Millennials en América Latina y el Caribe: ¿Trabajar o estudiar?*. <http://dx.doi.org/10.18235/0001410>
- Numbeo (2023). “Crime Index by Country 2023”. Extraído el 27 de octubre de 2023 de: https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?-title=2023

- OACAS (S.f.). "Effects of poverty on children". Extraído el 13 de septiembre de 2023 de: <https://oacas.libguides.com/c.php?g=702168&p=4990142>
- OECD (2019), "Inequalities", en *Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators*, OECD Publishing, Paris. DOI: <https://doi.org/10.1787/bbc751e2-en>
- OECD (2023a). "DAC List of ODA Recipients". Extraído el 2 de noviembre de 2023 de: <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf>
- OECD (2023b). "América Latina y el Caribe: la recuperación económica y los precios más altos de las materias primas impulsan el repunte de los ingresos fiscales". Extraído el 9 de diciembre de 2023 de: <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/america-latina-y-el-caribe-la-recuperacion-economica-y-los-precios-mas-altos-de-las-materias-primas-impulsan-el-repunte-de-los-ingresos-fiscales.htm#:~:text=pandemia%20COVID%2D19.-,El%20promedio%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20tributaria%20como%20porcentaje%20del%20PIB,2021%2C%20por%2012%2C5%20p.p.>
- Oliphant, S. (2022). Estimating the effect of death penalty moratoriums on homicide rates using the synthetic control method. *Criminology & Public Policy*, pp. 1-30.
- Olutola, A. (2020). Punishment of Crime in Nigeria and South Africa: Some Perspectives on Capital Punishment. *The Oriental Anthropologist: A Bi-annual International Journal of the Science of Man*, 20, pp. 276-291. <https://doi.org/10.1177/0972558x20952658>.
- ONU Mujeres (2022). "Infografía | La desigualdad de género en América Latina y el Caribe 2020-2022". Extraído el 17 de noviembre de 2023 de: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2022-12/Infografia%20Ranking_ISOQuito_2020-2022_v01.pdf
- ONU Mujeres (2023). "Hechos y cifras: Liderazgo y participación política de las mujeres". Extraído el 14 de diciembre de 2023 de: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures>
- Open Society Foundations (2023). "OPEN SOCIETY BAROMETER CAN DEMOCRACY DELIVER?". Extraído el 21 de noviembre de 2023 de: <https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/e6cd5a09-cd19-4587-aa06-368d3fc78917/open-society-barometer-can-democracy-deliver-20230911.pdf>

- Opinión (2023). “En Perú, presentan una nueva denuncia contra Evo Morales por Runasur”. Extraído el 18 de noviembre de 2023 de: <https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/peru-presentan-nueva-denuncia-evo-morales-runasur/20231010163925923629.html>
- Oporto, C. [@carlosoporto]. (2023a, 6 de septiembre). *Desde 24 de mayo del 2021 hemos tenido 11.189 muertes violentas*. [Tweet]. Twitter <https://twitter.com/carlosopuerto/status/1699553096567812404>
- Oporto, C. [@carlosoporto]. (2023b, 8 de septiembre). *#Ecuador Homicidios intencionales en cada año*. [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/carlosopuerto/status/1728889983472484859/photo/1>
- Oppenheimer, A. (2023). “Oppenheimer español: Nayib Bukele, el presidente más popular de América Latina”. Extraído el 10 de noviembre de 2023 de: <https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-08-01/oppenheimer-espanol-nayib-bukele-el-presidente-mas-popular-de-america-latina> <https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-08-01/oppenheimer-espanol-nayib-bukele-el-presidente-mas-popular-de-america-latina>
- OPS (2023). “La situación sociodemográfica de las personas indígenas en América Latina y el Caribe. Análisis en el contexto del envejecimiento y la COVID-19”. Extraído el 17 de noviembre de 2023 de: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57305/9789275326473_SPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Oumer, A., Maseland, R., y Garretsen, H. (2020). Was de Montesquieu (only half) right? Evidence for a stronger work ethic in cold climates. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 173, pp. 256-269.
- Papadopoulos T. y Velázquez Leyer R. (2016) “Two decades of social investment in Latin America: outcomes, shortcomings and achievements of conditional cash transfers”, *Journal of Social Policy and Society*, 15 (3), pp. 435-449.
- Paredes, N. (2023). “Por qué se agudizó la disputa por el Esequibo, la zona que enfrenta a Guyana y Venezuela desde hace casi dos siglos”. Extraído el 23 de octubre de 2023 de: <https://www.bbc.com/mundo/articles/c28vmj73m0o>
- Pérez, M. (2023). “América Latina es la región con más activistas ambientales asesinados en 2022”. Extraído el 25 de octubre de 2023 de: <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20230913-am%C3%A9rica-latina-es-la-regi%C3%B3n-con-m%C3%A1s-activistas-ambientales-asesinados-en-2022>

- Pérez Ricart, C. y Ibarrola, A. (2023). La transición hacia el fentanilo Cambios y continuidades del mercado de drogas en México (2015-2022). *Revista de Ciencias Sociales*, 36(53), pp.15-36. <https://doi.org/10.26489/rvs.v36i53.1>
- Perfil (2023). “Un diputado paraguayo admitió que “iría a la guerra” con Argentina y dijo que su país necesita misiles”. Extraído el 20 de octubre de 2023 de: <https://www.perfil.com/noticias/politica/un-diputado-paraguayo-admitio-que-iria-a-la-guerra-con-argentina-y-dijo-que-su-pais-necesita-misiles.phtml>
- Pestaña, B. (2007). “Las voces de los niños soldado”. Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: <https://www.publico.es/culturas/voces-ninos-soldado.html>
- Pew Research Center (2018). “Resumen de hallazgos: La brecha de edad respecto a la religión en todo el mundo”. Extraído el 3 de noviembre de 2023 de: <https://www.pewresearch.org/religion/2018/06/13/resumen-de-hallazgos-la-brecha-de-edad-respecto-a-la-religion-en-todo-el-mundo/>
- Pew Research Center (2023). “U.S. Hispanic population reached more than 63 million in 2022”. Extraído el 12 de octubre de 2023 de: https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/09/22/key-facts-about-us-latins-for-national-hispanic-heritage-month/sr_23-09-22_hispanic-key-facts_1/
- Piergallini, L. J. (2016). An Empirical Investigation of Montesquieu’s Theories on Climate. *International Journal of Economics and Management Engineering*, 10(6), pp. 2017-2028.
- Pikety, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Pintado, S. (2023). “América Latina reúne a sus policías contra el crimen transnacional, pero ¿y los gobiernos?”. Extraído el 7 de enero de 2024 de: <https://sputniknews.lat/20231115/america-latina-reune-a-sus-policias-contr-el-crimen-trasnacional-pero-y-los-gobiernos-1145759002.html>
- Prensa Latina (2023). “Censo muestra disminución de afrodescendientes en Ecuador”. Extraído el 18 de noviembre de 2023 de: <https://www.prensa-latina.cu/2023/09/22/censo-muestra-disminucion-de-afrodescendientes-en-ecuador>
- Prieto-Curiel, R., Campedelli, G. y Hope, A. (2023). Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico. *Science*, 381(6664), pp. 1312-1316.
- Primicias (2021). “Solo el 25% de las víctimas en la Penitenciaría del Litoral tenía sentencia”. Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://www.>

- primicias.ec/noticias/sociedad/victimas-penitenciaria-litoral-sin-sentencia/
- Primicias (2022a). “Continúa falta de medicinas e insumos en los hospitales del IESS”. Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/medicinas-hospitales-iess-insumos-escasez-abastecimiento/>
- Primicias (2022b). “Once masacres carcelarias y 413 presos asesinados en 21 meses”. Extraído el 15 de septiembre de 2023 de: <https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/carceles-nueve-masacres-victimas-ecuador/>
- Primicias (2023a). “Los ecuatorianos votaron por detener la actividad petrolera y minera en el Yasuní y el Chocó”. Extraído el 26 de octubre de 2023 de: <https://www.primicias.ec/noticias/elecciones-presidenciales-2023/resultado-consulta-popular-yasuni-choco-andino/>
- Primicias (2023b). “Más de USD 10.000 diarios gastan los candidatos en pauta en redes”. Extraído el 20 de noviembre de 2023 de: <https://www.primicias.ec/noticias/elecciones-presidenciales-2023/gasto-candidatos-pauta-redes-sociales-anuncios/>
- Primicias (2023c). “Armas y drogas: la moneda para pagar ‘servicios’ de los criminales”. Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: <https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/armas-drogas-pago-bandas-delictivas-ecuador-narcotrafico/>
- Primicias (2023d). “Ecuador, el tercer país con mayor incautación de drogas”. Extraído el 17 de diciembre de 2023 de: <https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/balance-drogas-incautacion-ecuador-agosto/>
- Pulsante (2022). “Orgullosamente afrodescendientes, reivindicando la identidad en América Latina”. Extraído el 18 de noviembre de 2023 de: <https://pulsante.org/2022/04/25/orgullosamente-afrodescendientes/#:~:text=Seg%C3%BAn%20las%20C3%BAltimas%20medicinas%20de,la%20poblaci%C3%B3n%20latinoamericana%20es%20afrodescendiente.>
- Ramírez, M. (2023). “Crece reclutamiento infantil entre disputas por control del narcotráfico en Ecuador”. Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: <https://insightcrime.org/es/noticias/crece-reclutamiento-infantil-entre-disputas-control-narcotrafico-guayaquil/>
- Raziel, Z. (2023). “Hong Kong decomisa una tonelada de metanfetamina traficada en costales de Segalmex”. Extraído el 17 de diciembre de 2023 de:

- <https://elpais.com/mexico/2023-11-07/hong-kong-decomisa-una-tonelada-de-metanfetamina-trafficada-en-costales-de-segalmex.html>
- Rincón, A. y González, D. (2021). “Glifosato: más daños, más coca y menos transparencia”. Extraído el 18 de diciembre de 2023: <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/glifosato-mas-danos-mas-coca-y-menos-transparencia/>
- Rocha, C. (2019). “Los think tanks promercado y las fuentes ideológicas de Bolsonaro”. Extraído el 14 de septiembre de 2023 de: <https://www.nuso.org/articulo/think-tanks-neoliberalismo-brasil-bolsonaro-derecha/>
- Rochlin, J. (2010). Plan Colombia and the revolution in military affairs: the demise of the FARC. *Review of International Studies*, 37(02), pp. 715–740. doi:10.1017/s0260210510000914
- Rodríguez, J. (2023). “Reportan cifra histórica de incautaciones de cocaína en el primer año de Gustavo Petro”. Extraído el 17 de diciembre de 2023 de: <https://www.infobae.com/colombia/2023/08/10/reportan-cifra-historica-de-incautaciones-de-cocaina-en-el-primer-ano-de-gustavo-petro/>
- Rosen, J. y Martínez, R. (2016). La Guerra contra las Drogas en Colombia y México: estrategias fracasadas. *Ánfora*, 21, pp. 179-200. <https://doi.org/10.30854/ANF.V21.N37.2014.30>
- Rueda, A. (2023). “Récord de más de medio millón de migrantes han cruzado selva del Darién este año”. Extraído el 7 de diciembre de 2023 de: <https://ameliarueda.com/noticia/record-mas-medio-millon-migrantes-cruzado-selva-panamena>
- Runasur (2021). “Evo Morales Ayma presenta el Decálogo de Runasur”. Extraído el 18 de noviembre de 2023 de: <https://runasur.org/>
- Sarmiento, M. (2023). “La gran farsa de la anulación de las firmas de la consulta por el Yasuní”. Extraído el 26 de octubre de 2023: <https://gk.city/2021/01/04/anularon-firmas-yasunidos-2014/>
- Sears, N. (2023). *Great Power Rivalry and Macrosecuritization Failure: Why States Fail to “Securitize” Existential Threats to Humanity*. [Tesis doctoral, University of Toronto].
- Selwyn, B. (2015). “Friedrich Hayek: in defence of dictatorship”. Extraído el 14 de septiembre de 2023 de: <https://www.opendemocracy.net/en/friedrich-hayek-dictatorship/>
- Semana (2023). “La cárcel donde mandan los presos y hasta tienen familiares viviendo allí”. Extraído el 4 de enero de 2024 de: <https://www.semana.com/mundo/articulo/la-carcel-donde-mandan-los-presos-y-hasta-tienen-familiares-viviendo-alli/202315/>

- Sen, A. (1979). Equality of what?. *The Tanner Lecture on Human Values* 1, pp. 197–220.
- Sen, A. (2008). Violence, Identity and Poverty. *Journal of Peace Research*, 45(1), pp. 5–15. doi:10.1177/0022343307084920
- Senate RPC. (2022). “SUBSTANCE USE HAS RISEN DURING COVID-19 PANDEMIC”. Extraído el 17 de agosto de 2022 de: <https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/substance-use-has-risen-during-covid-19-pandemic>
- Singh, G. K., & Siahpush, M. (2006). Widening socioeconomic inequalities in US life expectancy, 1980–2000. *International Journal of Epidemiology*, 35(4), pp. 969–979. <https://doi.org/10.1093/ije/dyl083>
- Statista (2023a). “Distribution of wealth worldwide in 2021, by region”. Extraído el 21 de septiembre de 2023 de: <https://www.statista.com/statistics/1341660/global-wealth-distribution-region/#:~:text=In%202021%2C%20Latin%20America%20was,60%20percent%20of%20the%20wealth.>
- Statista (2023b). “Producto interno bruto per cápita por país en América Latina y el Caribe en 2022”. Extraído el 24 de septiembre de 2023 de: <https://es.statista.com/estadisticas/1066386/pib-per-capita-por-paises-america-latina-y-caribe/>
- Statista (2023c). “Producto interno bruto (PIB) per cápita en precios corrientes en Venezuela desde 1985 hasta 2024”. Extraído el 24 de septiembre de 2023 de: [https://es.statista.com/estadisticas/1267998/producto-interno-bruto-per-capita-en-venezuela/#:~:text=El%20producto%20interno%20bruto%20\(PIB,3.500%20d%C3%B3lares%20estadonidenses%20en%202022.](https://es.statista.com/estadisticas/1267998/producto-interno-bruto-per-capita-en-venezuela/#:~:text=El%20producto%20interno%20bruto%20(PIB,3.500%20d%C3%B3lares%20estadonidenses%20en%202022.)
- Statista (2023d). “Producto interno bruto en América Latina y el Caribe en 2022, por país”. Extraído el 25 de septiembre de 2023 de: <https://es.statista.com/estadisticas/1065726/pib-por-paises-america-latina-y-caribe/>
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. WW Norton & Company.
- Suárez, J. (2020). “El flagelo de la desnutrición infantil en América Latina”. Extraído el 5 de octubre de 2023 de: <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/03/el-flagelo-de-la-desnutricion-infantil-en-america-latina/>
- Swissinfo (2017). “El recuento parcial de votos en Ecuador ratifica el triunfo de Moreno”. Extraído el 26 de noviembre de 2023 de: <https://www.>

- swissinfo.ch/spa/afp/el-recuento-parcial-de-votos-en-ecuador-ratifica-el-triunfo-de-moreno/43119178
- Swissinfo (2023). “El Salvador registra 95 homicidios en lo que va de 2023, según una diputada oficialista”. Extraído el 22 de noviembre de 2023 de: https://www.swissinfo.ch/spa/el-salvador-homicidios_el-salvador-registra-95-homicidios-en-lo-que-va-de-2023--seg%C3%BAAn-una-diputada-oficialista/48507036
- Tetteh Baahr, S., Castaneda Aguilar, A., Diaz-Bonilla, C. et al. (2023). “March 2023 global poverty update from the World Bank: the challenge of estimating poverty in the pandemic”. Extraído el 13 de septiembre de 2023 de: <https://blogs.worldbank.org/opendata/march-2023-global-poverty-update-world-bank-challenge-estimating-poverty-pandemic>
- Toledo-Leyva, C. (2023). “El nuevo intento de Morales por llegar al poder en Bolivia”. Extraído el 18 de noviembre de 2023 de: <https://www.dw.com/es/el-nuevo-intento-de-evo-morales-por-llegar-al-poder-en-bolivia/a-66931625>
- Transparency International (2022). “CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX”. Extraído el 24 de noviembre de 2023 de: <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Troller-Renfree, S., Costanzo, M., Duncan, G. et al. (2022). “The impact of a poverty reduction intervention on infant brain activity”. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(5), e2115649119.
- Turkewitz, J. (2022). “En lo profundo de Colombia, una nueva generación de combatientes se enfrenta por lo mismo: el control del tráfico de drogas”. Extraído el 17 de diciembre de 2023 de: <https://www.nytimes.com/es/2022/04/20/espanol/colombia-grupos-armados.html>
- Unicef (2023). “Amway y UNICEF se unen para prevenir la desnutrición infantil en América Latina y el Caribe”. Extraído el 5 de octubre de 2023 de: <https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/amway-unicef-unen-prevenir-desnutricion-infantil-america-latina-caribe>
- Unicef (2023b). “Reescribiendo el futuro de la educación en América Latina y el Caribe: Acelerar el aprendizaje básico”. Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2023-08/28_08_23_Acelerar%20el%20aprendizaje%20ba%CC%81sico%20FINAL.pdf
- Unidad de Investigación de Venezuela. (2022). *La revolución de la cocaína en Venezuela*. Insight Crime.

- Unión Europea y Mercosur (1999). “Inicio de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur sobre el futuro Acuerdo de Asociación interregional”. Extraído el 11 de octubre de 2023 de: https://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R18/ri18-dunion%20europea%20mercosur.pdf
- United Nations (2023). “UN General Assembly adopts Gaza resolution calling for immediate and sustained ‘humanitarian truce’”. Extraído el 27 de octubre de 2023 de: <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142847>
- United Nations Development Programme and Oxford Poverty y Human Development Initiative (2023). “GLOBAL MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX 2023”. Extraído el 1 de noviembre de 2023 de: <https://reliefweb.int/report/world/global-multidimensional-poverty-index-2023-unstating-global-poverty-data-high-impact-action#:~:text=According%20to%20the%202023%20release,of%20every%20six%20poor%20people>.
- UNODC (2022a). “Visión Estratégica de UNODC para América Latina y El Caribe 2022-2025”. Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: https://www.unodc.org/res/strategy/ESTRATEGIA_LATAM_2022_2025_ENE17_ESP_EDsigned.pdf
- UNODC (2022b). World Drug Report 2022. Executive Summary. Policy Implications. United Nations. New York.
- U.S. Customs and Border Protection (2023). “U.S. Comprehensive Free Trade Agreements and Other Trade Agreements”. Extraído el 10 de octubre de 2023 de: <https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/free-trade-agreements>
- U.S. Department of Defense (2023). “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China”. Extraído el 23 de octubre de 2023 de: <https://media.defense.gov/2023/Oct/19/2003323409/-1/-1/1/2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF>
- Velasco, C. y Rocha, G. (2019). “Dia de Consciência: por que cada vez mais brasileiros estão se autodeclarando negros?”. Extraído el 18 de noviembre de 2023 de: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/11/20/dia-de-consciencia-por-que-cada-vez-mais-brasileiros-estao-se-autodeclarando-negros.ghtml>
- Viveros, A. y Sánchez-Bender, M. (2016). “Tras el auge económico, América Latina enfrenta dilemas de política”. Extraído el 18 de noviembre de 2023 de: <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/04/12/latin-america-faces-policy-dilemmas-post-boom>

- VOA (2020). “Estudio revela violaciones DDHH en El Salvador durante confinamiento por pandemia”. Extraído el 9 de noviembre de 2023 de: https://www.vozdeamerica.com/a/centroamerica_elsalvador-estudio-reve-la-violaciones-ddhh-durante-confinamiento-pandemia/6070201.html
- Vulnerability Atlas (2023a). “Dependencia de las exportaciones de productos básicos”. Extraído el 9 de diciembre de 2023 de: <https://vulnerabilityatlas.org/mapa?lang=es>
- Vulnerability Atlas (2023b). “Tamaño de la base de ingresos”. Extraído el 9 de diciembre de 2023 de: <https://vulnerabilityatlas.org/mapa?lang=es&ind=FS-SRB-01>
- V-Dem Institute (2023). “DEMOCRACY REPORT 2023 Defiance in the Face of Autocratization”. Extraído el 1 de septiembre de 2023 de: https://v-dem.net/documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf
- Watson, K. (2022). “Los niños que todavía son reclutados por las bandas armadas para la “guerra eterna” de Colombia”. Extraído el 16 de diciembre de 2023 de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62444226>
- Werneck, J. y Guevara-Rosas, E. (2021). “Los mil días de Bolsonaro y la grave crisis de derechos humanos en Brasil”. Extraído el 7 de noviembre de 2023 de: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/10/mil-dias-bolsonaro-grave-crisis-derechos-humanos-brasil/>
- Westervelt, A. y Dembicki, G. (2023). “Meet the Shadowy Global Network Vilifying Climate Protesters”. Extraído el 19 de septiembre de 2023 de: <https://newrepublic.com/article/175488/meet-shadowy-global-network-vilifying-climate-protesters>
- Whitaker, P. (2022). “País a país, todos los condenados del caso Odebrecht”. Extraído el 10 de diciembre de 2023 de: <https://cambiocolombia.com/articulo/poder/pais-pais-todos-los-condenados-del-caso-odebrecht>
- Wild, J. [The Wild Project]. (30 de noviembre de 2023). The Wild Project #246 ft Vicente Garrido | Hay psicópatas entre nosotros, Así piensa un asesino. [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=39jH02o-BXIE&list=LL&index=1>
- Wilkinson, R. G. (2006). *The impact of inequality: How to make sick societies healthier*. The new press.
- WOLA (2022a). “Biden’s First Year Policies toward Latin America”. Extraído el 12 de octubre de 2023 de: <https://www.wola.org/analysis/bidens-first-year-policies-toward-latin-america/>

- WOLA (2022b). “Corrupción y Régimen de Excepción en El Salvador: una democracia sin oxígeno”. Extraído el 22 de noviembre de 2023 de: <https://www.wola.org/es/2022/09/corrupcion-estado-de-excepcion-el-salvador/#:~:text=Un%20r%C3%A9gimen%20de%20excepci%C3%B3n%20es,a%20la%20limitaci%C3%B3n%20de%20derechos>
- World Bank (2022). “Fact Sheet: An Adjustment to Global Poverty Lines”. Extraído el 13 de septiembre de 2023 de: <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines>
- World Bank (2023). “GDP per capita (current US\$) - OECD members”. Extraído el 12 de diciembre de 2023 de: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=OE>
- World Inequality Lab (2022). “2022 World Inequality Report”. Extraído el 3 de diciembre de 2023 de: <https://wir2022.wid.world/chapter-1/>
- Yoshida, N. y Wu, H. (2022). “Retos a la hora de acelerar el ritmo de reducción de la pobreza”. Extraído el 13 de septiembre de 2023 de: [https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/retos-la-hora-de-acelerar-el-ritmo-de-reducci%C3%B3n-de-la-pobreza#:~:text=23%20de%20diciembre%20de%202022&text=Seg%C3%BAn%20el%20%C3%BAltimo%20Informe%20sobre,y%202019%20\(gr%C3%A1fico%201](https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/retos-la-hora-de-acelerar-el-ritmo-de-reducci%C3%B3n-de-la-pobreza#:~:text=23%20de%20diciembre%20de%202022&text=Seg%C3%BAn%20el%20%C3%BAltimo%20Informe%20sobre,y%202019%20(gr%C3%A1fico%201)
- Yuhas, A. (2023). “‘Seré nicaragüense hasta el día que me muera’: el gobierno de Ortega retira la ciudadanía a cientos de personas”. Extraído el 21 de noviembre de 2023 de: <https://www.nytimes.com/es/2023/02/17/espanol/nicaragua-quita-ciudadania-disidentes.html>

América Latina, la región que se niega a ser

¿Por qué América Latina se sigue manteniendo como una región simbólicamente unida pero fragmentada en la realidad? ¿Qué hace que los latinoamericanos sean tan semejantes, pero a la vez tan distintos? ¿Acaso sus habitantes están condenados a ser ciudadanos de segundo nivel en la toma de decisiones globales por el resto de la historia? Estas y otras dudas son abordadas de forma técnica, pero también filosófica en este libro.

En esta obra se trata de descifrar las complejas realidades de América Latina. Para ello se realiza un análisis sobre la coyuntura socioeconómica, comprendiendo la desigualdad endémica como uno de los puntos de partida de la complejidad del escenario regional. Se abordan discusiones sobre los actores políticos, sus agendas y sus flaquezas permanentes que conducen a la existencia de un malestar semipermanente. Y se reflexiona acerca del cruel escenario de inseguridad en el que grupos por fuera de la ley se han beneficiado de la debilidad de los Estados de la región.

Este texto es un llamado de atención y una invitación para que todos podamos asumir responsabilidades con el futuro de América Latina, la región que se niega a ser.

ISBN: 978-9942-652-03-4



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA